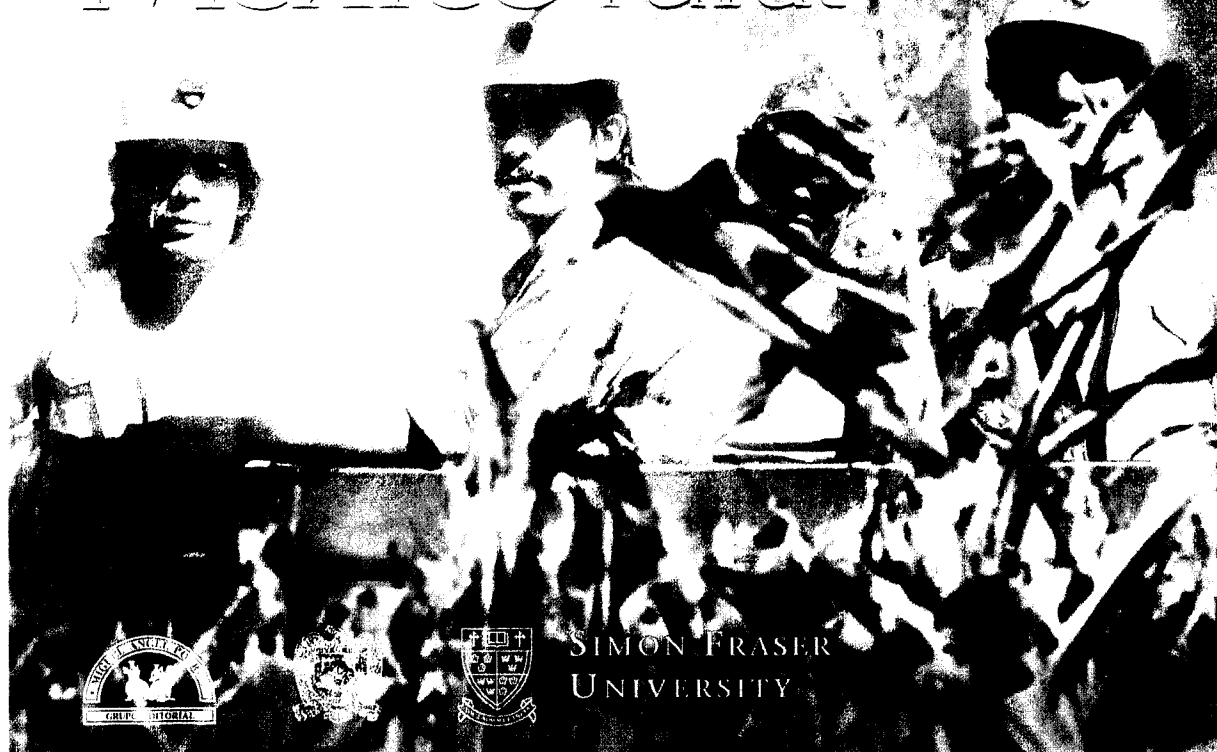


Gerardo Otero

¿Adiós al Campesinado?

Democracia y
formación política
de las clases en el
México rural



SIMON FRASER
UNIVERSITY

¿Adiós a Campesinado?

Democracia y
formación política
de las **clases** en el
México rural

Gerardo Otero

¿Adiós al Campesinado?

Democratización y
formación política
de las **clases** en el
México rural



SIMON FRASER
UNIVERSITY



MÉXICO

2004

Primera edición, febrero del año 2004

© 2004

GERARDO OTERO

© 2004

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
SIMON FRASER UNIVERSITY

© 2004

Por características tipográficas y de edición
MIGUEL ÁNGEL PORRÚA, librero-editor

Derechos reservados conforme a la ley
ISBN 970-701-425-3

IMPRESO EN MÉXICO



PRINTED IN MEXICO

Amargura 4, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 México, D.F.

*Para mis queridos hijos:
Rodrigo Otero Ordóñez
(1979-1997), mi inspiración, y
Alejandro Otero Ordóñez,
mi esperanza.*

Prólogo

ESTE LIBRO trata de la cuestión agraria en México y las relaciones políticas en el campo. Se podría decir que éste ha sido uno de los teatros políticos más importantes del siglo xx y, con el levantamiento zapatista de 1994 y el movimiento El campo no aguanta más, en 2002, promete continuar en el centro de la atención en el xxi. De distintas maneras –como estudiante, como maestro, como investigador, como persona– el tema me ha preocupado durante casi 30 años. Sin embargo, curiosamente, lo que suscitó mi interés en estos asuntos fue la cuestión urbana.

Cuando estudiaba la licenciatura en Monterrey, a principios de los años setenta, me impresionó hondamente el movimiento de posesionarios que, por entonces, estaba en su apogeo. Y no sólo lo concebí como un movimiento social explosivo, sino que me sobrecogieron las condiciones inauditas de miseria en que vivía la gente de los cinturones de miseria. Nunca había visto pobreza comparable, ni siquiera en las zonas rurales de La Laguna, región del centro-norte de México, donde me crié. Me intrigaba pensar por qué tanta gente emigraba a la segunda ciudad industrial de México, pese a que las oportunidades de trabajo remunerado eran evidentemente insuficientes. Pronto me di cuenta de que la gran mayoría de esos inmigrantes provenían del centro y del sur de México, donde la crisis del campo golpeaba con mucha mayor fuerza que en el norte. Finalmente empecé a comprender que tanto los problemas urbanos como los agrarios no eran sino dos aspectos del mismo proceso de desarrollo capitalista en el país.

La investigación que sustenta a este libro ha recibido apoyo de muchas instituciones desde principios de los años ochenta. En particular, recibí financiamiento para trabajo de campo de la Simon Fraser University (President's Research Grant). El Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego me financió para investigar dentro del Proyecto de Investigación sobre la Reforma del Ejido coordinado por Wayne Cornelius y David Myhre. Por último, recibí dos generosos subsidios del Consejo para la Investigación en Ciencias Sociales y Humanida-

des de Canadá (SSHRC), uno para el periodo de 1994-1997 y el otro para el de 1997-2000. Estos últimos financiamientos fueron vitales para poner al día la obra. Por último, recibí apoyo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de Simon Fraser University para la coedición de la versión del libro en español con Miguel Ángel Porrúa. Mi más cumplido agradecimiento a todas estas instituciones.

Como el trabajo de campo que aportó los parámetros teóricos de este estudio se desarrolló en el estado de Puebla, en primer lugar quiero expresar mi agradecimiento a quienes a principios de los años ochenta eran mis alumnos y colegas del Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Puebla. Discutiendo con ellos comencé a incorporar el concepto de cultura en mi análisis de los problemas agrarios. Quedé también en deuda con la gente de Xochimilco, en el municipio de Tecamachalco, Puebla, por abrirme su corazón y su mente y darme alojamiento durante la realización de mi trabajo de campo.

Antes de emprender los estudios de doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison, los cuales dieron lugar a una versión anterior de este libro, hice la maestría en la Universidad de Texas en Austin. Ahí cuatro profesores visitantes ejercieron una vigorosa influencia sobre mi trabajo: Bernardo Berdichewsky, Juárez Rubens Brandão Lopes, Norman Long y Bryan Roberts. Como supervisor de mi tesis, Norman se mostró cálido, intelectualmente estimulante y muy generoso con su tiempo.

De las muchas experiencias intelectualmente estimulantes de Madison, hay una que destaca especialmente: el Seminario Andino, organizado por Gene Havens en el otoño de 1978. Siempre recordaré con gratitud mis estimulantes pláticas sobre la cuestión agraria con Gene, Manuel Chiriboga, Jaime Crispi, Jorge Dandler, Fernando Rojas, Carlos Samaniego y Bernardo Sorj.

Mucha gente leyó y comentó partes de este manuscrito, en el proceso de convertirse en tesis. Quiero agradecer muy especialmente la ayuda de Brett Brown, Tomas Duplá, Johnathan Fox, Jess Gilbert, Robert Jenkins, Cassio Luisseli, Pat Mooney, Keith Moore, Max Pfeffer, Joey Sprague, William Thiesenhusen, Norberto Valdez y Gene Wilkening. David Kaimowitz y Mike Rogers son amigos cuyas críticas agudas y detalladas me ayudaron a reorganizar y desarrollar muchas ideas. David funcionó prácticamente como cuarto lector del comité de tesis.

Deseo expresar mi deuda con Jack Kloppenburg y Florencia Mallon por leer todo el manuscrito y hacerme importantes comentarios como parte del comité examinador. Mi agradecimiento especial a Jack, quien me permitió disponer de tiempo para concluir el manuscrito en medio de mis

deberes como su auxiliar de investigación. Por su apoyo y aliento oportuno, Marta Tienda merece especial reconocimiento. Al comentar partes del libro, Marta me fue de gran utilidad para reorganizar los argumentos, esclarecer muchos puntos y, en general, darles mayor precisión.

Erik Olin Wright me prestó su apoyo firme y responsable desde el principio de mis estudios de doctorado. Como uno de mis tres asesores, sus críticas radicales e incisivas desde la perspectiva del reduccionismo clasista sirvieron de contrapeso a mis propios excesos culturalistas. Roger Bartra también era lector del comité. Y aunque buena parte de mi proyecto representa una crítica de sus primeros trabajos, siempre se ha mostrado dispuesto a escuchar y apoyar mi propio punto de vista. En cualquier caso, debo reconocer que la obra de Roger ha tenido profunda influencia sobre mi pensamiento. La ahora clásica obra de Roger *Estructura agraria y clases sociales en México* (1974a) puso los cimientos de las investigaciones y la polémica sobre la cuestión agraria en México.

Apenas encuentro palabras para expresar cuánto valoro mi relación académica y personal con mi maestro Ivan Szelényi, y lo afortunado que he sido al haber trabajado con él. Sólo puedo esperar que el ejemplo y la influencia de Ivan se reflejen en mi propio desarrollo como persona y estudioso.

Las ideas y materiales que ahora forman parte del capítulo 3 fueron presentadas por primera vez en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, donde disfruté de una beca de investigador posdoctoral en 1986-1987. Su demandante público me resultó altamente estimulante e inspirador, y siempre conté con el apoyo del entonces director Wayne Cornelius. Por esa época, Frans Schryer leyó el manuscrito completo y me dio generosos y entusiastas comentarios. Marilyn Gates, mi colega en la Universidad Simon Fraser, leyó partes de este libro y me hizo útiles y bien fundamentadas sugerencias. Como evaluadores externos para la versión en inglés de este trabajo, Michael Kearney y Peter Singelmann ofrecieron sugerencias muy útiles para corregir el primero y el último capítulo.

La ayuda de Francisco Javier Gómez Carpineiro en la aplicación de la encuesta a cañeros de la región de Atencingo, Puebla en 1995 fue crucial para el capítulo 6. Además de abrir gentilmente las puertas de su casa, donde me quedé durante varias semanas que duró la aplicación de la encuesta, como buen antropólogo fue un excelente interlocutor durante el proceso. Daniel García, cañero de Izúcar de Matamoros, me ha dado su entusiasta apoyo durante todos los años que he estado haciendo investigación en la región, desde 1988. Agradezco plenamente toda esta ayuda, pero la responsabilidad por cualquier limitación que haya quedado es sólo mía.

Desde Torreón, mis padres siempre se interesaron en el progreso de mi trabajo, y me dieron ánimos para seguir adelante. En conversaciones ocasionales mi padre me dio ideas perspicaces sobre el medio rural de La Laguna, y sus relaciones de toda la vida en la región me facilitaron concertar importantes entrevistas sin mayores preámbulos. Su profesión era la de un geólogo de campo con la sensibilidad del buen antropólogo. Mucha de mi comprensión del México rural se la debo a las largas conversaciones y excursiones con mi padre. Nos dejó en 1989 y ahora descansa en paz.

Si algo me ha sido indispensable para completar este libro ha sido la alegría y satisfacción de haber contado con la compañía de mi familia inmediata: Paty, Alex y, hasta 1997, Rodrigo. Mi hijo más joven, Rodrigo, nos dejó a la edad de 17 años, a consecuencia de un trágico accidente automovilístico que nos robó su vida física. A su manera, a Rodrigo también le preocupaba hondamente la crisis agraria, sobre todo sus expresiones urbanas. Cuando regresamos a México después de mis estudios de posgrado, se entristeció mucho al ver tantos niños haciendo piruetas y malabarismos en los cruceros con más tráfico, tratando de ganarse algunos pesos. En un momento dado, se ganó su primer "sueldo" imitando a esos niños y usando sus considerables habilidades gimnásticas. Lo más conmovedor fue que, en vez de gastarse el dinero, se acercó a una pobre anciana para obsequiárselo. Rodrigo tenía una gran sensibilidad social. Sé que mi hijo dejó en todos los que lo conocimos una hermosa huella, y que el amor que nos inspiró lo hará vivir en nuestros corazones y en nuestras acciones por siempre.

Capítulo 1

Cuestión agraria y democracia: la formación política de las clases en el México rural

La lucha por la democracia debe tener como uno de sus objetivos primarios el establecimiento de una sociedad política [o Estado] viable y democrática [...] pero la democracia requiere también la construcción de una sociedad civil vibrante, vigorosa y pluralista.
(Diamond, 1992: 7)

EL CAMPO mexicano fue uno de los sectores políticamente más explosivos del siglo XX, el cual se inaugura en 1910 con la primera revolución importante a escala mundial y hacia el final del siglo, surge el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la víspera del Año Nuevo de 1994, el cual confirma una vez más la efervescencia del campo mexicano. Estas dos coyunturas de la historia mexicana prueban que los campesinos se niegan tenazmente a ser desplazados como actores de la sociedad.

El punto focal de ambos conflictos políticos fue la tierra (Wolf, 1969; Otero, 1989a; Collier, 1994; Harvey, 1996a, 1998a; Gilly, 1974, 1998). Durante la dictadura de Porfirio Díaz (1876-1910) las comunidades campesinas fueron despojadas de la mayoría de sus tierras por una pequeña clase de terratenientes. Esto habría de ser, a la larga, uno de los factores desencadenantes de la Revolución de 1910. A finales del siglo XX, el levantamiento de Chiapas responde en buena medida a las reformas del artículo 27 de la Constitución, en virtud de las cuales el Estado deja de ser responsable de la distribución de tierras y declara terminada la reforma agraria (Cornelius, 1992; Cornelius y Myhre, 1998a; DeWalt, Rees y Murphy, 1994; Otero, Singelmann y Preibisch, 1995). Como se verá en este libro, sin embargo, se han agregado nuevas dimensiones a las luchas en el campo en las últimas 2 décadas, marcadas por el globalismo neoliberal, que van más allá de la lucha por la tierra. Las nuevas demandas incluyen centralmente también cuestiones sobre la producción, la autogestión, la autonomía, la diferencia cultural y la democracia (Baitenmann, 1998; Harvey, 1998a; Gordillo, 1988; Otero, 1989b; Moguel, Botey y Hernández, 1992; Rubin, 1997).

El campesinado ha sido objeto de importantes debates entre las fuerzas de la izquierda política en la mayoría de los países en desarrollo. Se ha dis-

cutido su papel en la transición del capitalismo al socialismo, como ocurrió en Rusia a principios del siglo (Edelman, 1987). Así como en Rusia, surgieron dos tendencias principales en la interpretación de este problema. Por un lado, los populistas consideraban que los campesinos desempeñarían una función progresista en el socialismo, y que las comunidades campesinas no tendrían mayores dificultades para insertarse en esa transición. Tal era también la opinión de la mayoría de los críticos inspirados por la Revolución china y los escritos de Mao Tse Tung. Por el otro, estaban los leninistas, quienes daban más importancia al aspecto "pequeño burgués" de los campesinos, expresado en el hecho de que eran propietarios de sus medios de producción. Este hecho, presuponían, hacía más probable que los campesinos se aliaran con la burguesía. El propio Lenin consideraba que los campesinos estaban experimentando un proceso acelerado de diferenciación social por el cual sus agentes sociales estaban pasando a cualquiera de las dos clases principales del capitalismo: de un lado, la mayoría se convertía en proletariado rural, y del otro, una pequeña minoría empezaba a formar parte de la burguesía agraria. Así pues, desde su punto de vista, los campesinos pobres harían mejor en aliarse con el proletariado rural e industrial en la lucha por el socialismo (Lenin, 1967).

Como en México la Revolución de 1910 prolongó la existencia del campesinado por varios decenios, una de las polémicas más encendidas desde los años setenta se dio en torno a la estructura agraria, la diferenciación social del campesinado y el carácter de las luchas en el campo. Esta polémica se ha dado en la vanguardia de las discusiones latinoamericanas del problema agrario durante las últimas 2 décadas (De Janvry, 1981; Harris, 1978; Hewitt de Alcántara, 1984; Foley, 1989; Barry, 1995; Veltmeyer, 1997; Petras y Veltmeyer, 2001).

El enigma empírico que encendió la polémica sobre México consiste en lo siguiente: en algunas regiones los trabajadores rurales parecen comportarse políticamente como campesinos, en tanto que en otras los campesinos parecen comportarse como obreros.¹ Según la teoría leninista, se suponía que los trabajadores lucharían por salarios, mejores condiciones de trabajo, la formación de sindicatos y, ultimadamente, por el socialismo. Así pues, los autores en esta tradición pensaban que era necesario un "partido de vanguardia" que subsanara la "falsa conciencia" de esos trabajadores, y la hiciera corresponder a su posición de clase en las relaciones de producción. Otros analistas, inspirados por el economista ruso Alexander

¹Juan Martínez-Alier (1977) señaló esta paradoja para el caso de los campesinos y los obreros agrícolas peruanos. Éstos luchaban por la tierra y aquéllos por la sindicalización.

Chayanov (1974), creían que los trabajadores rurales generalmente tienen acceso a la tierra, de una u otra forma, ya sea por relaciones de parentesco o comunitarias, en virtud de lo cual son realmente campesinos, más que proletarios. Como se puede apreciar, ambos enfoques privilegian las relaciones de producción de los productores directos para definir no sólo su posición de clase sino también el comportamiento político que habría que esperar en cada caso. Es decir, restringen el problema a la situación económica de las clases.

Dentro de esta misma discusión, aunque con el ánimo de trascenderla, presentaré por contraste la historia de cuatro regiones agrícolas mexicanas, poniendo de relieve mi propia interpretación del proceso de formación de las clases. A diferencia de las dos posturas predominantes en la polémica mexicana, las cuales hacen hincapié, ya sea en el acceso al salario o el acceso a la tierra como los determinantes principales del carácter de la lucha –proletaria o campesina–, mi argumento es que el proceso de formación política de las clases está condicionado por la cultura regional, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo, además de la relación causal con la posición de los agentes de clase en las relaciones de producción. Además, la posición estructural de la mayoría de estos agentes sociales es la del semiproletariado agrícola, más que la del proletario o el campesino. Y es el semiproletariado el que se halla en la condición más inestable en relación con su base material de reproducción, desgarrado entre el trabajo asalariado ocasional y el insuficiente acceso a la tierra para su subsistencia. Este semiproletariado constituye la mayor proporción de la población rural en México (Bartra y Otero, 1988). Lo que yo planteo es que los determinantes estructurales de clase se han entendido erróneamente y no se han especificado en forma correcta. De igual manera, aun cuando se especifican debidamente, las posiciones de clase no determinan directamente la formación política de las clases (Laclau, 1977; Laclau y Mouffe, 1985).

En contraste con la polémica mexicana, la cual supone que las luchas campesinas y proletarias se dan en el contexto de la lucha por la transición al socialismo, yo veo las cosas desde un enfoque más modesto, especialmente una vez que la Guerra Fría ha terminado. En este punto, la alternativa socialista difícilmente permanece en las agendas de las fuerzas políticas significativas en Latinoamérica (Castañeda, 1993; Carr y Ellner, 1993; Harris, 1992). Desde mi punto de vista, las luchas políticas en el campo se dan dentro de los límites del capitalismo. En este sentido, las luchas del campo pueden contribuir a la definición de qué tipo de capitalismo y qué tipo de democracia pueden surgir en México en las próximas décadas. El modelo hegemónico actual se puede sintetizar bajo el nombre de su ideología: el

globalismo neoliberal, donde se trata de dar rienda suelta a “los mercados”, y se elimina todo tipo de protección social.

No es de sorprender, entonces, que algunos de los términos clave en el debate político actual sean: transparencia, participación comunitaria, autonomía, independencia, responsabilidad de los representantes populares, autogestión, apropiación del proceso productivo y control territorial. Se trata de contraponer una forma de desarrollo democrático, donde los productores directos asuman el control de sus propias vidas económicas, en vez de que estén controladas por los azares de los “mercados”. Se podría argumentar que el EZLN es la organización que más ha promovido las reformas de este tipo, de la manera más radical y decidida. Tales luchas están encaminadas hacia una democracia societaria, enraizada en la sociedad civil y no limitada al Estado. Este cambio de enfoque ha sido propuesto implícitamente por la práctica política del EZLN: en vez de enfocarse en un movimiento “revolucionario” cuyas metas incluyan la toma del poder estatal, el EZLN propone concentrarse en lo que varios movimientos sociales clave en México han planteado desde los años ochenta: la consolidación de la sociedad civil para contrarrestar el poder abrumador del Estado, sobre todo bajo un régimen autoritario (Cook, 1996; Foweraker y Craig, 1990; Fox, 1996a; Harvey, 1996a, 1996b, 1998a).

Si bien el capitalismo puede ser compatible con la democracia liberal, la cual se limita a la dimensión electoral de la política y queda separada completamente del mercado y la economía (Meiksins Wood, 1995), una democracia societaria, centrada en la sociedad civil, puede plantearle algunos problemas al capitalismo. Por lo menos, una democracia societaria puede llevar al capitalismo en una dirección social democrática y económicamente más equitativa (Semo, 1996; Otero, 1996a). En el límite superior, la sociedad se convertiría en una democracia socialista (Angus, 2001).

Mi análisis de la formación política clasista de los productores agrícolas directos, entonces, está claramente relacionado con la construcción de la sociedad civil dentro de un contexto de transición de un régimen semiautoritario a una democracia en la que sus rumbos precisos están todavía bajo contestación. En este contexto, “sociedad civil” se puede definir en términos amplios o restringidos.

Empecemos con la definición de Antonio Gramsci de un Estado democrático. Más que restringir su definición a las estructuras jurídicas y políticas, Gramsci generalmente se refiere al Estado como la suma de la “sociedad política”, o el ámbito de la dominación, más la “sociedad civil”, o el ámbito de la hegemonía. Entre menos democrático sea un Estado, más se basará en la dominación. Por el contrario, entre más democrático sea el Es-

tado, más se basará en la hegemonía, es decir, en el consenso de su pueblo. La democracia, nos dice Gramsci, “debe significar que cada «ciudadano» pueda «gobernar» y que la sociedad los ubique, aunque sea en forma abstracta, en la condición general para lograr esto. La democracia política tiende hacia la coincidencia entre los gobernantes y los gobernados...” (1971: 40). Es decir, para que sea democrática, una sociedad debe proveer a sus ciudadanos las condiciones bajo las cuales han de desarrollar sus potencialidades, y con ellas controlar el destino de su sociedad. Entre más coincida, desde abajo, la sociedad civil con la política, más democrático será el Estado.

Dentro de esta concepción de la democracia radical, una de las preguntas centrales que emergen es: ¿Cómo pueden los grupos, las clases o las comunidades subalternos convertirse en hegemónicos, o por lo menos lograr la habilidad para presionar exitosamente para que se den intervenciones estatales en su favor? Para Gramsci, el responder a esta pregunta con relación a las clases subalternas requiere de la identificación de dos fases, que son parte de lo que aquí llamo la formación política de las clases: primero, “la autonomía con respecto de los enemigos que hay que vencer”; y segundo, “el apoyo de los grupos que activa o pasivamente los han apoyado...” en sus luchas (Gramsci, 1971: 53). Un tercer punto que Gramsci plantea en otro lugar se refiere a la naturaleza del liderazgo: a menos que sea democrático y que tenga que responder ante sus bases, se pueden instalar la desmoralización y la cooptación. Con frecuencia, el carácter del liderazgo no depende de los propios líderes, sino de la acción del Estado. Tal como lo plantea Gramsci, “entre el consentimiento y la fuerza yacen la corrupción y el fraude... Esto consiste en procurar la desmoralización y la parálisis del antagonista (o los antagonistas) mediante la compra de líderes... para sembrar así el desorden y la confusión entre las bases” (Gramsci, 1971: 80).

En un sentido amplio, pues, la sociedad civil consiste en la esfera de interacción entre la economía y el Estado o la sociedad política, e incluye los movimientos sociales y la esfera íntima de la familia. En una definición restringida, la sociedad civil consiste en

asociaciones voluntarias orientadas por sus relaciones con el Estado, pero auto-limitadas en el sentido de que no buscan compartir el poder del Estado [...], se trata de un ámbito de libertad en el cual los individuos no se ven forzados a actuar estratégicamente en aras de una recompensa material (como lo requiere la economía) o restringidos por las relaciones de poder encarnadas en la burocracia estatal (Dryzek, 1996: 47).

Tres teóricos contemporáneos de la democracia coinciden en observar que el campo político por sí mismo no puede ofrecerle a la ciudadanía un poder sustancial (Dryzek, 1996; Meiksins Wood, 1995; Touraine, 1997). John Dryzek también ve al capitalismo globalizado como un gran obstáculo para profundizar la democracia. Desde su punto de vista, los prospectos para la democracia en estos tiempos capitalistas hay que buscarlos mejor

en la sociedad civil que en las instituciones formales del gobierno, entre fronteras nacionales más que dentro de las fronteras, y en ámbitos de la vida que no siempre se reconocen como políticos. Así pues, es más factible buscar la democratización en contra del Estado, aparte del Estado y entre Estados, en vez de a partir del o dentro del Estado (Dryzek, 1996: 3-4).

En tales términos, el enfoque de mi análisis en este libro es la consolidación de la sociedad civil como una condición para profundizar la democracia en contra del Estado y aparte del Estado o la sociedad política.

El propósito de este libro es, entonces, cuestionar el reduccionismo clasi-sista en ciertas variantes del marxismo tradicional y el populismo en lo concerniente a las luchas y movimientos políticos. Los principales parámetros del debate mexicano y mi propio enfoque analítico se presentan en el capítulo 2. Los capítulos 3 y 4 muestran que la estructura agraria en México ha sido en general especificada erróneamente, pues la mayoría de los productores agrícolas directos se encuentran en posiciones de clase económica semiproletarias, más que ser campesinos o proletarios permanentes. Con base en los cuatro estudios de caso regionales de los capítulos 5 a 8, demuestro que en las regiones en que se han reproducido las relaciones sociales de los campesinos, los semiproletarios están envueltos sobre todo en luchas de tipo campesino. Cuando el proceso de descampesinización es reciente (hasta una generación), incluso los proletarios han luchado sobre todo por recuperar su condición campesina. Cuando una cultura campesina ha sido gravemente debilitada por el desarrollo capitalista y la mercantilización de las relaciones sociales, sin embargo, los semiproletarios todavía pueden enfrascarse en luchas por la tierra, pero adoptando un nuevo carácter poscapitalista: la demanda por la tierra se ve acompañada por la demanda de otros medios de producción y por el control democrático del proceso productivo. A esto le llamo demanda "poscapitalista", pues involucra un enfoque *desde abajo* en la toma de decisiones dentro del proceso laboral y los frutos de la producción se distribuyen socialmente entre los productores directos.

El término poscapitalista describe una situación en la cual los semiproletarios resisten exitosamente la proletarización mediante la organización cooperativa de la producción, con miras de adquirir grados sustanciales de independencia del Estado y el capital privado. En esta lucha se tiene que seguir funcionando dentro del mercado capitalista, pero la nueva organización contiene las semillas de una organización poscapitalista para el conjunto de las actividades económicas. Esta organización estaría basada en la autogestión desde abajo y el control democrático de la producción.²

Muestro también que, independientemente de que los conflictos se centren en demandas campesinas, proletarias o poscapitalistas, dichos conflictos no poseen un carácter político definido de antemano: ni de oposición, ni del tipo hegemónico-burgués, ni popular-democrático. Más bien, es la manera como se da la intervención estatal lo que afecta la capacidad de la gente para defender sus intereses y el carácter de sus organizaciones de clase establecidas para tales propósitos. Cuando las intervenciones son favorables a los productores directos (campesinos, proletarios, semiproletarios, o poscapitalistas), pero la iniciativa radica en el propio Estado, sus organizaciones populares generalmente terminan siendo cooptadas e integradas al discurso hegemónico-burgués y su política. En contraste, cuando el Estado amenaza la base para la reproducción de los productores directos, sus organizaciones adoptan un carácter de oposición. Por último, cuando las intervenciones del Estado favorecen a los productores directos bajo la presión, la fuerza y la movilización de éstos, sus organizaciones de clase pueden adoptar un carácter de oposición y popular-democrático.

Finalmente, la tercera mediación crítica en la formación política de las clases es el tipo de liderazgo. El liderazgo está relacionado, desde luego, con los modos de participación de las bases. El tipo de liderazgo afecta la medida en que las organizaciones clasistas puedan retener su autonomía respecto del Estado o la clase dominante, así como el carácter de las alianzas que establecen una vez que ya se han formado. Se examinan aquí tres tipos básicos de liderazgo agrario: carismático-autoritario, corrupto-oportunista, y democrático. Los líderes carismático-autoritarios y corrupto-oportunistas están claramente asociados con efectos políticos hegemónico-burgueses en el sentido de que las organizaciones pierden su independencia y autonomía; terminan en la cooptación y desmoralización de las bases. Por el contrario, con un liderazgo democrático las organizaciones clasistas tienen las

² Uso el término *poscapitalista* como tipo ideal. En algunos casos concretos podemos encontrar ejidos colectivos que contratan cantidades significativas de fuerza de trabajo asalariada, más allá de la de sus propios miembros. En estos casos, el ejido podría estar más cerca de una cooperativa capitalista que de una poscapitalista.

mejores posibilidades de retener su independencia del Estado, y establecer alianzas popular-democráticas con otras organizaciones en los ámbitos regional, nacional, o aun internacional, a la vez que pueden conservar su autonomía.

Las hipótesis aquí propuestas se ponen a prueba mediante la aplicación de la teoría de la formación política clasista (FPC) a cuatro regiones de México. Tres de ellas se estudian históricamente, desde los años treinta en que los productores directos recibieron tierra de la reforma agraria. La cuarta región es Chiapas, la cual se estudia en torno a la centralidad de las reivindicaciones indígenas que han sido planteadas por el EZLN, y los retos que representa el multiculturalismo a la ideología igualitaria del neoliberalismo. Por su parte, las tres regiones que se estudian del capítulo 5 al 7 comparten un buen número de características que justifican su comparación. Sus contrastes, desde luego, contribuyen también a demostrar la pertinencia de mis hipótesis. Su semejanza más importante es que se instaló una organización capitalista de la agricultura en las unidades de producción que fueron el foco originario de las luchas agrarias de los años treinta. Todas eran empresas agrícolas modernas en las que se contrataba mano de obra asalariada y se producían cosechas redituables. De igual forma, las tres regiones están situadas en los valles más fértiles de los estados que las albergan, y la agricultura se basa en sistemas de riego. En las tres regiones se producen típicamente cosechas comerciales: caña de azúcar en Atencingo, algodón en La Laguna, y trigo en el valle de El Yaqui.

Otro elemento común es que cada región se encuentra en estados que presentan marcadas diferencias regionales, al igual que ocurre en todo el país, particularmente en lo tocante a tipos y calidades de tierra. Los tres estados tienen valles fértiles así como zonas marginales y deprimidas que reciben el nombre genérico de “sierras”. Una diferencia considerable tiene que ver con la densidad demográfica y la importancia relativa de los valles y sierras de cada estado. El estado de Puebla, donde se localiza Atencingo, tiene una de las densidades más altas de México; en tanto que Sonora, estado que alberga al valle de El Yaqui, tiene una de las más bajas. Coahuila y Durango, estados que comparten varios de sus municipios para formar la región de La Laguna, se encuentran en un punto intermedio en cuanto a densidad demográfica, aunque más cercanos a la de Sonora. Además, la mayor parte de la población rural de Puebla vive en zonas de sierra, no en valles fértiles, mientras que en Coahuila, Durango y Sonora ocurre lo contrario. Consecuentemente, Puebla tiene una gran proporción de campesinos depauperados y semiproletarios inmersos en una economía menos mercantilizada. En contraste, en parte debido al hecho de que las sierras

del norte son demasiado áridas y yermas para brindarle a la familia campesina siquiera una subsistencia raquítica, los semiproletarios de Sonora y La Laguna están inmersos en una economía más próspera, mucho más mercantilizada y dependiente de los ingresos salariales.

Existen importantes paralelos entre las historias de El Yaqui y La Laguna en lo que se refiere al grado de desarrollo capitalista al momento de la reforma agraria. Sin embargo, una diferencia fundamental es la presencia de los indios yaquis y mayos en Sonora, frente a la mano de obra predominantemente mestiza que se encuentra en La Laguna. La repercusión cultural de este contraste se ha manifestado sobre todo en los periodos inmediatamente posteriores a la Revolución (los años veinte) y durante la reforma agraria cardenista (1934-1938), cuando los yaquis exigían tierras principalmente para poder reconstruir su cultura independiente (Hu-DeHart, 1984; Spicer, 1980). En La Laguna, los peones de hacienda mestizos mantenían luchas típicamente proletarias en torno a la sindicalización y los contratos colectivos en contra de agricultores capitalistas.

El contraste entre la región yaqui y Atencingo es también muy importante. Si bien en los alrededores de Atencingo también había pueblos indios, su cultura e historia era muy distinta de la del valle de El Yaqui. Ya habían estado sometidos durante siglos, primero al dominio colonial y luego a las formas predominantes de desarrollo en el México independiente (Carrasco, 1969). Además, la historia anterior a la colonia de los grupos étnicos del centro de México está asociada al dominio del Estado azteca, una forma "despótico-tributaria" de explotar y dominar a las comunidades indígenas (Bartra, R., 1974b). Los yaquis y mayos, en cambio, eran pueblos agrícolas independientes con una forma tribal de organización y estructuras de autoridad descentralizadas en pueblos, similares a la mayoría de las tribus de América del Norte (Spicer, 1969a, 1980; Hu-DeHart, 1981, 1984).

Estas semejanzas y diferencias entre las regiones constituyen un importante antecedente para entender el significado de un elemento común adicional: que los ejidos que se crearon con la reforma agraria durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) fueron colectivos, y no individuales como la mayoría. Después de la Revolución de 1910-1920, el ejido fue la forma preferida de tenencia de la tierra otorgada por el gobierno a los beneficiarios de la reforma agraria. El ejidatario no llegó a ser propietario en el sentido del derecho romano. Más bien, sólo se le otorgó el usufructo de la tierra y el derecho a trabajarla en forma individual o colectiva. El ejidatario, sin embargo, no tenía el derecho de transferir sus derechos agrarios, excepto a sus herederos, sino hasta 1992, cuando se cambió el artículo 27 de la

Constitución. Durante la administración de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se promovieron los ejidos de tipo colectivo más que los individuales, sobre todo en los lugares donde las tierras en cuestión habían sido explotadas en forma capitalista. Pero ambas formas de organización estaban contempladas en la ley.

El propósito manifiesto de fomentar la organización colectiva en la época cardenista era preservar las economías de escala de las grandes haciendas capitalistas después de la expropiación. Sin embargo, debido a las diversas culturas regionales de los productores directos de cada caso, vistas a lo largo de la historia, sus luchas presentarían marcadas diferencias en el proceso de su formación política clasista, pese al hecho de que inicialmente todos ocupaban un lugar semejante en las relaciones de producción: el de trabajadores agrícolas asalariados. Las trayectorias y los destinos políticos de las clases estaban determinados, pues, no tanto por la posición de clase económica originaria como por las culturas regionales predominantes, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo predominantes. Como veremos también en el caso más reciente del levantamiento zapatista, estos mismos factores explican la formación político-clasista del campesinado indígena en Chiapas.

Nota metodológica

Mi análisis de la construcción de la sociedad civil en el México rural, entonces, se centra en los efectos específicos de las culturas regionales, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo, a más de ver las relaciones de producción según se manifiestan en los ámbitos de la comunidad y la región. Estos ámbitos, al igual que la familia, se consideran unidades de análisis diferentes y me valdré de una u otra dependiendo del asunto que tenga que tratar. Al tratar de las variables estructurales de clase en las relaciones de producción, el centro de atención será la familia; pero cuando se trate de la movilización agraria y la formación político-clasista, el pueblo o la región serán el centro del análisis.

Desde luego que se preserva el ámbito nacional, ya que es aquí donde pretenden incidir las políticas del Estado. Pero dependiendo de la fuerza relativa de los grupos y clases en pugna en el ámbito regional, el Estado no duda en mostrarse inconsecuente en lo relativo a sus políticas nacionales en general. Las relaciones de México con la economía mundial son importantes pero no se discuten aquí explícitamente puesto que su efecto es el mismo en las cuatro regiones, en la medida en que tales relaciones internacionales se internalizan para la formación social en su conjunto.

Así pues, cualquiera que sea la repercusión que tenga la inserción dependiente de México en la economía capitalista mundial en la formación político-clasista, se expresará en su propia dinámica interna de lucha de clases.

Las razones de pasar de una a otra unidad de análisis son bastante evidentes. En primer lugar, la mayor parte de la bibliografía relativa a las clases agrarias adopta a la familia como unidad de análisis para establecer fronteras de clase en las relaciones de producción. Por lo tanto, la información disponible puede usarse en estos términos. Elegí la familia y no el individuo porque considero que ésta es una unidad más adecuada para entender los procesos estructurales de clase en un país donde el parentesco tiene en general gran importancia en las relaciones sociales. En segundo lugar, las luchas agrarias están pensadas aquí como acciones colectivas. Así pues, el pueblo o la región son unidades de análisis más importantes para el estudio de las acciones colectivas y los movimientos sociales. Por último, este estudio es de naturaleza predominantemente cualitativa y se basa en la comparación de las historias sociales de las luchas agrarias y las etnografías de cuatro regiones de México.

Aun cuando el análisis que a continuación se presenta se limita a un solo país, se enmarca en la tradición de los "macroanálisis histórico-comparativos" (Moore, 1966; Skocpol, 1979, 1984; Katznelson y Zolberg, 1986). En lugar de contrastar las historias sociales de diversos países en función de ciertas variables, mis contrastes se dan entre regiones pertenecientes a un país de vasta heterogeneidad. Como lo ha expresado Aristide Zolberg en relación con este método, tiene un parecido familiar con el análisis cuantitativo multivariado, aunque dista mucho de ser idéntico a él: "El proceso de abstraer configuraciones a partir de la realidad histórica y su tratamiento en tanto variables entraña cierto grado de simulación intelectual, misma que se justifica en la medida en que no se pierda de vista que es un tipo de simulación" (1986: 401). También es importante tener en cuenta que tal perspectiva no logra generalizaciones en sentido estadístico, pero sí intenta enriquecer nuestra comprensión general del proceso de formación política de las clases mediante la sistematización de la observación de semejanzas y diferencias transregionales. Sólo mediante la sistematización se pueden eliminar las interpretaciones fundadas en la atribución errónea de singularidad a ciertos aspectos de las configuraciones regionales e identificar las combinaciones de los factores que parezcan explicar mejor las variaciones que se descubren (las últimas dos oraciones son una paráfrasis de Zolberg (1986: 401), en la que sustituí el término "nación" por el de "región").

Organización de este libro

Los próximos tres capítulos se dedican a problemas teóricos, históricos y estructurales del desarrollo agrario en México. El capítulo 2 delinea los principales contornos de la polémica mexicana y presenta el enfoque teórico alternativo que se propone en este libro. Ofrece también una exposición del programa de investigación que reporta y la definición de hipótesis y conceptos que lo guían.

El capítulo 3 presenta la historia crítica de la reforma agraria en México. El punto de vista oficial a menudo hace gala de este proceso como si fuera el producto de una revolución campesina que trajo justicia a las masas rurales. En contraste con esta apreciación, afirmo que la redistribución de tierras en México fue la forma elegida para desarrollar y afianzar el capitalismo en México al tiempo que se construían los cimientos del Estado mexicano moderno. Las reformas de 1992 al artículo 27 de la Constitución mexicana, sin embargo, junto con las nuevas políticas agrícolas neoliberales, representan una revisión a fondo del programa originario de la reforma agraria y se discuten también en este capítulo.

En el capítulo 4 se evalúa el principal resultado estructural de la reforma agraria mexicana desde los años treinta hasta los noventa: la pauperización de la gente del campo, fenómeno que ha llevado a la crisis tanto de la agricultura campesina como de la capitalista. En este capítulo se da cuenta de las transiciones agrarias en general y del proceso de diferenciación social en el campo mexicano. Se estudia también la doble crisis de la agricultura mexicana, referida por un lado al sector capitalista y por el otro a la economía campesina. De cara a los orígenes de esta crisis doble, se presenta un análisis de los cultivos comerciales en contraste con los de subsistencia, con base en datos sobre producción y precios del periodo 1940-1995. A continuación, conforme al censo de 1970, presento un espectro de la diferenciación social de los productores agrícolas en México, mismo que refleja el grado en que la economía rural se había deteriorado hasta ese año. Enseguida, al contrastar estos datos con los de 1960, demuestro que el campesinado medio tiende a desaparecer a raíz de la polarización de la estructura agraria. Los datos de encuestas realizadas en 1990 y 1994 sólo en el sector ejidal tienden a confirmar estos resultados, aunque comienza a darse cierta reconcentración de la tierra entre los campesinos empresariales (De Janvry, Gordillo y Sadoulet, 1997).

Las principales conclusiones del capítulo 4 son que:

1. ha habido un profundo proceso de diferenciación social entre los campesinos, debido a la doble crisis de la agricultura capitalista y la economía campesina;
2. la gran mayoría de los productores agrícolas directos ya ocupaban posiciones de clase semiproletaria en 1970; y
3. el desarrollo desigual del capitalismo en la agricultura mexicana ha creado una gran heterogeneidad regional en las estructuras de clase desde el último tercio del siglo xx.

De esta suerte, la característica fundamental del proceso de disolución de la economía campesina es el siguiente: descampesinización sin proletarianización total. El resultado es que la gran mayoría de los productores agrícolas directos está en condiciones semiproletarias, debatiéndose entre el trabajo asalariado y la producción agrícola. Sin embargo, las condiciones semiproletarias en regiones diferentes entrañan contenidos culturales y socioeconómicos diversos. De tal suerte, la pregunta que surge es: ¿hacia dónde se dirige la lucha de los semiproletarios en el conflicto de las clases agrarias?

Del capítulo 5 al 7 se trata este problema referido a cada una de las tres primeras regiones arriba descritas, para estudiar en detalle cómo los productores directos intervienen en el proceso de formación político-clasista. Aunque la estructura agraria de México sea muy heterogénea, opté por enfocar a los productores directos que compartían una situación estructural muy semejante en las relaciones de producción en cada una de las tres regiones al momento de la reforma agraria de los años treinta: todos ellos eran trabajadores agrícolas que vendían su fuerza de trabajo a las haciendas capitalistas. Pese a esta semejanza de situaciones dentro de las relaciones de producción, las luchas y organizaciones de clase que surgían en cada región eran diferentes entre sí; es decir que las “trayectorias de clase política” eran todas distintas. El resultado es que los trabajadores agrarios terminaron en “destinos de clase política” diferentes en cada caso. Así pues, como no podemos explicar las diferencias de la formación político-clasista a partir de la posición estructural de clase por sí misma, yo ofrezco una explicación de este proceso en términos de las culturas regionales, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo en cada caso.

En el capítulo 5, sobre La Laguna, se narra la historia de un proletariado agrícola cuya historia de clase política siguió una trayectoria compleja. Los trabajadores agrícolas de los años treinta, llamados “campesinos” por los especialistas de su época, hacían por entonces demandas típicamente

proletarias, las cuales se centraban en salarios más altos, derechos sindicales y contratos colectivos de trabajo. En lugar de satisfacer estas demandas, el Estado respondió con una redistribución general de las tierras de la región, una de las más capitalistas de México. Obtenidas las tierras, los nuevos ejidatarios ingresaron a una etapa de producción poscapitalista que duró 10 años en los ejidos colectivos de reciente creación, con base en la autogestión y la producción democrática. Pero ni el Estado ni la burguesía agraria podían tolerar tal fuerza económica y política en una clase subalterna. A través de años de boicoteo oficial, los ejidatarios se convirtieron en un semiproletariado empobrecido y dividido que terminó el siglo produciendo mayormente para el Banrural que administraba el Estado. Si bien los destinos de clase en La Laguna son más diversos que en las otras regiones, la mayoría de los productores directos en esta región están claramente subordinados a los aparatos económicos y políticos del Estado y se han convertido en una variedad de trabajadores del Estado en una condición semiproletaria con organizaciones de clase muy fragmentadas.

El capítulo 6, en cambio, trata de la región de Atencingo, Puebla, donde el empuje de las luchas agrarias a lo largo del periodo considerado (de los años treinta a los noventa) tiene la impronta del carácter campesino. Luego de acerbadas luchas en contra del dueño de un ingenio azucarero capitalista, al cual por ley los nuevos ejidatarios tenían que abastecer de caña de azúcar, éstos consiguieron dismantelar el ejido colectivo. La forma resultante de organización productiva descansaba en los miembros individuales del ejido. Se dio así un proceso interno de diferenciación social, por el cual una minoría de ejidatarios ha llegado a contratar cantidades considerables de fuerza de trabajo. Estos nuevos campesinos, en una situación relativamente desahogada, diversificaron la producción hacia cosechas diferentes de la caña de azúcar. De esta forma, su destino de clase fue lo que he llamado "campesinado-empresarial". Al otro extremo del espectro social, la mayoría de los campesinos de Atencingo se acercó más a la condición semiproletaria, con números cada vez mayores de miembros de la familia obligados a emigrar para volverse proletarios en las grandes ciudades de México o de Estados Unidos. Con todo, la proletarianización de estos miembros de la familia ha sido externa respecto de la economía rural de la región.

La región del valle de El Yaqui en el sur de Sonora es tema del capítulo 7. Los indios yaqui fueron los primeros propietarios y habitantes de sus fértiles tierras. Si bien estos productores directos ocuparon también posiciones asalariadas en las relaciones de producción mucho antes de los años treinta, sus luchas estaban encaminadas a recuperar las bases territoriales de su pueblo y su cultura. Pero la agresividad y violencia de la penetración

capitalista convirtió sus luchas y las de la numerosa población mestiza que con el tiempo inmigró a la región –que era una fuerza de trabajo semiproletarizada– en una modalidad de las luchas poscapitalistas: las nuevas demandas no sólo se referían a la tierra, sino también al resto de los medios de producción y a la autogestión democrática del proceso productivo.

Por último, en el capítulo 9 se discute el levantamiento de 1994 en Chiapas, dirigido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a la luz de la teoría político-cultural de la formación clasista propuesta en este libro. Debido a lo reciente del levantamiento, en este capítulo no se sigue la trayectoria histórica de las clases, en paralelo a los otros casos regionales. Sus características estructurales en el año 1970, sin embargo, se discuten en contraste con las otras tres regiones en el capítulo 4. Una similitud fundamental de esta región con las otras tres es que los productores directos se encuentran también altamente semiproletarizados, aunque muchos de ellos siguen teniendo acceso a pequeñas parcelas de tierra. Un importante contraste con los capítulos del 5 al 7, sin embargo, es que en este caso se ha preservado una mayor proporción de la población rural en posiciones campesinas y la identidad indígena forma un elemento central de la cultura regional en Chiapas.

La centralidad de la cultura indígena se ha expresado en la propia lucha del EZLN. Ahora bien, la reivindicación de los derechos y la cultura indígenas no estuvo al centro de las exigencias del EZLN desde el principio del levantamiento, sino que más bien responde al hecho de que esta organización entró en un estrecho diálogo con una multiplicidad de organizaciones indígenas, todas ellas con fuertes raíces económicas en el campesinado. Ha sido a partir de la exigencia de estas organizaciones indígenas de contemplar la demanda por los derechos y la cultura indígena que el EZLN la adoptó como una de sus banderas principales. Veremos, sin embargo, que esta demanda cultural está íntimamente relacionada con el carácter campesino de la lucha chiapaneca, y por lo tanto, al igual que en las otras tres regiones, la lucha por la tierra es también central. El tipo de liderazgo representado por el EZLN constituye un ejemplo del tipo democrático, y sus prácticas políticas van encaminadas explícitamente a consolidar frente al Estado a la sociedad civil. De hecho, podríamos decir que en la historia reciente de Chiapas se condensa el efecto específico de la formación político-clasista sobre la democratización de la sociedad civil y el Estado.

Finalmente, en el capítulo de conclusiones teóricas se resumen los planteamientos centrales, se hacen comparaciones sistemáticas y se establecen contrastes entre las cuatro regiones. Se establece cómo la cultura regional,

la intervención del Estado y el liderazgo explican la formación política de las clases en cada región, aun cuando la posición inicial de las clases era la misma en las diversas regiones. Haciendo uso de la literatura reciente sobre México rural, este capítulo luego discute las implicaciones políticas de los grandes cambios que ha traído la reforma neoliberal que ha asolado a México desde mediados de los años ochenta.

Capítulo 2

Más allá del debate mexicano: hacia una teoría político-cultural de la formación clasista

LA “CUESTIÓN agraria” en México fue en los años setenta el foco de un prolongado debate que cobró nuevamente actualidad en los ochenta. Se podría argumentar que los posicionamientos frente al levantamiento zapatista han venido de nuevo a relucir las posturas originales del debate agrario en México entre campesinistas (que han tendido a simpatizar con el EZLN) y descampesinistas (que han tomado posturas más bien críticas). En este capítulo delinearé los perfiles de esta controversia en relación con la forma en que cada bando trató de describir la estructura social agraria y derivar conclusiones políticas a partir de dichos análisis estructurales. A continuación propondré otros problemas e hipótesis que plantean un nuevo marco analítico para entender la cuestión agraria. En los capítulos siguientes se aportan las pruebas empíricas que apoyan mis hipótesis. Se impugnan aquí los supuestos del reduccionismo clasista en las dos posturas principales frente al debate y se sustenta que las culturas regionales, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo son también determinantes fundamentales de la formación política clasista.

Diferenciación estructural y formación política clasista en el agro mexicano: perfiles del debate

Dos de los temas centrales que se han debatido son:

1. el carácter de la estructura agraria en México, definido a partir de las relaciones de producción; y
2. la naturaleza de los actores sociales y sus estrategias políticas.

En otras palabras, ¿cuál es el carácter de la formación política de los productores agrícolas directos (campesinos, semiproletarios y proletarios)?

El problema central que parece haber orientado esta controversia podría expresarse de la siguiente manera: ¿siguen los campesinos una trayec-

toria político-clasista fija hacia una existencia proletaria-asalariada, o pueden seguir siendo agricultores campesinos mientras prosigue el desarrollo del capitalismo? Este planteamiento se refiere claramente a la dimensión estructural o económica de la dinámica de las clases agrarias, es decir a la situación de los agentes de clase en el proceso de producción y circulación. Algo que ha caracterizado a este debate es que, independientemente de la postura que se adopte, ya sea campesinista o descampesinista (o proletarista), la mayoría de los autores ha postulado que existe una correspondencia necesaria entre la posición que se ocupa en las relaciones de producción y la formación política de las clases. En el fondo, la problemática tanto de campesinistas como de proletaristas ha sido la misma. Tal parece que se planteaba la siguiente pregunta: "dime cuál es la posición de clase de los productores directos (definida por las relaciones de producción) y te diré cómo se supone que se han de comportar políticamente". Este fenómeno teórico puede catalogarse bajo el rubro de "reduccionismo clasista" según lo define Ernesto Laclau (1977) (Laclau y Mouffe, 1982, 1985). Desde este punto de vista, dada una cierta posición de los agentes de clase en las relaciones de producción, se supone que tienen un conjunto de intereses materiales claramente identificables por los científicos sociales marxistas, y por los cuales "lógicamente" lucharán dichos agentes.

Tanto en la postura proletarista como en la campesinista se ha reconocido que, a través del proceso de reforma agraria, se creó o se expandió un campesinado después de la Revolución de 1910. Los proletaristas, sin embargo, ven un proceso muy avanzado de disolución de la producción campesina, que resulta en "descampesinización", proletarización y pauperización. Los campesinistas, en cambio, hacen hincapié en que los campesinos se las han arreglado para resistir la penetración capitalista y seguir produciendo con base en el trabajo familiar. Si bien los autores de esta tendencia reconocen que la penetración capitalista puede dañar profundamente la producción campesina, creen que el campesinado en general no necesariamente enfrenta un proceso de extinción.

Esta diferencia ha originado una falta de acuerdo en cuanto a cómo definir y operacionalizar a las clases agrarias de México en general y al campesinado en particular. En todo caso, cada perspectiva ha hecho hincapié ya sea en el acceso al salario, o en el acceso a la tierra como el principal determinante del carácter de las luchas proletarias o campesinas, respectivamente.

Paso ahora a considerar cómo concibe históricamente el proceso de diferenciación social cada postura del debate mexicano, y qué consecuencias políticas se han derivado de ello, para luego volver a la teoría y señalar los

problemas de tales concepciones en este ámbito. Concluyo el capítulo proponiendo una manera distinta de plantear los problemas de la investigación para mejor describir e interpretar la dinámica histórica de las clases agrarias en México.

Variantes del campesinismo

Las vías que eligen los campesinos para evitar su disolución como clase, indicadas en esta polémica, dependerán de cuál de las dos variantes del campesinismo sea a la que nos refiramos. Por un lado están los argumentos “reformistas” y por el otro los “radicales”. Los “reformistas” postulan un cambio en las formas de intervención gubernamental (a través de la política agraria), encaminadas a apoyar la producción campesina, más que a las empresas agrícolas capitalistas (Warman, 1976, 1980, 1983; Esteva, 1975, 1978, 1980, 1983). La mayoría de los autores de esta corriente tienen influencia conceptual de la teoría de la dependencia en una versión claramente nacionalista. De tal suerte, propugnan la autosuficiencia alimentaria basados en estrategias y políticas estatales centradas en los campesinos, tales como asistencia técnica y subsidios para los insumos agrícolas. Argumentan que la mayor parte de las empresas agrícolas se dedican a la producción para la exportación (ganado o frutas y verduras), en tanto que los campesinos producen para el mercado interno. En contra del enfoque del libre comercio, que se basa en las “ventajas comparativas”, los campesinistas reformistas proponen lograr la autosuficiencia alimentaria con base en la consolidación de la producción campesina. La expresión más clara de este enfoque fue el Sistema Alimentario Mexicano o SAM, estrategia de desarrollo rural adoptada en el gobierno de José López Portillo (1976-1982) (Fox, 1993; *Nueva Antropología*, 1981; SAM, 1980). El aspecto reformista de este enfoque está en que pretende modificar meramente el sector agrario, a imagen del campesinado, pero continuar con el desarrollo del capitalismo industrial (sobre una base más nacionalista, tal vez).

En contraste con lo anterior, el enfoque “radical” del campesinismo (Bartra, A., 1979a, 1979b) sostiene que las luchas campesinas por la tierra son inherentemente anticapitalistas y que, si se ha de tomar la tierra, debe ser el resultado de la lucha combativa del movimiento campesino y no en virtud de una concesión graciosa del Estado burgués. El campesinismo radical argumenta que el campesinado es un sujeto revolucionario de primer orden, al grado de que sus luchas son, por definición y en esencia, anticapitalistas. Este carácter anticapitalista se supone también implícito en la misma lógica de reproducción de la comunidad campesina, la cual difiere

de la lógica capitalista. Las prescripciones políticas de esta perspectiva serían dobles: luchar por la consolidación de la comunidad campesina y, en cuanto al movimiento campesino, luchar por toda la tierra cultivable. Combinadas, se supone que las repercusiones de estas políticas serían fundamentalmente anticapitalistas, al grado de que lógica y prácticamente no podrían integrarse en un proceso general de desarrollo capitalista.

He cuestionado el supuesto del anticapitalismo *inherente* a las luchas campesinas con base en el siguiente argumento: teóricamente podemos concebir una situación en que la burguesía agrícola sea completamente expropiada y, en consecuencia, eliminada como fracción de la clase capitalista, reemplazándola con campesinos comerciales. La burguesía industrial bien podría establecer un pacto de producción con ese campesinado para el suministro de materias primas industriales y bienes salariales. Pero el propio capitalismo seguiría intacto, al menos en el sector industrial (Otero, 1981, 1983).

Así pues, lo que me lleva a llamar “radical” el enfoque de Armando Bartra es que él aboga también por la alianza entre los campesinos y la clase trabajadora, en una versión maoísta del leninismo. En cambio, los campesinistas reformistas no problematizan el capitalismo industrial, sino que simplemente quieren reformarlo de manera que el campesinado pueda ocupar un mejor lugar dentro de él.

Variantes del proletarismo

También pueden distinguirse diversas variantes dentro del enfoque proletarista, pero sólo me ocuparé de tres que han funcionado dentro del ámbito marxista. La primera afirma que los campesinos ya no existen como clase política, aunque todavía haya algunos agentes campesinos en el ámbito de las relaciones de producción. Por lo tanto, sólo podemos hablar de “fuerzas burguesas” y “fuerzas proletarias” en la sociedad mexicana considerada como un todo (De la Peña, S., 1980). Los agentes de los movimientos sociales nuevos y viejos que potencialmente expanden el sujeto revolucionario (como las mujeres y las minorías étnicas) quedan excluidos de entrada de cualquier consideración tocante al conflicto político, ya que todo se interpreta –simplista y mecánicamente– en función de las clases polares del modo de producción capitalista. Y como este análisis se lleva a cabo en niveles tan elevados de abstracción, se pasan por alto muchos matices y modalidades de las sociedades concretas. La izquierda sólo necesitaría unificar y consolidar las llamadas “fuerzas proletarias” para formar un movimiento revolucionario. Y como probablemente no habría diferencias internas de intereses de clase o de grupo, los discursos políticos e

ideológicos podrían dirigirse monóticamente hacia el socialismo. Por desgracia para este enfoque, esta perspectiva monótona y unitaria está muy lejos de la realidad. Por el contrario, la izquierda realmente existente presenta muchas divisiones y grietas que trascienden con mucho las posiciones estructurales de clase.

La segunda variante del proletariado es semejante a la primera, pero presenta algunas diferencias en cuanto a la concepción de la estructura agraria. El proceso de “descampesinización” se ha visto considerablemente acelerado debido a una crisis doble: la crisis mundial de 1974, y la crisis de la producción campesina que comenzó en México en 1965 y que continúa muy agudizada a principios del tercer milenio. Esta doble crisis hizo que la producción campesina fuera incapaz de resistir los crecientes precios del mercado de los bienes no agrícolas, pues llevó a los campesinos, en un proceso paradójico, tanto a aumentar su producción para satisfacer sus necesidades de subsistencia como a buscar empleos remunerados en el mercado de trabajo capitalista. Este proceso contradictorio consiste en lo siguiente: una tendencia predominante hacia la descampesinización, es decir hacia la diferenciación social interna o a la estratificación del campesinado; y una tendencia subordinada que lleva a los campesinos a aumentar su producción familiar, a pesar de los decrecientes precios agrícolas. Este proceso ha sido descrito en el concepto de “acumulación primitiva permanente” de Roger Bartra (1974a, 1975a).

Si bien Roger Bartra reconoce que hay un proceso de “recampesinización” (1975b, 1975c, 1975d), por así decirlo, propone que ésta es tan sólo una tendencia subordinada y que los campesinos como tales no tienen una función revolucionaria histórica en el capitalismo mexicano de nuestros días. Antes bien, la permanencia y el comportamiento político del campesinado consolidan al poder despótico-burgués en tanto que las “estructuras de mediación” en que están inmersos sostienen al Estado mexicano moderno (Bartra, R., 1978). Tales estructuras de mediación se refieren a las organizaciones corporativistas de los campesinos, que los han mantenido en una posición de cooptación respecto del Estado mexicano (Mackinlay y Otero, 2004). La única manera como los campesinos en proceso de disolución pueden volverse revolucionarios, dirían los descampesinistas, es asumiendo su lado de proletarios agrícolas, y por tanto enarbolando las luchas socialistas en el campo. Es decir que, a partir de su doble personalidad de clase (por un lado, productores mercantiles pequeño burgueses y, por el otro, vendedores de fuerza de trabajo), si han de ser revolucionarios *tienen que* elegir el lado proletario y luchar en consecuencia. La conclusión política, entonces, es que las luchas y conflictos sociales se reducen cada

vez más a dos contendientes principales: la burguesía contra el proletariado.³

Una tercera variante del proletarismo es la que representa la obra temprana de Luisa Paré. Esta autora ha hecho su mejor esfuerzo para distinguir entre diversos modelos de explotación en la agricultura mexicana en cuanto a producción, y notoriamente con respecto a lo que ella llama el proletariado agrícola (Paré, 1977). Primeramente, establece las clases y fracciones que constituyen la estructura agraria:

1. la burguesía agrícola;
2. la pequeña burguesía agrícola, integrada por los "campesinos ricos",
3. los campesinos medios y pobres;
4. el semiproletariado, desgarrado entre la producción campesina y el trabajo asalariado, que subsidia a la primera con el segundo; y
5. el proletariado agrícola que ella divide en el proletariado en un "sentido restringido", es decir todos los trabajadores asalariados de la agricultura que no poseen tierras, y el proletariado en "sentido amplio", que se refiere a los ejidatarios que venden la mayor parte de su cosecha a las empresas capitalistas, mediante un contrato previamente establecido.

Este proletariado amplio está conformado por campesinos aparentes que producen cosechas comerciales como algodón, tabaco, cebada, caña de azúcar, café, trigo, etcétera. y cuyo proceso de trabajo está controlado en buena medida por el capital (estatal o privado). Éste es el caso que Marx llamaba "subordinación formal del trabajo al capital" (1975), cuando se refería al tipo de explotación que sufren los artesanos que conforman el "trabajo industrial doméstico" en la transición al capitalismo de Europa occidental. Sin embargo, en la agricultura mexicana este modo de explotación consiste en ejidatarios cuyo proceso laboral está controlado por el Estado o por empresas agroindustriales. Cuando estos ejidatarios dependen de la contratación temporal de trabajadores asalariados, más que del trabajo familiar, se vuelven parte de la pequeña burguesía, oprimida entre el capital y el trabajo asalariado. Sólo los productores que se hallan en la primera situación —cuando la producción se basa primordialmente en el trabajo fami-

³ Debo aclarar de entrada que estoy de acuerdo con muchas de las caracterizaciones de R. Bartra sobre la estructura agraria mexicana, pero no con sus conclusiones políticas. En sus trabajos de los años setenta (*v.gr.* 1974a, 1978), su reduccionismo clasista de origen leninista era evidente. Durante los años ochenta su trabajo fue altamente influenciado por intelectuales eurocomunistas, trascendiendo así el leninismo en su análisis político (1981, 1986) y su interpretación de la propia estructura agraria (Bartra, R. y Otero, 1988).

liar— son a los que Paré incluiría en el proletariado amplio. Yo llamo “campesinos empresariales” a quienes dependen de la contratación de mano de obra para llevar a cabo su producción. Es decir, no llegan a constituir una burguesía agrícola debido a que tienen dotaciones de tierra y capacidades financieras más limitadas (véase el capítulo 6).

La diferencia con la descripción que hace Marx de la subordinación formal del trabajo al capital es que, como lo señala Paré, en México este modo de explotación no parece ser meramente de transición hacia otros modos más típicamente capitalistas. Más bien, parece ser que la existencia de un campesinado que en realidad es un proletariado en sentido amplio es precisamente la forma en que se ha dado el desarrollo capitalista en gran parte de la agricultura mexicana. Existen muchos impedimentos legales y culturales para que este modo de explotación pueda trascenderse. También existen muchas ventajas económicas y políticas para el capital dentro de este modo: el capital no corre los riesgos que supone la fase agrícola de la producción, en tanto que aprovecha todos los beneficios, al mismo tiempo que los productores sienten que tienen su propia tierra y, en la mayor parte de los casos, se sienten a gusto con ello.

Las distinciones que hace Paré son adecuadas en cuanto a clasificar las diferentes situaciones de clase económica de los productores directos en las relaciones de producción. El problema reside, sin embargo, en que la autora cae después en la trampa del reduccionismo clasista: supone que cada modo de explotación tiene su correspondiente conjunto de intereses materiales y que, al menos como tendencia, tales intereses determinarían el programa de las luchas políticas. La primera parte de su interpretación no es reduccionista: ella establece correctamente el vínculo entre los intereses materiales y el modo de explotación. Sólo la segunda parte es reduccionista, donde Paré supone que tales intereses determinarían el programa de luchas políticas.

Catherine LeGrand (1986) también ha cuestionado las perspectivas unilineales dentro del marxismo, que plantean la inevitable transformación de los campesinos en trabajadores asalariados. Primero, en el nivel estructural, ella plantea que la formación de las clases es altamente fluida y depende en parte de los ciclos económicos, de tal manera que también se pueden dar procesos de recampesinización. Segundo, por lo que se refiere a las protestas y revueltas rurales, LeGrand argumenta que las perspectivas que se han enfocado demasiado en la organización productiva para derivar el comportamiento político han establecido una distinción demasiado aguda entre obreros agrícolas y campesinos (*v.gr.* Stinchcombe, 1961; Paige, 1975). Si bien ella considera que este último enfoque representa un avance respecto a los unilineales, plantea la

necesidad de admitir que los trabajadores pueden luchar determinadamente no sólo por salarios sino también por reconquistar su condición campesina. Tercero, sostiene que las formas legales tienen importancia ideológica, por lo cual hay que considerarlas seriamente.

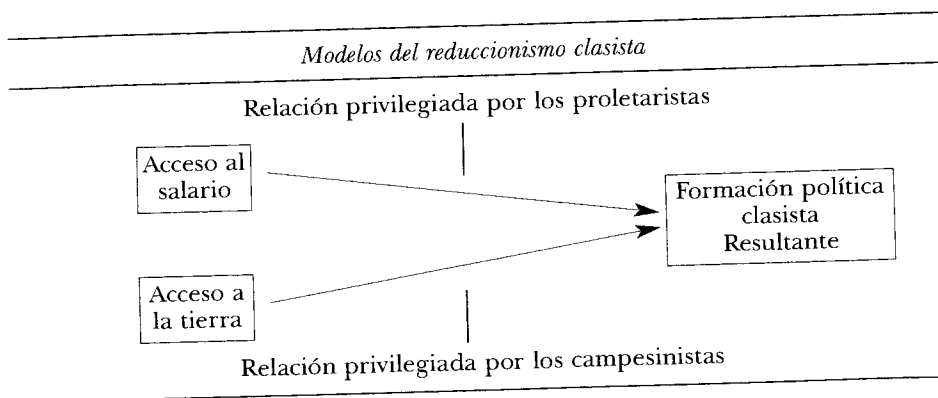
El reduccionismo clasista y las hipótesis de la homogeneidad

El reduccionismo clasista ha sido un problema constante en el debate sobre México, al grado de que se han derivado repercusiones políticas de las posiciones de clase económica, independientemente de qué criterio —la presencia de salarios o el acceso a la tierra— se considerara como el más determinante para definir la estructura agraria. Otro problema de carácter más sustancial es que los autores que adoptan cualquiera de las dos posturas han tendido a generalizar sus hipótesis a toda la estructura agraria mexicana. Así pues, en la mayor parte de los casos no se ha considerado adecuadamente mucha de su evidente heterogeneidad.

El reduccionismo clasista es insostenible tanto teórica como empíricamente. Lo que enfrentamos en México, más bien, es una mezcla heterogénea de determinantes en diferentes regiones, la cual explica las diferencias en el tipo de luchas y movimientos que emprenden los productores directos.

Procedo ahora a presentar algunos esquemas típico-ideales de los modelos causales así como las hipótesis de las posturas campesinista y proletaria. Hay que insistir en que lo que a continuación se muestra son tipos ideales de las dos posturas del debate sobre México, en los cuales se exageran los nexos causales contenidos en sus argumentos. Es decir, ninguna de las teorías de los autores que se presentan se ajustará completamente a esa formulación típico-ideal.

GRÁFICA 1



En este modelo causal típico-ideal, los proletaristas privilegian la relación entre la mercantilización de la fuerza de trabajo o el acceso a salarios y la formación política clasista, en tanto que los campesinistas dan primacía a aquella entre el acceso a la tierra y la formación política. En el siguiente esquema se representan las hipótesis que cada enfoque formula sobre el carácter de la formación política clasista, dada la relación que cada uno privilegia. Tal carácter se especifica dentro de los cuadros de cada gráfica. Se rotulan *grosso modo* ya sea como campesino o proletario, en función del objeto de la lucha que hipotéticamente se desarrolla, dada la combinación específica de variables y relaciones.

GRÁFICA 2

<i>Objetos de lucha en la predicción de los modelos del reduccionismo clasista</i>			
PROLETARISTAS			
Acceso al salario			
		+	-
Acceso a la tierra	+	Proletario (salarial)	Proletario (salarial)
	-	Proletario (salarial)	Campesino (tierra)
CAMPESINISTAS			
Acceso al salario			
		+	-
Acceso a la tierra	+	Proletario (salarial)	Campesino (tierra)
	-	Campesino (tierra)	Campesino (tierra)

La diferencia entre ambas predicciones reside en aquellos casos en que los trabajadores asalariados no han sido totalmente separados de sus medios de producción, por un lado y, por el otro, donde los trabajadores sin tierra no venden su fuerza de trabajo, es decir, están desempleados. En el primero, los campesinistas automáticamente consideran campesinos a estos productores, por lo que se espera que emprendan luchas de naturaleza campesina, es decir por la tierra. Los proletaristas, sin embargo, dirían que si el ingreso salarial es más del 50 por ciento del ingreso doméstico total (De la Peña, 1982), entonces se trata de una familia proletaria, por lo que se espera que emprenda luchas de esta naturaleza, es decir por salarios más altos, seguridad laboral, sindicalización, etcétera (en última instancia por el

socialismo). Esta diferencia en interpretaciones es de la mayor importancia, pues atañe a la categoría de productores que podríamos llamar “semiproletarios” por cuanto se debaten entre la producción campesina y el trabajo asalariado. Representan hoy en día la proporción más alta de los productores agrícolas directos en México, como se muestra en el capítulo 4.

La segunda discrepancia se da respecto de los agentes sociales sin tierra y desempleados. Han sido totalmente separados de sus medios de producción y no han podido vender su fuerza de trabajo. Para los proletaristas, esta categoría representa la fracción desempleada del proletariado agrícola, un ejército de reserva de la fuerza laboral que comparte los intereses del proletariado. Para los campesinistas, no obstante, en la medida en que estos productores mantienen vínculos con la comunidad campesina o con su grupo de parentesco dentro de la misma, se dice que mantienen acceso a la tierra y, por ende, se supone que luchan por demandas de tipo campesino. Si realmente existe acceso directo a la tierra, ello equivale a devolver esta categoría a la primera casilla donde existe acuerdo entre los dos lados del debate: la de los campesinos sin acceso al salario. La única razón por la que estos agentes aparecieran en la casilla de los “sin tierra” sería que su acceso a la tierra no es formal jurídicamente.

Como gran parte de los semiproletarios hallan acceso a la tierra por medios informales, apelando a los sistemas de relaciones de parentesco o comunitarias, estoy de acuerdo con los campesinistas en este punto. Pero no basta con determinar que existen múltiples formas de acceso a la tierra para poder luego predecir luchas de carácter campesino. Debemos también estar en la posición de determinar el peso específico de tales relaciones sociales, las cuales revisten una gran importancia para la reproducción material de los productores agrícolas directos. Dichas relaciones son fundamentales para mantener una cultura de tipo campesino.

Para abundar en este asunto deben tenerse en cuenta las diferencias regionales, pues existe gran diversidad en México. Por consiguiente, la reproducción se lleva a cabo de diversas maneras, dependiendo del grado de comercialización de las relaciones sociales y la penetración capitalista. Los campesinistas al parecer se han sentido obligados por los proletaristas a discutir en el terreno de éstos: en términos de “clase”, pero limitando este concepto a las relaciones económicas estrechamente definidas.

De esta manera, la diferencia entre campesinistas y proletaristas radica en la manera como cada perspectiva concibe las posiciones económicas de clase. En tanto los primeros enfatizan una cualidad mágica en tener acceso a la tierra, en función de que perpetuaría la lucha por la tierra, los últimos se fijan en los salarios como una cualidad igualmente mágica. Una vez que

se hallan presentes los salarios (en por lo menos el 50 por ciento del ingreso doméstico total) los intereses y las luchas deberían volverse proletarios. Si esto no ocurre, prosigue el razonamiento de los proletaristas, es porque la “conciencia social” está “atrasada”: existe un problema de “falsa conciencia” y por lo tanto las organizaciones revolucionarias son responsables de revelar la “verdad” a los proletarios desencaminados, para que finalmente luchen por sus intereses “auténticos” y revolucionarios. Este razonamiento nos lleva claramente a la perspectiva vanguardista de la revolución conforme a la cual el partido debe rescatar a las masas y conducir las a la tierra prometida.

Los “polibios” de Michael Kearney

Antes de pasar a la teoría alternativa sobre la cuestión agraria que aquí se propone, vale la pena examinar la crítica que del debate mexicano ha ofrecido Michael Kearney en su libro *Reconceptualizing the Peasantry* (1996). Se trata de un libro sumamente ambicioso, pues su cometido es nada menos que hacer la crítica de la antropología del campesinado. Puesto que la relevancia del debate mexicano en esta literatura es considerable, Kearney le presta mucha atención y de hecho constituye el centro de su discusión.

La reseña que Kearney ofrece de la antropología del campesinado señala que su problema central es el reduccionismo económico en su análisis de clases, y argumenta que la posición de clase rara vez ha sido la base para la construcción de identidades. Parte del problema resulta de la propia realidad, o de los actores sociales del campo que Kearney designa como “polibios” (en inglés *polybians*). Kearney inventa este término mediante la extrapolación del término “anfibio”, el cual representa un ser que puede vivir tanto en el agua como en la tierra. Por analogía, un polibio sería un ser que vive en una pluralidad de situaciones, ya sean actividades de trabajo asalariado, producción artesanal, agricultura, comercio, etcétera. Kearney luego se pregunta, ¿cómo pueden los polibios constituirse y movilizarse políticamente, con toda esa diversidad de actividades e intereses económicos? Desde su punto de vista, la identidad con mayor promesa de unificación es la etnicidad, la cual enfoca temas sobre derechos humanos, con lo cual se pueden crear ciudadanos globales, y la ecopolítica, que también es transnacional.

La principal limitación del argumento de Kearney es que el enfoque de su reflexión son las áreas rurales con pueblos indígenas. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cómo podrían otras poblaciones campesinas, que pueden ser igualmente polibias, constituirse en términos políticos e identitarios si no

tienen una identidad étnica indígena a la cual recurrir? Como veremos a partir del estudio realizado por de Janvry *et al.* (véase el capítulo 4 de este volumen), menos del 15 por ciento de la población de México es indígena.

De manera similar, uno se puede preguntar: ¿cómo se constituyen políticamente los campesinos de otras regiones indígenas como Chiapas, los cuales no tienen tan altas tasas de migración internacional como los de Oaxaca (estado en el que se enfoca el estudio de Kearney)? Es inevitable quedar con la impresión de que Kearney, como tantos otros antropólogos antes que él, tiende a generalizar ciertas observaciones a partir de “sus” comunidades donde hace trabajo de campo para México rural como un todo (en su caso particular, a partir de las zonas indígenas con alta migración, como las de Oaxaca). Cynthia Hewitt de Alcántara ya había advertido a los antropólogos contra este tipo de sesgo cuando dijo:

Tanto los académicos extranjeros como los colegas mexicanos han ido a las áreas rurales en busca de situaciones que cuadren con sus imágenes preconcebidas de sitios adecuados para el trabajo de campo, y han hecho su mejor esfuerzo para ver la realidad local en términos validados por un conjunto de supuestos adoptados previamente (1984: 178).

Kearney no se quiere aferrar a supuestos preconcebidos; más bien, trata de destronarlos. Pero al hacerlo, crea nuevos supuestos que la realidad más amplia del México rural puede no avalar. Si suponemos que la población rural de México representa aproximadamente al 30 por ciento de la población, y que los indígenas son el 12.5-15 por ciento, entonces el análisis de Kearney estaría dejando fuera por lo menos a la mitad de la población rural. El problema quedaría todavía planteado de la siguiente forma: ¿Cómo se constituyen políticamente los campesinos mestizos, que no pueden asentar su identidad en una de las etnias autóctonas?

Problemas de investigación e hipótesis alternativas

Lo que me inspiró en un principio a formular un marco teórico alternativo para el estudio de la formación política de las clases fue mi insatisfacción general con las versiones economicistas y el reduccionismo clasista en el marxismo. Tal insatisfacción fue más generalizada en otros ámbitos académicos durante los debates de los años setenta y ochenta, resultando en varias reacciones teóricas, algunas de las cuales rechazaron el marxismo o hicieron contribuciones paralelas. Entre las primeras, surgió la perspectiva de los llamados nuevos movimientos sociales (NMS), misma que emergió prin-

principalmente en Europa. Esta perspectiva representaba una fuerte crítica a la política de izquierda basada en las clases y los partidos políticos, y se pronunciaba en favor de una “política identitaria” enraizada en la sociedad civil, en vez de enfocarse en el aparato estatal o la sociedad política. Algunas expresiones latinoamericanas de esta perspectiva se enfocan en la autonomía, los significados y la identidad (Escobar y Álvarez, 1992; Álvarez Dagnino y Escobar, 1998).

En los Estados Unidos, el debate se dio más entre sociólogos inspirados por las teorías estructural-funcionalistas que consideraban a los movimientos sociales como actores sociales irracionales y los que adoptaban un enfoque basado en el conflicto social, con influencias principalmente weberianas y marxistas, para quienes la movilización era racional. Entre los últimos, la teoría de la movilización de recursos (TMR) puso su principal énfasis en el análisis de las organizaciones de los movimientos sociales como actores institucionales. A diferencia de la perspectiva de los NMS que se enfocaba en la sociedad civil, la TMR siguió enfocándose en el examen de la acción de los grupos sociales en el sistema político para lograr sus fines. Dado su énfasis en la organización, se podría decir que la TMR tiene ciertas influencias del análisis leninista (Tarrow, 1998: 15).

Otro desarrollo teórico que surgió en los Estados Unidos, y que fue un buen complemento de la TMR, fue el enfoque de la estructura de las oportunidades políticas (EOP). El énfasis principal de esta perspectiva reside en preguntarse si las instituciones políticas reprimen o facilitan que los movimientos sociales cuestionen ciertos problemas estructurales con éxito (Jenkins, 1995). Pare este enfoque, entonces, la pregunta de investigación es si las instituciones políticas son firmes, inamovibles y coherentes, o bien si pueden abrirse (intencionalmente o no) para ofrecer oportunidades a los movimientos sociales (Buechler, 2000; Kriesi *et al.*, 1995; Tarrow, 1998; Touraine, 1988. Para un contraste con la discusión en América Latina, véase Hellman, 1995).

Como se puede apreciar por la crítica precedente de las posiciones teóricas en el debate mexicano, la perspectiva de los NMS ha sido una importante fuente para mi análisis. Y sin embargo, quedé insatisfecho con su exagerado énfasis en la política identitaria y el hecho de que prácticamente descartó el análisis de cualquier conexión con lo que aquí llamo “procesos estructurales de clase”, los cuales incluyen no sólo las relaciones de producción, sino también las relaciones sociales de reproducción. Así pues, las teorías de los NMS, en particular las de Laclau y Mouffe (1985), me dotaron de instrumentos teóricos para rechazar el economicismo y el reduccionismo clasista. Además, fue crucial la crítica de la perspectiva de los nuevos movi-

mientos sociales para enfocarme en la sociedad civil como el lugar de la formación política de las clases. También me guió esta perspectiva hacia el estudio de las culturas regionales como fuente para la formación de identidades y, sobre todo, para la articulación de las demandas de los movimientos.

Una vez que había llegado a mi formulación teórica alternativa, me di cuenta de que ésta tenía paralelos tanto con la teoría de la movilización de recursos como con la de la estructura de las oportunidades políticas. Como se verá en esta sección, mi perspectiva enfatiza la formación de organizaciones de clase como elemento crítico en la formación política, tal como la teoría de la movilización de recursos enfatiza la organización de los movimientos como variable central. Asimismo, de manera similar a la perspectiva de la estructura de las oportunidades políticas (EOP), considero el carácter de la intervención estatal como una parte crítica del proceso. Mientras que la perspectiva de la EOP enfatiza las estructuras de oportunidades políticas para la acción de grupos o movimientos, sin embargo, mi análisis se enfoca en averiguar si las políticas estatales son favorables o adversas para los productores, por un lado, y si tales políticas son el resultado de la iniciativa del propio Estado o de la presión, iniciativa y movilización de los productores directos. El contraste principal entre la teoría de la EOP y la que aquí propongo, entonces, consiste en que esa teoría enfatiza sobre todo una perspectiva desde arriba: ¿en qué medida existen oportunidades políticas desde las estructuras estatales existentes? Mi teoría, en cambio, también se pregunta si los propios movimientos se las agencian para abrir tales oportunidades desde abajo y en forzar ciertas políticas estatales en su favor.

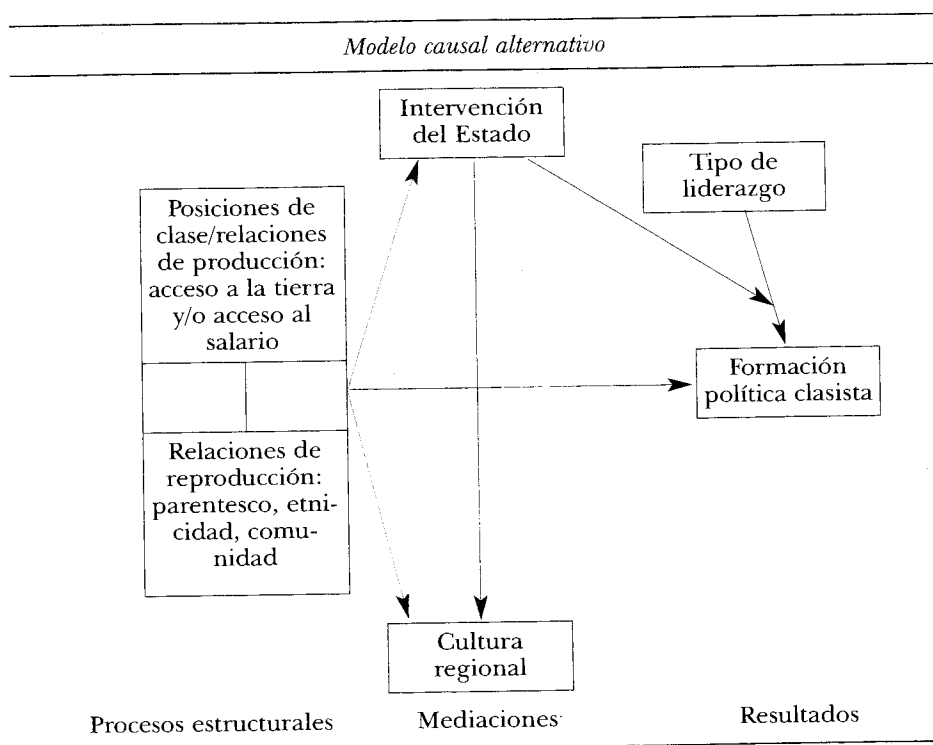
No basta entonces con resolver los problemas de definición de la estructura agraria al nivel de las relaciones de producción para determinar la dirección o el carácter de la formación política de las clases. Ni basta tampoco con encontrar alguna identidad atractiva como la etnicidad para determinar en qué se basarán las movilizaciones. Es necesario estudiar también, cuidadosamente, el efecto de al menos otros tres determinantes mediadores para explicar adecuadamente este proceso: las culturas regionales, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo.

Así pues, la pregunta central de investigación que propongo para tratar este asunto es la siguiente: Dada la relación entre la situación económica de los productores agrícolas directos (campesinos, proletarios y semiproletarios) y su formación política clasista, ¿cuáles son las determinaciones mediadoras en este proceso? Una vez identificadas, ¿de qué manera estas determinaciones dan forma a los efectos políticos? Estas preguntas implican que con el reduccionismo clasista y un enfoque economicista con los que se deriva el comportamiento político a partir de las posiciones de los agentes

sociales en la producción no puede explicarse adecuadamente el proceso de su formación política clasista (Laclau, 1977; Laclau y Mouffe, 1985). Mi propuesta alternativa es que también es necesario examinar las culturas regionales, la intervención estatal, y los tipos de liderazgo.

La formación política de las clases, entonces, se refiere al proceso por el cual los grupos, clases, y comunidades definen sus demandas (o sus objetos de lucha), construyen organizaciones para defender y promover sus intereses, y establecen alianzas con otras organizaciones. Estos tres aspectos de la formación política clasista habrán de estudiarse con mayor detenimiento más adelante en este capítulo. En la siguiente gráfica se representan las relaciones causales entre los diversos conceptos de mi formulación alternativa del problema.

GRÁFICA 3



En tanto que el problema principal del debate sobre México se centra en el aspecto *estructural* de la relación entre la posición de clase y la formación política, yo le doy más importancia al *proceso* mismo. Además, no supongo que ese proceso lleve inevitablemente a la proletarización del cam-

pesinado como lo hacen las teorías de la modernización y la leninista. Aunque el proceso sea en efecto de descampesinización, la lucha de los productores directos puede resistir con éxito a la proletarización con uno de dos resultados:

1. que se afiancen a su posición de autoempleo campesino o que traten de recuperarla, o bien
2. que puedan pasar a una nueva forma de lucha agraria centrada en la autogestión y el control democrático de unidades cooperativas o colectivas de producción.

Ninguna de estas alternativas, sin embargo, es intrínsecamente conservadora o revolucionaria, de oposición o de cooptación. Hasta aquí sólo hemos discutido el aspecto de las demandas concretas del movimiento, si se centran en la obtención de tierra para la producción parcelaria o cooperativa.

Antonio Gramsci también enfatizó la necesidad de hacer un estudio comprensivo del “análisis de situaciones” y de las “relaciones de fuerza” para el avance de las clases subalternas. Desde su punto de vista, se requiere distinguir entre tres momentos o niveles en el análisis: Primero hay que hacer: “Una relación de las fuerzas sociales, las cuales están íntimamente ligadas a la *estructura*, objetiva, independiente de la voluntad humana, y la cual se puede medir con los sistemas de las ciencias físicas o exactas” (Gramsci, 1971: 180, cursivas del autor, G.O.). Cabe notar que, sobre este punto, Gramsci meramente parafrasea las ideas de Karl Marx en *El capital*. En segundo lugar: “Un momento subsiguiente es el de la relación de las fuerzas políticas; en otras palabras, una evaluación del grado de homogeneidad, de autoconciencia, y de organización logradas por las varias clases sociales” (Gramsci, 1971: 181). Si bien estas ideas provienen del análisis político de Marx (1971) en *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*, Gramsci elaboró a partir de ellas su teoría cultural de la hegemonía. “El tercer momento es aquél de la relación de las fuerzas militares, las cuales de tiempo en tiempo llegan a ser directamente decisivas” (Gramsci, 1971: 183).

La peculiaridad de la teoría revolucionaria de Gramsci para el occidente es que él fue más allá de la creencia clásica de que la revolución tenía que pasar por un ataque frontal, militar, y final sobre el Estado. En vez de esto, la nueva estrategia revolucionaria para Gramsci debía basarse en una “guerra de posiciones” en las diversas “trincheras” de la política y la cultura para construir un proyecto hegemónico alternativo al de la burguesía. Pero un buen “análisis de situaciones” tiene que incluir los tres “momentos” delineados arriba.

Para determinar el carácter general de la lucha, entonces, mucho dependerá también de las organizaciones de clase y de las alianzas que se formen con otros grupos. Las organizaciones de clase se refieren al problema de la representación de los intereses de grupo, de clase o comunitarios, según sea el caso de cuál es su base social concreta. Pueden formarse ya sea por la propia iniciativa de sus agentes de clase para luchar por sus propios intereses materiales, o bien la clase dominante o alguna de sus fracciones, o el Estado las puede formar o apropiárselas. Tal apropiación de las organizaciones de los grupos y las clases subalternas es precisamente el contenido político de los procesos de hegemonía en la sociedad civil (Gramsci, 1971; Laclau y Mouffe, 1985), incluso si ésta se da por intermediación de los aparatos del Estado, como ha ocurrido en México con las organizaciones corporativistas afiliadas al PRI (Mackinlay y Otero, 2004).

Este aspecto de la formación política de las clases tiene que ver con el hecho de que las clases nunca se forman de una vez y para siempre. Tal formación es un proceso continuo que supone organización y desorganización, a veces apropiado por las mismas clases subordinadas y otras formado bajo la hegemonía de la clase dominante (Poulantzas, 1975). En ocasiones, el objeto de lucha de los movimientos está constituido precisamente por las organizaciones de clase; el Estado o la clase dominante trata de destruir o controlar las organizaciones de los grupos o clases subordinados, en tanto estos últimos tratan de construir o recuperar el control sobre sus organizaciones.

El proceso de formación política de las clases, además, está limitado en su aspecto organizativo por las “capacidades estructurales para la lucha” (Wright, 1978). Éstas consisten en el ámbito material en que las clases subalternas producen sus medios de subsistencia, incluyendo las relaciones sociales *en* la producción (Burawoy, 1979). Tal ámbito puede ser conducente a la unificación y la formación de organizaciones para la lucha o puede alentar la fragmentación de los productores directos inhibiendo su organización. Ha llegado a ser lugar común, por ejemplo, considerar que los trabajadores industriales tienen capacidades estructurales que facilitan su formación política clasista. Éste fue un supuesto de Karl Marx en *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*, donde contrastaba la cooperación entre los obreros en el proceso de producción capitalista, con la dispersión del campesinado parcelario en Francia, lo cual dificultaba su unificación como clase. El ambiente fabril permitiría a los obreros unirse y definir conjuntamente sus intereses de clase, lo que a su vez facilitaría la formación de organizaciones para la lucha en pos de tales intereses (Wright, 1978).

Por otro lado, también se acostumbra decir que los campesinos constituyen una clase con incapacidad estructural para la lucha, refiriéndose a su

aislamiento en el proceso laboral. Al respecto, la referencia más popular es Marx (1971), quien afirma que mientras que los campesinos comparten una posición semejante en el proceso laboral como poseedores individuales de la tierra –lo que los constituye en “clase en sí”– son incapaces de formar organizaciones políticas (“clase para sí”) que trasciendan el nivel local debido a su gran dispersión en ese proceso. De ahí que necesiten a un Bonaparte que los represente.

Los campesinos de diferentes partes del mundo o de diferentes regiones de un país, sin embargo, pueden tener capacidades estructurales distintas dependiendo de las diferentes historias y culturas de los pueblos o regiones en que se desarrolló cada grupo. En algunas de ellas, las relaciones sociales de reproducción pueden tejer apretadas redes comunitarias y, por ende, una cultura de solidaridad equivalente a una capacidad estructural. Se convierte este asunto, entonces, en una pregunta empírica: si los campesinos tienen en su ámbito una capacidad o incapacidad para la formación política clasista. Dichas capacidades, pues, no se tratan de algo intrínsecamente determinado por las posiciones estructurales de las clases; otras determinaciones sociales y culturales afectan las capacidades estructurales de clase. En México, las tradiciones étnicas y comunitarias de los tiempos prehispánicos, así como los ejidos contemporáneos en ciertos casos, pueden constituir, más que incapacidades, capacidades estructurales de clase. En la medida en que tales instituciones y tradiciones culturales puedan unir a los campesinos, facilitarán la formación de sus organizaciones clasistas para la lucha.

Con esta definición del problema de investigación, enseguida presento una discusión teórica más a fondo de los conceptos que entraña mi enfoque. Primeramente se definirá cada aspecto de la relación representada en la gráfica 3, entre los “procesos estructurales de clases” y la “formación política de las clases”. A continuación se harán consideraciones sobre los conceptos de las variables que participan en esa relación: cultura regional, intervención del Estado y tipos de liderazgo.

Los procesos estructurales de clase

Con el desarrollo del capitalismo surge una creciente mercantilización de la fuerza de trabajo y una separación de los productores directos de sus medios de producción. Como este proceso se estudiará ampliamente en el capítulo 3, por el momento daré por sentado qué supone la mercantilización al nivel estructural en este análisis. No obstante, conviene hacer algunas aclaraciones:

Primera, no quiero decir que cada estrato de los “productores agrícolas directos” constituya necesariamente una *clase*. Mi interés principal reside no tanto en las fronteras estructurales de las clases como en su formación política y en cómo este proceso confronta determinaciones que trascienden el problema de la posición de clase definida en el ámbito de las relaciones de producción.

Segunda, utilizo el término “productores agrícolas directos” para referirme simultáneamente a campesinos, trabajadores agrícolas y semiproletarios. Es un concepto amplio que abarca todos los agentes de la producción, independientemente de su posición específica en las relaciones de producción. Cuando hay que especificar precisamente los procesos estructurales de clase, sostengo que las relaciones sociales de *reproducción* también deben ser estudiadas de manera sistemática. Sólo así podremos explicar los intereses económicos y los procesos culturales al margen de las posiciones de clase estrechamente definidas por su posición en las relaciones de producción.

Tercera, la diferencia entre la posición de clase y la reproducción se puede ver de la siguiente manera: la posición de clase se refiere sobre todo a las *relaciones entre explotadores y explotados*, como entre los poseedores del capital y los asalariados, cuando existe una relación de explotación. De otra forma, como en la producción campesina, por ejemplo, la posición de clase se refiere a las formas específicas en que los productores directos se allegan sus medios de subsistencia. Por otra parte, las relaciones sociales de reproducción se refieren mayormente a las *relaciones entre los explotados*. En el caso de los campesinos, las relaciones de producción y reproducción coinciden en buena medida, y su explotación en el contexto capitalista está generalmente mediada por el mercado. Para los campesinos, sin embargo, la producción se da sobre todo en el ámbito familiar en tanto que las relaciones sociales de reproducción son más abarcadoras e incluyen las relaciones de parentesco y comunitarias. En el caso de los trabajadores asalariados, las relaciones de reproducción se refieren a aquellas a las que se dedican fuera del trabajo, al reproducir su propia capacidad laboral y la de sus familiares: sus relaciones en el hogar, la vecindad o la comunidad, etcétera. Para los semiproletarios o trabajadores del campo, las relaciones de reproducción son esenciales: entrañan todo un sistema de relaciones, sobre todo fuera del mercado, con base en las cuales se allegan importantes complementos a su subsistencia y supervivencia. En tanto que los campesinos solventan su reproducción mediante el acceso a la tierra y los trabajadores a través del acceso al salario, en relación directa con la producción, los semiproletarios deben atenerse fundamentalmente a las relaciones sociales de reproducción.

Sobre la base de obras anteriores acerca de la producción mercantil simple (PMS), que usan la economía política para especificar sus características, Gavin Smith (1989) intenta una teorización similarmente general sobre las relaciones no-mercantilizadas de la PMS para movilizar la fuerza de trabajo. Él propone que las relaciones no-mercantilizadas son por lo menos tan importantes como las mercantilizadas para la especificación del carácter de la PMS. Por lo tanto y de manera similar, yo sostengo que un análisis de los “procesos estructurales de clase” debe dar cuenta de las relaciones sociales de reproducción de forma sistemática.

La especificidad estructural de los semiproletarios es que se debaten entre el acceso a la tierra y el acceso a los salarios, pero ninguna de estas fuentes de ingreso basta para la reproducción completa de su fuerza de trabajo. El peso relativo de cada forma y base de reproducción tiene indudable repercusión en el tipo de cultura y de luchas políticas que emprenden los semiproletarios, porque cada una supone procesos laborales y de producción diferentes que entrañan relaciones sociales diversas. El peso relativo de cada forma de producción y reproducción se relaciona claramente con el tiempo invertido en cada esfera, y con la seguridad relativa que proporciona cada tipo de sistema de producción: trabajo asalariado y producción campesina. Por lo tanto, asignar simplemente a familias con más del 50 por ciento de sus ingresos a categorías de clase “proletaria”, por ejemplo, se vuelve engañosamente arbitrario. Este método sólo aplica el aspecto cuantitativo a un problema cualitativo extremadamente complejo, y enturbia procesos culturales importantes que intervienen en los efectos políticos.

La formación política de las clases (FPC)

Del anterior razonamiento podemos concluir que el proceso de formación política de los productores directos no puede deducirse tan sólo de la posición de clase. La formación política clasista es un proceso sobredeterminado y multidireccional cuyo carácter está definido por al menos tres aspectos:

1. los diversos contenidos de las *demandas y objetos de las luchas*;
2. el carácter de las *organizaciones de clase* creadas para defender y promover los intereses de clase; y
3. el hecho de que las organizaciones sean o no sean *independientes* del Estado y la clase dominante, y *autónomas* o no de otras organizaciones o partidos políticos, lo cual condiciona las alianzas.

Atendamos en primer término las “demandas y objetos de las luchas”. A pesar de la heterogeneidad de las posiciones económicas de clase que existen en el campo mexicano, la mayor parte de los conflictos rurales se han centrado en la tierra. Sin embargo, esta demanda puede adquirir contenidos sociales o de clase muy diferentes, dependiendo de cómo se articule con otras demandas, por ejemplo, la demanda de otros medios de producción o la apropiación del proceso productivo. Las demandas de tipo campesino, limitadas a la tierra para la producción familiar autónoma, deberán distinguirse de las luchas de carácter “poscapitalista”. Estas últimas presuponen también luchas por la tierra, pero se ven acompañadas de la demanda por el control sobre el resto de los medios de producción y el control democrático del proceso productivo en general por parte de los productores directos (Otero, 1990).

En lo que respecta al carácter de la organización de clase, este libro se enfoca en tres tipos de resultado político: hegemónico-burgués, de oposición, y popular-democrático. Las organizaciones de clase de tipo hegemónico-burgués son aquellas promovidas por una fuerza política al margen de la clase cuyos intereses representa formalmente. En México, esta fuerza política se ejemplifica mejor en las organizaciones de masas formadas desde arriba por el Partido Revolucionario Institucional o PRI, que ha sido durante el siglo xx, por así decirlo, el arma política del propio aparato del Estado (Mackinlay y Otero, 2004).

Las organizaciones de clase opositoras son las que representan el interés de sus agremiados, independientemente de quiénes sean éstos (campesinos, proletarios u otros), y son formadas con independencia del aparato estatal y la clase dominante según se manifiesta en las demandas concretas de su lucha o movimiento social, y con autonomía de otras organizaciones o partidos políticos. Las organizaciones opositoras generalmente son una forma reactiva de resultado político, en respuesta a las intervenciones estatales adversas. Aunque su carácter opositor supone una pérdida de hegemonía y control para el Estado y la clase dominante, dichas organizaciones son incapaces de imponerle al Estado sus propias demandas.

Finalmente, las organizaciones de clase de tipo popular-democrático son una variante exitosa de las opositoras cuando éstas pueden influir en ciertas políticas estatales a su favor, manteniendo (o recuperando) su independencia respecto del Estado y la clase dominante y su autonomía respecto a otras organizaciones o partidos. La proliferación de organizaciones popular-democráticas dentro del Estado capitalista indicaría que un proyecto hegemónico alternativo al burgués está en vías de emerger y consolidarse.

Una vez formadas las organizaciones de clase, el problema pasa a ser si pueden retener su independencia y autonomía respecto del Estado y la clase dominante. En este punto, se vuelve importante el factor del liderazgo, como se mencionó en el capítulo 1. Éste es el caso, sobre todo, en un país como México, donde han abundado los caudillos (héroes militares carismáticos) y existe una cultura política muy orientada al culto a la personalidad con poca, aunque creciente, participación directa de las masas en la política. Los líderes democráticos, con estrechos vínculos y responsables con sus bases, son los que tienen las mejores posibilidades de influir en la retención de la independencia y autonomía política de la organización clasista.

Así pues, en cuanto a resultados políticos, los objetos de la lucha son más importantes que la ubicación de clase para determinar el carácter de las luchas y las organizaciones resultantes, ya sea que los productores directos planteen reivindicaciones campesinas, proletarias, campesino-empresariales, poscapitalistas o de tipo étnico-cultural. Aquí he de considerar también, sin embargo, el carácter de las organizaciones para la lucha y las alianzas que han establecido desde los años treinta. La explicación que propongo, más que un argumento economicista basado en posiciones de clase estrechamente definidas, pone de relieve las culturas regionales, las formas de intervención del Estado y los tipos de liderazgo de los movimientos agrarios. En tanto que las culturas regionales determinan las demandas de la lucha, la intervención estatal conforma en gran medida el carácter de las organizaciones de clase, mientras que los tipos de liderazgo influyen en el grado en que las organizaciones resultantes mantienen su independencia y autonomía respecto del Estado y la clase dominante.

Cultura, intervención estatal y liderazgo

Veamos ahora las determinaciones que intervienen en el proceso de la formación política de las clases. El Estado y la cultura tienen repercusiones simultáneas de varios tipos pero, a fin de hacer más sencilla la exposición, me ocuparé de cada una a la vez. Los tipos de liderazgo, podría plantearse, dependen en gran medida de las propias culturas regionales. Pero como hay una diversidad de tipos de liderazgo dentro de una economía política regional dada, debería estudiarse el efecto de cada uno en particular. Debo aclarar que es ésta la variable que ha sido menos estudiada entre todas, y que reparé en ella una vez concluida la investigación y no durante la fase de planeación. El efecto de los tipos de liderazgo es, por lo tanto, el aspecto menos elaborado en términos teóricos, aunque se discute en cada estudio de caso en forma concreta.

Procesos estructurales de las clases y cultura

En antropología y sociología, el concepto de cultura es un asunto controvertido (Keesing, 1976; Silverman, 1979). Entre los muchos autores que lo han definido, están quienes, como Clifford Geertz (1973), ven la cultura como un reino de ideas y normas, valores y significados; y otros, como Julian Steward (1967), que definen el concepto más ampliamente como el estilo de vida total, incluidos los aspectos de organización social. Existen otras importantes diferencias entre estas definiciones –como, por cierto, otras definiciones–, pero para nuestros propósitos adoptaremos la definición más restringida de Geertz. Esta definición me permitirá separarla analíticamente de la organización social o lo que he llamado “procesos estructurales de clase”. Geertz define cultura y estructura social de la siguiente manera:

En el nivel [cultural] existe el marco de creencias, símbolos expresivos y valores en términos de los cuales los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y hacen sus juicios; en el nivel [social] está el proceso en marcha del comportamiento interactivo, a cuya forma persistente llamamos estructura social. La cultura es el marco de significados en función del cual los hombres interpretan su experiencia y orientan sus actos; la estructura social es la forma que adopta la acción, el verdadero sistema de relaciones sociales (Geertz, 1957, citado por Keesing, 1976: 143).

Ahora que se ha elegido una definición de “cultura” en el nivel más abstracto, elaboraré conceptos más concretos en relación con la manera como la cultura condiciona los objetos de la lucha en contextos históricos particulares. En la gráfica 3 (p. 41) planteé la relación causal entre los procesos estructurales de clase y la cultura, aunque sin intención de teorizar al respecto. (Ésta es la razón de que se dibuje una línea discontinua entre ambos conceptos: porque están relacionados pero de manera indeterminada.) Sobre esta relación sólo pueden hacerse suposiciones muy cuidadosas, manteniendo en la definición una independencia relativa de la cultura respecto de la estructura social o la esfera de la interacción social.

Margaret S. Archer (1996) ha identificado tres formas básicas de “fusión” o amalgamamiento (*conflation*) en el análisis cultural, que impiden separar analíticamente la acción independiente, ya sea de la cultura, de la interacción social o la estructura, o bien de ambas esferas. La primera de estas formas de amalgamamiento, que Archer llama “fusión hacia abajo”, se originó en la antropología pero luego se llevó hasta la sociología. Se le podría lla-

mar determinismo culturalista y consiste en pensar que la cultura impone las fronteras dentro de las cuales se da la acción humana. La segunda, "fusión hacia arriba", que se podría llamar también estructuralismo, se originó en versiones simplificadas del marxismo. Archer la llama fusión hacia arriba puesto que en ella se invierte el orden de la determinación. En este caso el sistema cultural sería una reflexión o epifenómeno de la interacción sociocultural. Los escritos del propio Marx, sin embargo, permiten un análisis más matizado que da la posibilidad de que el sistema cultural pueda incidir dialécticamente en la interacción sociocultural. Es decir, no todo lo determina la base o la estructura económica. El tercer enfoque amalgamador de ámbitos lo representa la teoría de la estructuración de Anthony Giddens (1976, 1984). Archer lo llama "fusión central" dada su tendencia a negar la acción independiente del sistema cultural y de la interacción sociocultural por medio de su amalgamamiento o fusión. Si se amalgaman la cultura y la interacción sociocultural, entonces renunciamos a la posibilidad de examinar los *efectos recíprocos* entre los dos ámbitos a través del tiempo. Por tanto, mientras que el fusionismo hacia arriba o hacia abajo equivalen a conceptualizar ya sea la cultura o la interacción como epifenómeno de la otra, el fusionismo central les niega su autonomía o independencia al afirmar su constitución mutua. Si se desea un enfoque teórico adecuado, que capte la influencia recíproca entre las dos entidades de la vida social, entonces tenemos que asignar cierta autonomía o independencia relativa a cada una.

Con estas aclaraciones acerca de las definiciones de cultura y procesos estructurales de las clases, voy a referirme ahora a ciertos supuestos que propongo respecto de la relación entre el desarrollo capitalista y las culturas campesinas. El primer supuesto es que, en general, la cultura campesina *decae* con el desarrollo de las relaciones sociales capitalistas. Esta decadencia, sin embargo, posee una temporalidad diferente de la del desarrollo capitalista. No es raro, pues, encontrar trabajadores asalariados de segunda o tercera generación que conserven una cultura campesina y enarboles luchas políticas para recuperar su condición campesina. Tal persistencia de la cultura campesina, sin embargo, no ocurre en el vacío. Generalmente requiere del contacto continuo de los agentes sociales con el medio campesino, si no en sus posiciones de clase inmediatas, al menos en sus relaciones sociales de *reproducción*. Entre estas últimas no sólo se consideran las relaciones domésticas y de parentesco, sino también las comunitarias y las étnicas.

El segundo supuesto contiene varias aclaraciones acerca del concepto de "cultura campesina". En primer lugar, reconozco la existencia de más de un tipo de cultura campesina, dependiendo de si tiene rasgos comunita-

rios, étnicos, de pequeños campesinos parcelarios (orientados hacia la subsistencia) o de campesinos-empresariales (orientados hacia el mercado). Los campesinos-empresariales los defino como productores autónomos, dentro de la producción mercantil simple, autoempleados que usan la mano de obra familiar y que contratan cantidades limitadas de fuerza de trabajo asalariada. El concepto tiene cierta equivalencia con el de *kulaks* usado por Lenin (1967), exceptuando las connotaciones satánicas que este último término llegó a adquirir en los años iniciales de la Revolución rusa. Los rasgos étnicos y comunitarios generalmente se traslapan en las regiones centro-sur y sureste de México, mientras que la cultura campesino-empresarial, bien que de manera débil, se desarrolló en el norte, sobre todo en la última parte del siglo XIX. De ahí que la cultura campesina no pueda concebirse como una realidad única u homogénea.

El tercer supuesto es que la especificidad de cada tipo de cultura campesina tiene sus raíces en las condiciones materiales de producción y reproducción en que se desarrolla, no obstante lo cual conserva respecto de ellas una autonomía relativa, como se indicó arriba. Ann Swidler (1986) ha proporcionado un argumento persuasivo en favor de la influencia de la cultura sobre la acción. Dice que la acción no está gobernada ni por los intereses ni por los valores. Las dos perspectivas que sostienen estas proposiciones ("fusionismo hacia abajo y hacia arriba" en términos de Margaret S. Archer) fallan por su excesivo énfasis en el acto unitario, dice Swidler. En vez de pensar que las acciones se deciden una por una, Swidler propone la siguiente perspectiva: "La acción está necesariamente integrada dentro de ensamblajes más amplios, llamados aquí «estrategias de acción». La cultura tiene un papel causal independiente puesto que conforma las capacidades desde las cuales se construyen tales estrategias" (1986: 276-277). Las estrategias de acción, dice Swidler, incorporan y dependen de los hábitos, los estados de ánimo, las sensibilidades, y las visiones del mundo. Yo agregaría que todo esto se sostiene principalmente por las relaciones sociales de reproducción específicas en las cuales están inmersos los agentes sociales.

Desde la perspectiva del reduccionismo clasista, parecería que una vez que la producción campesina ha entrado en un proceso de disolución inminente, los intereses de los productores directos se identificarán con aquéllos del proletariado. Incluso autores como Luisa Paré tienden a propugnar la idea de que los semiproletarios están más cerca de los intereses del proletariado agrícola y que, por lo tanto, sus luchas *deberían* centrarse en este tipo de demandas. Cuando no ocurre así, ellos explican esta falla en virtud de un supuesto problema de "falsa conciencia" de los productores directos (Lara, 1979; Terán, 1976).

Existen muchas luchas agrarias en México que se han documentado como luchas específicamente *campesinas* en el siglo xx, y en la mayoría de estos casos los agentes de la lucha han sido proletarios o semiproletarios por lo que hace a su posición de clase. Así pues, si se tiene una comunidad o un pueblo en que predomine una economía de tipo campesino, aun cuando la mayoría de los productores pierdan sus tierras y se vuelvan semiproletarios durante años enteros (a menudo por más de una generación), debido a sus relaciones sociales campesinas y a su cultura seguirán añorando su condición campesina perdida, tanto conductual como psicológicamente. De esta forma, pese a los cambios de posición de clase, pueden mantenerse durante mucho tiempo los valores más importantes de la cultura campesina. Y esto ocurre no sólo porque los "valores" (en general) sean duraderos, sino porque multitud de aspectos de la reproducción social siguen constituyendo una base material para que subsistan dichos valores y cultura campesinos.

Por lo tanto, dados los supuestos arriba planteados, las formas culturales variarán entre los productores directos del campo de acuerdo con el grado de desarrollo capitalista. Es decir que, mientras más desarrollado esté el capitalismo, se crearán más posiciones de clase con acceso al salario. Y este proceso generalmente entrañará la *decadencia* de la cultura campesina, aunque no de manera lineal. La interrogante entonces sería: en los contextos en los que decae la cultura campesina, ¿qué es lo que la reemplaza entre los productores agrícolas directos? Mi propuesta es que la cultura campesina en decadencia no se reemplaza necesariamente por lo que podríamos llamar una cultura "capitalista", esto es "burguesa" o "proletaria"; más bien, en la mayoría de los casos seguirá prevaleciendo una cultura "no capitalista" entre las clases subalternas del campo.

Alistair Davidson (1984) ha ofrecido un argumento convincente de que durante los años veinte, pero principalmente durante los treinta, Antonio Gramsci modificó su interpretación desarrollista del campesinado. Asimismo, vio que la cultura popular contenía elementos de la cultura hegemónica, pero también de una cultura no capitalista sobre la cual los marxistas podrían basarse para incorporar al campesinado en un nuevo proyecto hegemónico de las clases subalternas aliadas. Su nueva estrategia suponía lo siguiente:

1. el campesinado seguiría siendo una fuerza política significativa en el futuro previsible;
2. sus valores y creencias tendrían por tanto que incorporarse a cualquier teoría marxista de la transición al socialismo; y

3. el desarrollismo y la modernización se tendrían que reexaminar como parte de una estrategia marxista (Davidson, 1984, 139).

Si bien Gramsci ha sido considerado como el Lenin de las formaciones capitalistas avanzadas, estas observaciones generales son especialmente relevantes para sociedades del Tercer Mundo, a la vez que claramente representan una revisión de la teoría leninista.

Ahora bien, la cultura no capitalista puede ser al menos de dos tipos: “de orientación no-mercantil”, como las culturas campesino-parcelarias, étnicas o comunitarias; o “de orientación mercantil”, como la de los productores mercantil-simples, o lo que he llamado campesinos-empresariales. También puede decirse de los productores directos poscapitalistas, con sistemas autogestionarios y de producción cooperativa y democrática, que comparten una cultura no capitalista aunque orientada al mercado. Cuando digo que la cultura campesina decae, entonces, me refiero al tipo de cultura no capitalista de “orientación no-mercantil”; es decir, a la de los campesinos parcelarios orientados hacia la producción de subsistencia.

La emergencia de una cultura de orientación mercantil, aunque no capitalista, sigue presentando elementos de resistencia al capitalismo con los cuales los productores directos se oponen a la proletarización. Las dos alternativas principales a la proletarización –producción campesino-empresarial y poscapitalista– preservan el valor de retener la autonomía frente al Estado y la burguesía agrícola en la producción. La principal diferencia entre estas alternativas es que los campesinos-empresariales también valoran la producción organizada a partir de la familia individual, en tanto que los productores poscapitalistas valoran la producción cooperativa, autogestionaria o las formas colectivas y democráticas de organización. Mi argumento es que este último valor cultural puede surgir en un punto en que la cooperación dentro del proceso laboral capitalista ha llegado a formar parte de la experiencia cotidiana de los productores directos durante largos periodos y a través de varias generaciones. Se daría aquí una contradicción dentro del capitalismo. A la vez que este modo de producción aumenta su eficiencia mediante la organización cooperativa del proceso productivo, prepara también las condiciones culturales para su trascendencia en formas poscapitalistas de producción.

Me referiré brevemente a la teorización que James Scott propone respecto a la hegemonía y la cultura campesina (1977), en la que cae en el error opuesto del leninismo: mistifica el papel de la cultura en lo que concierne al campesinado. Si bien su análisis específico de los elementos culturales de los campesinados del Tercer Mundo suele ser muy penetrante

(Scott, 1976, 1990), este autor postula que la cultura campesina, entre las subculturas de las clases subordinadas es la *única* que puede llevar a los campesinos a las rebeliones o revoluciones más radicales. Scott contrasta las bases materiales de proletarios y campesinos para lograr su independencia cultural y concluye que la dependencia de los proletarios respecto de los salarios y, en general de los capitalistas, los vuelve más vulnerables a la cultura hegemónica. En contraste, la relativa autonomía económica de los campesinos facilitaría la creación de una fuerte subcultura de clase al margen de los dictados de las instituciones dominantes (1977: 277). Scott procede a equiparar los valores campesinos con el radicalismo campesino: "lejos de quedar en desventaja, los valores obsoletos de los campesinos y su orientación local bien pueden ser la fuente de su acción radical" (1977: 281).

El problema con Scott es que no analiza la secuela de las rebeliones ni si los campesinos realmente se las arreglan para trascender el capitalismo a fin de cuentas o si son asimilados después de conseguir ciertas concesiones. Cuando llega a hablar de secuelas de las rebeliones, en un par de oraciones, se ve forzado a reconocer que la mayor parte de las rebeliones y revoluciones campesinas han acabado por fracasar, pero atribuye este resultado no a la cultura sino a un problema de táctica y estrategia. En resumen, para Scott la condición para la rebelión y la revolución es una cultura aislada que pueda estar bajo resguardo de la hegemonía aun cuando, paradójicamente, dicha rebelión termine en la derrota. Desde esta perspectiva, pues, mientras más se desarrolla el capitalismo y se implantan los procesos de comercialización, las revoluciones se vuelven menos viables, en la medida en que los campesinos quedan más a merced de la hegemonía burguesa. Por el contrario, las revueltas inspiradas por una cultura campesina independiente probablemente llevarían a la derrota a quienes las emprendan.

Creo que los casos mexicanos que se analizarán aquí hablan claramente en contra de la teoría cultural de Scott: el aislamiento no es requisito para que surjan y se desarrollen las culturas no capitalistas. Como he argumentado más arriba, las culturas de orientación mercantil, aunque no capitalistas, pueden también ser viables para resistir eficazmente al capitalismo e incluso trascenderlo, al menos dentro del ámbito inmediato de las relaciones de producción, aunque no en las relaciones sociales más amplias.

Desde mi perspectiva trato de ofrecer una síntesis de dos enfoques: los que consideran crucial definir a las clases económicamente, y aquellos que privilegian la cultura en sus explicaciones. En lo que se refiere al campesinado, Hamsa Alavi fue uno de los primeros estudiosos contemporáneos que sugirieron la mediación cultural en su contribución teórica al primer número de *The Journal of Peasant Studies* (1973). Más tarde James Scott se convir-

tió en el exponente principal de la cultura como dimensión clave en los estudios agrarios (1976, 1985, 1990).

Para el caso de México, Claudio Lómnitz-Adler dio una respuesta materialista a los análisis posestructuralistas de la cultura y la identidad, con raíces en la existencia empírica y espacial de las clases y los grupos étnicos en el ámbito regional. Uno de los conceptos sustantivos que propone es el de cultura regional, el cual define como "la cultura internamente diferenciada y segmentada que producen las interacciones humanas dentro de una economía política regional" (1992: 22). Este concepto de cultura, a diferencia del concepto más general de "cultura de clases", está limitado por el espacio. La "cultura de clases" es un concepto no-espacial que rara vez corresponde a un conjunto específico de prácticas culturales que se observen en el campo. Las clases se hallan en una compleja relación espacial con otras clases que corresponde a las variaciones en la cultura de la clase. Con base en su estudio monográfico de Morelos, estado que limita con el oeste de Puebla, Lómnitz-Adler generaliza sobre qué tipos de cultura son residuales, emergentes o dominantes en esa región: "desde la perspectiva de la economía política regional, los núcleos culturales campesinos son residuales, los núcleos de la clase obrera son emergentes y los núcleos pequeño burgueses son dominantes" (1992: 39).

En el México rural, más generalmente, pese a la heterogeneidad de posiciones económicas de clase que existe entre los agricultores, la mayor parte de los conflictos rurales se ha dado en torno a la tierra como objeto de lucha, aunque frecuentemente planteados como asuntos étnicos (Schryer, 1980, 1990). Sin embargo, esta demanda puede adquirir muy diversos contenidos de clase o sociales dependiendo de cómo se articule con otras demandas, lo cual está determinado en buena medida por las culturas regionales. Las demandas de tipo campesino, por ejemplo, limitadas a la tierra para la producción familiar autónoma, deben distinguirse de las luchas aparejadas a la demanda del control del resto de los medios de producción y el control democrático de los procesos de producción en general por parte de los productores directos. Estas últimas demandas entrañan la expansión del ámbito de la lucha democrática a la esfera de la producción, por lo que hace a la toma de decisiones y la distribución del excedente económico.

Carácter de las intervenciones del Estado

En el México posrevolucionario, el aparato estatal ha desempeñado una función principal en la orientación del desarrollo capitalista en el campo. Ha combinado su poder coercitivo y represivo con medios para obtener

consenso. Las políticas agrarias del Estado mexicano se han orientado hacia dos metas fundamentales: fomentar el desarrollo capitalista de la agricultura como medio de apoyar el proceso de industrialización, y apaciguar el descontento político en el campo al tiempo que se obtiene consenso y legitimidad para los regímenes posrevolucionarios. La importancia que se ha otorgado a estas metas aparentemente contradictorias entre sí ha dependido de varios factores, el principal de los cuales ha sido la correlación de las fuerzas de clase en las diferentes regiones de México. Es decir que, dependiendo de los grupos y clases contendientes y de sus fuerzas relativas, el aparato estatal ha ideado diferentes tipos de intervención introduciendo a menudo variaciones regionales a la norma nacional de la política estatal.

Como habré de demostrar, las intervenciones del Estado a veces surten el efecto de fortalecer a la burguesía agrícola a pesar de que esto ocurra a expensas de los productores directos y con pérdida de legitimidad; en otras coyunturas, sin embargo, el Estado se ve forzado a responder a las demandas de los productores agrícolas directos, aunque puedan afectarse negativamente los intereses de algunos representantes de la burguesía agrícola. De esta forma, no debería verse al Estado como una entidad monolítica que siempre produce los mismos efectos a través de sus intervenciones.

Tal ambigüedad de las intervenciones estatales está determinada por la naturaleza variada de sus metas. Como ya se dijo, el aparato estatal debe ocuparse de fomentar el desarrollo capitalista o la acumulación de capital, pero también de mantener el consenso y la legitimidad de los regímenes posrevolucionarios. De esta forma, no siempre es posible apaciguar las inquietudes políticas en el campo mediante la represión, aun cuando desde el punto de vista económico esto fomentaría el desarrollo capitalista. El aparato estatal, además, se ve a veces forzado a responder favorablemente a las luchas y demandas agrarias de las clases subordinadas, y a poner en práctica políticas agrarias que las favorecen, como la redistribución de la tierra. Las más de las veces, tales políticas favorables se explican por la fuerza de la movilización de masas y no por las actitudes populistas de los regímenes estatales. En otras palabras, los determinantes de la política estatal no son sólo los agentes que controlan el aparato estatal, sino también quienes intervienen en las movilizaciones populares.

En contraste con mi punto de vista, algunos autores indebidamente confieren al Estado un alto grado de autonomía respecto a la planeación de sus políticas. Steven Sanderson (1981), por ejemplo, postula generalmente que la de redistribución de tierras durante el régimen de Luis Echeverría (1970-1976) se dio por iniciativa estatal. Sin embargo, el principio de este periodo se caracterizó precisamente por el surgimiento de movilizaciones

campesinas en varias regiones de México (Bartra, A., 1979b). Pero, para Sanderson, las intervenciones favorables del Estado deben verse como políticas populistas de concesión, como si toda la determinación residiera en el propio Estado y el movimiento campesino no pudiera tener la iniciativa.

Desde el punto de vista de sus resultados, considero que las intervenciones estatales pueden ser dañinas o favorables para la reproducción de los productores directos. Son dañinas cuando se orientan hacia el fomento del desarrollo capitalista a expensas de los productores directos. En este caso, las organizaciones de clase resultantes de tales procesos asumirán un carácter “de oposición”, como ya se ha indicado anteriormente. Por el contrario, las políticas favorables serán aquellas ejercidas para apoyar o ampliar la base de subsistencia de los productores directos. Pueden adoptar la forma de redistribución de la tierra, pero también la de ampliación de las oportunidades de empleo asalariado. Las últimas son claramente compatibles con el desarrollo capitalista a la vez que favorecen a los productores directos. Así, las políticas favorables no siempre se ponen en práctica a expensas de la burguesía agrícola (otro ejemplo es la distribución de tierras “federales” a los productores directos). Las intervenciones estatales favorables, por lo tanto, deben analizarse considerando dos tipos por separado:

1. políticas estatales que favorecen a los productores directos a expensas de que éstos pierdan el control de sus organizaciones de clase, las cuales se las apropiaría el Estado, o serían cooptadas y pasarían a consolidar la hegemonía burguesa; y
2. políticas estatales que se le imponen al Estado desde abajo, a través de la iniciativa, la fuerza y movilización de los productores directos que serían capaces de mantener su independencia y autonomía en el control de sus organizaciones de clase, lo cual les confiere un carácter “popular-democrático”.

Tipo de liderazgo y modos de participación de las bases

Existen cuando menos tres tipos de dirigente en los movimientos agrarios: Primero, el “carismático-autoritario”, cuyo interés fundamental es mantener el control personal del movimiento. En este caso, los modos de participación se enfocan en incluir a las masas para manifestar el apoyo político en relaciones típicamente clientelares. Más allá de esto, las masas no intervienen mucho en la política cotidiana de la organización.

Segundo, el (rara vez “la”) dirigente “corrupto-oportunista” es el que, aunque preocupado por defender los intereses que representa, puede po-

ner en peligro los intereses de largo plazo de la organización, particularmente aquéllos concernientes a su independencia y autonomía estratégicas. Para Gramsci, la corrupción de los líderes es uno de los factores clave en la desmoralización y desorganización de las masas. En este tipo de liderazgo tampoco se involucra mucho a las masas, excepto para manifestaciones de apoyo político a algún patrón más allá de la organización, o a algún partido político del cual se esperarían ciertas concesiones.

Tercero, el dirigente "democrático-participativo", entre cuyos principios está la preocupación por elevar la formación política e ideológica de las masas, también supone la formación de nuevos cuadros que puedan sustituirlo en el liderazgo cuando llegue el momento oportuno (debido a que ha cumplido con su periodo o a causas imprevistas). Éste es el representante ideal, cuyos intereses (tanto a corto como a largo plazo) coinciden totalmente con los de las bases. Huelga decir que los primeros dos tipos son los que más frecuentemente encontramos en la historia real. Esta clasificación de tipos de liderazgo tiene un cierto paralelo con la formulación clásica de Max Weber (1978: 941-1157). Una diferencia es que yo construí los tipos de manera más inductiva, a partir de la experiencia histórica mexicana.

El resultado de las organizaciones popular-democráticas presupone cierto nivel de formación política clasista previa a la movilización. En este caso nuestra variable "dependiente" en realidad se estaría convirtiendo en una variable "independiente". De ser causada o determinada, pasa a ser causante o determinante de la política estatal. Es esto lo que yo llamo el "momento subjetivo" de la formación política de clase: una clase políticamente formada se vuelve capaz de imponerle sus intereses al Estado a partir de su organización y movilización. Este momento subjetivo es cuando se da un efecto recíproco del efecto sobre la causa. Ahora bien, las clases constituidas como agentes sociales popular-democráticos no son inmunes a la expropiación de sus organizaciones ni a la hegemonía burguesa. Parte de las futuras luchas de estas clases consiste precisamente en mantener su independencia organizativa y establecer alianzas con otros grupos y clases subordinados de una tendencia popular-democrática análoga. Son estas tareas las que requieren de un liderazgo democrático-participativo y la vigilancia constante de las masas sobre su conducción. El reto por mantener la independencia y la autonomía son pues constantes, de tal manera que las clases formadas políticamente siempre confrontarán el desafío de cómo arrancar ciertas concesiones sin por ello caer en la cooptación estatal.

Capítulo 3

Reforma agraria: capitalismo, Estado y neoliberalismo

LAS AUTORIDADES gubernamentales frecuentemente pregonan que la reforma agraria es producto de una revolución “campesina” que hizo justicia a las masas del campo. En contraposición con este punto de vista, en la historia crítica que aquí se presenta se arguye que la redistribución de tierras fue el camino que se eligió para desarrollar y consolidar el capitalismo en México. El resultado final de la reforma agraria mexicana ha sido la pauperización de los habitantes del campo que ha llevado a la crisis tanto a los campesinos como a la agricultura capitalista. Como la redistribución se detuvo en los años setenta, la reforma dejó de fortalecer la relación entre los campesinos y el Estado. A consecuencia directa de esto, ha llegado a ponerse en tela de juicio la viabilidad del Estado en la forma corporativista que asumió después de la Revolución de 1910-1920. Las reformas a la legislación agraria de 1992, aunadas a las políticas neoliberales que se han implantado desde mediados de los años ochenta, representan un cambio radical en la variedad de opciones para la relación entre el gobierno, por un lado, y la agricultura y el campesinado por el otro. En este capítulo se estudia la reforma agraria en perspectiva histórica como antecedente de tales cambios, la reforma legislativa y agraria de 1992 y las nuevas políticas agrarias que trajo consigo el neoliberalismo.

Orígenes sociales de la Revolución

Los orígenes sociales y políticos de la Revolución están expresados en los artículos 27 y 123 de la Constitución mexicana de 1917. Estos dos artículos son la esencia de la revolución en lo tocante al campesinado y la clase obrera, respectivamente. Si se consideran en relación con la sociedad mexicana de 1910, representan un pensamiento social avanzado. De hecho, había tanta distancia entre sociedad y legislación que estos artículos llegaron a constituir la meta de la mayor parte de las futuras luchas campesinas y obreras. La mayoría de las organizaciones que de éstas resultaron

fueron asimiladas al Partido Revolucionario Institucional, partido político dominante desde 1929, aunque con nombres diversos (Gilly, 1974). Aunque la Presidencia de la República le fue arrancada electoralmente al PRI en el 2000, este partido sigue teniendo una mayoría en el Congreso y entre los gobernadores del país, y sigue controlando al grueso de las organizaciones corporativas de obreros y campesinos (De la Garza, 2004; MacKinlay y Otero, 2004).

Más específicamente, el artículo 27 fue resultado de un arreglo al que llegaron en 1917 dos facciones políticas importantes, dirigida una por Álvaro Obregón y la otra por Venustiano Carranza. Estas dos facciones representaban a los constitucionalistas y su objetivo era despojar de sus demandas originales a las facciones campesinas revolucionarias más radicales —dirigidas respectivamente por Emiliano Zapata y Francisco Villa. Mediante esta maniobra táctica, los radicales perdieron la última batalla política en contra de los constitucionalistas reformistas, lo que se sumó a la derrota militar de los ejércitos tanto de Villa como de Zapata. Así pues, la Constitución de 1917 señaló el nacimiento de un nuevo régimen reformista a partir de una sangrienta revolución.

La Revolución mexicana fue un proceso social costoso en el que perdieron la vida un millón de personas. Quienes salieron favorecidos no fueron los que más sacrificaron. La Revolución ayudó sobre todo a la burguesía agraria del norte, no a los campesinos que habían sido la fuerza revolucionaria principal. Por otro lado, la dirigencia reformista se las arregló para formar una alianza entre la clase obrera y el movimiento constitucionalista. Así pues, algunos politólogos mexicanos conciben a la Revolución como un fenómeno más de orden político que social, ya que permitió acabar con un régimen político exclusivista en el cual el poder político se basaba en la tenencia de la tierra. La trayectoria principal de la nueva sociedad, sin embargo, seguía siendo de naturaleza capitalista y aunque reformó las relaciones de propiedad en el campo quedó muy lejos de abolir la propiedad privada. De esta forma, si bien la Revolución eliminó fuertes barreras al desarrollo capitalista de la agricultura que habían erigido los terratenientes poderosos e ineficientes, no modificó fundamentalmente las relaciones de propiedad (Córdoba, 1972).

Las leyes de reforma del régimen de Porfirio Díaz

Las historias de las diversas regiones que configuran la República Mexicana son tan diversas que la población agrícola del México actual es muy heterogénea. La gente del campo de las regiones central y sur de México

tenían un importante patrimonio cultural que se remontaba a los tiempos de antes de la Colonia, mientras que la del norte apenas comenzó a establecerse en el siglo XIX, tras el casi exterminio de los nativos.

Antes de la Revolución, la Iglesia católica era el principal terrateniente y representaba al tipo de propietario feudal en franco contraste con la ideología liberal que había surgido en otros sectores. La aparición de la burguesía industrial que demandaba el desarrollo de una agricultura vigorosa, para que su propio crecimiento no se viera impedido por las crecientes demandas salariales y la reducción de las ganancias, resultó en un choque con los terratenientes. Mientras tanto, la Iglesia siguió manteniendo grandes extensiones de tierra sin cultivar, por lo que representaba un importante freno al desarrollo de las fuerzas productivas.

Las reformas liberales de la Constitución de 1857 proporcionaron los instrumentos legales para expropiar las tierras de la Iglesia. La misma ley, sin embargo, auxiliada por otras medidas legislativas aprobadas durante el porfiriato (periodo prerrevolucionario, 1876-1910, durante el cual Porfirio Díaz controló el gobierno de México), se aplicó también a las tierras comunitarias de los indios. De esa forma, después de las leyes de reforma liberales y durante el porfiriato, las comunidades indígenas fueron despojadas del 90 por ciento de sus tierras (Gilly, 1974; López Cámara, 1967; Katz, 1982).

La monopolización de las tierras siguió avanzando a grandes pasos durante el porfiriato, instigada por las leyes de baldío de 1883 y 1884, relativas al deslindamiento y venta de terrenos "baldíos". Para esos fines se crearon las "compañías deslindadoras". Estas compañías tenían derecho a quedarse con un tercio de las tierras como pago por su labor de deslinde; el resto era vendido por el gobierno. Una vez deslindadas las tierras, las compañías compraban buena parte de las que vendía el Estado. Con el tiempo, las compañías deslindadoras llegaron a poseer 49 millones de hectáreas, la cuarta parte del territorio mexicano. Su labor se extendía también a los pueblos y comunidades de indios y campesinos y arbitrariamente declaraban sus tierras como "baldías" o susceptibles de deslindamiento. Cuando las comunidades indígenas perdieron sus tierras, sus miembros se convirtieron en trabajadores o peones que trabajaban ya fuera para los hacendados o para las compañías deslindadoras, aunque muchos quedaron desempleados.

El resultado inmediato de las reformas liberales fue, entonces, la transferencia de la tierra de manos de la Iglesia y las comunidades indígenas a la de los latifundistas tanto viejos como nuevos. Los grandes terratenientes del sector privado de la agricultura mexicana se percataron de que podían

agrandar sus ranchos a muy bajo costo. Durante los siguientes decenios saciaron su apetito voraz de tierra mediante el recurso de cercar las tierras comunales indígenas. También idearon formas para que los campesinos indígenas recientemente despojados de sus tierras se quedaran a trabajar: por ejemplo, en virtud de las muchas deudas en que los trabajadores incurrieran con el terrateniente (créditos para bodas, pagos adelantados en especie en las tiendas de raya, etcétera). Esas deudas eran heredadas por los hijos de los peones que no tenían derecho a renunciar a sus "empleos" hasta que le hubieran pagado completamente al propietario cualesquiera deudas pasadas (López Cámara, 1967; Hansen, 1974).

Durante el porfiriato comenzó a establecerse la infraestructura para el desarrollo industrial (por ejemplo, la red ferroviaria). Paradójicamente, sin embargo, el porfiriato también conservó y fortaleció formas feudales e incluso esclavistas en las relaciones laborales del campo. Sólo una dictadura despiadadamente represora pudo mantener durante tanto tiempo esas condiciones de opresión y explotación en la estructura económica. Al final, las incongruencias entre el desarrollo capitalista y la tenencia arcaica de la tierra llegaron a tal punto que fue necesaria una revolución para cambiar todo el sistema.

Durante el porfiriato, la industria era un sector todavía en pañales. Hacia 1910, las principales inversiones de capital se concentraban en ferrocarriles (40 por ciento del total) y minas (17 por ciento), seguidos por la industria (6 por ciento) y el petróleo (5.9 por ciento). La mayor parte de esta inversión —77 por ciento— era de capital extranjero (Gilly, 1974: 21).

El porfiriato fomentó una gran afluencia de inversiones estadounidenses hacia México; fue éste un paso decisivo en la integración de México a la economía mundial. Este acontecimiento, junto con otros dos, es considerado por Friederich Katz (1982) como uno de los principales factores que detonaron la Revolución. El segundo factor fue la expropiación de las comunidades indígenas; el tercero, la pacificación de los indios nómadas de la frontera norte, lo que transformó esa zona en una frontera pacífica y permeable con Estados Unidos. Poco después empezaría el flujo de capital estadounidense a la economía mexicana, y la depresión de la economía mundial de 1907 tuvo efectos graves en los estados del norte de México.

El movimiento revolucionario se fraguó por diferentes causas en las diversas regiones de México. En el centro, la principal grieta social se daba entre las comunidades indígenas expropiadas y los hacendados. En el norte, sin embargo, la Revolución fue encabezada por los hacendados que habían sido excluidos del poder político durante el porfiriato. Ellos formaron una alianza muy amplia e inusitada con sus propios peones, pequeños ran-

cheros y granjeros, así como con sectores de la clase media urbana. En el centro de México, especialmente en Morelos, los campesinos indios se habían organizado para enfrentarse al porfiriato desde 1908, antes de que Francisco I. Madero hubiese aparecido en el escenario de la Revolución (Womack, 1969). A diferencia de la gran alianza del norte, representada por hacendados como Madero, los campesinos de Morelos adoptaron como dirigente a uno de su propia comunidad: Emiliano Zapata. Zapata se ganaba la vida adiestrando caballos en una hacienda. Así que, en rigor, no era campesino. Era, sin embargo, un miembro respetado de su comunidad. Los seguidores de Zapata decidieron aliarse con Madero y los hacendados del norte debido a que el gobierno porfirista había repelido un esfuerzo por ventilar sus agravios.

Cuando se dio el levantamiento zapatista, los aparceros y rancheros pobres estaban listos para unirse al movimiento revolucionario. Los peones acasillados (campesinos residentes en las haciendas) preferían su forma de vida dependiente a la incertidumbre de la revuelta:

muy rara vez [los zapatistas] reclutaban rebeldes entre la *gente de casa*,⁴ quienes de todos modos preferían su seguridad limitada, y evidentemente en ningún caso incitaron a estos peones dependientes para levantarse y tomar las haciendas en que trabajaban (Womack, 1969: 87).

Los zapatistas más militantes y combativos eran productores campesinos pobres y aparceros. En 1911, una vez que los zapatistas comenzaron a poner en práctica las reformas agrarias locales en conformidad con el Plan de San Luis Potosí, el manifiesto revolucionario de Madero,

gente armada de los aparceros y campesinos pobres comenzaron a invadir los campos... Los indefensos administradores de las haciendas y los peones residentes de las tierras que los posesionarios reclamaban no tenían más salida que cumplir las demandas de los revolucionarios (Womack, 1969: 87).

La situación prerrevolucionaria era distinta en el norte. La Laguna, localizada en la región central del norte, se había poblado de manera significativa apenas en el siglo anterior; no había en ella una población indígena sedentaria como en muchas del altiplano del centro de México. Entre las dificultades que enfrentaban sus pobladores estaban los constantes ataques

⁴ Esta frase aparece en español en el original y se refiere a los peones acasillados.

por parte de tribus indígenas guerreras y desarraigadas del norte. Estos "apaches", como se les decía genéricamente, siempre se habían mantenido al margen del influjo azteca anterior a la Conquista española (1521). Si bien los indios laguneros habían llegado a la región antes de 1750, su población estaba tan diezmada por las luchas en contra de los españoles y la viruela que, a principios del siglo XX apenas quedaban restos de cultura indígena en La Laguna (Beals, 1932).

En contraste con los peones de las haciendas del centro que tendían a mantenerse leales a sus patrones y despreciaban la Revolución, los peones y hacendados del norte se rebelaron juntos en contra del gobierno central. Francisco I. Madero, hacendado del estado de Coahuila, encabezaba la rebelión. Esto se debía en parte a que, en el norte, el peonaje avasallador había perdido vigor desde mediados del siglo XIX, debido al desarrollo de la minería y de algunas industrias que ofrecían otras oportunidades de empleo (Katz, 1982: 28-29). Hasta las tiendas de raya eran diferentes en el norte. Cuando en el centro del país eran el instrumento del hacendado para mantener endeudados a los peones y, por ende, atados a la hacienda, en el norte los peones no estaban obligados a comprar bienes en las tiendas de raya. Los hacendados generalmente vendían ahí productos a precios más bajos a modo de incentivo para atraerse obreros. También en La Laguna los salarios de los campesinos eran los más altos del país (Katz, 1982: 31).

Otro grupo además de los que participaban en la relación de los peones residentes y el hacendado de La Laguna eran los "colonos". Éstos por lo general tenían mayores extensiones de tierra y más ganado que los campesinos libres de otras regiones (Landsberger y Hewitt de Alcántara, 1970; Craig, 1983). En el estado de Coahuila se habían establecido comunidades de colonos con el designio de defender la frontera en contra de las incursiones apaches. Ellos disfrutaban de una mayor autonomía interna y consideraban que no sólo tenían el derecho sino también la obligación de portar armas para defenderse en contra de los apaches (Nugent, 1995). Aunque no representaban un porcentaje elevado de la fuerza de trabajo rural, consiguieron que el presidente Benito Juárez les concediera tierras en 1864 después de ayudarlo a pelear en contra de la invasión francesa. Más tarde, durante el porfiriato, los colonos de La Laguna se enfrentaron a los hacendados ganaderos que les habían quitado el agua al desviar el curso del río Nazas (Eckstein, 1966: 132). Si se tiene en cuenta que los colonos habían perdido sus tierras bajo el régimen de Porfirio Díaz, no es de sorprender que se volvieran combativos en la Revolución ni que se hayan contado entre los primeros beneficiarios de la reforma agraria inicial de 1917.

En Chihuahua, comparados con las comunidades normales de campesinos mestizos, los colonos se habían acostumbrado a los privilegios que usualmente se les otorgaban a los españoles y criollos. Aunque colonos, eran poseedores de tierras y podían venderlas. Sin embargo, para 1910 se les había despojado de sus tierras y negado la autonomía municipal. Agraviados como estaban, no fue difícil que se organizaran para la lucha (Katz, 1982: 24-26).

Otro importante grupo revolucionario se formó en el noroeste del estado de Sonora. La mayoría de los dirigentes del movimiento constitucionalista provenía de Coahuila y Sonora (Cumberland, 1975). Originalmente dirigidos por Venustiano Carranza, ex gobernador de Coahuila, el grupo de Sonora tomó las riendas del Estado revolucionario hacia 1920 (Matute, 1980). Los generales Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón Salido y Plutarco Elías Calles están íntimamente ligados al triunfo de esta facción revolucionaria; ellos contribuyeron a legitimar la burguesía agraria emergente del norte. Estos tres generales ocuparon la Presidencia de México entre 1920 y 1928, y Calles extendió su mandato a través de gobiernos títeres desde 1928 hasta 1935 (Loyola Díaz, 1980; Medin, 1982). Cuando estalla la Revolución, Obregón es un pequeño granjero, mientras que Calles proviene de una familia de comerciantes acaudalados. Sin embargo, pronto asimilaron el espíritu y carácter de lo que ahora es la burguesía agraria del norte (Aguilar Camín, 1977, 1982; Sanderson, 1981; Mares, 1987; De Grammont, 1990).

Los historiadores revisionistas han señalado enormes diferencias regionales en los tipos de liderazgo y compromiso revolucionario. Barry Carr (1973, 1980), por ejemplo, ha impugnado el supuesto carácter "popular" del primer decenio del periodo revolucionario. Este autor hace hincapié en "la hegemonía que ejercieron las agrupaciones burguesas sobre la mayoría de las coaliciones revolucionarias" (Carr, 1980: 7). En el caso de Sonora, alega Carr, "un porcentaje excepcionalmente elevado de la dirigencia revolucionaria estatal surgió de las filas de la comunidad de hacendados o de la clase de los prósperos agricultores y rancheros capitalistas que ocupaban un puesto tan importante en la sociedad nortea" (Carr, 1980: 8).

En síntesis, los orígenes sociales de la Revolución fueron tan diversos como la propia sociedad mexicana. Respondieron a estructuras sociales y escisiones políticas regionales.

El artículo 27: un compromiso reformista

El artículo 27 de la Constitución de 1917 se concibió para satisfacer las demandas de los muchos agricultores campesinos que habían sido despojados

durante el porfiriato, pero preservando la posibilidad de la propiedad privada. En efecto, el artículo de la Constitución dedicado a la reforma agraria fue un compromiso reformista. Una de sus características medulares era que declaraba que todas las tierras eran propiedad de la nación. Ésta, a su vez, tenía el derecho de transferir la tierra a los individuos y constituirla en "propiedad privada". Asimismo, la nación tenía el derecho y la obligación de expropiar cualquier propiedad privada cuando se juzgara que la tierra era de "utilidad pública". Este artículo proveyó al Estado posrevolucionario del instrumento legal para efectuar la redistribución de la tierra. Las formas concretas en que se llevaría a cabo la reforma agraria habrían de ser determinadas por un conjunto de leyes reglamentarias que habría de aprobar el Congreso de la Nación (Sanderson, 1981: 67-69).

El ejidatario, titular legal de una dotación de tierra, es un productor sin relaciones de dependencia con grandes terratenientes. Como el minifundista (o propietario privado de una pequeña porción de tierra), el ejidatario puede transformarse en capitalista o bien proletarizarse; puede acumular capital o perder sus medios de producción; puede hacer valer su presencia en el mercado o ser eliminado (Gutelman, 1974).

Las reformas estructurales durante el cardenismo

Durante el periodo de 1917-1935 se distribuyeron lentamente algunas de las tierras. Sin embargo, durante el mandato de Carranza (1917-1920), muchas de las tierras que se habían repartido conforme a las leyes zapatas fueron devueltas a sus propietarios originales. El propio Zapata fue asesinado por un oficial del ejército federal en una reunión en la que se esperaba que ambos negociaran los términos para que los ejércitos campesinos depusieran las armas (Womack, 1969). Sin su entrañable dirigente, el movimiento campesino de México fue perdiendo fuerza hasta volverse impotente.

El periodo de 1920-1935 fue de reconstrucción económica y consolidación del grupo gobernante. Como la "familia revolucionaria" se estaba fragmentando, especialmente después del asesinato de Obregón ocurrido en 1928, en 1929 Calles auspició la organización de todas las fuerzas revolucionarias en un partido político llamado el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, antecedente del PRI. Durante los años veinte el "grupo Sonora" se elevó hasta la cima de la jerarquía nacional. La burguesía agraria establecía entonces su hegemonía en la situación posrevolucionaria.

Los principales hechos del periodo que va de 1920 a 1935 fueron un liderazgo basado en caudillos (dirigentes militares carismáticos), radicalismo

ideológico expresado en un fuerte anticlericalismo, y la suspensión del reparto de tierras. El anticlericalismo condujo a la rebelión cristera del centro-occidente de México, mientras que la falta de redistribución de las tierras llevó a un movimiento agrario radical en el estado de Veracruz, encabezado por el gobernador y general Adalberto Tejeda (Falcón, 1977; Fowler Salamini, 1979). Estas dos amenazas, proveniente una de la derecha y la otra de la izquierda, explican la elección de Lázaro Cárdenas en 1933 como candidato presidencial por el Congreso del mayoritario del PNR (Medin, 1982). Calles, “jefe máximo” de la Revolución, se avino a postular a Cárdenas por al menos tres razones: Cárdenas le había demostrado lealtad hasta el momento, los factores políticos predominaban sobre los ideológicos o económicos (es decir, la “familia revolucionaria” se estaba consolidando dentro del PNR), y Calles consideraba que los antecedentes agraristas de Cárdenas como gobernador de Michoacán contrarrestarían las presiones del tejedismo radical en Veracruz.

Para consolidar el poder de su gobierno en contra de Calles, quien intentaba conservar su influencia informal incluso después de la elección, el “maximato”, Cárdenas unificó a los campesinos y a la clase obrera en organizaciones de masas. En lugar de dejar que campesinos y obreros se organizaran de manera independiente, Cárdenas incorporó sus organizaciones dentro del partido oficial, el cual se volvió el Partido de la Revolución Mexicana o PRM (precursor inmediato del PRI). Desde luego que esto suponía hacer varias concesiones. Cárdenas alentó a los trabajadores –dentro de ciertos límites– a luchar con el otro “factor de la producción” (es decir, los capitalistas) para lograr un “equilibrio”. Su intención no era alentar la lucha de clases sino una “reconciliación de clases”, en la que el Estado se constituía en el mediador supuestamente “imparcial” (Córdoba, 1974; Hamilton, 1982; Medin, 1972).

Antes del gobierno de Cárdenas, la mayor parte de las tierras de la reforma agraria se había distribuido a los ejidos como parcelas *individuales* a cada ejidatario. Pero Cárdenas se enfrentaba por primera vez a la necesidad de distribuir la tierra de las haciendas más productivas en regiones irrigadas en que el movimiento agrario tenía gran intensidad; él consideraba que se trataba de empresas con economías de escala. Para preservar la productividad de las grandes unidades y mantener un flujo sin interrupción de materias primas agrícolas y bienes salariales para la industria y la ciudad, la política de Cárdenas fue crear ejidos “colectivos”, muy similares a las cooperativas de productores. A fin de cuentas, cerca del 12 por ciento de los ejidos adoptó esta forma colectiva de organización (Eckstein, 1966).

Cárdenas obligó a quienes habían sido grandes latifundistas a transformarse en agricultores capitalistas, y también respetó el principio de la "pequeña propiedad privada". Cada vez que se expropiaba una hacienda, el propietario podía quedarse con el núcleo de la misma, sin exceder las 150 hectáreas de tierras irrigadas que fijaba la ley para la propiedad privada; en la jerga de la reforma agraria suele usarse como eufemismo el término de "pequeña propiedad" (a veces llamada "rancho"). Un buen número de latifundistas, aterrorizados por el clima de violencia en que se llevaba a cabo la reforma agraria, fraccionaron ellos mismos sus tierras y las vendieron como "pequeñas propiedades". En muchos casos esto se hacía a través de "prestanombres". El prestanombre podía ser miembro de la familia o un empleado de confianza. En estos casos, por lo general, el dueño original conservaba el control de la tierra que había "vendido" formalmente.

Al final de su mandato presidencial, Cárdenas había repartido más tierras a los campesinos que todos sus antecesores: 17'891,577 hectáreas fueron distribuidas entre 814,537 campesinos (Gutelman, 1974: 109).

Los ejidos colectivos: La Laguna, El Yaqui y Atencingo

El plan cardenista para los ejidos colectivos de La Laguna fue el modelo de las futuras colectivizaciones en otras regiones de la agricultura capitalista moderna. Después de esa experiencia, era imperativo para el gobierno demostrar tanto la viabilidad política como la superioridad económica de la agricultura colectiva en comparación con la propiedad privada. Además, tenían que movilizarse suficientes fuerzas populares para contrarrestar la reacción de los hacendados cuando sus ranchos se vieran amenazados por la expropiación. Después de la redistribución de tierras sus productores beneficiarios tenían que conservar una organización sólida para resistir los ataques de los ex hacendados y poder producir a un nivel ejemplar.

El plan se proponía lograr la autogestión por parte de los ejidatarios. En La Laguna, esta meta habría de alcanzarse mediante la organización de los beneficiarios en 15 uniones regionales que a la larga serían sustituidas por el Banco Ejidal (institución estatal de crédito). Las 15 uniones serían coordinadas por la Unión Central de Sociedades de Crédito Colectivo, la cual tenía el objetivo de desempeñar las funciones económicas y mercantiles del ejido.

Este plan se propuso y elaboró merced a la interacción de la Unión Central y los técnicos del gobierno. El impulso inicial para formar las 15 uniones regionales y la Unión Central venía desde abajo, de los productores beneficiarios. Cárdenas no sólo aprobó el plan, sino que ayudó a con-

vertir la organización en una entidad legal. El presidente Cárdenas quedó tan favorablemente impresionado por la organización de La Laguna que consideró que todos los colectivos futuros deberían adoptar una pauta semejante (Rello, 1984).

Tras meses de preparación y movilización de los obreros agrícolas de La Laguna, éstos recibieron finalmente sus tierras ejidales el 6 de octubre de 1936. Durante los primeros años, los colectivos de La Laguna recibieron un apoyo adecuado de las agencias gubernamentales. De esa forma, su productividad era comparable o superior en muchos casos a la de las antiguas haciendas capitalistas. Es decir, los ejidos colectivos no sólo habían logrado preservar las economías de escala de la hacienda capitalista, sino que la habían superado, pero ahora con una mucho mayor distribución del producto entre los productores directos, beneficiarios de la reforma agraria. Esta tendencia, no obstante, sólo prevaleció hasta 1947 en La Laguna, cuando los ejidatarios enfrentaron el boicot oficial. El capítulo 5 discute extensivamente los desarrollos en esta región.

Los colectivos organizados en el valle de El Yaqui del sur de Sonora también testimonian que la producción de su periodo inicial era satisfactoria. La disponibilidad de crédito, la asistencia técnica y el suministro de agua de los primeros años posteriores a la reforma se reflejaron en rendimientos por hectárea superiores en los ejidos colectivos, en comparación con las operaciones privadas, como se verá en los capítulos 5 y 7.

En Atencingo, Puebla, se organizó también un ejido colectivo. Pero su historia es diferente de la del norte. Quienes exigían tierras no eran campesinos que vivían como peones acasillados en sus haciendas; eran campesinos como los que se habían rebelado en Morelos con Zapata. En Atencingo, los campesinos seguían demandando restitución por el despojo de sus tierras comunales que habían sufrido a finales del siglo anterior.

Las tierras productoras de caña de azúcar en Atencingo comprendían nueve poblados en tierras pertenecientes a William Jenkins, ex cónsul estadounidense en Puebla. Jenkins había formado algo así como un emporio azucarero agroindustrial: la caña cosechada en toda la región se llevaba a un ingenio azucarero de su propiedad. Para acabar con la lucha de los zapatistas, Jenkins discurrió "donar" sus tierras de cultivo a los peones residentes de su hacienda, anticipándose a la reforma agraria cardenista que se aproximaba (Ronfeldt, 1973; Paré, 1979a).

Los nuevos ejidatarios fueron obligados a producir caña de azúcar y venderla al ingenio de Jenkins, lo que le garantizaba un suministro continuo y, acaso, un modo de vida más desahogado que el que había disfrutado antes. De esta forma, los ejidatarios de Atencingo siguieron siendo, *de*

facto, peones del ingenio merced a las hábiles maniobras legales de Jenkins. Se les contrataba y despedía igual que antes y no tenían verdaderos derechos sobre el nuevo ejido colectivo. Sólo vivían de su salario, puesto que no se les distribuyeron utilidades entre 1938 y 1947. Se reprimía cualquier manifestación de descontento y no era raro que se les castigara físicamente. A diferencia de las otras dos regiones, sin embargo, las luchas en Atencingo se centraron desde un principio en el intento de los productores directos por acceder a una condición campesina. Durante la mayor parte del periodo cubierto se resistieron a la proletarización e inclusive a las formas colectivas de control del ejido, ya que éstas escondían el control capitalista de hecho. En el capítulo 6 se estudia con detenimiento el caso de la región de Atencingo.

El cardenismo: ¿fin de la burguesía agrícola?

Las 150 hectáreas de riego (o su equivalente en tierras de menor calidad) con que se quedaron sus dueños originarios al momento de la reforma fueron siempre las mejores de las ex haciendas. Dejaron a sus propietarios un precioso enclave que se complementaba mediante las relaciones latentes con al menos algunos de los beneficiarios de la reforma agraria. Así que para muchos hacendados no pasó mucho tiempo sin que renovaran su dominio clientelar. También obró en su favor el hecho de que los ejidatarios frecuentemente carecieran de infraestructura, recursos y crédito que, mediante un pago, podían proporcionarles los “pequeños propietarios”. Este proceso a veces dio como resultado tal poderío para los hacendados que algunos especialistas han llamado “neolatifundismo” a este fenómeno (Stavenhagen *et al.*, 1968; Warman, 1975).

Así que el cardenismo no significó en realidad el final de la burguesía agraria; fue tan sólo una reestructuración del bloque en el poder (Contreras, 1977). En cierto sentido, el cardenismo creó un espacio al que pudieron acceder los industriales con sus inversiones; éstos fueron solapados por un Estado complaciente. Fue entonces cuando el Estado adoptó la forma y estructura que predominó durante el siglo xx. La política personalista de antaño fue abandonada en favor de formas más impersonales e institucionales. Por ejemplo, si bien el hombre que portaba la banda presidencial podía tener un poder extraordinario, éste sólo le duraría 6 años (González Casanova, 1965; Hellman, 1983; Otero, 1996a).

Después de 1938 el Estado mexicano, ya consolidado, se organizó para promover la industrialización. Como esto significaba adquirir grandes cantidades de divisas, la agricultura tenía que modernizarse rápidamente. Ha-

bía que exportar las cosechas para pagar la maquinaria industrial, la materia prima y la tecnología. La consolidación de esa hegemonía industrial en el bloque en el poder fue una de las características de los dos regímenes que siguieron al de Lázaro Cárdenas, sobre todo el de Miguel Alemán.

El alemanismo: reestructuración del bloque en el poder bajo la hegemonía de los industriales

El año de 1938 marca el fin de la reforma agraria de orientación campesina. El reformismo de Cárdenas se vio limitado por reacciones extranjeras negativas a la expropiación y nacionalización de la industria petrolera con el consiguiente descontento de la burguesía nacional (Hamilton, 1982). Así que antes de que terminara el gobierno de Cárdenas se vio surgir una filosofía desarrollista. Como la Segunda Guerra Mundial exigía una política de “unidad nacional”, después de la guerra México se encontró con que su clase obrera y sus organizaciones populares habían sido cooptadas por el Estado. Especialmente la Confederación Nacional Campesina o CNC y la Confederación de Trabajadores de México o CTM se convirtieron en armas políticas del gobierno, de suerte que el Estado podía controlar tanto a los campesinos como a los obreros (Mackinlay y Otero, 2004; De la Garza, 2004). Otro de los blancos del Estado era el ejido colectivo: se había convertido en baluarte de la oposición y la organización socialista, por lo que su ejemplo resultaba una amenaza para las compañías privadas.

A finales de los años cuarenta el impulso productivo del gobierno se combinaba con un compromiso con la ganancia privada y el individualismo. El colectivismo se identificaba con la “amenaza del comunismo”, obsesión de la época de la Guerra Fría. Se trataba de un cambio ideológico y geopolítico en el ámbito mundial y, al reflejarlo, “la CNC adoptó una postura cada vez más individualista en cuanto a la tenencia y explotación de la tierra durante los años cuarenta, uniéndose incluso con los representantes de la propiedad privada en ciertos estados para ejercer presión sobre el gobierno a fin de que se estabilizara la tenencia de la tierra” (Sanderson, 1981: 138).

Preludio de todo esto fueron dos leyes sobre el ejido que en 1942 sancionaban las tendencias individualistas: el Código Agrario y la Ley de Crédito Agrícola. El primero confería gran importancia a otorgar a cada beneficiario el título ejidal correspondiente (lo cual distaba mucho de la propiedad plena y del derecho de propiedad en el sentido del derecho romano).

La importancia conferida a la seguridad de la propiedad y el otorgamiento de escrituras se sumó a la presión de la burguesía para que el go-

bierno extendiera "certificados de inafectabilidad" a los terratenientes. Dichos certificados eran garantías de que los propietarios nunca sufrirían la expropiación. Para proteger la industria ganadera, por ejemplo, los dueños de grandes extensiones de tierra obtenían certificados por suficientes terrenos de pastizal para 500 cabezas de ganado vacuno (o su equivalente en ganado menor) o para tierras de temporal. Cuando llegaban a mejorar sus tierras, los certificados de inafectabilidad seguían vigentes, con lo que algunos se hacían de propiedades muy sólidas. El otorgamiento de esos certificados era esencial para el espíritu de libre mercado del gobierno de Alemán. Varios párrafos del Código Agrario fueron reformados para promover la agricultura comercial. Por esta razón, al gobierno de Alemán se le llamó "periodo de contrarreforma". Sus iniciativas se verían fortalecidas en gobiernos posteriores. Tan sólo durante el régimen de Alemán se otorgaron 11,957 certificados de inafectabilidad a terratenientes privados, que resguardaban más de un millón de hectáreas de tierras de cultivo. Se otorgaron también 336 certificados que protegían 3'449,000 hectáreas de pastizales. Durante el mismo periodo, 56,108 campesinos recibieron 3 millones de hectáreas, buena parte de las cuales eran marginales y áridas (Gutelman, 1974: 115-119).

Desmantelamiento de los ejidos colectivos

Aunque las restricciones legales para dismantelar los colectivos ya existían a finales de 1942, las agencias sociales del gobierno no generalizaron su campaña en contra de ellos hasta 1947, a principios del régimen de Alemán (1946-1952). Representantes del Banco Ejidal, la Secretaría de Agricultura y otras agencias del gobierno trataron de convencer a los ejidatarios de que podían ganar más si trabajaban sus propias parcelas, sin pagar técnicos y administradores ni contribuir a un fondo destinado a la adquisición de maquinaria (Hewitt de Alcántara, 1978: 174).

La participación de México en la Segunda Guerra Mundial vino a fortalecer sus vínculos económicos y políticos con Estados Unidos. Esto ocurrió durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Sin embargo, como ya se vio, fue su sucesor, Miguel Alemán, el encargado de extender a México la Guerra Fría. Fue impresionante la manera en que el endurecimiento de las posturas ideológicas afectó a la estructura agraria mexicana. No sólo se retiró el apoyo financiero y técnico a los colectivos, sino que el gobierno pasó por alto los esfuerzos de los ejidos para convertirse en empresas autogestionarias. Durante este periodo hubo un fuerte gasto federal destinado a la infraestructura de riego (lo que transformó en buena medida antiguos pas-

tizales en terrenos de cultivo). Durante el alemanismo se dio un fuerte impulso a la agricultura capitalista en gran escala. No fue casual que se eligiera el riego como principal vehículo de modernización de la agricultura: era la infraestructura más necesaria para el grupo de presión agrícola más fuerte del país: los empresarios del árido noroeste de México (Sander-son, 1981: 154).

Una de las consecuencias más lamentables de la virtual cruzada en contra del ejido colectivo fue que incluso aquellos que habían sido productivos empezaron a desintegrarse, proceso que nunca se revertiría. En el periodo comprendido entre 1938 y 1943 los ejidos (tanto individuales como colectivos) aventajaban en 9 por ciento de la producción por hectárea a las haciendas privadas. Después de que el Estado retiró su apoyo a los colectivos, y de hecho comenzó a boicotearlos, ocurrió un notable retroceso de la producción. Hewitt de Alcántara (1978) y Siles-Alvarado (1968) aportan cifras parecidas que muestran rendimientos disminuidos de la producción del periodo poscardenista. Entre 1951 y 1955 el sector privado comenzó a mostrar rendimientos superiores en comparación con los ejidos financiados por el Banco Ejidal. En 1956-1960 se acentuó la ventaja del sector privado (Siles-Alvarado, 1968: 27-44). En 1960 las propiedades privadas superaban a los ejidos en un 25 por ciento de su rendimiento (Hewitt de Alcántara, 1978: 191).

La fuerza y el modo de atacar a los colectivos variaban de una a otra región. La ofensiva era de lo más grave cuando existía una burguesía agraria local que propugnaba la contrarreforma. En La Laguna, el Estado llegó a controlar la mayor parte de la producción ejidal, sobre todo a través del Banco Ejidal (hoy Banrural, Banco Nacional de Crédito Rural, desbandado por el gobierno de Vicente Fox en 2003). En El Yaqui, la burguesía agraria se consolidó merced a la ayuda de grandes inversiones públicas en infraestructura de riego, cuando dicha infraestructura era negada a los ejidatarios. Durante 10 años Atencingo fue el único ejido colectivo del estado de Puebla bajo el control del Estado. Representaba una especie de isla de capitalismo de Estado en un mar de unidades campesinas de producción de subsistencia, la mayor parte de las cuales contaban sólo con la mano de obra familiar.

Las políticas de Alemán consolidaron la orientación del sector privado que sigue prevaleciendo en México, aunque se dio una breve interrupción a esa continuidad durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). Además de hacer una fuerte inversión en proyectos de riego a gran escala en beneficio de las grandes empresas agrícolas, la presidencia de Alemán transfirió al sector privado gran parte del crédito rural del ejido, dando

un fuerte impulso a los centros de mejoramiento de semillas y producción que a la larga se convertirían en pieza clave de la Revolución verde e hizo hincapié en la producción para la exportación a costa de reducir la producción de alimentos para el mercado interno (Sanderson, 1981: 145, 1986). Todas estas políticas eran congruentes con la consolidación de la burguesía industrial y la transformación de una alianza vigorosa con su contraparte agraria.

A mediados de los años setenta el Estado intentó revitalizar el ejido, pero esta vez bajo su estricto control. Durante el periodo de Luis Echeverría se establecieron unos cuantos colectivos más, pero distaban mucho de las cooperativas autogestionarias y democráticas que había fomentado Cárdenas. Eran más bien una variedad de empresa regida por el Estado (Warman, 1980).

La política ejidal de que se ha tratado hasta el momento se refiere sobre todo a los ejidos organizados originalmente como "colectivos" durante el cardenismo. Sin embargo, este tipo de organización sólo se implantó en lugares donde las haciendas modernas habían sido expropiadas. Como se mencionó arriba, en 1970 los colectivos constituían sólo el 12 por ciento de los ejidos. ¿Qué ocurrió con la mayor parte de los ejidos que desde el principio se organizaron de manera individual?

Unos cuantos ejidatarios se las arreglaron para salir adelante con sus parcelas individuales, rentando a menudo sus parcelas a otros ejidatarios. Pero eso ocurría excepcionalmente. Como la mayor parte de los ejidos estaban ubicados en zonas de temporal, económicamente tenían peor suerte que los colectivos. De hecho, los ejidos individuales constituían un sector minifundista de subsistencia.

Ann Craig (1983) documentó la historia agraria de Los Altos de Jalisco como caso ilustrativo del sector minifundista. La autora argumenta de manera convincente que los ejidos de esa región son representativos de los de la mayor parte del país. Como lo hace ver, Los Altos es una región "signada por la pobreza del suelo y lluvias muy variables, catolicismo devoto, política conservadora y economía basada en la diaria faena del campo, cultivo de maíz, frijol y chile en pequeña escala" (1983: 13).

El desempleo en Los Altos sigue siendo un problema grave, y hoy día existen más jóvenes y familias sin tierra que ejidatarios en la mayor parte de las municipalidades de la región (Craig, 1983: 245). La agricultura ha significado tan pocas recompensas y tantas dificultades que los jóvenes hablan ahora más de la necesidad de otras fuentes de empleo que sobre la tierra. Estos sentimientos se reafirman merced a experiencias laborales cortas en los centros urbanos de México y Estados Unidos. En este tipo de regio-

nes agrícolas la gente del campo tiene en alta estima el trabajo asalariado, pero éste no existe en cantidad suficiente. Por el contrario, la clase hacendada de la región se adaptó rápidamente a las condiciones posteriores a la reforma agraria y al paradigma tecnológico de la Revolución verde, que tiende a desplazar la mano de obra. Sus miembros siguen siendo acaudalados.

Monique Nuijten (1998) ofrece una descripción detallada del funcionamiento actual del ejido en el sur de Jalisco y sus relaciones con el Estado. Su historia se asemeja mucho a la de Los Altos de Jalisco. Por su parte, Gabriel Torres (1997) ofrece un análisis microsociológico sobre las “formas cotidianas de resistencia” (según la frase de James Scott en inglés, *everyday forms of resistance*) de los trabajadores tomateros en el sur de Jalisco. Para el caso del estado de Michoacán, John Gledhill (1995) discute las estrategias de migración hacia los Estados Unidos por parte de los campesinos pobres que no encuentran trabajo bien remunerado en sus regiones.

¿Son económicamente productivas las pequeñas operaciones del campo?

Algunos economistas han defendido la reforma agraria mexicana argumentando que la “productividad social” de la pequeña parcela es mayor que la de las grandes propiedades (Barchfield, 1979; Dvoring; 1969). Ellos suponen que los costos laborales familiares pueden calcularse como nulos para el sector ejidal y las propiedades privadas de cinco o menos hectáreas, donde los miembros de la familia aportan la fuerza de trabajo requerida. Así pues, calculan una relación inversa entre el tamaño de la unidad y la productividad de la tierra. Se reconocen costos laborales de “productividad social” sólo en el caso de las empresas capitalistas, donde los salarios son monetarios y suponen un gasto de operación para el patrón. Su justificación para hacer esa suposición es que, en sociedades como la mexicana, donde existe una oferta de trabajo casi “ilimitada”, los costos de oportunidad son virtualmente nulos. Dvoring reconoce que la mayor producción por hectárea de los ejidos y minifundios se debe a que en ellos el trabajo es más intensivo.

En este enfoque no se tienen en cuenta las consecuencias financieras para la unidad económica individual, sino tan sólo los aspectos de productividad “social” o macroeconómica. Como lo puede demostrar la experiencia mexicana de las últimas 4 décadas, este tipo de enfoque padece de una gran miopía, incluso en el nivel macroeconómico. A la larga, lo que parecía ser macroeconómicamente productivo acabó en una crisis agraria.⁵

⁵Una crítica más amplia de esta postura puede verse en Roger Bartra (1974a, 1993) y Roger Bartra y Otero (1988).

Para la economía campesina, darle trabajo gratis a la sociedad ya llegó a su límite. Esto se demostró con el movimiento agrario de principios de los años setenta, y sus signos tomaron un cariz mucho más radical en los noventa con el levantamiento zapatista y a principios del tercer milenio con el movimiento El Campo no Aguanta Más. La consecuencia más dramática de la crisis agraria es que México prácticamente ha perdido su soberanía alimentaria y también su soberanía laboral, en el sentido de que una gran cantidad de sus trabajadores deben emigrar a los Estados Unidos para sobrevivir (Bartra, A., 2004; Delgado Wise, 2004).

La reforma agraria, pues, no fue capaz de resolver los problemas de los campesinos pobres de México. El desarrollo capitalista expulsó a gran número de trabajadores del campo, en tanto que el crecimiento industrial no ha sido suficiente para absorberlos productiva y remunerativamente. Las expectativas optimistas que tenían los políticos en los años cuarenta sobre la industria y el empleo nunca se realizaron en las proporciones necesarias. Mucha gente del campo se ha visto forzada a enfrentar la contrarreforma y un proceso de industrialización incapaz de absorber productivamente su fuerza de trabajo. El resultado neto, como se verá en el capítulo 4, ha sido la polarización social. Pero antes de pasar a este tema, nos ocuparemos de las reformas más recientes a la legislación agraria en México.

El globalismo neoliberal y las nuevas políticas agrarias

En el capítulo 2 se presentó la intervención del Estado como una de las principales variables que determinan la formación política de las clases en el campo mexicano. Dependiendo de si favorece o no la reproducción social de los productores agrícolas directos, el resultado político será el de la creación o consolidación de organizaciones de tipo hegemónico-burgués, de oposición, o popular-democrático. Esto se vio claramente desde los años treinta hasta los ochenta, como se abundará en los estudios de caso más adelante. Desde principios de esta última década, sin embargo, los nuevos vientos nacionales e internacionales obraron cambios importantes en el enfoque estatal respecto de su propia manera de intervenir. Se venía la hora de la ideología del globalismo neoliberal (Otero, 1996a, 2004). De un modelo que promovía una economía enfocada hacia el mercado interno, basada en el proteccionismo, la intervención del Estado en la economía, los subsidios y el financiamiento del déficit público, se pasó a una estrategia diametralmente opuesta.

Desde 1982, los gobiernos tecnocráticos han adoptado una serie de medidas, muchas de ellas dramáticas, para reubicar la inserción del país den-

tro de la economía internacional. Ahora las metas fundamentales son eliminar la intervención directa del Estado en la economía, el déficit público, los subsidios y el proteccionismo, y promover las fuerzas del mercado, la competencia internacional y la inversión extranjera. Buena parte de esta reorientación “neoliberal” de la política económica hacia una dinámica orientada por el mercado ha sido impuesta desde fuera, vía los paquetes de “ajuste estructural” que las autoridades mexicanas tuvieron que firmar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para obtener préstamos durante los años ochenta. Sin embargo, es claro que una buena parte del sector privado de México y las autoridades gubernamentales han apoyado dicha reorientación (Otero, 1996a; Valdés Ugalde, 1996).

De todas las reformas neoliberales que se han introducido desde 1986 y consolidado durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000) y Vicente Fox (2000-2006), las más contundentes son las encaminadas a transformar las relaciones sociales, económicas y políticas en el campo mexicano (Bartra, A., 2004; Encinas R., De la Fuente, Mackinlay y Romero, 1995; García Zamora, 1997; Hewitt de Alcántara, 1994). Establecido bajo la reforma agraria, el sector ejidal ha sido aquél donde el Estado ha intervenido en la mayor parte de las fases de producción y distribución; desde el planeamiento y suministro de insumos hasta la comercialización. Dicha intervención es ahora reemplazada por el mercado como principal mecanismo para la asignación de recursos. Todos los subsidios a los precios de las cosechas y los insumos agrícolas habrán sido gradualmente eliminados hacia el año 2009, el crédito ya se ha reducido sustancialmente (Myhre, 1996, 1998), la mayor parte de las agencias comerciales del Estado han ido desapareciendo poco a poco y la regulación directa de los precios ha sido reemplazada por el libre comercio de la mayor parte de los cultivos (Cornelius y Myhre, 1998a). A partir de 2003, por virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya sólo tres productos agrícolas siguen con algún tipo de protección en México: el maíz, el frijol y la leche. Todos los demás productos han quedado liberalizados y sujetos a la competencia internacional, a pesar de que el vecino país del norte ha legislado apoyar a sus agricultores con subsidios de 183,000 millones de dólares para el periodo de 2002-2012. Lo que esto significa es que los productos estadounidenses aparecen artificialmente con menores precios en el mercado internacional, y convierten a los mexicanos en “poco competitivos”. El resultado, de nuevo, es la quiebra masiva de nuestros campesinos y agricultores medios y grandes.

En el resto de este capítulo se estudian las repercusiones socioeconómicas de estos cambios en la sociedad rural mexicana. Habiéndose abandona-

do la dirección por parte del Estado, las nuevas políticas destacan las fuerzas del mercado, la productividad y la rentabilidad como los criterios clave de los productores al decidir acerca de la asignación de recursos. Las nuevas políticas de ajuste estructural han estado encaminadas a ubicar a México en la situación de competir en la economía mundial y adecuar su agricultura a los requerimientos del TLCAN y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero las nuevas políticas agrícolas probablemente profundicen aún más la polarización social en el campo (véase el capítulo 4), ya que no es probable que el resto de la economía crezca tan rápidamente como para absorber la fuerza laboral que se ha vuelto innecesaria en la agricultura. De hecho, a finales de 2001, el entonces secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, reconocía que el TLCAN había tenido efectos adversos en la economía mexicana, en particular en el campo (Muñoz *et al.*, 2001).

Si bien en otro tiempo el Estado esperaba que las agroindustrias se comportaran conforme a criterios capitalistas, la mayoría de los agricultores se acostumbraron a que interviniera el Estado, con lo cual se anulaban las señales económicas del mercado. Hoy día, la mayoría de los agricultores mexicanos enfrentan un grave dilema: se enfrentan a presiones cada vez mayores que los orillan a plegarse a las fuerzas del mercado, pero no disponen del capital ni están acostumbrados a comportarse con arreglo a las señales del mercado y los criterios de rentabilidad. Así que puede esperarse que las nuevas políticas agrícolas den lugar a una nueva ola de quiebras que obliguen a los campesinos a vender sus tierras y expandan las filas del desempleo en las ciudades. De hecho, el excedente de fuerza de trabajo resultante de las quiebras sobrepasará con mucho la "función" normal del ejército de reserva de mano de obra en la acumulación del capital.

Tal "liberación" de trabajadores de la agricultura en quiebra tendrá un efecto triple. En primer lugar, habrá un proceso de concentración de la tierra en un número aún más reducido de propietarios, las tierras marginales se abandonarán indefinidamente, mientras que otros campesinos seguirán cultivando a un mayor costo social y ambiental. Por lo que hace al costo social, por ejemplo, los miembros de la familia que no habían tenido mayor injerencia en el cultivo de subsistencia se verán forzados a intensificar su participación agrícola, por encima de las otras tareas que contribuyen a la reproducción familiar, debido a la mayor participación de los otros miembros de la familia en actividades remuneradas. Sin duda, esto aumentará la "feminización" de la producción agrícola —fenómeno en aumento desde los años setenta— así como la intensificación del trabajo de los niños en edad escolar y las personas mayores (Preibisch, 1996).

En segundo lugar, la expansión de los trabajadores desempleados permitirá que se mantengan salarios bajos merced a la pura fuerza del mercado, más que por recurrir a medidas políticamente represivas. Los salarios bajos, a su vez, seguirán atrayendo nuevas oleadas de inversión extranjera a las industrias y servicios, en el marco del TLCAN.

En tercer lugar, sin embargo, el exceso de población desempleada respecto de las necesidades funcionales del “ejército industrial de reserva” en la acumulación del capital probablemente exacerbará las tensiones sociales que ya se palpan en la sociedad mexicana, actuando posiblemente como un factor disuasivo para la nueva inversión extranjera.

El fin de la reforma agraria

Durante el periodo de la agricultura regida por el Estado, la mayoría de los campesinos eran leales al PRI y al gobierno a cambio de garantías sociales e ingresos mínimos (Gates, 1993; Foley, 1991; Otero y Singelmann, 1996). Hasta 1992, el artículo 27 de la Constitución mexicana había reflejado una firme alianza entre el Estado y los campesinos, la cual duró más de 70 años; se anticipó a la reforma agraria al conferirle al Estado el derecho de redistribuir la tierra a los campesinos pobres y trabajadores rurales. Mediante agencias y programas supeditados al gobierno, la mayoría de los agricultores llegaron a depender de la intervención estatal en la agricultura, desde la asistencia técnica hasta los préstamos para comercializar y procesar los productos agrícolas. Pero fue el sector ejidal el que llegó a depender más del Estado, reforzando así la histórica alianza entre el Estado y los campesinos (Warman, 1976).

Con el programa de reforma agraria, hasta 1988 se habían formado 28,058 ejidos o comunidades agrarias. Eran éstas las dos formas de tenencia de la tierra que surgieron a raíz del artículo 27 de la Constitución de 1917 y sus leyes reglamentarias. La suma de los ejidos y las comunidades agrarias conformaron la reforma agraria o el sector “social” con un total de 3'070,906 individuos que tenían los derechos sobre 95'108,066 hectáreas. Tal superficie equivale a 54 por ciento de las tierras forrajeras, agrícolas y forestales del país. Sólo el 21 por ciento de esta tierra, sin embargo, es adecuada para la agricultura. En parte debido a esto, hasta el 73 por ciento de las tierras del sector de la reforma agraria es de propiedad comunal, ya sea en ejidos o comunidades agrarias, en modalidades como las tierras de pastizales o forestales (DeWalt, Rees y Murphy, 1994: 4; Mackinlay, 1994: 18).

Aunque la agricultura mexicana experimentó un auge relativo desde la segunda mitad de los años treinta hasta finales de los sesenta, sobrevino una crisis grave tanto de la agricultura campesina como de la capitalista a

finales de los años sesenta (Bartra, R. y Otero, 1988; capítulo 4 del presente libro). En vista de esta crisis, algunas organizaciones del sector privado propugnaron vehementemente la privatización de las tierras ejidales, argumentando que ello les proporcionaría a los propietarios de tierras la seguridad en la tenencia: así los terratenientes dejarían de sentirse amenazados por la reforma agraria, en tanto que los propios ejidatarios dejarían de sentirse dependientes del Estado (Coparmex, 1982).

Pero no fue hasta 1992 cuando una reforma del artículo 27 declaró formalmente el fin de la reforma agraria. Dicha reforma da pábulo a la privatización de las tierras ejidales, permite el alquiler de la tierra y su uso como garantía de préstamos de bancos privados y fomenta la formación de asociaciones entre ejidatarios y empresas privadas (Barry, 1995; Cornelius, 1992; DeWalt, Rees y Murphy, 1994; Randall, 1996; Cornelius y Mhyre, 1998b). Como complemento a estas reformas legales, se ha puesto en operación un nuevo conjunto de políticas para eliminar los subsidios agrícolas, redefinir criterios para el crédito rural por parte del banco oficial (Banrural), y disolver o reducir drásticamente los subsidios a la agricultura a cargo de agencias reguladoras del Estado.

En la práctica, el Estado mexicano ya había puesto fin a la reforma agraria durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982), cuando el principal interés de la política agraria se concentraba en aumentar la producción. Por otra parte, en ese gobierno también se pusieron en marcha dos políticas agrícolas con repercusiones contrastantes en el fomento de la producción campesina: el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y la Ley de Fomento Agropecuario (LEA). Con el SAM se trataba de aumentar la producción apoyando a los campesinos con tierras de temporal, en tanto que la LEA promovía la asociación entre ejidatarios y capitalistas que modernizaran la agricultura mediante nuevas inversiones. A final de cuentas, sin embargo, los principales beneficiarios del SAM fueron los agricultores medianos y grandes, no los pequeños y dedicados a la agricultura de temporal que habían sido el objetivo original (Redclift, 1981; Fox, 1993).

En contraste con el SAM, la LEA estableció abiertamente las condiciones legales para que el capital privado ingresara francamente en la agricultura. Se suponía que esta ley complementaría el discurso oficial tocante a la reforma agraria, el cual se centraba en declarar que ya no había más tierras que repartir. En consecuencia, la población rural habría de concentrarse en hacer más productivas sus tierras inyectándoles inversiones de capital en asociación con el sector privado. Durante los años ochenta, sin embargo, no más de 110 asociaciones emergieron conforme a estos lineamientos de la LEA (DeWalt, Rees y Murphy, 1994: 57).

El papel cambiante del Estado

Hasta finales de los ochenta, el Estado mexicano hacía sentir su presencia en la agricultura y la controlaba de muchas maneras. Aparte de las secretarías de Estado relacionadas con este sector, había muchos otros “aparatos económicos del estado” dedicados a la agricultura. Entre ellos estaban el Banrural, la Conasupo (agencia encargada de comprar los productos básicos y de distribuir los alimentos populares, entre ellos los productos básicos), y Anagsa (compañía estatal aseguradora de la producción agropecuaria) (Rello, 1986a, 1986b). Fundadas sobre todo durante el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976), estas agencias se habían convertido en grandes burocracias evidentemente corruptas. En lugar de ayudar a la producción campesina, se habían vuelto medios eficaces de control económico y político del campo (Gordillo, 1988).

Al tiempo que se eliminaban o modificaban radicalmente la mayoría de las agencias relacionadas con la agricultura, desaparecían gradualmente los subsidios a los precios de sus productos e insumos. Los agricultores con las mejores tierras tendían a beneficiarse desproporcionadamente, y las cadenas comerciales de productos agrícolas aumentaban sus precios. Así pues, los consumidores también se vieron negativamente afectados por las antiguas formas de subsidio que a menudo resultaron en la elevación de los precios de los cultivos y alimentos básicos. Como estos precios tendían a estar por encima de los precios internacionales de los años setenta, los antiguos subsidios introdujeron una grave distorsión en los productores proveedores del mercado, quienes tenían costos de producción más elevados. Esta situación llegó a ser claramente incongruente con la tendencia a la globalización y a la integración económica de América del Norte, cuya principal filosofía se basa en el libre mercado, la mayor eficiencia y la competitividad internacional.

Otro tipo de distorsión originada por los precios de garantía tenía que ver con la selección de los cultivos: algunos agricultores tendían a adoptar cultivos subsidiados en tierras que se prestaban mejor para otros cultivos más redituables. Ejemplo de esto es que en las regiones norte y noroeste, con grandes extensiones de riego, el suelo destinado al cultivo del maíz aumentó de 451,000 hectáreas en 1989 a 907,000 en 1992 (SARH, s/f: 20). A la inversa, los agricultores pobres emprendieron la producción de maíz a través de la deforestación o del recurso de cultivar terrenos degradados y otras tierras marginales.

En los últimos años, muchas agencias del gobierno han modificado fundamentalmente sus funciones reguladoras, o bien han desaparecido por

completo. Banrural primero se convirtió en un banco más que podía otorgar préstamos para el campo, como todos los demás bancos, con criterios claramente comerciales y de rentabilidad, para luego desaparecer en el inicio de la administración de Vicente Fox. La que fuera su función social, expresada en la asistencia a los campesinos en desgracia (Gates, 1993, 1996) fue absorbida por Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad) durante la administración de Carlos Salinas. Este programa se inauguró el día en que Salinas tomó posesión como Presidente de México, el 1o. de diciembre de 1988. Su objetivo era combatir la pobreza mediante aportaciones del Ejecutivo a través de los presidentes municipales (Dresser, 1991; Cornelius, Craig y Fox, 1994). Este programa sustituyó a muchas de las medidas de las organizaciones corporativistas afiliadas al PRI y vinculó directamente a los pobres del campo y la ciudad con el jefe del Ejecutivo federal. Como estrategia política, el programa constituyó una respuesta a la acalorada contienda electoral de 1988 y al surgimiento de la oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas (Mackinlay, 1994: 109).

Del mismo modo, Conasupo se dedicaba a finales de los años noventa todavía a la comercialización de los productos agrícolas, pero la política del Estado había cambiado para favorecer las iniciativas de los productores que cubran tales funciones. Además, Conasupo había dejado de absorber los costos de distribución y transporte; al contrario de lo que ocurría en el pasado, estos costos ahora se cargaban a los productores para incentivarlos a organizar sus propios esfuerzos de distribución.

Otras agencias del Estado que han sido completamente eliminadas incluyen las siguientes: la disolución del Imecafé, institución que se encargaba de planear y comercializar la producción cafetalera (Downing, 1988); y de Azúcar, S.A., que centralizaba la planeación, producción y distribución de la industria azucarera, incluida la administración de la mayor parte de los ingenios azucareros (Singelmann, 1993; Otero y Singelman, 1996). Como ocurrió con el Banrural, las funciones de la Anag-sa, compañía aseguradora de bienes agropecuarios que ha sido rebautizada como Agroasemex, se amoldan ahora a los criterios comerciales de las compañías privadas.

Las políticas agrarias neoliberales: Procampo

En 1993 se puso en práctica el Programa de Apoyo al Campo (Procampo) para apoyar el ingreso de los productores mediante subsidios directos, invirtiendo así la antigua norma de los subsidios agrícolas indirectos a través de precios de garantía de los cultivos y menores costos de los insumos. Con

estos últimos subsidios se beneficiaba a todos los productores por igual, independientemente de sus dotaciones de capital o de tierra, y se beneficiaba de manera desproporcionada a los agricultores en mejor posición económica. El objetivo de Procampo es entonces doble: fomentar la producción de productos agrícolas en que los agricultores mexicanos tengan una ventaja comparativa y enfocar los subsidios sólo a los productores que más los necesitan.

Se trata de alcanzar la primera meta proporcionando un apoyo fijo por hectárea a los productores que han cultivado alguno de los nueve productos básicos en cualquiera de los 3 años previos a 1993, año en que el programa se puso en marcha: maíz, frijol, trigo, algodón, soya, sorgo, arroz, cártamo y café. Los apoyos se dan directamente al ingreso de los productores, no a los precios de las cosechas o de los insumos, reduciendo así las distorsiones del mercado. Los productores seguirán recibiendo apoyo por un total de 15 años contados desde el inicio del plan en 1994, independientemente de que sigan plantando lo mismo o cambien la actividad productiva de sus tierras. Una de las condiciones es que la tierra siga dedicándose a actividades productivas que generen empleo. Al no fijar la cosecha a la que deberá dedicarse la tierra, se espera que los agricultores respondan a las señales del mercado y a la "vocación natural" de la tierra por lo que hace a la selección del cultivo. Durante los primeros 10 años, el apoyo por hectárea se fijará en términos reales, y a partir de entonces decrecerá gradualmente hasta llegar al año quince. A partir de 1994 desaparecieron todos los subsidios a los precios en México, excepto para el maíz y el frijol (De Janvry, Gordillo y Sadoulet, 1997).

El segundo de los objetivos de Procampo tiene la intención de atacar el grave dilema de los subsidios previos: de los 3 millones de productores agrícolas, 2.2 millones quedaban al margen de los precios subsidiados, ya que por lo general dedican una parte considerable de su producto —más del 58 por ciento— al autoconsumo. Por lo tanto, en la medida en que sus productos no se convertían en valores de cambio, es decir, que no llegaban al mercado, los subsidios en forma de apoyos al precio no podían alcanzar a este tipo de productores. En términos absolutos y relativos, la nueva forma de subsidio ha entrañado mayores gastos federales: en 1994 Procampo tenía un presupuesto de 11,700 millones de nuevos pesos, en contraste con 5,300 millones que se gastaron en 1993.

El principal objetivo de este cambio de política era hacer los ajustes necesarios para colocar a México en línea con los acuerdos internacionales y sus patrones de comercio. La mayor parte de los nueve cultivos considerados en Procampo también están subsidiados en los países de Norteaméri-

ca y Europa. Pero, en conformidad con acuerdos internacionales como el TLCAN y la OMC, tuvieron que respetarse dos principios básicos:

1. que los subsidios no impliquen una transferencia respecto de los consumidores; y
2. que el nuevo apoyo no tenga el efecto de convertirse en un apoyo al precio para los productores. La satisfacción de estos dos criterios garantiza supuestamente que los mercados agrícolas internacionales no se distorsionen con la política de apoyo (SARH, s/f: 25).

Otras expectativas de Procampo son que los productores cambien a las formas más racionales del uso de la tierra. Se espera que quienes actualmente sobreexplotan tierras marginales cambien a la "vocación natural" de esas tierras, como puede ser la producción forestal, evitando así la deforestación y la erosión. Por otro lado, los productores con mejores tierras optarán por cultivos más rentables, con ventajas comparativas, lo que aumentará la capacidad mexicana de exportación reduciendo la cantidad de productos agroquímicos empleados en la producción de maíz en tierras fértiles. En ambos casos se espera que el cambio dé por resultado prácticas más convenientes desde el punto de vista ambiental.

Pese a que Pronasol y Procampo representan considerables gastos presupuestarios para el Estado mexicano, ambos funcionan más como sistemas de asistencia social que como recursos que estimulan la producción (Covarrubias Patiño, 1996: 110). Por ejemplo, si bien Pronasol cubre unos 2.5 millones de hectáreas del cultivo de maíz por parte de pequeños productores pobres, todavía representa un préstamo por hectárea varias veces por debajo del concedido por Banrural (Appendini, 1994; De Janvry, Gordillo y Sadoulet, 1997). Además, Procampo es incapaz de reducir las desigualdades de ingreso ya existentes, debido al acceso disparado a las dotaciones de tierras. Recuérdese que los apoyos de Procampo se dan en términos fijos por hectárea, de manera que los que tienen más tierra reciben más. En efecto, según una encuesta realizada por el INEGI en 1994, el 70.5 por ciento de los ejidatarios que recibieron asistencia de Procampo se concentraba entre los que tenían parcelas en el intervalo de 1 a 5 hectáreas y obtuvo un promedio de 2.6 veces el apoyo del programa por hectárea. Los ejidatarios con parcelas promedio entre 6 y 10 hectáreas, que conformaban el 20.9 por ciento, recibieron un promedio de 7.7 veces; mientras que los que tenían más de 21 hectáreas y representaban sólo el 1.5 por ciento de ejidatarios recibieron 39 veces el apoyo del programa (Covarrubias Patiño, 1996: 109). No obstante lo anterior, Procampo llega a todos los productores de maíz que cultivan para su sub-

sistencia y en el pasado no se beneficiaban de los precios subsidiados. Pero las misérrimas cantidades de asistencia no pueden transformar el proceso productivo, amén de que amortigüen significativamente los golpes de la reestructuración de este sector y de la economía en general en virtud de sus vínculos con los mercados de trabajo y el de bienes de consumo.

Conclusiones

Las políticas neoliberales en la agricultura mexicana han introducido cambios radicales para los agricultores. Los productores directos han tenido que sufrir un violento despertar de los decenios de proteccionismo e intervención estatal en la agricultura. Esto no significa que hayan sido especialmente privilegiados en las décadas anteriores, pues la agricultura mexicana se había encaminado a subsidiar la expansión industrial desde los años cuarenta, manteniendo bajos los costos de vida urbanos. Privilegiar la ciudad significó un castigo cada vez menos soportable para los agricultores, quienes se veían atrapados entre crecientes costos y precios relativos de sus cultivos cada vez más bajos.

A mediados de los años sesenta, la agricultura mexicana entró en un periodo de grave crisis del cual todavía no se recupera y que dio como resultado altos grados de diferenciación social. En nuestros días, son pocos los agricultores con la preparación adecuada para competir con las normas internacionales de mercado. Así que podría esperarse que sobrevinieran tremendos desafíos para el semiproletariado agrícola mexicano en la era del TLCAN. Para el Estado, el principal reto sigue siendo político, en la medida en que las nuevas políticas han disuelto *de facto* y constitucionalmente las bases de la antigua alianza entre el Estado y los campesinos.

Procampo se planeó menos de un año antes de las elecciones presidenciales de 1994, principalmente como un sistema de seguridad continua en pro de los campesinos más pobres y a cambio de su lealtad política (Bartra A., 1996). Así, han surgido al menos dos dudas sobre el éxito del Estado en lo que se refiere a Procampo:

1. Es muy poco probable que los apoyos anuales de 250 pesos por hectárea (contados desde 1994) se conviertan en un programa de fomento a la producción para pequeños productores que por lo general se encuentran en el nivel de la infrasubsistencia. Más probable es que el Programa constituya un suplemento a Pronasol, con los matices de asistencia y electorales que los analistas han visto en este programa (Dresser, 1991; Cornelius, Craig y Fox, 1994).

2. Contrariamente a la intención declarada, los pequeños y grandes agricultores probablemente seguirán dedicándose a prácticas ambientalmente perjudiciales (DeWalt, Rees y Murphy, 1994). En el caso de los pequeños agricultores, no hay razón para creer que el pequeño apoyo al ingreso sea suficiente para disuadirlos de producir en tierras degradadas o deforestadas. De igual forma, los medianos y grandes agricultores pueden transferir y hasta aumentar el uso de productos agroquímicos al pasar del cultivo del maíz a otros más comerciales y convenientes para la exportación.

Así pues, el Estado enfrentará nuevos dilemas cuando se torne evidente el aspecto electorero y asistencial de dichos programas, una vez que esté claro que la mayoría de los productores rurales han sido relegados a los márgenes de la corriente del desarrollo económico. Como los nuevos programas del gobierno no bastan para convertirlos en campesinos-empresarios ni para dar salida viable al cultivo de la tierra en el agro, el nuevo reto del gobierno se presentará también en lo relativo al empleo insuficiente en la industria y los servicios. Tal insuficiencia es propensa a volverse socialmente explosiva, sobre todo después de más de 2 décadas de disminución de los ingresos reales para la mayoría de la población mexicana y un índice oficial de pobreza cercano al 50 por ciento. Está por verse el grado en que el actual decenio, ahora con la administración de Vicente Fox (2000-2006) ha de representar una repetición del anterior, pero esta vez a partir de una situación más empobrecida para la mayoría de los mexicanos. Lo más difícil de su reto es que, por ser el primer presidente de la oposición tras 71 años de dominación política del PRI, el pueblo mexicano ha puesto enormes expectativas en su gobierno. Como algunos analistas políticos lo han anticipado, habiendo entrado con una tasa de aprobación de más del 85 por ciento, la única dirección en que dicha tasa puede ir es hacia abajo. A mediados de su sexenio, la decepción es generalizada.

Habiendo iniciado su gobierno precisamente al comenzar el alentamiento de la economía estadounidense, Fox ha enfrentado sus primeros 3 años de gobierno con un crecimiento económico muy cercano al cero, sino a la franca recesión. Con el 2003, además, se inició el periodo de desprotección de casi todos los productos agrícolas mexicanos, como se mencionó más arriba. Esto ha detonado uno de los más grandes movimientos sociales en el campo, bajo el nombre de El campo no aguanta más.

Las demandas de este nuevo movimiento se resumen en una plataforma común titulada *Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano*, en la que se exige:

1. La moratoria al apartado agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
2. Un programa emergente para reactivar de inmediato el campo y otro de largo plazo para reorientar el sector agropecuario.
3. Una verdadera reforma financiera rural.
4. Un presupuesto para 2003 que destine cuando menos 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) al desarrollo productivo del agro y otro tanto para el desarrollo social rural.
5. Una política alimentaria que garantice a los consumidores que los bienes agrícolas son inocuos y de calidad.
6. El reconocimiento de los derechos y la cultura de los pueblos indios (Bartra, A., 2004).

Desafortunadamente el gobierno foxista se ha mostrado con mayores inclinaciones neoliberales que las de sus antecesores, de tal manera que es difícil concebir que vaya a hacer concesiones al nuevo movimiento agrario. Sobre todo, resulta muy remoto que se vaya a renegociar el TLCAN. Por lo tanto, el deterioro de las relaciones entre los campesinos y el Estado seguirá en caída estrepitosa, por lo menos en lo que resta de la administración de Fox. En todo caso, con los antecedentes histórico-sociales que aquí se han presentado sobre la reforma agraria y las nuevas políticas neoliberales, pasemos ahora a establecer cuáles han sido las transformaciones de la estructura socioeconómica en el campo.

Capítulo 4

Transformaciones agrarias: crisis y diferenciación social

A medida que la economía hace la transición de una economía paternalista y guiada por el Estado hacia una economía más descarnada y guiada por el mercado, las altas tasas de desempleo y la desigualdad en el ingreso serán hechos comunes de la vida.

(Bremner e Ihlwan, 1998: 47)

El PROPÓSITO de este capítulo es mostrar cómo se ha efectuado el proceso de descampesinización del agro mexicano tanto nacional como regionalmente. Me ocuparé de las principales causas y resultados de este proceso: la doble crisis de la agricultura capitalista y la economía campesina ha resultado en una importante diferenciación (o estratificación) social entre los campesinos. Tal diferenciación, sin embargo, no se ha traducido proporcionalmente en la expansión de las posiciones proletarias, ni en el campo ni en la ciudad. Más bien, el resultado es un semiproletariado creciente, escindido entre el trabajo asalariado y la producción campesina, que ha emergido como el grupo rural más numeroso. De tal suerte, conforme la economía campesina sigue deteriorándose, creando un proceso de descampesinización, la agricultura y la industria capitalistas han sido incapaces de proletarizar completamente a las masas que tienen un acceso cada vez menor a la tierra.

En la primera sección se trazan los contornos básicos de lo que hemos llamado la doble crisis de la agricultura mexicana, relativa una al sector capitalista y la otra a la economía campesina (Bartra, R. y Otero, 1988). Se examina atentamente esta doble crisis mediante un análisis de los cultivos comerciales en contraste con los cultivos de subsistencia. Este análisis se divide en dos periodos principales de política estatal. El primero, de 1940 a 1983, cuando prevalecieron las políticas de industrialización destinadas a sustituir importaciones, en una economía relativamente cerrada, con proteccionismo y subsidios a diversas industrias, incluyendo ciertos cultivos básicos. El segundo periodo va de 1984 a 1995, cuando se introducen en México las políticas económicas neoliberales que suponen un mercado abierto al comercio internacional así como a la inversión ex-

tranjera y la eliminación de la mayor parte de los subsidios (salvo para el maíz y el frijol). En la segunda sección se presenta el espectro de la diferenciación social de los productores agrícolas de México, con base en el censo de 1970. A continuación, comparando la situación de 1970 con la de 1960, muestro el grado en que la economía rural se había erosionado hasta ese año y cómo el semiproletariado constituía ya el grupo agrario más numeroso. Enseguida se enmarcan dentro de la misma gráfica los datos censales de 1960 y 1970, así como los datos de unas encuestas del sector ejidal llevadas a cabo en 1990 y 1994 (De Janvry, Gordillo y Sadoulet, 1997). Este ejercicio revelará que prevalece la estructura básica de la diferenciación, aunque comienza a ocurrir cierta reconcentración de la tierra entre los estratos altos de los productores directos, en tanto los estratos medios son los que más dependen de los ingresos no agrícolas, y los más pobres –es decir los semiproletarios– siguen dependiendo básicamente de la agricultura. Por último, se hace una breve revisión de cómo el desarrollo capitalista ha afectado regionalmente al espectro de la diferenciación social y se presenta el contraste entre los estados donde se localizan las cuatro regiones cuyo desarrollo se analiza con profundidad en los siguientes cuatro capítulos.

La doble crisis de la agricultura mexicana

La doble crisis de la economía rural mexicana, de la agricultura capitalista por un lado y la campesina por el otro, ha resultado en la diferenciación social entre el campesinado dentro de un capitalismo que no ha incrementado proporcionalmente a las posiciones de la clase proletaria. Conforme la economía campesina sigue deteriorándose, ocurre la descampesinización: números cada vez mayores de campesinos son separados de sus medios de producción y orillados a enfrentar un mercado de trabajo asalariado incapaz de absorberlos de manera productiva (Coello, 1981).

El primer problema está en la mayor dependencia del mercado de todas las unidades de producción campesina. Es decir, a mayor mercantilización de su economía, se da una comercialización mayor de la producción agrícola (en contraste con la proporción que se dedica al autoconsumo). De 1940 a 1970, la proporción del producto vendida por todas las unidades de producción del país aumentó del 53.6 al 87 por ciento. Si este salto parece impresionante, lo es más aún si se considera que la mayor parte del cambio ocurrió durante el primer decenio del periodo. De hecho, el porcentaje de producción vendido en el mercado aumentó del 53.6 por ciento en 1940 al 82.1 por ciento en 1950. Después de la reforma

agraria cardenista, la mayor parte de la producción agrícola pasó por el mercado nacional.

Existen, desde luego, diferencias en la proporción de la producción total vendida entre los diversos tipos de tenencia de la tierra (véase cuadro 1). La clasificación de la tenencia de la tierra del censo mexicano se compone de tres categorías: 1. unidades de producción privada con más de 5 hectáreas, 2. ejidos, y 3. unidades privadas de 5 hectáreas o menos. Esta última categoría corresponde al sector minifundista. En general, las unidades de producción privada con más de cinco hectáreas vendieron siempre un mayor porcentaje de su producción que cualquier otro tipo de productor; la mercantilización de estas unidades de producción privadas se vio seguida muy de cerca por las unidades ejidales. Las propiedades privadas con cinco hectáreas o menos, la gran mayoría de las cuales son unidades campesinas minifundistas, presentan un comportamiento más errático. En 1950 vendieron una proporción mayor de su producción que los ejidos (78.7 por ciento frente a 72.4 por ciento), pero en 1960 el porcentaje disminuyó a 67, sólo para aumentar nuevamente a 81 por ciento en 1970.

CUADRO 1

Porcentaje de producción vendida por tipo de tenencia de la tierra, 1940-1970

<i>Tipo de tenencia</i>	<i>1940</i>	<i>1950</i>	<i>1960</i>	<i>1970</i>
Total	53.6	82.1	82.0	87.0
>5 ha.	55.7	89.4	87.0	88.2
<5 ha.	40.0	78.7	67.0	81.0
Ejidos	54.2	72.4	77.0	86.2

Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, *Censo agrícola-ganadero y ejidal*, 1940; 1950; 1960; 1970 (México: DGE, s/f).

La dependencia del mercado, sobre todo después de finales de los años sesenta y principios de los setenta, hizo más vulnerable que antes a la economía campesina. La mayor comercialización de la agricultura demostró los antagonismos de una economía campesina que se desarrolla en un contexto capitalista.

Los años setenta comenzaron con disminuciones de la producción de la mayoría de los cultivos. La producción de maíz (estancada a mediados de los años sesenta) se vino abajo en 1972 y la producción no volvió a ser real-

mente satisfactoria hasta principios de los ochenta, y eso sólo durante un breve periodo. En cuanto al frijol, pudo observarse una pauta de comportamiento similar (Bartra y Otero, 1988).⁶

También sufrieron crisis cultivos comerciales como el algodón, el ajonjolí, la caña de azúcar y el jitomate a principios de los años setenta. No hubo recuperación del algodón ni del ajonjolí durante la primera mitad de los años ochenta. Los cultivos comerciales que tuvieron mejor suerte son los relacionados directamente con la industria de la exportación: cítricos, piñas y fresas: "todos estos productos crecieron rápidamente, mientras que el sector de los alimentos básicos apenas tuvo crecimiento alguno" (Sanderson, 1986: 279). El crecimiento de estos cultivos comerciales, a los que podríamos referirnos como "alimentos de lujo", junto con el crecimiento de la producción de granos para forraje, expresan la internacionalización de la agricultura mexicana y la tendencia a sustituir cultivos alimentarios por cultivos forrajeros, como el sorgo y la alfalfa (Sanderson, 1986; Barkin y DeWalt, 1989).

Las ciudades mexicanas consumen grandes cantidades de maíz, posibilitando que los campesinos que lo producen y venden compren los productos industriales indispensables para su sustento en el campo. En las unidades campesinas, por lo general se almacena el maíz en previsión de la carestía. Así, cuando aumenta el precio del maíz, se requiere una menor cantidad del mismo para lograr el equilibrio entre el trabajo y el consumo (Chayanov, 1974). Pero si cae el precio del maíz, las familias campesinas deben duplicar su esfuerzo laboral para obtener mayores cantidades del grano, en virtud de que, dada la escasez de capital y la baja calidad de la tierra, los campesinos no pueden fácilmente cambiar su producción hacia otras cosechas. Cambiar, por ejemplo, del cultivo del maíz al del tomate, cuyos precios fluctúan bruscamente, significaría una gran inseguridad para la economía campesina. Y como el acceso a la tierra está generalmente restringido, a los campesinos no les queda más que utilizar en mayor medida el único recurso que tienen a la mano: la fuerza de trabajo familiar.

El uso de este recurso, sin embargo, también tiene limitaciones cuando su productividad decae por debajo de cero. En caso de contratarse mano de obra, dicho límite se alcanza cuando la productividad laboral iguala al salario. Quienes suponen que el valor de la fuerza de trabajo es cero en la unidad campesina (Barchfield, 1979; Dvoring, 1969) en realidad están atendiendo a su límite inferior, debajo del cual la producción agrícola no tiene sentido para los agricultores campesinos. Siendo que los campesinos gene-

⁶Este artículo escrito con Roger Bartra contiene nuestros acuerdos sobre cómo caracterizar la estructura agraria desde el punto de vista económico. Nuestros principales desacuerdos sobre las implicaciones políticas, sin embargo, pueden verse en Otero (1990) y los capítulos 7 y 9 de este libro.

ralmente sacrifican la renta de sus tierras y a menudo parte de su "salario" autoimputado, suponer que éste es cero desde el principio sitúa de hecho el análisis en el punto de la quiebra campesina.

En unos cuantos años la agricultura de México pasó de proporcionar la considerable cantidad de divisas necesarias para la industrialización a no poder ni siquiera alimentar a su propia gente (Sanderson, 1986). Por esta razón, el gobierno de José López Portillo (1976-1982) puso en vigor el Sistema Alimentario Mexicano o SAM en 1980, con el fin de alcanzar la autosuficiencia en la producción de cereales básicos (*Nueva Antropología*, 1981; Barkin y Suárez, 1982; Fox, 1993). Aunque las declaraciones oficiales pretendían que la autosuficiencia se derivaría de fortalecer la economía campesina en las zonas de temporal, la mayor parte de los aumentos en la producción ocurrieron realmente en los distritos de riego. Esto indica que los subsidios gubernamentales para ciertos insumos eran tan altos que los miembros de la burguesía agraria no dudaron en sacar provecho de los granos básicos. De hecho, la producción aumentó notablemente en los cultivos de frijol y maíz en 1980 (Redclift, 1981).

A la postre resultó que los mexicanos pagaron un precio muy alto por tales aumentos en la producción, ya que suponían enormes subsidios. Y aunque hubo cierto progreso en la autosuficiencia alimentaria, éste fue pasajero: los resultados de 1982 fueron desalentadores debido en parte a que las lluvias fueron menos frecuentes de lo normal. Cuando Miguel de la Madrid asumió la Presidencia, en diciembre de 1982, se puso fin al SAM.

Pese a que en la década de 1960 pudo presenciarse una gran redistribución de tierras, la erosión de la economía campesina fue considerable. Parte de la razón fue que las tierras que se distribuyeron durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) fueron de muy mala calidad para la agricultura. Aunque se distribuyeron 25 millones de hectáreas, cantidad mayor que la distribuida durante el gobierno de Cárdenas, sólo 2.4 millones o el 10 por ciento eran cultivables. En cambio, Cárdenas distribuyó cerca de 18 millones de hectáreas de las cuales casi 5 millones o 28 por ciento eran laborables. Así pues, la reforma agraria de Díaz Ordaz redujo la proporción de tierra ejidal laborable del 23.2 por ciento en 1960 a 18.3 por ciento en 1970 (Gutelman, 1974).

En 1970, gran parte de los pequeños productores agrícolas ya no era capaz de subsistir sobre la única base de sus tierras. El proceso de semi-proletarización ya estaba en auge: un número cada vez mayor de productores rurales se vio atrapado entre la producción campesina insuficiente y un mercado de trabajo asalariado que ofrecía pocas oportunidades de otro tipo de empleo.

El decenio de 1970 vio la explosión simultánea de dos crisis: un retroceso acelerado en los estándares de vida de los pequeños campesinos y una caída de los precios de exportación que afectó profundamente al sector capitalista. Políticamente, esto dio como resultado una renovada tendencia de los productores del campo a luchar por la tierra (Bartra, A., 1979a, 1979b; Otero, 1981, 1983).

Diferenciación estructural de los productores agrícolas directos

El objetivo de esta sección es presentar un análisis de la diferenciación social en el agro mexicano, resultante de la doble crisis. La información empírica proviene de los diversos estudios que se precisan más adelante. La discusión metodológica se centra en el estudio realizado por un grupo de investigadores de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas, o CEPAL, con base en los censos mexicanos de 1970 de población y agricultura (CEPAL, 1982). El proyecto fue dirigido por el economista Alejandro Schejtman. Aunque los datos son viejos, este estudio demuestra el grado en que ya se había diferenciado el sector campesino hacia 1970, cuando la crisis agraria de México era ya evidente tanto para los políticos como para los analistas. Además, al comparar este estudio con uno anterior basado en el censo de 1960, demostraré que existe una clara tendencia de los sectores medios del campesinado a desaparecer.

La metodología de este estudio también ha sido la base de otras dos encuestas realizadas por la CEPAL en los años noventa: una en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1990, y la otra con la Secretaría de la Reforma Agraria en 1994, según el informe de De Janvry, Gordillo y Sadoulet (1997).

Uno de los objetivos del estudio de la CEPAL fue elaborar una tipología de los productores agrícolas para poder distinguir entre los agricultores campesinos y los empresariales, así como los diversos estratos de estas amplias categorías. El supuesto de la CEPAL fue que las unidades de los pequeños campesinos trabajan conforme a un esquema diferente del de las empresas agrícolas capitalistas. En tanto estas últimas buscan maximizar las *ganancias* como principal objetivo de la producción, las unidades campesinas se proponen maximizar los rendimientos de la fuerza de trabajo familiar, toda vez que el principal objetivo de la familia campesina es la *subsistencia*. Por lo tanto, las operaciones campesinas suponen generalmente un trabajo mucho más intensivo que el de las empresas capitalistas.

CUADRO 2
México: distribución de los productores agrícolas directos según la tipología de la CEPAL
(1970, porcentaje)

<i>Tipo de unidad productiva^a</i>	<i>Estrato dentro del tipo</i>	<i>Porcentaje</i>
Campesina	I Infrasubsistencia	55.6
	II Subsistencia	16.2
	III Estacionario	6.5
	IV Producción de superávit	8.2
<i>De transición</i>	<i>V De transición</i>	11.6
Empresarial	VI Pequeño	1.2
	VII Mediano	0.4
	VIII Grande	0.3

Fuente: CEPAL, 1982, *Economía Campesina y Agricultura Empresarial (Tipología de Productores del Agro Mexicano)*, por Alejandro Schejtman, México, Siglo XXI Editores, pp. 118-119.

^aNúmero total de unidades = 2'557,070.

En el cuadro 2 se muestra la distribución resumida de las unidades de producción agrícola en México, según la tipología de la CEPAL. Se han mezclado las cifras correspondientes a los sectores de tenencia de la tierra ejidal y privada, en razón de que en ambos sistemas de tenencia la diferenciación social es análoga (CEPAL, 1982: 278-281). Los productores empresariales se concentran en el sector privado. Mezclando los datos de los dos sistemas se obtiene la mejor visión panorámica de la diferenciación al interior de la estructura social en el México rural, pero cuando se combinan los dos sistemas, disminuye la proporción de "empresarios".

La CEPAL usó dos criterios fundamentales para distinguir entre las categorías campesina y empresarial en su tipología.

1. ¿se contrató mano de obra en la unidad productiva?; y
2. ¿alcanzó o excedió la unidad los niveles de subsistencia?

Las "unidades campesinas" son las que empleaban mano de obra familiar y ocasionalmente contrataban trabajo asalariado. La "contratación" se midió por los pagos salariales que no excedían el equivalente a 25 días laborales por año (calculados por el costo anual en salarios dividido entre el

salario mínimo diario en cada región o estado). La mayoría de las unidades campesinas contrata algunos trabajadores externos a la familia durante unos cuantos días de la cosecha. Y los miembros de tales minifundios generalmente venden su propia fuerza de trabajo a otras familias campesinas por unos cuantos días al año. Este intercambio de fuerza de trabajo es, en muchos casos, la forma monetizada de previas relaciones de reciprocidad en las comunidades campesinas.

Para construir los diversos estratos, se definieron varios tipos de necesidades de las unidades campesinas para luego determinar qué tipo de unidades eran capaces de satisfacer ciertos tipos específicos de necesidades. Dos de los tipos distintivos fueron las necesidades de subsistencia y las necesidades de reemplazo de los medios de producción. Así pues, se definieron las necesidades alimenticias como la principal prioridad de las familias campesinas que, en promedio, tenían 5.5 miembros cada una. Se hicieron cálculos para especificar las necesidades nutritivas mínimas en función de calorías y proteínas. Se convirtieron sus costos en una medida equivalente de maíz por año, estimada en 3.8 toneladas por cada familia promedio (de 5.5 miembros). Dada la media nacional de producción de maíz por hectárea en 1970 (1,036 kilogramos), y habiéndola calculado para una equivalencia de superficie nacional en función de tierras de temporal, el estudio de CEPAL estableció la superficie mínima de tierra necesaria para producir los requerimientos alimenticios mínimos para la familia promedio. La superficie mínima resultó ser de 3.84 hectáreas, la cual se redondeó a 4 hectáreas. Con estas equivalencias se procedió luego a establecer la estructura de la diferenciación social en el campo mexicano.

Campesinos de "infrasubsistencia" o "semiproletarios"

Conforme a los criterios de CEPAL, las unidades de producción de infrasubsistencia no cumplen los requisitos mínimos de alimentación familiar. Así que su subsistencia depende cada vez más de actividades económicas externas de los miembros de la familia que se contratan por fuera de la unidad campesina a cambio de un salario o que realizan actividades comerciales.

Aquí cabe preguntarse si las familias de infrasubsistencia son realmente "campesinas". El concepto de campesinado es de naturaleza muy *fluida*, una media abstracta, una tendencia, pero no una clara realidad estadística. La clasificación de la CEPAL se basa en la idea de *subsistencia*, la cual se refiere tanto a la reproducción de la fuerza de trabajo como al *reemplazo* de los medios de producción. La categoría de "infrasubsistencia" ni siquiera satisface

los requisitos de la subsistencia, por no hablar de los de reemplazo de los medios de la producción. Preferiría llamar a este grupo de familias "semi-proletarias", ya que deben complementar sus ingresos con otras actividades económicas, a saber, con actividades comerciales o más comúnmente con el trabajo asalariado.

La idea de *producto excedente* puede asociarse de la siguiente manera a las de subsistencia y reemplazo. *Subsistencia* es el nivel de producción mínimo necesario para lograr la reproducción de la fuerza de trabajo invertida en el ciclo de producción y para reconstituir la fuerza de trabajo de toda la familia campesina. Además, es necesario *reemplazar* los medios de producción agotados o consumidos durante el ciclo. Por último, el producto excedente sería la producción que sobrepasa la subsistencia y el reemplazo. Si un ciclo productivo permite tanto la subsistencia como el reemplazo, entonces yo diría que la unidad campesina logra la escala de "reproducción simple" y se puede sostener como campesina sin recurrir al trabajo asalariado de manera sistemática.

En tanto concepto teórico, las principales características de la producción campesina son que el productor directo es el dueño de la tierra y los otros medios de producción, o tiene acceso a ellos, controla el proceso laboral, y usa su propia fuerza de trabajo y la de otros miembros de la familia. Estos recursos deberían permitir que la unidad campesina familiar se reproduzca en la escala simple, es decir, sin tener un producto excedente, pero cubriendo los costos tanto de subsistencia como de reemplazo. En las empresas capitalistas el dueño del capital se apropia del producto excedente (en su forma histórica de plusvalía) directamente en el proceso de producción; la explotación de los campesinos en el contexto capitalista es, no obstante, más compleja, puesto que generalmente está mediada por el mercado de bienes a través de la venta de una parte de sus cosechas.

Lo que nos interesa tratar en este punto es la disolución *parcial* y no la desintegración total de la economía campesina. Este proceso de disolución puede hacer descender a las familias campesinas hasta la condición de semi-proletarias, donde algunos de sus miembros se proletarizan de manera parcial o completa. Debido a su articulación subordinada, la economía campesina dentro del capitalismo puede lograr un nivel de reproducción simple, pero puede ocurrir que la unidad campesina no consiga siquiera este nivel. Lo que propongo es que, aunque la unidad campesina puede ser capaz de producir lo suficiente para reproducirse en la escala simple, el capital, en virtud del intercambio desigual, se apropia de una parte de los fondos de subsistencia o de reemplazo de la unidad campesina. Tal situación llevaría necesariamente a un proceso de descampesinización de algunos o de todos los miembros de la familia campesina, dependiendo del

grado de desigualdad en el intercambio. Para la mayoría de los miembros que se las arreglan para conseguir empleo asalariado, esto probablemente significaría sólo una proletarianización *parcial*, en la que la unidad doméstica o la comunidad campesina siguen siendo parcialmente responsables de la reproducción de estos miembros de la comunidad. Esto es lo que Claude Meillassoux llamó la "función social" de la economía campesina en el capitalismo. La comunidad reincorpora a los trabajadores que han quedado desempleados, enfermos o que son de edad avanzada (Meillassoux, 1972, 1977). Incorporando este mecanismo de extracción del trabajo excedente al intercambio desigual, podemos ver que la economía campesina es doblemente explotada por el capitalismo: cuando los miembros de la familia venden su fuerza de trabajo, la producción campesina subsidia los salarios no pagados en los periodos de desempleo, enfermedad o vejez; y cuando los productos del campo se venden en el mercado, generalmente son objeto de un intercambio desigual.

Eric R. Wolf se refiere a la situación anterior que ocurre en casos en que los campesinos intervienen en relaciones asimétricas de intercambio, determinadas por las condiciones externas, que es normalmente lo que ocurre con los campesinos en el capitalismo. Según este autor:

... donde los sistemas de mercado están muy dispersos y obedecen a presiones que no tienen en cuenta el poder adquisitivo de la población local, el productor puede tener que aumentar grandemente su producción para conseguir incluso los artículos necesarios para el reemplazo [o reproducción simple en nuestros términos, G.O.]. En tales condiciones, una participación considerable de los fondos del reemplazo campesino [que comprende nuestros fondos de subsistencia y de reemplazo, G.O.] puede convertirse en el fondo de utilidades de otra persona (Wolf, 1966: 9).

También Marx hablaba de las consecuencias que para la producción campesina tenía la dominación del capitalismo. Él afirmaba que el producto excedente de los campesinos vendido en el mercado capitalista difícilmente alcanzaba su valor, toda vez que los precios se establecen por los costos de producción y la tasa media de ganancia, lo que está determinado por las unidades más eficientes de producción capitalista. En virtud de este mecanismo de formación de precios, "una parte del trabajo excedente de los campesinos, que trabajan en las condiciones menos favorables, es donado gratuitamente a la sociedad..." (Marx, 1, 1967: 806). En cuanto a un tratamiento más pormenorizado de los mecanismos de apropiación del trabajo

excedente del campesino por las diferentes fracciones del capital, véase Zamosc (1979).

Dado que las unidades de "infrasubsistencia" no satisfacen realmente los requerimientos teóricos mínimos para incluirlas en el campesinado, las colocaré en la categoría de "semiproletarias". He optado por este término en lugar de, por ejemplo, "campesinos-trabajadores" (Szélenyi, 1988) porque la tendencia predominante en la agricultura mexicana es claramente hacia la descampesinización. El concepto de "campesinos-trabajadores" parece indicar que existen oportunidades *iguales* para este tipo de agentes sociales de ingresar (o reingresar) en la trayectoria de clase ya sea de campesino o de proletario, es decir, en la recampesinización o la proletarización. Aunque admito que existen ambas posibilidades, prefiero nombrar el concepto de acuerdo con la tendencia predominante: descampesinización sin proletarización plena, lo que significa la expansión de la posición semiproletaria, más que su contracción. Como se verá por las encuestas de los años noventa, las posiciones semiproletarias han aumentado cuantitativamente así como en lo tocante a su intensidad, dado que proporciones mayores de los ingresos campesinos dependen del salario más que del ingreso agrícola.

Los campesinos de "subsistencia"

El segundo estrato de la tipología de la CEPAL recibe el nombre de unidades de nivel de "subsistencia". Se concibió este estrato en función de si las unidades de producción eran capaces de producir lo suficiente no sólo para sus necesidades alimenticias, sino también para sustituir los insumos y medios de producción agotados durante el periodo de producción (reemplazo). Los cálculos de costos determinaron que dichas unidades debían estar dentro del intervalo de 4-8 hectáreas del ETN (equivalente nacional de tierras laborables de temporal). Sin embargo, según la propia CEPAL, las unidades que detentan entre 4 y 8 hectáreas experimentaron una tendencia a deteriorar sus condiciones de producción o se vieron forzadas a subsidiar los fondos para el reemplazo mediante ingresos externos a la unidad. Resulta claro, entonces, que esta categoría tampoco alcanza el nivel de la reproducción simple si tiene que atenerse exclusivamente a las actividades campesinas.

Parece más adecuado, sin embargo, que las unidades de "subsistencia" se incluyan en el campesinado, más que las de la categoría de "infrasubsistencia". Pues aunque las primeras también se estén deteriorando, son todavía capaces de sostener una operación totalmente campesina. Vender algo de la fuerza de trabajo puede ser un medio estratégico para impedir que

los niveles de consumo de la unidad caigan hasta la mera subsistencia o incluso más abajo. Así pues, las actividades externas a la unidad campesina se pueden conceptualizar como actividades que forman parte de la misma lógica campesina de subsistencia.

Los campesinos "estacionarios" y los "excedentarios"

El tercer estrato de la tipología de la CEPAL está conformado por las unidades "estacionarias", las cuales deben caer dentro del intervalo de 8-12 hectáreas de tierras del ETN para ser capaces de producir a una escala de reproducción simple. Las mayores de 12 hectáreas se consideran dentro del cuarto estrato, llamado de unidades "excedentarias" o, más precisamente, unidades con *potencial* de producir un excedente. En el tercer estrato, de unidades estacionarias, los costos de reproducir los medios de producción e insumos se calcularon con base en la labor realizada en una parcela de 10 hectáreas. Como puede verse, no todas las unidades de este estrato, dentro del intervalo de 8-12 hectáreas necesariamente podrán lograr la reproducción simple. Algunas de ellas son también susceptibles de ver mermar su capacidad de producción, a menos que complementen sus costos con actividades económicas externas a la unidad.

Antes de ocuparnos de las unidades no campesinas, analicemos brevemente la economía política de la producción de excedentes en la economía campesina. Teóricamente, una vez que se encuentra un producto excedente en una unidad campesina, pueden ocurrirle al menos cuatro cosas:

1. El producto excedente puede pasar a ser propiedad del capital mercantil o usurario a través del intercambio desigual o del franco robo. De otra manera, si la competencia de los productos del campesino no se da con las empresas capitalistas sino sólo entre campesinos, el beneficiario indirecto puede ser la burguesía industrial. Tal ha sido el caso en México de ciertos cereales básicos, para los que el Estado ha fijado precios "de garantía" a niveles bajos. Por citar un ejemplo, el precio de garantía del maíz se mantuvo nominalmente fijo desde principios de los años sesenta hasta que estalló la crisis de la economía campesina en 1971. La burguesía industrial se ha beneficiado adquiriendo materias primas agrícolas a bajo costo, mientras que los productos y "bienes salariales" baratos, tales como los alimentos, le permiten pagar salarios bajos a los trabajadores industriales. Mediante este mecanismo de producción de alimentos baratos, la burguesía industrial puede obtener mayores tasas de ganancia, y la uni-

dad campesina reproduce su carácter campesino en lugar de acumular capital.

2. Puede ocurrir también que el producto excedente sea tan pequeño que los campesinos simplemente elijan aumentar su nivel de consumo. En ese momento, lo que originalmente era un “producto excedente” deja de serlo y la escala de reproducción simple se da a un nivel de consumo más alto. De esta manera la unidad campesina conserva su carácter sin tener que “regalarle” al capital su producto excedente, como en el caso anterior.
3. Otra forma en que la unidad campesina se reproduce en la escala simple es merced a ciertos mecanismos culturales de redistribución, típicos de ciertas comunidades campesinas con tradición indígena, como la posesión de *cargos* para las ceremonias religiosas (Cancian, 1972; Vogt, 1966, 1969, 1973). En este caso, la mayor parte o la totalidad del producto que en un principio aparecía como excedente se consumirá en la fiesta tradicional o en virtud de algún otro mecanismo de redistribución, con lo que simplemente aumentará el consumo de la comunidad campesina.
4. Finalmente, el producto excedente puede quedarse en la unidad campesina, abriendo la posibilidad de expandir el nivel de producción al contratar algún trabajo asalariado o invertir en medios adicionales de producción. En este caso los campesinos entran en un proceso de transición hacia convertirse primeramente en “campesinos-empresarios” y a la larga, tal vez, en una trayectoria hacia el aburguesamiento agrario.⁷

Las unidades no campesinas

La CEPAL definió como unidades no campesinas las cuatro categorías restantes de unidades de producción. La quinta cae entre el sector campesino y el empresarial; de ahí su nombre: unidades “transicionales”. El criterio que define a este estrato no es más que el pago de entre 25 y 500 salarios mínimos a lo largo de un año por contratación de mano de obra. No hay restricciones sobre el tamaño de la tierra, pero podemos suponer que sean unidades con más de 12 hectáreas en tierra del ETN, que era lo mínimo para las unidades excedentarias. Estas unidades son “de transición” en el proceso de diferenciación social en el sentido de que algunas pueden adoptar rasgos empresariales, en tanto que otras pueden retroceder al sector campesino.

⁷El tratamiento clásico de la diferenciación campesina en el marxismo puede verse en Lenin (1967) y en Kautsky (1974). Una explicación contemporánea basada en la experiencia latinoamericana puede verse en De Janvry (1981).

Del lado empresarial tenemos tres estratos, los cuales se dividen en grados simples de diferenciación mediante un criterio puramente cuantitativo: son las empresas "pequeñas", "medianas" y "grandes", dependiendo de su nivel de fuerza de trabajo contratada. Las unidades pequeñas pagan entre 500 y 1,250 salarios mínimos al año, las medias pagan entre 1,251 y 2,500 y las grandes más de 2,500 salarios mínimos al año.

Se aplicó una definición diferente a las unidades ganaderas, las cuales representan el 11 por ciento del total. Pero como ninguna de las unidades "campesinas" tiene producción suficiente para caer dentro de este tipo de producción, aquí no nos ocuparemos de ellas. Baste decir que todas las unidades ganaderas se definieron operacionalmente también como unidades empresariales "pequeñas", "medianas" o "grandes".

Limitaciones de los datos de la CEPAL

La tipología de la CEPAL se deriva del censo agrícola. Así que para poder hacerse una idea sobre las clases agrarias en México a partir de estos datos, hay que preguntarse hasta qué punto coincide la información de las unidades de producción agrícola de este censo con la del Censo General de Población. Según este último, la población rural de México en 1970 era de aproximadamente 19.9 millones, lo que corresponde aproximadamente a 3.6 millones de familias. En un intento de responder a esta pregunta, la CEPAL supuso que se podían igualar las familias con las unidades de producción. De esta forma, podríamos tener poco más de 405,000 jefes de familia que no fueran simultáneamente jefes de las unidades de producción agrícola, toda vez que el censo correspondiente registra poco más de 3.2 millones de unidades (CEPAL, 1982: 111-112).

De estos 3.2 millones de unidades de producción agrícola registradas por el censo agrícola,

87,000 carecían de tierra en general y otras 185,000 de tierras laborables, quedando en total ligeramente más de 2.9 millones de jefes de familia que podían disponer de tierras de labor, es decir, algo más del 80 por ciento de las familias rurales figurarían en algún grado dentro de la tipología. En algún grado, porque cerca de un 12 por ciento de las mismas (alrededor de unas 340,000), a juzgar por los datos del censo, correspondería a ejidatarios de los ejidos colectivos y mixtos sobre los cuales no se obtuvo información directa al nivel de las boletas censales (CEPAL, 1982: 112).

Como puede verse del contraste entre el Censo General de Población y los datos del censo agrícola (Censo Agrícola-Ganadero y Ejidal) de 1970, la gran mayoría de la población rural (más del 80 por ciento) ha sido tenida en cuenta en la tipología de la CEPAL.

Sin embargo, sigue habiendo una importante limitación en el estudio de la CEPAL: el no haber considerado formalmente a las familias sin tierra. Éstas deben haber sido parte de cerca del 20 por ciento de la población rural no considerada. De esta forma, el 20 por ciento sería el máximo concebible para el proletariado rural, suponiendo que no hubiera comerciantes, artesanos, proletarios urbanos con residencia rural, etcétera, incluidos en esta cifra. Aun así, uno de los aspectos que se vuelven difíciles de evaluar es la distribución regional de las familias proletarias. No nos queda, pues, más salida que estudiar indirectamente al proletariado rural a través del Censo General de Población. Este censo, sin embargo, tiene sus propias limitaciones: su información está dada en función de los individuos, a diferencia del estudio de la CEPAL, cuya información se presenta por familias. Así pues, muchos de los individuos (quizá la mayoría) registrados por el censo como "campesinos sin tierra" o "trabajadores" pertenecen en realidad a familias semiproletarias o campesinas, es decir, que tienen cuando menos un acceso mínimo a la tierra. Pero hasta el momento, éstas no pasan de ser conjeturas. En la siguiente sección se trata brevemente el problema de las familias proletarias rurales.

La diferenciación estructural: ¿hacia la desaparición de los campesinos medios?

Hasta ahora he presentado el perfil de la diferenciación social en 1970 y discutido las cuestiones conceptuales más importantes en torno al campesinado como clase económica, pero no tenemos idea de si las cosas mejoraron o empeoraron para esta clase rural. La única manera de averiguarlo es abordando el problema desde el punto de vista histórico: ¿cómo ha cambiado el perfil del campesinado con el paso del tiempo? El tratar históricamente este problema es una forma de especificar de manera concluyente si el campesinado está en proceso ya sea de disolución o de fortalecimiento. Por desgracia, el estudio de la CEPAL no se ocupó de este problema, lo que no deja de ser sorprendente. Pese a que en este estudio se trataba de fundamentar la posición campesinista (o acaso debido a ello), no se ha aportado análisis alguno sobre los antecedentes de los diferentes productores de la tipología de la CEPAL. De manera que no se puede saber, sobre la única base de este análisis, si los productores campesinos se están consolidando o yéndose a la quiebra.

Para averiguar si la situación de los productores campesinos cobra fuerza o desfallece, pueden compararse las proporciones de productores agrícolas de las diferentes categorías entre 1960 y 1970, utilizando el estudio del Centro de Investigaciones Agrarias (CDIA) del censo de 1960 (CDIA, 1974). Mientras el estudio del CDIA clasifica a los productores rurales en sólo cinco categorías (infrasubsistencia, subfamiliar, familiar, multifamiliar de tamaño intermedio y multifamiliar de tamaño grande), el estudio de la CEPAL define ocho tipos de unidad productiva. Para poder comparar los datos, agregué los tres tipos empresariales de la CEPAL en uno solo para formar seis categorías: infrasubsistencia, subsistencia, estacionario, excedentario, transicional y empresarial. La gráfica 4 presenta una comparativa, donde se empalman los resultados de los dos estudios.

Estos datos muestran con toda claridad el descenso de la economía campesina entre 1960 y 1970. Específicamente, las unidades intermedias dan muestras de irse a la quiebra, lo que refuerza la polarización de la agricultura: los sectores semiproletario y burgués aumentan, en tanto se observa un campesinado medio que tiende a desaparecer. A mayor abundamiento, una gran proporción de ex campesinos o semiproletarios simplemente quedan fuera del análisis: se trata de ex campesinos que no pueden sostenerse ni siquiera en una posición semiproletaria y que se han convertido en trabajadores jornaleros o han migrado a las ciudades.

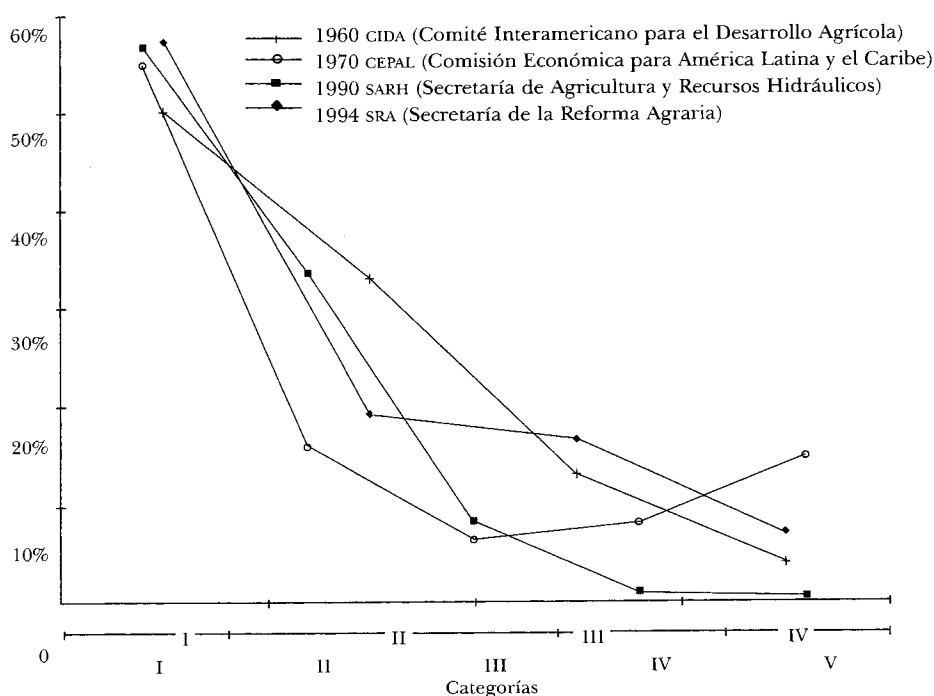
Al graficar los datos más recientes de 1990 y 1994, se tiene la impresión de que disminuye la tendencia a la polarización, al grado de que las curvas tienden a aplanarse. Antes de especular sobre las razones de esto, permítaseme hacer algunas aclaraciones sobre estos datos. Primero, se refieren solamente al sector *ejidal* y no comprenden las unidades privadas de 5 hectáreas o menos, lo que constituye el sector minifundista. Sin embargo, como ya se dijo con base en el estudio de 1970 de la CEPAL, el perfil de diferenciación social es muy semejante en los sectores ejidal y privado, aunque este último está ligeramente más polarizado. Ello indudablemente se debe a que los pequeños propietarios privados de tierra han sido capaces de vender, a diferencia de los ejidatarios (hasta 1992). En todo caso, la ausencia de los productores minifundistas privados en las gráficas para los años 1990 y 1994 sesga los datos hacia un mayor aplanamiento del que en realidad existe.

Pero la tendencia interesante de los años noventa es que los sectores más afortunados del campesinado se están expandiendo a base de comprar tierra a los menos afortunados. Muchos de éstos están abandonando por completo la agricultura. Con todo, las reformas neoliberales (véanse los capítulos 3 y 9) podrían obrar un resultado paradójico: están sentando las ba-

ses para que surja un campesinado empresarial, al tiempo que eliminan a los campesinos medios, mientras que confinan a grandes masas de campesinos pobres a la condición de productores marginales.

GRÁFICA 4

México: diferenciación social entre los productores rurales de México, 1960-1994



Diferenciación social entre productores agrícolas de México, 1960-1994

ha*	CIDA	etn**	CEPAL	ha	SARH	etn	SRA
0-5	0.500	0-5	0.547	0-4	0.572	0-5	0.572
5-15	0.330	5-8	0.159	4-10	0.336	5-10	0.192
5-50	0.130	8-12	0.064	10-30	0.010	10-18	0.166
>50	0.040	>12	0.081	>30	0.005	>18	0.071
		oth	0.149				

ha* hectáreas

ent* equivalente de temp. nacional

Fuente: Elaborado con datos de De Janvry *et al.*, 1997: 27-29.

Permítaseme discutir brevemente el problema del proletariado agrícola en términos cuantitativos. En el cuadro 3 se categoriza a la población rural económicamente activa usando la terminología del censo. En este cuadro se muestra la evolución de las categorías de “trabajadores”, “campesinos” y “patrones” del campo entre 1960 y 1970.

CUADRO 3
Población rural económicamente activa, 1960 y 1970^a

Sector	1960		1970	
	Millones	%	Millones	%
Trabajadores	3.4	57.5	3.0	59.3
Campesinos	2.5	42.2	2.0	38.2
Patrones	0.02	0.3	0.13	2.5
Total	5.92	100.0	5.13	100.0

^aDirección General de Estadística, *Censo General de Población, 1960, 1970* (México: DGE).

Las cifras absolutas de la fuerza de trabajo agrícola disminuyeron de 1960 a 1970, conforme a una tendencia de varios decenios. De igual forma, no es de sorprender que los "trabajadores" hayan disminuido en números absolutos. El descenso del sector agrícola se refleja a medida que se desarrolla la economía; la emigración del campo hacia la ciudad lo propicia y la mecanización de la tecnología agrícola lo acelera. Sin embargo, hay que señalar que la categoría de "campesino" disminuyó más drásticamente que la de "trabajadores", de 2.5 a 2 millones de personas, un descenso del 20 por ciento. La de "trabajadores" disminuyó de 3.4 a 3 millones de personas, un descenso del 12 por ciento. Por otro lado, el número relativo de trabajadores aumentó de 57.34 a 59.3 por ciento, en tanto que el de campesinos disminuyó del 42.2 al 38.2 por ciento. Como se dijo líneas arriba, no hay diferencia de fondo entre el Censo General de Población (CGP) y el resto de las cifras dadas previamente en este capítulo: el CGP se refiere a *individuos*, en tanto que los estudios del CDIA y la CEPAL son de *unidades familiares*. Con todo, las cifras del CGP representan la tendencia general.

Diferenciación social regional

El perfil regional de la diferenciación social del cuadro 4 (p. 108) se ha traducido a las categorías de clase que aquí se formulan, en tanto se ha presentado críticamente la tipología de la CEPAL. Las equivalencias con ésta son las siguientes:

1. las unidades de infrasubsistencia ahora se llaman semiproletarias;
2. los campesinos de subsistencia y los estacionarios se suman dentro de la clase "campesina";

3. las unidades excedentarias se suman con las de transición para formar la categoría social de “campesinos-empresariales”; y
4. la suma de las unidades empresariales pequeñas, medianas y grandes se llaman ahora “burguesía agraria”.

Como se ha mantenido hasta el presente la estructura básica de la diferenciación social, he preferido usar los datos de la CEPAL, porque son generales e incluyen tanto al sector ejidal como al privado.

Se ha respetado el procedimiento de asignación de la CEPAL, excepto para las unidades de infrasubsistencia, ya que tales unidades tienen pocas oportunidades de reingresar en la trayectoria de la clase campesina. Debatándose entre la tierra y los salarios como la base material de su reproducción, las familias semiproletarias son en realidad el sector con el crecimiento más dinámico. Esta afirmación se sustentó contrastando los datos de 1960 y 1970 que se mostraron líneas arriba y las cifras respectivas reportadas por De Janvry *et al.* para 1990 y 1994 (1997).

La diferencia entre campesinos y campesinos-empresarios es que éstos se orientan fundamentalmente a la producción para el mercado más que para la subsistencia, aunque ambos son autoempleados y contratan algunos trabajadores por temporada. Sin embargo, los campesinos-empresariales tienen mayores oportunidades de ingresar en la trayectoria del aburguesamiento agrario, aunque también están sujetos a la posible erosión de sus unidades económicas. Harriet Friedman ha propuesto una distinción similar concerniente a lo que ella llama “producción familiar” (campesinos) y “pequeña producción mercantil” (PPM, o familias granjeras). La autora define la producción familiar como aquella “cuya reproducción ocurre a través de relaciones no mercantiles (independientemente de la proporción de la producción para la venta respecto de la producción para el consumo)” (Friedman, 1980: 1961). En cambio, la PPM está plenamente integrada tanto en el mercado capitalista de “insumos” como en el de “productos”, aunque ambas formas de producción dependan básicamente de la fuerza de trabajo familiar. El concepto de Friedman de la PPM tiene el claro objetivo de representar a las granjas familiares de los países capitalistas avanzados. Con todo, yo argumentaría que los campesinos-empresariales de las formaciones sociales dependientes o del Tercer Mundo comparten la mayor parte de sus características definitorias, salvo que éstos pueden depender más de la mano de obra contratada, al menos de temporada, que las granjas familiares (que tienen acceso a más tecnología que a la mano de obra barata). Resumiendo, los campesinos se orientan fundamentalmente hacia la producción de subsistencia con base en la mano de obra familiar, mientras

que los campesinos-empresariales se orientan hacia el mercado y contratan una mayor proporción de mano de obra asalariada.

En el cuadro 4 se muestran las “estructuras de clase” regionales significativamente diversas en cuanto a la diferenciación social del campesinado: en contra de lo que intuitivamente podría esperarse, sin embargo, existe una mayor *proporción* de población campesina en el norte que en el centro de México, aunque en Chiapas la proporción de campesinos sí es mayoritaria (63.7 por ciento si se suman campesinos y campesinos-empresariales). Esta proporción se ubica entre la de Coahuila-Durango (50.9 por ciento), por un lado, y Sonora (75.0 por ciento) por el otro. En el centro (Puebla), las parcelas disponibles a los productores directos son, en los más de los casos, insuficientes para que éstos entren en la categoría de “campesinos” (79.7 por ciento semiproletarios). Así que el grueso de ellos debe complementar su reproducción con actividades externas a su parcela, incluido el empleo asalariado (Cancian, 1992), aunque muchos de estos asalariados no se vuelvan vendedores de fuerza de trabajo en la propia región central, sino en las regiones del norte y en Estados Unidos a través de la migración temporal o permanente (Arroyo Alejandre, 1989).

Las unidades productivas agrícolas del “sector campesino” del norte tienden a producir cultivos comerciales en mucho mayor grado que las del

CUADRO 4
Estructuras de clase agraria en Puebla, Coahuila, Durango y Sonora, por clase de familia: 1970
(Porcentaje)*

Estado	Semi-proletaria	Campesina	Campesino-empresarial	Burguesía agraria	Total
Chiapas	33.4	38.2	25.5	2.9	130,604
Coah./Dgo.	47.1	29.4	21.5	2.0	118,278
Sonora	13.7	54.1	21.8	10.4	29,224
Puebla	79.7	14.9	5.0	0.4	231,262

Fuente: Elaborado con datos de: CEPAL, 1982, *Economía Campesina y Agricultura Empresarial (Tipología de Productores del Agro Mexicano)*, por Alejandro Schejtman, México, Siglo XXI Editores, pp. 118-19.

* Las equivalencias con la tipología de la CEPAL son como sigue: la categoría de “infrasubsistencia” se llama ahora “semiproletaria”, mientras que se han sumado las de “subsistencia” y “estacionarios” en la clase “campesina”. Asimismo, se han sumado las categorías de “excedentarios” y “transicionales” bajo la clase de “campesinos-empresariales”. Por su parte, las tres categorías de “empresarios” se han sumado bajo la “burguesía agraria”.

centro, las cuales se concentran en cultivos típicos de subsistencia, es decir, el maíz y el frijol. Si bien esto no se puede tomar como un indicio directo del grado de mercantilización en cada región, dado que el maíz y los frijoles también se producen para el mercado, sí constituye una pista indirecta que sirve como punto de partida para interpretar los aspectos más cualitativos de la dinámica en cuestión.

En efecto, Kirsten Appendini y Vania Almeida Salles (1976) han demostrado con los datos de 1960 la existencia de una correlación significativa entre los municipios que producen maíz y frijoles y los estados con índices de mercantilización menores del 50 por ciento. Por el contrario, en los municipios de los estados norteros de Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa y Sonora se da la correlación opuesta: una baja producción de los cultivos de subsistencia e índices de mercantilización superiores al 80 por ciento del producto de cada unidad. Además, estas investigadoras encontraron correlaciones similares en lo relativo al trabajo asalariado: la mayor incidencia de unidades que contratan trabajo asalariado se encontró en los estados norteros y viceversa por lo que se refiere a los estados del centro y del sur. Las excepciones en estos últimos estados fueron municipios muy localizados, donde se producen cultivos tropicales comerciales. La región de Atencingo, Puebla, es un ejemplo de tales excepciones en que se produce caña de azúcar. Appendini (1983) aplicó la misma metodología del estudio anterior a los datos del censo de 1970 y obtuvo resultados similares, excepto que las tendencias de polarización se habían agudizado.

La idea central que hay que destacar de este análisis, entonces, es la siguiente: el grueso de la producción de cultivos comerciales se concentra en las regiones del norte, mientras que los cultivos de subsistencia se producen principalmente en el centro y el sur de México. Con todo, en el norte existe una proporción mayor de unidades "campesinas" propiamente hablando, en contraste con el centro. Sin embargo, en Chiapas todavía había una proporción mayoritaria de campesinos en 1970, muchos de ellos produciendo el café como cultivo comercial y el maíz como cultivo de subsistencia (Harvey, 1996a, 1998a). En todo caso, parecería que los productores directos semiproletarizados y campesinos en las regiones centro y sur tienden a producir conforme a un esquema tipo campesino. Se enfocan en cultivos de subsistencia, aun cuando una parte de éstos (el café) debe pasar por el mercado para cubrir ciertas necesidades monetarias de la familia, y producen sobre todo con base en la mano de obra doméstica. Y, por el otro lado, en el norte los campesinos, los campesinos-empresariales y la burguesía agraria se concentran en la producción de cultivos comerciales.

Veamos brevemente las especificidades de las pautas de diferenciación estructural en nuestras cuatro regiones. A este nivel de agregación no contamos con datos sobre las municipalidades específicas de nuestras regiones. No obstante, los datos sobre los estados donde se localizan describen en general sus características más sobresalientes (véase cuadro 4).

Como puede inferirse de las cifras del cuadro 4, el proceso de desarrollo capitalista ha tenido diferentes repercusiones regionales, lo que lleva a observar diferencias considerables en cuanto a las "estructuras de clase" entre las cuatro regiones comparadas. En lugar de que en el centro (Puebla) se observe una población "campesina" mayor que en los estados del norte, ocurre exactamente lo contrario: proporcionalmente hay más campesinos y campesinos-empresariales en el norte, y más productores agrícolas semiproletarizados en el centro. Sin embargo, debe haber productores directos más completamente proletarizados en el norte, especialmente en Sonora, que no aparecen en nuestros datos del censo agrícola por la sencilla razón de que, formalmente, no tienen acceso a tierras privadas ni ejidales. Así pues, quienes venden su fuerza de trabajo parecen concentrarse en las regiones del norte, donde existe una mayor proporción de campesinos, campesinos empresariales y burgueses agrarios que pueden contratarlos a cambio de un salario. Esta interpretación es congruente con los datos de Appendini y Almeida Salles (1976) arriba mencionados, y con el estudio más reciente de Appendini (1983) sobre el censo de 1970. En este sentido, la agricultura del norte depende de la contratación de fuerza de trabajo de los semiproletarios locales y del centro y sur de México.

Así que Sonora tiene la mayor proporción de burguesía agraria de las cuatro regiones, seguida por Chiapas en el suroeste de México y luego por Coahuila-Durango. Puebla, sin embargo, parece haber experimentado un grado muy bajo de desarrollo capitalista en la agricultura, con sólo el 5 por ciento de campesinos-empresariales y no más de 0.4 por ciento de burguesía agraria (que, sin embargo, puede concentrar grandes extensiones de tierra). El grueso de los productores rurales (79.7 por ciento) está en una situación semiproletaria en Puebla, con un acceso a tierra tan escasa o de calidad tan pobre que no pueden alcanzar ni la subsistencia, no se diga la escala de la reproducción simple que también requiere el reemplazo de los medios de producción. En contraste, Sonora tiene una proporción muy reducida de semiproletarios.

Por su parte, Chiapas presenta un desarrollo capitalista mayor que el de Puebla y Coahuila-Durango, aun cuando conserva un campesinado proporcionalmente mayoritario entre las clases agrarias. La proporción de "burguesía agraria" en Chiapas es la segunda más alta (2.9 por ciento), sólo menor que la proporción de Sonora (10.4, véase cuadro 4), y además tiene un campesinado-empresarial mayor que el de todas las regiones bajo conside-

ración de poco más de la cuarta parte de todas las familias de productores agrícolas. Esto es consistente con la existencia de múltiples plantaciones cafetaleras en las que se contrata una gran cantidad de mano de obra. De hecho, muchos de los trabajadores provienen de la sustancial economía campesina de Los Altos de Chiapas, que cubre la "función social" que menciona Claude Meillassoux de mantener a los trabajadores durante épocas de desempleo temporal.

Existe una diferencia considerable al respecto entre Coahuila-Durango y Sonora. La proporción de familias semiproletarias en el primer caso es de 47.1, en tanto que no pasa de 13.7 en el segundo. A partir de estos datos podríamos aventurar que los campesinos-empresariales y la burguesía agraria de Coahuila-Durango disfrutaban de una gran reserva de trabajadores de su propio semiproletariado, en tanto que en Sonora debe estar en formación el proletariado agrícola propiamente dicho. No obstante, puede ser que una proporción considerable de trabajadores asalariados de Sonora sean trabajadores migratorios temporales provenientes de otras regiones de México como se acaba de sugerir arriba. Por lo tanto, la fuerza de trabajo asalariada en Sonora se compone tanto del proletariado local en formación como de trabajadores migratorios (es decir, semiproletarios) de otras regiones, como puede comprobarse en la bibliografía respectiva (Cartón de Grammont, 1986, 1990; Mares, 1987). Puebla, por su parte, echa mano sobre todo de su propio semiproletariado, aunque pueda haber migraciones dentro del mismo estado y ocasionalmente de los estados de Oaxaca y Guerrero (Paré, 1979a; Ronfeldt, 1973). El proletariado agrícola propiamente dicho debe ser virtualmente inexistente o muy pequeño en Puebla. La mayoría de los jornaleros agrícolas en Puebla, pues, dependen tanto del salario como del acceso ocasional a la tierra a partir de las relaciones de parentesco y comunitarias.

Conclusión

En resumen, los datos censales reflejan el grado en que la doble crisis de la agricultura mexicana ha contribuido al deterioro de la economía campesina. También reflejan el tipo de diferencias estructurales de clase que se puede esperar encontrar entre las diversas regiones de México.

Los años sesenta parecen ser la época en que se gestó la crisis actual. A la ya avanzada disolución de la economía campesina, el Estado respondió con una reforma agraria por demás ineficaz e insuficiente. Redistribuir tierras inservibles en su mayor parte para la producción agrícola tan sólo tenía el objetivo político de apaciguar —durante unos cuantos años— a campesinos y se-

miproletarios hambrientos de tierra. Pero esa reforma fue un error económico: dio marcha atrás en la lucha por salvar la economía campesina. Políticamente, la explosión sólo se pospuso hasta principios de los años setenta en un principio, y se ha renovado en los noventa y a la vuelta del siglo XXI como consecuencia del final formal de la reforma agraria en 1992 y de las reformas neoliberales orientadas a preparar a México para la integración económica con Estados Unidos y el Canadá.

Por otra parte, la burguesía agraria parece haberse deslumbrado con los incrementos de productividad a que dio lugar la Revolución verde de los años cuarenta y cincuenta. Este aumento en la productividad sobrevino luego del trato especial de que el Estado la hizo objeto durante los años cuarenta y cincuenta, con el incentivo de precios por arriba de los del mercado internacional. Combinada esta política con el aumento de productividad merced a la Revolución verde, durante esos 2 decenios las ganancias de los capitalistas fueron grandes. En los sesenta, sin embargo, los precios internacionales de la mayor parte de los cultivos comerciales comenzaron a caer estrepitosamente, sin la compensación adicional por cuenta de aumentos de la productividad: se había terminado el idílico romance con la productividad y las ganancias elevadas. Así pues, luego de una fase de superproducción, la agricultura capitalista entró también a principios de los años setenta en una crisis prolongada y que aún continúa.

El resultado ha sido una economía campesina diezmada, cuyos miembros se van volviendo cada vez más semiproletarios; y un sector capitalista frágil, incapaz de otorgar empleo pleno ni producir la autosuficiencia alimentaria (Bartra, A., 2004). Así, la situación con mayor crecimiento dinámico de la estructura social agraria es la de las familias semiproletarias. Las nuevas luchas agrarias y el carácter de las organizaciones de clase que surgirán han de depender de qué dirección política siga este semiproletariado. Y esto, a su vez, dependerá de las culturas y formas específicas de intervención estatal en cada región, así como del tipo de liderazgo de sus representantes. Explorar tales especificidades es el foco de los estudios regionales de caso de los cuatro capítulos siguientes.

Capítulo 5

La Laguna: de obreros agrícolas a semiproletariado

LA HISTORIA de La Laguna es la de los aguerridos trabajadores agrícolas que en los años treinta enarbolaron demandas de tipo laboral y recibieron tierras a cambio. Luego de un periodo de organización poscapitalista de la producción, centrada en la autogestión y el control democrático del proceso productivo en cooperativa, de 1936 a 1947, el Estado los convirtió en proletarios. Este proletariado “en sentido amplio” (Paré, 1977) quedó subordinado a los aparatos económicos del Estado, aun cuando formalmente podrían clasificarse como “campesinos” debido a su acceso a la tierra. La resistencia que opusieron los productores directos a esta subordinación acabó por convertirlos en un semiproletariado, con pequeñas parcelas de cultivos de subsistencia así como de algodón, cultivo comercial predominante en La Laguna hasta principios de los años noventa. La distribución de más del 75 por ciento de las tierras de riego en 311 ejidos colectivos en 1936 representó un grave revés para la burguesía agraria. Así pues, sería el propio Estado el que, mediante sus aparatos económicos y políticos, controlaría los destinos de los productores directos en la agricultura de La Laguna.

La historia agraria y el ámbito cultural

Antes de ocuparme de las luchas agrarias de la región, presentaré un esbozo de su historia agraria y de su ámbito cultural. La Laguna es una región localizada en el centro-norte de México, que incluye nueve municipios de los estados de Coahuila y Durango. Como un oasis en medio del desierto, toda su agricultura importante es de riego. Las lluvias alcanzan tan sólo de 300 a 500 milímetros anuales. Hasta los años treinta, el riego dependía en gran medida de los ríos Nazas y Aguanaval, así como de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco. Después de la reforma agraria de 1936, sin embargo, aumentó enormemente el número de pozos profundos, con lo que se irrigaron aproximadamente un tercio de las tierras en años normales

(hasta dos tercios en años de seca) (Otero San Vicente, 1986; Salinas de Gortari y Solís González, 1994: 12).

Los orígenes capitalistas de La Laguna pueden rastrearse hasta 1846 “cuando Leonardo Zuloaga y Juan Ignacio Jiménez [...] construyeron presas en el río Nazas donde ahora se levanta la ciudad de Torreón” (Wilkie, 1971: 11). La conexión agrícola-industrial comenzó también en 1846, cuando la familia Sánchez Navarro instaló una despepitadora de algodón en Monclova, Coahuila. Ellos estaban también entre los grandes terratenientes que tenían plantaciones de algodón irrigadas por el río Nazas (Del Castillo, 1979). En 1936, la “región de La Laguna era una de las pocas zonas de México en que llegó a predominar la explotación colectiva de la tierra... Las compañías extranjeras poseían grandes extensiones de tierra antes de las expropiaciones” (Senior, 1958: 54). En esa época, La Laguna producía la mitad del algodón de México y era el tercer productor de trigo.

En 1928 la distribución de haciendas registradas según su tamaño era la siguiente: 75 haciendas de 1,000 a 10,000 hectáreas cada una, 19 de más de 10,000 hectáreas, y 3 de más de 100,000 hectáreas. Muchas de estas haciendas pertenecían a compañías extranjeras y se administraban de manera eficiente (Eckstein, 1970: 273). Los contrastes entre las haciendas de La Laguna y las tradicionales del centro y el sur de México son realmente notables. Dichos contrastes se resumen en el cuadro 5, donde el criterio de comparación es evidente en cada caso.

Friederich Katz también ha documentado diferencias entre las haciendas del norte y del centro-sur al momento de la Revolución de 1910, en lo concerniente a las actitudes políticas de los peones. Argumenta Katz que en el centro de México los habitantes de las haciendas siempre fueron leales a sus dueños hasta el final; fue la gente de los pueblos vecinos la que se rebeló. Por el contrario, en el norte, peones y hacendados se rebelaron conjuntamente en contra del gobierno central, y no era raro que los hacendados dirigieran la rebelión. Esto se debió en parte a que en el norte el peonaje por endeudamiento había caído en desuso desde mediados del siglo XIX, merced al desarrollo de la minería y la industria, que ofrecían otras oportunidades de empleo. Las haciendas, por tanto, tenían que ofrecer mejores salarios y otras atracciones como tiendas de raya donde se vendían las mercancías al costo (1982, I: 28-29).

CUADRO 5
 Contrastes entre las haciendas de La Laguna
 y la tradicional del centro-sur de México hacia 1910

<i>Hacienda en La Laguna</i>	<i>Hacienda tradicional</i>
1. Altamente capitalizada	Bajas inversiones
2. Administrada por compañías arrendadoras de tierras	Propietarios ausentistas
3. Pago de salarios	Peones endeudados en especie o trabajo
4. Suministros externos en su mayor parte	Autosuficiencia económica
5. Cultivos comerciales dependientes del mercado	Cultivos de subsistencia
6. Relaciones peón-patrón de trabajo asalariado	Relaciones paternalistas
7. Estructura de clase bipolar	Estructura de clase sumamente segmentada, incluidos los estratos intermedios
8. Unidad no política	Unidad política formal con oficinas gubernamentales dentro de la hacienda
9. "Los nexos entre esposo y esposa no parecen haber sido fuertes, a juzgar por el gran número de separaciones. El parentesco ritual era generalizado pero sus vínculos no tenían gran importancia en cuanto a derechos y deberes"	"...la emigración era imposible para los peones residentes, por lo que las comunidades inevitablemente establecían relaciones estrechas entre sí"
10. No había iglesia en la hacienda y sólo el bautismo era práctica universal	Iglesia dentro de la hacienda, donde el sacerdote ejercía considerable control ideológico
11. Inmigrantes de primera o segunda generación en la región	Familias de viejo arraigo en las localidades

Fuente: Elaborado con datos de Wilkie (1971: 13-16).

Aunque las haciendas dominaron definitivamente el escenario agrícola de La Laguna, había pequeñas partes de la población que producían conforme a relaciones distintas de la de hacendado-peón residente, lo que tuvo su propia repercusión cultural. Había aparceros y pequeños propietarios: "su número era sumamente limitado, pero su función en la lucha agraria no dejaba de ser interesante" (Landsberger y Hewitt, 1970: 5). Los aparceros obstruían el movimiento agrario por temor a perder su condición de superioridad.

Por otra parte, había colonos en Villa Juárez a quienes el presidente Benito Juárez había dado tierras en 1864. En 1862 se pusieron en pie de lucha en contra de compañías inmobiliarias poseedoras de haciendas que habían desviado el cauce del Nazas, privando a los colonos del precioso líquido (Eckstein, 1966: 132). A la larga los mismos colonos perdieron sus tierras a manos de los hacendados bajo la dictadura de Porfirio Díaz. Los colonos habrían de volverse muy combativos en la lucha revolucionaria y fueron de los primeros que se beneficiaron de la reforma agraria de 1917. Este grupo fue privilegiado de muchas maneras, en comparación con las comunidades campesinas. Disfrutaron derechos que en general habían estado reservados a los españoles y sus descendientes, los criollos. Eran propietarios individuales de tierras y podían vender o comprar otras a voluntad. Por lo general tenían extensiones de tierra más grandes y más ganado que los campesinos libres de otras regiones. Las comunidades de colonos tenían una mayor autonomía y no sólo tenían el derecho sino el deber de estar armados, para defenderse de los ataques apaches. Así, en 1910, cuando habían sido despojados de sus tierras y privados de la autonomía municipal, los colonos pasaron a ser una fuerza de lo más combativa (Katz, 1982, I: 24-26).

A diferencia de las comunidades del centro de México, donde el parentesco y la religión constituyen instituciones más bien sólidas (Nutini, Carrasco y Taggart, 1976; Nutini y Bell, 1980), en La Laguna la vida es más secular e individualista. Como se verá, esto se relaciona estrechamente con las diferencias en cuanto a procesos de producción y reproducción.

Se dota de tierras al proletariado agrícola

Dado el perfil de las haciendas y los trabajadores rurales de La Laguna, no causa mayor sorpresa que el movimiento popular de 1935-1936 se enfocara sobre todo en demandas de tipo laboral, más que agrarias. Hubo alrededor de 104 sindicatos de trabajadores agrícolas que luchaban por esas demandas, y sólo 12 grupos que pedían dotaciones de tierra. En 1935 la legislación se formuló de tal manera que la mayoría de los productores direc-

tos de La Laguna estaban excluidos de la posibilidad de la reforma agraria, ya que los peones residentes no tenían derecho a obtener dotaciones de tierra en ejidos. Sólo 11 ejidos se habían formado en La Laguna antes de 1936, con 2,318 miembros y 5,000 hectáreas.

Luego de la depresión de principios de los años treinta, los hacendados mecanizaron aún más sus operaciones para abatir los costos de mano de obra, "a lo que los trabajadores reaccionaron renovando sus esfuerzos para organizar sindicatos y obtener dotaciones ejidales" (Wilkie, 1971: 18). En respuesta, los hacendados ofrecieron comprar tierras y crear algunos ejidos para silenciar las demandas, con la condición de que el Presidente de México les diera títulos de "inafectabilidad" para evitar con ello la reforma agraria. Sólo el 3 por ciento de los trabajadores obtuvo tierras de esta forma, es decir por iniciativa de los hacendados.

Cuando Cárdenas asumió el poder en 1934 y alentó la organización de sindicatos de trabajadores agrícolas, los de La Laguna respondieron inmediatamente: en 1935 hubo 104 huelgas de trabajadores agrícolas. En mayo de 1936, los sindicatos urbanos se unieron a los del campo en una huelga general en la que protestaban por la represión de que habían sido objeto en huelgas anteriores, como cuando los hacendados dispararon en contra de los dirigentes sindicales. Entonces el Presidente solicitó que se pospusiera la huelga a cambio de nombrar una comisión de expertos que estudiara la situación de La Laguna. El objetivo de la huelga era un contrato colectivo para 28,000 trabajadores agrícolas de la región. En agosto, los servicios laborales del estado de Coahuila y Durango declararon ilegal la huelga y protegieron a 10,000 esquiroles de fuera de la región, que habían sido traídos por los hacendados. En vista de tal estancamiento local, Cárdenas pidió a los dirigentes de la huelga ponerle fin, con la promesa de aplicar las leyes de la reforma agraria en La Laguna y modificando los impedimentos para recibir tierras que se imponían a los peones residentes. Luego, el 6 de octubre Cárdenas decretó la expropiación de aproximadamente tres cuartas partes de la tierra irrigada en la región. Esta tierra se entregó a cerca de 38,000 trabajadores organizados en 311 ejidos (Senior, 1958; Whetten, 1948; Restrepo y Eckstein, 1975).

La mayoría de los autores concuerdan en que los sindicatos desempeñaron el principal papel en la reforma agraria de La Laguna, y que su lucha se centró en demandas de tipo laboral. Aunque Senior llama indebidamente "campesinos" a los peones o trabajadores de hacienda, en su propia descripción está claro que estructuralmente eran trabajadores asalariados: "Entre sus demandas estaba la firma de un contrato colectivo, el aumento de salarios a 1.50 pesos al día, la reducción de la jornada a ocho ho-

ras, y el derecho de nombrar un supervisor al momento de pesar el algodón que entregaban los campesinos [*sic*]" (Senior, 1958: 65).

Por su parte, Eckstein señala también que "...el movimiento sindicalista desempeñó un papel predominante en la consecución de la reforma. En una etapa posterior, los mismos sindicatos intervinieron para convencer a los ejidatarios emancipados de que adoptaran el sistema colectivo" (1970: 275). Lo mismo puntualizaron más tarde Restrepo y Eckstein (1975).

Fernando Rello (1984) explicó que los trabajadores agrícolas de La Laguna estaban totalmente desposeídos de tierras. Y aunque en un principio habían luchado por la tierra, tuvieron que pasar a las demandas laborales debido a la feroz respuesta de la burguesía agraria. En la coyuntura de 1935 se creaban muchas organizaciones obreras para defender las reformas cardenistas de las amenazas reaccionarias del callismo (Loyola Díaz, 1980; Medlin, 1982). Muchas de estas organizaciones estaban fuertemente influidas por Vicente Lombardo Toledano (entonces secretario de la Confederación de Trabajadores de México, CTM) y el Partido Comunista. Rello argumenta que, en general, el factor principal y la fuerza crucial eran los trabajadores agrícolas organizados, asociados con otros sectores del proletariado nacional (Rello, 1984).

Un análisis ligeramente diferente es el que han sugerido Lansberger y Hewitt (1970). Según estos autores, originalmente 50 sindicatos plantearon demandas laborales, en tanto que 12 grupos estaban organizados como comités agrarios y demandaban específicamente tierras. Con todo, basándose en una de las declaraciones de los dirigentes, estos autores opinan que tales demandas laborales quizá no fueron más que recursos tácticos para debilitar a los hacendados, mientras que el objetivo último de los productores directos era realmente la reforma agraria (1970: 15).

Landsberger y Hewitt advierten también una diferencia importante entre las haciendas y las demandas de Durango y Coahuila. En Durango las haciendas eran más tradicionales y las demandas más claramente orientadas hacia la tierra, mientras que en Coahuila los productores directos se enfrentaban a las grandes compañías, por lo que las demandas laborales parecían más sencillas de satisfacer por cuanto se planteaban frente a capitalistas impersonales.

Es difícil de valorar si esta explicación es adecuada, ya que se basa mayormente en la interpretación de un dirigente, formulada 40 años después de que se dio el movimiento. Y no es que la interpretación parezca descabellada. De hecho, es plausible que las demandas laborales, centradas en los salarios y las condiciones de trabajo, fueran demandas de tipo táctico. Pero esto tampoco excluye la posibilidad de que el propósito último de con-

seguir la tierra toda fuera en realidad una demanda poscapitalista más que campesina. Lo que en un primer momento se presenta como una posibilidad se confirmó más tarde por la lucha que sobrevino inmediatamente después de la redistribución de tierras, que se centró en una agricultura autogestionaria, democrática y cooperativa, en la cual se lograron altos grados de independencia respecto del Estado mexicano. Los sindicatos no sólo luchaban por la colectivización sino también por el control sobre diversos aspectos del proceso de producción agrícola, como la compra de insumos, el crédito, el seguro y la comercialización del producto.

Inicialmente, pues, la lucha de La Laguna tuvo un carácter popular-democrático en cuanto a las demandas, el carácter de las organizaciones y los tipos de alianzas que formaron los productores directos. Desafortunadamente esto habría de cambiar debido a la oposición tenaz y represiva del Estado, lo cual significó un cambio sustancial en la estructura de oportunidades políticas para la movilización popular.

De la autogestión poscapitalista a la desapropiación productiva

El plan cardenista para colectivizar La Laguna fue definitivamente crucial para ese gobierno (1934-1940). Había que poner el ejemplo a la futura colectivización de otras regiones con una agricultura capitalista moderna, por lo que tenía que demostrar la superioridad económica del sistema colectivo y hacerlo políticamente viable al mismo tiempo. Esto significaba que tenía que organizarse la suficiente fuerza popular para contrarrestar la reacción de los hacendados cuando se les expropiaran sus tierras. Después de la redistribución de tierras, los productores directos también tuvieron que mantener una organización sólida para resistir los ataques de los ex hacendados y alcanzar los niveles de productividad que le interesaba mantener al Estado.

El plan que surgió de las bases fue alcanzar un arreglo autogestionario por parte de los ejidatarios, para reunir fuerza tanto política como económica en los ejidos colectivos de nueva formación. Esta meta habría de lograrse mediante un sistema de 15 sindicatos regionales que a la larga serían sustituidos por el Banco Ejidal. Asimismo, los 15 sindicatos formarían y estarían coordinados por la Unión Central de Sociedades de Crédito Colectivo (llamada Unión Central en lo sucesivo), cuyo propósito era desempeñar las siguientes funciones económicas:

[...] vender la producción de algodón [...], comprar suministros, incluida la maquinaria; poseer y operar estaciones de maquinaria; operar despepitadoras de algodón y abordar otras empresas industriales; participar en

actividades de extensión, educación general y de investigación agrícola; y supervisar el gasto de los llamados "fondos sociales" de cada ejido para dotarlos de pozos, escuelas y clínicas (Landsberger, s/f: 16-17).

Este plan se conformó merced a la interacción de la Unión Central y la colaboración de técnicos del gobierno, cuyas dependencias tenían el deber oficial de apoyar plenamente a los colectivos. Cárdenas no sólo aprobó esta iniciativa de las bases sino que convirtió en ley su forma organizativa para que fuese adoptada por los colectivos futuros. Este formato organizativo se incorporó en la Ley de Crédito de 1940, un año después de haberse constituido *de facto* la Unión Central como el modelo preferido por el Estado.

Tierra, agua y crédito

En 1936 la región tenía un total de 1'500,000 hectáreas, de las cuales 190,000 eran de riego y 1'310,000 de monte. Conforme a la nueva legislación aprobada en 1936, los peones residentes alcanzaron el derecho a dotaciones de tierra. Así pues, la fuerza de trabajo de La Laguna se conformaba por los siguientes grupos de trabajadores, todos ellos con derecho a dotaciones de tierra: peones permanentes o residentes, de 15,000 a 16,000; trabajadores temporales de los pueblos vecinos, 10,000; y trabajadores migrantes temporales, 5,000. Además, había todavía unos 10,000 esquiroleros que los hacendados habían llevado en 1936 (Liga de Agrónomos Socialistas, 1940: 57). Había, pues, unos 40,000 trabajadores listos para recibir tierras en una región que normalmente daba trabajo a unos 30,000.

Al final, las dotaciones ejidales totales alcanzaron 468,386 hectáreas, de las cuales 147,710 eran de riego (nominalmente). Esto significa que 31.2 por ciento del total de tierras agrícolas había sido concedida a los ejidatarios, porcentaje que incluía el 77.7 por ciento de las tierras de riego. El número de beneficiarios totalizó 38,101 ejidatarios (Whetten, 1948: 216-217).

En 1944, el 35.4 por ciento de los préstamos otorgados nacionalmente por el Banco Ejidal se asignaron a los ejidos de La Laguna, donde se localizaban sólo el 7.6 por ciento de todos los ejidos en esa época (Whetten, 1948: 216-217). Esto indica el grado de modernización de la agricultura lagunera, la cual requería ingentes inversiones de capital por parte de la institución estatal de crédito. También refleja el hecho de que los ejidos colectivos eran pieza fundamental del proyecto global cardenista de desarrollo capitalista. De hecho, la agricultura comercial en el sector reformado se concentraba en los colectivos. Aunque a escala nacional sólo el 14 por ciento de los ejidatarios que operaban con el Banco Ejidal estaban en los ejidos

colectivos, recibían el 57 por ciento de los fondos que en 1944 prestó el banco. Los colectivos se concentraban en cinco regiones: La Laguna, el valle de El Yaqui (en Sonora), Los Mochis (Sinaloa), Lombardía y Nueva Italia (Michoacán), y El Soconusco (Chiapas) (Whetten, 1948: 215). Otros colectivos productores de azúcar, como El Mante (Tamaulipas), Zacatepec (Morelos), y Atencingo (Puebla), eran financiados directamente por los ingenios azucareros a los que abastecían.

Para 1948 el gobierno había retirado el apoyo a los colectivos y montado un tremendo boicot a su éxito económico y fuerza política. El Banco Ejidal clasificaba los ejidos en tres categorías, con base en su capacidad para pagar los préstamos: "A", los ejidos de La Laguna que normalmente podían pagar los préstamos, 59 por ciento del total; "B", los morosos pero todavía solventes, 29 por ciento; y "C", los ejidos insolventes, 12 por ciento (Senior, 1958: 115). Dada en porcentajes, la evolución de los créditos concedidos a los colectivos de La Laguna durante los primeros años está representada en el cuadro 6.

CUADRO 6

Préstamos del Banco Ejidal a los colectivos de La Laguna, 1940-1961

<i>Año</i>	<i>% de préstamos</i>
1940	40.0
1944	35.4
1961	20.0

Fuente: Elaborado con datos de Eckstein (1970: 273) y Senior (1958: 115).

No obstante estar incompletas, estas cifras comienzan a darnos una idea de la manera como se retiró el apoyo oficial o se boicoteó a los colectivos.

Pueden actualizarse estas cifras de manera indirecta con información del Banrural, que indica que concedía préstamos a un número considerable de ejidatarios, una vez que desmantelaron sus ejidos colectivos y se sometieron como individuos a la férula del banco. Según las cifras del propio banco, durante la temporada primavera-verano de 1988 la institución dio financiamiento a poco más de 34,000 productores (es decir, 88 por ciento del número total de productores ejidales de La Laguna) que cubrían 76,619 hectáreas, canalizándose el 93 por ciento de estos recursos al cultivo de algodón. En 1992 se otorgó crédito a sólo 13,000 productores (33 por ciento del total de los productores ejidales) que cubrían 30,000 hectáreas, y los re-

cursos se canalizaron hacia la producción de granos básicos y otros cultivos distintos del algodón (Salinas de Gortari y Solís González, 1994: 14-15).⁸

El boicot oficial de los años cuarenta tan sólo agravó muchos de los problemas originales de la reforma agraria de La Laguna, los cuales eran de carácter tanto técnico como político. Esos problemas tienen que ver con:

1. una precipitada distribución de la tierra en forma de ejidos, sin suficiente planeación;
2. las barreras legislativas contra un programa completo de colectivización que permitiera el mantenimiento eficiente de la unidad productiva de las haciendas; y
3. la sobrepoblación de la región al momento de la reforma (Eckstein, 1966: 138).

La distribución de la tierra en cada ejido también fue muy difícil. Algunos tenían parcelas separadas entre sí por propiedades privadas. Además, la calidad de las tierras repartidas era muy heterogénea, especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de instalaciones de riego:

Algunos [ejidos] tienen casi 100 por ciento de su área en tierras de primera clase; otros tienen casi la totalidad de su área en tierras prácticamente inservibles desde el punto de vista agrícola. Algunos ejidos carecían de acceso a los diques de riego y a las carreteras... Al calcular el área total de tierras irrigables se cometieron errores graves, y se clasificaron como irrigables tierras que habían sido irrigadas sólo durante temporadas de crecientes fluviales extraordinarias (Senior, 1958: 91-93).

Haber sobreestimado la disponibilidad de agua para riego en ese momento tuvo un efecto desastroso para los ejidos, dada la estructura legislativa. Como a los hacendados se les permitía elegir las 100 hectáreas con que se quedarían, invariablemente escogían la tierra más fértil y que tuviera pozos e instalaciones. Además, se quedaban con toda la maquinaria agrícola. La consecuencia de esto es que los ejidos tuvieron que endeudarse rápidamente con el banco estatal para comprar capital fijo, a

⁸Estos autores adoptan una definición bastante amplia de la Comarca Lagunera, en la que incluyen 15 municipios en lugar de sólo nueve, como hace la mayoría de los autores. En su caso, 10 municipios son de Durango y cinco de Coahuila, mientras que en la definición más restringida sólo hay cuatro de Durango y cinco de Coahuila. Con esa definición, según el censo preliminar agrícola y agropecuario de 1991, "existen 41,842 productores rurales, de los cuales 38,555 son ejidatarios, 2,872 productores privados, y 415 productores mixtos" (Salinas de Gortari y Solís González, 1994: 12).

fin de mantener una actividad agrícola moderna. A la vuelta de unos años, gran parte de estas deudas se debían a la instalación de bombas para extraer agua del subsuelo, que era la única forma de conseguir agua adicional. El problema para los ejidos es que la irrigación con agua del subsuelo es 20 veces más cara que el riego por gravedad (Restrepo y Eckstein, 1975).

Los hacendados de la época posterior a la reforma tenían de entrada una ventaja relativa en tres aspectos fundamentales: irrigación, maquinaria y finanzas. En 1950, "66 por ciento de la tierra de los propietarios privados era irrigable mientras que sólo el 37 por ciento de la de los ejidos entraba en esa categoría" (Senior, 1958: 96). La distribución per cápita de la tierra irrigada por sistema de tenencia de la tierra era de 4.4 hectáreas en ejidos y 25.7 hectáreas en propiedades privadas. Pero estas cifras per cápita no deben llevarnos a soslayar el proceso de concentración dentro del sector privado. De los propietarios privados, el 5 por ciento tenía el 26 por ciento de las tierras privadas y el 14 por ciento poseía el 55 por ciento. Además, como Senior apunta correctamente, "incluso estos datos subestiman el grado de concentración porque no reflejan las *ventas simuladas* que ocurrieron a gran escala en vísperas de las expropiaciones e inmediatamente después" (1958: 96, las cursivas son del autor, G.O.). En efecto, hoy día existe un buen número de propietarios acaudalados en La Laguna, a consecuencia de haber comprado tierras a precios extremadamente bajos durante el gobierno de Cárdenas. También es ampliamente conocido que muchos hacendados se apresuraron a cambiar los títulos de sus tierras para "dividir-las" artificialmente entre sus descendientes y otros parientes cercanos para evitar las consecuencias de la reforma agraria. Este fenómeno de reconcentración de la tierra fue llamado más tarde "neolatifundismo" en la bibliografía mexicana sobre el tema (Stavenhagen *et al.*, 1968; Warman, 1975).

En los años setenta la concentración de tierras y recursos hidráulicos podía apreciarse en las siguientes cifras, publicadas en un periódico local de Torreón. Los ejidatarios controlaban prácticamente el 85 por ciento del agua fluvial (agua rodada), el 35 por ciento del agua por bombeo, y conformaban el 95 por ciento de los productores. Por otra parte, los propietarios privados controlaban el 15 por ciento del agua fluvial, 65 por ciento del agua por bombeo, y constituían el 5 por ciento de los productores. Además, el 5 por ciento de los productores, los propietarios privados, controlaba el 25 por ciento de las tierras irrigadas, en tanto que los ejidatarios, 95 por ciento de los productores, sólo controlaban el 75 por ciento de las tierras de riego (*El Siglo de Torreón*, 1o. de enero de 1977, p. 11). En promedio, pues, para 1985 los ejidatarios sólo tenían cada uno 1.7 hectáreas irrigadas

por el río y los pozos.⁹ El uso de agua del río, sin embargo, que era el recurso más barato, ha sido drásticamente restringido por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), dado el continuo déficit en los niveles de los mantos acuíferos subterráneos. En el siguiente cuadro se muestra una disminución tremenda desde un promedio de 2.8 hectáreas por parcela en 1936-1963 a una hectárea en 1984.

CUADRO 7

Evolución de la superficie promedio de cultivo de algodón y agua fluvial destinada a parcelas ejidales de La Laguna, 1936-1984

<i>Años</i>	<i>Superficie anual promedio por parcela</i>
1963	2.8
1964-1970	2.0
1971-1982	1.5
1983	1.3
1984	1.0

Fuente: Pucciarelli (1985: 57).

El Banco Ejidal y la desapropiación productiva

Ha habido tres épocas principales en la relación entre los ejidatarios y el Banco Ejidal (al que llamaremos el Banco): una durante el cardenismo e inmediatamente después, otra consolidada durante los años cincuenta y otra más que comienza en 1990 y culmina con la desaparición del Banco en la actual administración del presidente Fox. Aquí sólo nos ocuparemos con alguna amplitud de las primeras dos. La primera se caracteriza por márgenes considerables de autonomía de los productores directos ejidales, y la segunda se asemeja más a una agricultura estatizada. Sin embargo, como lo plantea Wilkie, el Banco ha sido determinante desde el principio:

La mayor parte de las transacciones del ejido se hacían a través del Banco Ejidal, el cual tenía que aprobar los gastos mayores, y toda vez que todos los préstamos para el cultivo se obtenían del Banco, *éste ejercía un control casi total sobre las decisiones financieras importantes* (1971: 43).

⁹Entrevista personal del autor con Enrique Vázquez, ex director general del Banco Agropecuario de la Laguna, 29 de octubre de 1985.

Había un jefe elegido encargado de planear y asignar todas las labores agrícolas. En los primeros años del ejido, el jefe dirigía toda la labor del campo y era una de las autoridades más importantes para el éxito económico de la comunidad. Sin embargo, él simplemente dirigía la ejecución de las decisiones previamente tomadas por la asamblea general del ejido. El tesorero del ejido pagaba semanalmente los salarios ("anticipos") a cada ejidatario e inspeccionaba los campos para ver si se había realizado el trabajo. Al principio, el problema más serio que tenían que enfrentar los supervisores era la motivación de los trabajadores. Pero ese problema dejó de presentarse luego de la subdivisión de las tierras ocurrida en 1944. Por consiguiente, se volvió menos importante el puesto de jefe de trabajo. Con la subdivisión de la tierra, los trabajadores se evaluaban ahora según la productividad de las parcelas que tenían asignadas.

El proceso de subdivisión comenzó permitiendo que cada ejidatario cultivara maíz en media hectárea o una hectárea. Más tarde, a cada miembro se le asignaba un número de hectáreas para el cultivo de algodón, de las cuales él era responsable. "El principal cambio que sobrevino con esta subdivisión de la tierra fue que los ingresos de los ejidatarios [...] se volvieron proporcionales a la producción de sus parcelas" (Wilkie, 1971: 57). El objetivo principal de reorganizar el trabajo era evitar el problema de los trabajadores menos productivos. Con la individualización parcial de las parcelas, el nuevo método de trabajo "recompensaba el esfuerzo y la capacidad individual para el riego y el cultivo del algodón" (Wilkie, 1971: 58).

Se presentaba también el desarrollo de un grupo "libre" de trabajadores "que competían por el empleo en el trabajo colectivo [que todavía subsistía]" (Wilkie, 1971: 46). Los "libres" eran aquellos trabajadores agrícolas que no tenían parcela ejidal pero vivían en el pueblo del ejido en una porción de tierra que les "prestaba" la asamblea ejidal. Algunos de los libres eran parientes de ejidatarios, mientras que otros eran trabajadores inmigrantes que habían pedido permiso para quedarse en el pueblo.

Aparte del trabajo individual dedicado a cada parcela, había muchas tareas que seguían siendo colectivas: algunas eran las de tipo administrativo que llevaban a cabo las autoridades elegidas y el jefe de trabajo; otras eran las de los conductores de camión, cuidadores de pozos, mecánicos, empleados de la cooperativa, los arrieros y el encargado de la escuela. Las más de las últimas tareas, es decir, las de índole no electiva, quedaban a cargo de los libres. "El trabajo no colectivo era realizado o dirigido individualmente por el ejidatario, y *el salario que recibía eran préstamos* ["anticipos" o adelantos en efectivo], que el ejidatario le pagaba al Banco Ejidal de la venta de algodón de su parcela" (Wilkie, 1971: 63; las cursivas son del autor, G.O.).

El éxito económico y político de los productores directos se volvió una amenaza muy grave para el Estado y la burguesía recién consolidada. De tal suerte que el Banco comenzó a promover el desmantelamiento de los colectivos en 1941. Hacia 1944, el ejido de San Miguel, por ejemplo, había subdividido todas sus tierras en parcelas permanentes asignadas individualmente a sus miembros. Para Wilkie, esta decisión no necesariamente significaba una actitud contraria al sistema colectivo por parte de los ejidatarios; parecía ser simplemente una reorganización del proceso laboral, para que la productividad individual pudiera compensarse más adecuadamente. Sin embargo, las principales decisiones políticas seguían tomándose por votación de la asamblea ejidal. Según Wilkie, los ejidatarios de San Miguel no valoraban el trabajo colectivo o individual como tal, "sino sólo en la medida en que uno u otro [método de trabajo] tuviera ventajas específicas y notorias" (Wilkie, 1971: 71).

Con todo, promover la subdivisión del ejido y métodos de trabajo individual era la táctica principal del Estado para debilitar la organización económica y política independiente de los productores directos de La Laguna. Esta interpretación fue rápidamente adoptada y difundida por la Unión Central:

La Unión Central ha denunciado a las autoridades bancarias por promover la disensión que conduce a la formación de varios sectores dentro de un ejido.... El trabajo individual de las parcelas ha hecho mucho más fácil tanto el robo de algodón como el tráfico ilegal de algodón no despepitado. Ha complicado mucho más la contabilidad tanto del Banco como del ejido (Senior, 1958: 114).

Las sociedades de crédito ejidal proliferaron con la subdivisión. Su estatuto legal confería grandes poderes al Banco, como el de dictar las normas internas de cada sociedad. Si bien el estatuto prevé también la posibilidad de una participación importante del ejidatario, poco a poco comenzó a imponerse un control burocrático y vertical (Rello, 1984). Ese funcionamiento dio como resultado un buen número de cambios estructurales en las relaciones sociales entre los ejidatarios, el Banco y otros trabajadores. El Banco se volvió el patrón virtual de los ejidatarios y éstos comenzaron a depender cada vez más de contratar a libres que hicieran su trabajo mientras ellos buscaban otros trabajos asalariados para sí mismos.

Fragmentación y decadencia de la economía ejidal

Como los ejidatarios de La Laguna habían adoptado decididamente la dinámica de la modernización, tuvieron que endeudarse mucho para comprar

maquinaria agrícola moderna después de la reforma agraria. Entre 1936 y 1950 los campesinos mexicanos aumentaron sus existencias de mulas en un 339 por ciento, al tiempo que en La Laguna el número de mulas disminuyó de 21,731 en 1940 a 9,195 en 1952. El número de tractores propiedad directa de los ejidos, sin embargo, exceptuando los de los centros de maquinaria, creció de cero en 1936 a 610 en 1952. Además, en 1952 había "141 cosechadoras, 506 bombas, 286 camiones, 155 automóviles, 452 remolques tirados por tractor y 461 de tracción animal, 2,078 sembradoras, 6 plantas de energía eléctrica, 4 despepitadoras y 2,624 caballos" (Senior, 1958: 124).

La fragmentación de las sociedades de crédito llevó, entre otras cosas, a subutilizar el equipo adquirido por miembros del mismo ejido. El proceso de fragmentación comenzó rápidamente después del cardenismo e hizo que los ejidos de La Laguna se parecieran a la mayor parte de los otros ejidos de México (que no eran colectivos), salvo que la fragmentación de La Laguna se dio en mayor grado. En 1940 había 296 sociedades de crédito con un promedio de 99 miembros cada una. Es decir que el Banco "servía" a 29,279 ejidatarios de un total de 38,000. En 1967 el número de sociedades de crédito había ascendido vertiginosamente hasta 1,182, con un promedio de 15 miembros cada una, y sólo servía a 17,316 ejidatarios de los 38,000 que había al principio (Landsberger y Hewitt de Alcántara, 1970).

Estos datos reflejan parcialmente el terrible deterioro que sufrió la economía ejidal de La Laguna. En 1967 habían ocurrido cambios muy desfavorables en cuanto a precios y costos del algodón. Ciertamente, 1954 fue el parteaguas en que los costos aumentaron mucho más rápidamente que los precios. El abismo entre los precios y los costos se agravó aún más para los ejidatarios en los decenios subsiguientes (Landsberger y Hewitt de Alcántara, 1970).

Pese a circunstancias tan adversas, los ejidatarios y el Banco siguieron dependiendo del algodón como principal cultivo comercial. Sin embargo, las razones de cada parte eran muy distintas. Para los ejidatarios, el algodón era el cultivo de trabajo más intensivo y el que les permitía "ordeñar" al Banco mediante "adelantos" (salarios) semanales en efectivo. Para el Banco, atenerse al algodón era la forma más sencilla de mantener el equilibrio social en una región potencialmente conflictiva (Rello, 1984).

El proceso productivo contemporáneo

Aunque mucho de lo que se ha dicho sobre el proceso laboral de La Laguna no ha cambiado, vale la pena echar una mirada al proceso productivo considerado en su totalidad hasta la vuelta del siglo XXI. Hace muchos años

dejaron de existir las asambleas de balance y programación, dado que se habían convertido en una mera fachada. Desde principios de los años noventa, el Banco estableció condiciones más estrictas para otorgar préstamos. Los grupos ejidales debían estar organizados según las normas del Banco si es que habían de conseguir crédito. Si los préstamos no se pagaban, el Banco tenía el derecho de quedarse con la cosecha y venderla para garantizar su pago. Conforme a su "plan operativo" que especificaba todas y cada una de las tareas del ciclo agrícola, incluidos los costos, el Banco tendía a reducir los préstamos a su mínima expresión, aun a costa de disminuir las labores de cultivo. El inspector de campo bancario venía siendo como el capataz de los ejidatarios.

A veces los ejidatarios no terminaban de preparar el suelo, dados los salarios extremadamente reducidos que se les asignaban en el plan operativo. Las semillas las imponía el Banco y eran producidas por otra compañía propiedad del Estado, Pronase, que a menudo proveía semillas de baja calidad. Lo mismo ocurría con los fertilizantes, producidos por Fertimex, compañía propiedad del Estado. Generalmente el Banco normalizaba el control de plagas y los plaguicidas llegaban a los ejidatarios con demora y en cantidades más bajas que las necesarias, lo que tenía repercusiones terribles en la productividad. Por ejemplo, los rendimientos por hectárea de los terratenientes privados, quienes tenían control sobre sus insumos, eran de 5 toneladas de algodón a mediados de los años ochenta, en tanto que los de los ejidatarios tan sólo alcanzaban 3 toneladas. El seguro agrícola, obligatorio para obtener un préstamo, se adquiría de otra compañía del Estado, Anagsa, y sólo cubría 70 por ciento de las pérdidas totales. La comercialización, a su vez, se realizaba por otra compañía del Estado, la Algodonera Comercial Mexicana.

En suma, los ejidatarios perdieron el control de su proceso productivo global, aunque mantuvieron cierto margen de decisión en el proceso laboral inmediato. Pero incluso en este nivel debían habérselas con el inspector de campo bancario que actuaba como capataz de los ejidatarios. Como lo expresó Rello, el Banco era el verdadero director de la vida económica del ejidatario. Era la base de una forma de organización de la producción muy semejante a una agricultura estatizada, controlada burocráticamente por los aparatos económicos del Estado (1986).

Rello argumentaba que a través de la "desapropiación productiva" el Banco privó a los ejidatarios de su propio fondo de acumulación. Para conseguirlo, extendió el proceso de desapropiación y control de la reproducción de la fuerza de trabajo. Así pues, el Banco controlaba tanto el tiempo necesario como el tiempo excedente de los productores directos; es decir, no sólo su

fuentes de excedente, sino también la fuente de su subsistencia. Además, debido a las políticas bancarias, la posibilidad de producir trabajo excedente casi se vio anulada. Por lo tanto, se puede deducir que lo que más preocupaba al Estado no era el control del producto excedente sino el control político de los ejidatarios a base de obstaculizar su fuerza económica.

Es necesario ocuparse con algún detenimiento de los mecanismos mediante los cuales el Banco llegó a controlar la reproducción de la fuerza de trabajo, pues nos dan la clave del tipo de relaciones sociales y de cultura regional que se desarrollaron en los ejidos de La Laguna. El Banco normalmente otorga dos tipos de préstamo, refaccionario y de avío. El primero es para inversiones a mediano y largo plazo en capital fijo, en tanto que el de avío es para capital circulante, principalmente salarios. Así pues, el avío es el instrumento principal que usaba el Banco para controlar la reproducción de la fuerza de trabajo y adoptaba la forma de anticipos o adelantos en efectivo. La producción de cultivos de autosubsistencia —maíz y frijol— estuvo prohibida por el Banco hasta principios de los años noventa. Esta prohibición respondía al hecho de que los productores directos comenzaron a distraer los fondos otorgados para el algodón hacia los cultivos de subsistencia. Incluso parte del riego se usaba para el maíz, los frijoles y la sandía, dado que todo el algodón cuando mucho serviría para pagar las deudas de los ejidatarios. Rello (1984) ha calificado esta práctica como de resistencia en contra de la imposición del Banco.

La situación del ejidatario frente al Banco es bastante ambigua. En cierto sentido recuerda a la del esclavo, en otros la del siervo feudal, pero también viene siendo como un simple trabajador asalariado que trabaja para el Banco del Estado. Esta ambigüedad se refleja en la “carta de liberación” que concede el Banco a los ejidatarios que desean dejar de operar con él. Antes de poder trabajar en otros cultivos u ocupaciones, el ejidatario debe obtener una “carta de liberación” del Banco. Los requisitos para obtenerla, dice Rello, están pensados para jamás concederla. Así pues, se mantiene a los ejidatarios atrapados en la red burocrática. Resulta muy sintomático el nombre que se da a los ejidatarios que trabajan fuera del Banco: “ejidatarios libres” o “independientes”.

Los ejidatarios que frente al Banco han perdido control sobre sus procesos laborales, también cayeron en la trampa de cierto paradigma tecnológico sumamente intensivo en el uso de insumos, muy costoso y, por ende, no muy redituable. En realidad, se quedan en esta red por falta de mejores opciones. Se trata de una red estatal con una doble trampa: la que significa la dependencia del banco oficial, normalmente única fuente de crédito para los ejidatarios, y el control monopólico sobre el agua fluvial para

riego que ejerce la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. El agua del río debe usarse para el algodón, pues el Estado había resuelto (hasta 1990) apoyar la industria nacional de los textiles mediante algodón producido en el país. El problema para los cultivadores de algodón es que, para apoyar a la industria, éste debe pagarse a precios internacionales, mientras que los costos de producción han subido tanto que apenas dejan margen para la ganancia.

Con base en un estudio realizado en La Laguna en 1984, Alfredo Pucciarelli (1985) estimó que el 80 por ciento de 43,811 ejidatarios conformaban los productores semiproletarizados que dependían del Banco. El resto se componía de lo que el autor llama campesinos medios y enriquecidos. Estos datos son congruentes con los presentados en el capítulo 4 con respecto a la región norte. Así es como Pucciarelli describe sociológicamente a los productores de La Laguna:

Ya no son campesinos en el sentido estricto del concepto, no planean ni controlan sus procesos de producción, no pueden fijar el destino de sus excedentes si acaso los tienen. La evolución natural del nuevo régimen los ha privado de su condición campesina, pero no los ha transformado en simples trabajadores asalariados. Forman parte de un universo en expansión de nuevos sujetos, socialmente híbridos, localizados en diversas regiones del país, una nueva forma de fuerza de trabajo en la agricultura controlada por el Estado que no ha recibido una denominación adecuada ni se ha estudiado todavía suficientemente (Pucciarelli, 1985: 48).

Una de las consecuencias de quitar a los campesinos el control de su proceso productivo es que ha surgido un síndrome de atrofia del campesino en tanto agricultor: se han vuelto muy dependientes de lo que el Banco decida hacer en cuanto a qué plantar, cuándo, cómo hacerlo, etcétera.

Como los créditos de avío o créditos a corto plazo se han vuelto salarios *de facto* para los "campesinos", éstos han perdido toda conciencia de pertenecer al campesinado y en cambio han desarrollado una cultura cuasiproletaria. Así, por ejemplo, luchan por aumentar la cantidad de los créditos de avío, los anticipos semanales que constituyen salarios virtuales, pero no los vinculan con aumentos de productividad de los cultivos que han dejado de considerar suyos. Por si fuera poco, como estos ejidatarios también han sido privados de cualquier conciencia de ser trabajadores independientes, por lo general encuentran formas de burlar al Banco. Entre ellas están el tratar de vender algunos insumos, o rentar su propia dotación de agua, o irrigar su milpa o su parcela de frijol en lugar del algodón, ahorrar trabajo,

etcétera, todo lo cual resulta en menores rendimientos de "sus" operaciones oficiales con el Banco. A su vez, esto agrava su situación de endeudamiento con el mismo.

Una forma en que los ejidatarios han tratado de oponerse al dominio del Banco ha sido mediante la diversificación hacia cultivos diferentes del algodón, para superar las limitaciones de agua que este cultivo les impone. La gran mayoría de los ejidatarios de La Laguna, más del 74 por ciento, todavía se especializaban en el algodón hacia finales de los años ochenta, con un 12.8 por ciento adicional con cultivos diversificados que incluían el algodón. El otro 12 por ciento se divide entre los especializados en alfalfa (4.79 por ciento) y los lecheros (7.83 por ciento). El cuadro 8 que abajo se muestra, con cifras de 1983, es representativo de casi todos los años setenta y de los ochenta.

CUADRO 8
Ejidatarios de La Laguna por tipo de actividad económica, 1983

<i>Tipo de actividad</i>	<i>Número de ejidatarios</i>	<i>Área promedio del cultivo (ha)</i>	<i>Total cultivado superficie (ha)</i>
Algodón	32,568 (74.4%) ^a	1.5	48,852 (64.4%) ^a
Alfalfa	2,098 (4.8%)	2.9	6,084 (8.0%)
Lácteos	3,432 (7.8%)	2.4	8,237 (10.8%)
Diversificados	5,613 (12.8%)	2.3	12,910 (17.0%)
Total	43,811	1.7	76,083

Fuente: Pucciarelli (1985: 54).

^aLos porcentajes no suman 100 debido a error de redondeo.

Luego de haberse abandonado el cultivo del algodón casi en su totalidad a principios de los años noventa, las proporciones reflejadas en este cuadro probablemente sean hoy nuevamente las reales. De la elevada cifra de 47,000 hectáreas dedicadas al algodón en 1990, La Laguna pasó a menos de 500 en 1992. El cultivo de granos básicos aumentó de 16,000 a 63,000 hectáreas en el mismo periodo. Este cambio en las pautas de cultivos no sólo se debió a las nuevas políticas del Banrural en cuanto a no financiar el algodón para privilegiar cultivos básicos, sino también al hecho de que el maíz y el frijol son hoy los únicos cultivos con precios subsidiados de garantía, los cuales fueron relativamente altos en los años noventa (Salinas de Gortari y Solís González, 1994: 10 nota).

Los únicos ejidatarios que han logrado eludir la red estatal en torno al algodón (un 26 por ciento) se han librado de las restricciones técnicas a las que el Banco somete a los cultivadores del algodón. Una de tales restricciones es que los ejidatarios pueden tener agua de riego por una extensión máxima de 1.5 hectáreas, lo que limita gravemente la producción. Con agua de bombeo, los productores diversificados o los que no producen algodón son capaces de irrigar un promedio de 2.4 hectáreas cada uno, o 60 por ciento más que los productores especializados en algodón. En estos casos, pueden diversificar su agricultura, o especializarse en alfalfa, que es muy redituable debido a la escasez regional de este forraje en medio de una pujante industria lechera, o bien pueden dedicarse a la producción combinada de alfalfa y productos lácteos. Estos últimos han adoptado también el paradigma tecnológico altamente modernizado del sector privado, el cual depende del uso intensivo de insumos (Poitras, 2000). Si bien los rendimientos son muy altos, también lo son los costos, y los márgenes de utilidad no son muy altos, aunque el ingreso absoluto sea comparable con el de los ejidatarios más prósperos que producen algodón (Pucciarelli, 1985).

Al comparar las productividades entre ejidatarios con parcelas de áreas muy semejantes, las principales diferencias se deben a estar asociados con el Banrural, lo cual produce los peores resultados. En cambio, los productores privados tienen los rendimientos más altos, seguidos por los "independientes" o ejidatarios liberados del Banrural (Pucciarelli, 1985).

Los costos para los ejidatarios lecheros son de cuatro veces y media los de los productores de algodón; pero alcanzan ingresos netos apenas comparables debido tanto a que los costos de producción son muy altos, como al control monopólico que ejerce la procesadora de leche sobre los precios de ésta: sólo hay una procesadora importante de leche en La Laguna: la compañía de leche LaLa (por "La Laguna"). Desde los años setenta, LaLa se ha vuelto una importante productora de leche en el país y uno de los principales proveedores de leche para la ciudad de México. Su producción da cuenta de cerca del 20 por ciento de la producción total de leche líquida en México (Otero, 2001). Por lo tanto, la producción lechera no representa una opción estable a largo plazo para los ejidatarios de La Laguna, principalmente por dos razones, una técnica y la otra social.

Técnicamente, la alfalfa consume más agua que el algodón, y éste es un recurso natural muy escaso en una región semiárida. Socialmente sería muy difícil romper el monopolio de la procesadora de leche para conseguir mejores precios. Y como están inmersos en el paquete tecnológico determinado por las grandes compañías transnacionales que suministran insumos agrícolas desde Estados Unidos, los costos no pueden más que seguir au-

mentando. De hecho, la situación de la escasez del agua en La Laguna plantea claramente que la industria lechera es insostenible ambientalmente.

Para los ejidatarios, la situación de los créditos cambió drásticamente con la introducción del neoliberalismo en 1990. De cerca de 80 por ciento de ejidatarios que obtenían créditos para el algodón en ese año, la proporción se desplomó a tan sólo 33 por ciento en 1992. La mayoría de los otros ejidatarios siguió recibiendo otros créditos ("crédito a la palabra" o préstamos bajo el compromiso verbal de pagar) del programa asistencial Pronasol, el cual se constituyó en la marca del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (Salinas de Gortari y Solís González, 1994: 14-15). La limitación de estos préstamos es básicamente que son muy reducidos para cubrir cualquier forma de gasto por inversión. El Banco Rural, por el contrario, operaba en los noventa sólo con ejidatarios y agricultores privados que estaban al corriente en sus deudas. En otras palabras, en consonancia con el neoliberalismo, hoy sólo los campesinos-empresariales y la burguesía agrícola son sujetos de crédito.

La organización de las clases en La Laguna

La historia de las organizaciones clasistas de los productores directos de La Laguna es la de un apabullante ataque y boicot por parte del Estado. Así pues, en esta región, de las tres variables que intervienen en el proceso de formación política de las clases, el Estado se ha convertido en el elemento dominante, tanto a partir de su fuerza represiva, como de su capacidad para la cooptación. El Estado no pudo tolerar la posibilidad del crecimiento autosostenido por parte de cooperativas democráticamente administradas y con considerable independencia económica y política respecto del mismo. Así pues, el Estado desplegó implacablemente su poderosa fuerza económica y política en contra de los productores directos. Puso al Banco en contra de la Unión Central y a veces incluso recurrió a las fuerzas policíacas armadas en contra de los trabajadores organizados. La Confederación Nacional Campesina (CNC), inicialmente democrática y representativa, fue confiscada por el Estado y convertida en un aparato corporativista estatal para el control político del campesinado. El resultado final fue una división gravísima entre las organizaciones agrarias de La Laguna, las más de las cuales se afiliaron al PRI, dentro del proyecto burgués-hegemónico, mientras que una minoría se quedó en organizaciones o alianzas de oposición o popular-democráticas.

La CNC nació en 1935 y al principio era verdaderamente representativa de los campesinos y trabajadores agrícolas, pese a que, para empezar, fue

creada por iniciativa del Estado. En efecto, ni la Liga Nacional Campesina (LNC) ni la Confederación Campesina Mexicana (CCM) consiguieron unificar a las organizaciones campesinas locales en 1935, precisamente porque trataron de hacerlo sin la aprobación, el consentimiento o el apoyo de Lázaro Cárdenas (González Navarro, 1968: 140). Cárdenas también se opuso a la iniciativa de Lombardo Toledano, quien quería organizar a los campesinos y trabajadores agrícolas dentro de la CTM, alegando que tal maniobra incubaría los gérmenes de la disolución y división que tendrían resultados letales para el "proletariado industrial" (Medin, 1972: 85). Así que ordenó al PNR (Partido Nacional Revolucionario, primera encarnación del actual PRI en 1929) llevar a cabo la unificación de los campesinos y trabajadores rurales, con base en la CCM, organización que propuso a Cárdenas como candidato a la Presidencia en 1933.

Como se recordará, la Unión Central nació *de facto* hacia 1939, en los "comités consultivos", todos los cuales se articulaban en el Comité Consultivo Central. Representaba a todos los ejidatarios de La Laguna y entre sus primeros resultados estuvieron: la desburocratización, la descentralización, la conciliación de los conflictos internos, la mejora de los servicios sociales, la elaboración de normas internas y el sistema de contabilidad. Pronto se formaron las Sicas (sociedades de interés colectivo agrícola) para controlar la compra y el uso de despepitadoras y maquinaria agrícola. La Unión Central organizó también una compañía de seguros agrícolas (llamada la Mutualidad Comarcana de Seguros Agrícolas).

La historia de la Unión Central se vinculó estrechamente a la del Banco y la CNC. Como lo ha expresado Rello, el Estado tenía dos posibles salidas en cuanto a los colectivos de La Laguna en los años cuarenta: o fortalecía los ejidos para hacerlos totalmente independientes del Banco o dejaba que se sometieran económicamente a éste (1984). Fue por la última solución, la burocrática, por la que optó el Estado. Según Rello, el Estado temía la posibilidad de que los ejidos obtuvieran independencia económica y un crecimiento sostenido al margen del control corporativista del Banco y la CNC.

El proceso no fue ni gradual ni rápido. Hubieron de pasar unos 13 años para que el Estado asumiera el control de la mayoría de los ejidatarios de La Laguna, luego de poner en marcha su boicot en los años cuarenta. Y la Unión Central sobrevivió hasta los años ochenta, aunque con un nombre diferente: Asociación de Sociedades Locales y Grupos Solidarios de Crédito Ejidal de la Comarca Lagunera, de R.L., 40-69, o simplemente la "40-69". El último número cambiaba según el calendario, y 40 es el año del comienzo formal de la Unión Central. Fue 1969 el año en que la organización

rompió con el Partido Comunista y se volvió una organización más estrictamente económica, independiente del Estado y autónoma respecto de cualquier partido político.

La influencia comunista en la Unión Central fue un factor decisivo para provocar el pánico del Estado. Al principio, varios de los puestos más altos dentro de la CNC local habían sido ganados por miembros del Partido Comunista en elecciones democráticas. Así, los dirigentes comunistas eran auténticos representantes de las aspiraciones y los intereses de los ejidatarios, como lo demuestran sus propuestas electorales. Landsberger (s/f) da, no obstante, una interpretación ligeramente diferente. En lugar de la filiación comunista del liderazgo como el factor decisivo en el ataque del Estado en contra de la Unión Central, este autor propone que fue simplemente un asunto de poder. En su opinión, el liderazgo bien pudo haber sido derechista, y el Estado de todos modos habría intervenido para monopolizar el control de la situación política regional.

Yo me inclino más bien por una interpretación ecléctica de este asunto. Rello y Landsberger probablemente extremen sus posturas, aunque ambos tengan parcialmente la razón. La filiación comunista se tomó como la excusa ideológica del Estado para justificar su ataque. Conforme avanzaba el decenio de los cuarenta, los gobiernos de Ávila Camacho (1940-1946) y de Miguel Alemán (1946-1952) se acercaron más a los Estados Unidos, y después de acabada la Segunda Guerra Mundial se puso de moda la retórica anticomunista. Pero quizá sería exagerado decir, como lo hace Rello, que la influencia comunista en la Unión Central fue el factor decisivo, ya que también en esa época el Estado mexicano contemporáneo estaba consolidando su poder.

En cualquier caso, la Unión Central se las arregló para constituir una organización económica y política poderosa, basada en la amplia participación en los mecanismos democráticos de toma de decisiones por parte de sus bases. Dicha participación comenzó a nivel del ejido, donde las decisiones importantes en cuanto a la producción y a la política se tomaban en la asamblea general.

La Unión Central se formó inicialmente para coordinar y promover principalmente los intereses económicos de los colectivos de La Laguna, mientras que la CNC original supuestamente atendía los intereses políticos. Casi tan pronto como Manuel Ávila Camacho asumió la Presidencia en 1940, sin embargo, la Unión Central fue acusada de desplegar tendencias comunistas. En 1943 se eliminaron los elementos independientes de la liga estatal de la CNC y se extendió la autoridad oficial desde el nivel nacional de la CNC hasta su nivel regional. "Se destituyó a las autoridades campesi-

nas originales de los comités regionales (algunos de los cuales eran miembros del Partido Comunista) y *se hicieron nuevos nombramientos sin elecciones*" (Landsberger y Hewitt, 1970: 39; las cursivas son del autor, G.O.).

En 1942 el Banco asumió el control de la Central de Maquinaria Agrícola, la despepitadora de algodón, una planta de energía eléctrica, los pozos de agua y otros elementos del proceso productivo agrícola. Éste fue el primer ataque económico importante contra la Unión Central, al cual seguiría la destitución de los dirigentes independientes de la CNC.

Subsecuentemente se destituyó a los dirigentes de la Unión Central de tres niveles de la CNC en 1943:

1. el nivel estatal de las "ligas de comunidades agrarias", nombre que adopta la CNC en este nivel;
2. la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, organización laboral de la CNC; y
3. los comités campesinos regionales.

Con esta purga sectaria, sólo los dirigentes más "leales" al nuevo gobierno conservador se quedaron en la CNC oficial. Esta organización se convertiría en el brazo político del aparato estatal en el campo, para satisfacer las necesidades electorales del Estado al tiempo que prestaba servicios de cabildeo limitados y débiles a los productores directos, a través de sus dirigentes corruptos y oportunistas impuestos desde arriba (Mackinlay y Otero, 2004).

El golpe de gracia a la Unión Central sucedió en 1947, cuando la CNC creó una "Unión Central" paralela con la aprobación y el apoyo oficiales. Pero esta unión nunca se constituyó de manera legal, pues ello habría requerido la aprobación mayoritaria de las asambleas generales de todos los ejidos. No obstante, la "Unión Central (CNC)" se las arregló para boicotear toda actividad económica emprendida por la unión original. Ninguno de esos ataques destructivos fue seguido por programas sustitutivos positivos. La CNC simplemente impuso un boicot destructivo (Landsberger y Hewitt, 1970: 41).

En 1950 la CNC tomó por la fuerza y otros métodos antidemocráticos el último bastión de la Unión Central: la Mutualidad Comarcana de Seguros Agrícolas, compañía de seguros que hasta entonces poseía y administraba la organización de ejidatarios. Hubo tres acontecimientos que condujeron a esta toma por parte de la CNC. Primero, cuando las elecciones estaban a punto de celebrarse en los edificios de la Mutualidad en Torreón, los ejidatarios encontraron las instalaciones rodeadas por la policía estatal. Segun-

do, cuando por fin pudieron celebrar las elecciones, únicamente la mitad de los electores llegó para votar por los titulares de la Unión Central, y 5 días después la CNC celebró una reunión “secreta” donde supuestamente los otros miembros eligieron a los candidatos de la CNC al comité ejecutivo de la Mutualidad. El tercero y último acontecimiento fue la toma física del edificio administrativo en que el dirigente de la Unión Central, J. Cruz Sifuentes fue apresado y sentenciado a 6 meses de cárcel (Landsberger y Hewitt, 1970: 43).

Conforme más y más componentes de la Unión Central eran tomados por gente de la CNC, sus recursos fueron siendo usados para los intereses políticos y personales de los dirigentes. Este proceso de expropiación de las organizaciones de clase de los productores directos entrañó otro fenómeno: la creación de un grupo social de líderes de la CNC que serían los contactos, o mediadores, entre el Estado y las bases. Estos cuadros desarrollaron relaciones clientelares con sus bases y personificaron lo que Roger Bartra (1978, 1993) llama las “estructuras de mediación” del Estado mexicano. En términos más subjetivos, estos líderes han sido parte constitutiva de lo que Mackinlay y Otero (2004) han llamado “élite burocrática”. Estos líderes designados desde arriba por parte de algún político, que no dirigentes electos por sus bases, por lo general se corrompían y establecían sus propias empresas agrícolas, a menudo disfrazadas de ejidos. Si bien estos líderes desempeñaron una función fundamental en el boicoteo de la Unión Central, se convirtieron en un problema para el Estado a finales de los años setenta, cuando éste intentaba combatir la crisis agrícola con medidas productivistas y no sólo mediante el control político (de esto se tratará también en la última parte de este capítulo).

En medio de ataques económicos y políticos sin interrupción, la Unión Central realizó un reordenamiento político de oposición a nivel nacional en 1948. Arturo Orona, su secretario general, junto con Jacinto López, formaron una coalición de grupos de oposición en torno al nuevo Partido Popular (PP) dirigido por Vicente Lombardo Toledano a escala nacional. López acababa de romper con la CTM, donde había sido jefe de asuntos campesinos. En 1949 Orona y López formaron la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM).

A pesar de que la Unión Central perdió su influencia mayoritaria entre los ejidatarios de La Laguna, al grado de que llegó a representar a menos del 10 por ciento a mediados de los años cincuenta, hoy día sigue disfrutando de mucho mayor respeto que la CNC. La “40-69”, como abreviadamente se le llama hoy, es una organización democrática e independiente con patrones de comunicación claros y efectivos entre los directivos y las

bases. Aunque en los años cuarenta la organización tuvo una actividad política considerable en nombre del Partido Comunista, ahora es la organización campesina políticamente menos activa en la región de La Laguna. Esta organización se concentra en los problemas económicos de las bases, aunque sus dirigentes, como individuos, siguieron militando en el Partido Comunista hasta 1969.

El objetivo básico de la "40-69" sigue siendo crear un sólido sistema cooperativo en La Laguna, que controle tanto insumos como productos en el proceso de producción. La organización siempre ha demandado la expropiación de todas las tierras agrícolas privadas de La Laguna para resolver el problema de sobrepoblación. De igual forma, demanda que se provea de toda el agua de riego al sector ejidal.

Aunque la organización no ha tenido éxito en muchas de estas demandas, ha mantenido cierta independencia económica respecto del Banco. La "40-69" ha tenido mucho éxito en la comercialización, por ejemplo. Por lo general ha conseguido los más altos precios del algodón para sus sociedades de crédito. Este hecho es "ampliamente reconocido entre los campesinos de cualquier filiación política en La Laguna..." (Landsberger y Hewitt, 1970: 85). En 1967 la Unión obtuvo financiamiento privado para adquirir una despepitadora de algodón para sus afiliados y se las arregló para vencer la oposición del Banco. Además, ha habido una alianza táctica con el sector privado en asuntos como el crédito, la oposición a los impuestos al algodón, la demanda de más energía eléctrica para las bombas de agua, etcétera. En otras palabras, muchas de las tácticas de la Unión no son dictadas por "la rígida adhesión a la ideología sino por las necesidades de su organización" (Landsberger y Hewitt, 1970: 86). Estos autores concluyen que la Unión "está mejor equipada para funcionar eficientemente *dentro del sistema político existente* que cualquiera de los comités oficiales de campesinos" (Landsberger y Hewitt, 1970: 87).

Por el contrario, la vida interna de la CNC casi no tiene ningún parecido con los mecanismos democráticos, y la comunicación entre sus representantes y las bases se mantiene al mínimo, excepto en la época de elecciones. "Ninguno de los informantes entrevistados, ya sean líderes o miembros del comité regional, pudo recordar, por ejemplo, la última vez que en su organización se celebró una asamblea general" (Landsberger y Hewitt, 1970: 78).

Después de 1942, la CNC se fue integrando cada vez más a la maquinaria política del partido oficial..., su liderazgo dejó de ser elegido por los campesinos y su función primordial [la de los comités regionales] fue cada vez menos la de articular las demandas campesinas. Los comités

regionales pasaron a ser más bien empleados a sueldo del partido político oficial, dependientes de políticos clave a nivel estatal en cuanto a sus nombramientos y dedicados a asegurar a esos políticos (o a sus candidatos) el apoyo político de los campesinos (Landsberger y Hewitt, 1970: 77).

Dado que la mayoría de los líderes de la CNC estaban en las nóminas del Banco u otras agencias del gobierno, los comités regionales “nunca trataron de promover la independencia económica de los grupos campesinos respecto de las oficinas gubernamentales a través de la formación de cooperativas regionales de campesinos...” (Landsberger y Hewitt, 1970: 81). Lo único que los ejidatarios conseguían de la CNC era la atención a las quejas en contra de las dependencias del gobierno. Sin embargo, el problema “siempre se manejaba como una *petición* [...], no como una *demanda*. Los comités no podían amenazar con sanción alguna si sus peticiones no eran atendidas” (Landsberger y Hewitt, 1970: 81).

¿Por qué, entonces, el 80 por ciento de los ejidatarios de La Laguna se quedaron en la CNC? Landsberger y Hewitt opinan que sobre todo debido al sistema clientelar que abarca a todas las dependencias gubernamentales y constituye una promesa de movilidad socioeconómica para los miembros más leales de la CNC (Landsberger y Hewitt, 1970: 82).

Control estatal y renacimiento de las luchas popular-democráticas y poscapitalistas

El gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) se inauguró en medio de una crisis de legitimidad del Estado mexicano. Habiendo sido secretario de Gobernación de la administración anterior, se le identificaba como autor intelectual y comandante de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Además, una manifestación popular en la ciudad de México sufrió una sangrienta represión a manos de un batallón paramilitar (conocido como “los halcones”) el 10 de junio de 1971. Marcó también el fin de un largo periodo de crecimiento en la economía mexicana, una vez que se habían hecho evidentes los signos de la crisis agrícola (véase el capítulo 3). Muchos activistas descontentos del movimiento estudiantil y popular de 1968 optaron por la estrategia de la guerrilla armada en busca de cambio social, mientras que otros se concentraron en la construcción de organizaciones de masas rurales o urbanas.

Para enfrentar la crisis de legitimidad, Echeverría combinó el discurso de “apertura democrática” con la enérgica represión del descontento más

radical. En 1973, cuando las invasiones de tierras proliferaban en varios estados de México, Echeverría asumió igualmente el discurso agrarista y populista para apaciguar el movimiento. Mi argumento es que tal discurso le fue impuesto por el creciente descontento de las masas, aunque el gobierno de Echeverría puso su sello propio a las formas resultantes de intervención del Estado. Resucitó la concepción del colectivismo para la agricultura, estableciendo mecanismos legales que la alentaran, pero al mismo tiempo aseguró el control estatal de los nuevos ejidos colectivos (Warman, 1980). Es decir, hacia mediados de su mandato, Echeverría se dio cuenta de que la política represiva de ninguna manera restauraría la legitimidad perdida del Estado mexicano. Por esto tuvo que ceder ante el movimiento agrario, pero imponiendo sus propios términos en cuanto a la organización estatista de los nuevos ejidos colectivos que se organizaron bajo su mandato.

Como ejemplo de este intento, describiré brevemente cómo se concibieron y pusieron en práctica las empresas ejidales de La Laguna en 1971. Estas empresas comenzaron como experimento piloto en la región, donde se estableció un total de siete. El artículo 6o. de su estatuto indicaba que el cuerpo administrativo invariablemente estaría presidido por el técnico administrativo, empleado del Banco que contaría con la asistencia de un contador y de los responsables de las diversas ramas administrativas. Además, en el artículo 16 se describen las funciones del "técnico administrativo":

- a) ser responsable de los aspectos técnico, productivo, económico, contable, organizativo, comercial y financiero [de la empresa];
- b) coordinar todas las actividades con el Banco, así como con las agencias que tengan relación con la empresa;
- c) escuchar la opinión de los socios [es decir, los ejidatarios -G.O.];
- d) acatar las disposiciones oficiales de sus superiores, salvo las que afecten el buen funcionamiento de la empresa;
- e) informar a los socios de todas las actividades de la empresa cuando el Banco lo solicite y al menos una vez al mes;
- f) asistir a las reuniones de los socios (citado en Aguilar Solís y Araujo, 1984: 23).

Evidentemente, las tareas arriba descritas suponían que el técnico administrativo fuera un "hombre orquesta" que ejerciera el control estatal. Como empleado del Banco, tenía que velar por los intereses del Estado.

Con todo, este proyecto ambicioso de control estatal habría de fallar. En San Miguel, las empresas sólo funcionaron unos cuantos años y ape-

nas llegaron a tener ganancias. Pronto apareció la corrupción entre los empleados bancarios y la desilusión entre los ejidatarios. A fines de 1985 una empresa colchonera tenía ya 5 años de haber cerrado y la fábrica de bloques de cemento había sido rentada varios meses a un empleado del Banco.¹⁰

Por lo tanto, en 1975 el Estado puso en práctica una iniciativa más importante para garantizarse el control de los ejidos colectivos nuevamente impulsados: la unificación de los tres bancos oficiales de crédito rural bajo el nuevo Banco Nacional de Crédito Rural, o Banrural. Esta medida fue acompañada de la promulgación de una nueva Ley General de Crédito Rural, cuyo propósito central era combatir el fraccionamiento de los ejidos: en gran contraste con la política del régimen de Miguel Alemán, ahora sólo los ejidos completos se consideraban como sujetos de crédito.

Irónicamente, pues, la inveterada tradición de boicotear a los ejidos fraccionándolos en varias "sociedades de crédito" daba marcha atrás. Había sido una política eficaz para dismantelar el poder económico y político de la Unión Central, pero también había creado un monstruo burocrático y terriblemente ineficiente. La nueva política entró claramente en conflicto con los líderes de la CNC, pues su clientela eran precisamente las múltiples sociedades de crédito a cuya proliferación ellos habían contribuido. Ahora todas estas sociedades tendrían que recentralizarse y tratar directamente con el Banco, sin la intermediación de los líderes.

El nuevo enfoque estatista y productivista encontró vigorosa resistencia en La Laguna, tanto por parte de los líderes locales como del gobernador del estado de Coahuila, Óscar Flores Tapia. Él había establecido estrecha alianza con los líderes para el control político del descontento agrario. Esta oposición grupal a las medidas federales se resolvió finalmente a través de la violencia. Varias autoridades importantes de agencias federales fueron golpeadas por los sicarios de los líderes en una fiesta, y los líderes más importantes fueron encarcelados a la larga bajo cargos de fraude. A Flores Tapia se le acusó de "enriquecimiento inexplicable" y se le destituyó de su puesto de gobernador del estado de Coahuila. Por si fuera poco, el Banco retiró todo el subsidio de la CNC.

Al mismo tiempo, a mediados de 1975, las tomas de tierras proliferaron en la región, así como las disputas laborales en las empresas agrícolas capitalistas. Comenzó a surgir un nuevo movimiento agrario en La Laguna.

¹⁰ Entrevistas personales del autor con Luis Ortega, 30 de octubre de 1985, que fue el primer "técnico administrativo" de las Empresas Ejidales San Miguel de septiembre de 1971 a agosto de 1972; y con Jesús Ortiz Morales, uno de los ejidatarios fundadores de San Miguel, 10. de Noviembre de 1985.

Varias granjas capitalistas se enfrentaron a trabajadores agrícolas militantes, la mayoría de los cuales eran hijos de ejidatarios. La mayor parte de estas disputas laborales se originaron en incidentes en que los trabajadores fueron heridos de bala, ya fuera por problemas financieros o simplemente porque querían organizarse en sindicatos en demanda de contratos colectivos.

La lucha más importante fue la que se dio en la propiedad llamada "Batopilas". Los dueños no habían pagado salarios en 10 semanas y querían despedir a los trabajadores para luego vender la propiedad. Pero los trabajadores se organizaron y estallaron la huelga el 27 de enero de 1976 (*El Día*, 1985a).

Esta lucha se transformó rápidamente de una disputa laboral en un movimiento agrario en demanda de las tierras y la producción colectiva autogestionaria. La huelga duró 4 meses, al cabo de los cuales se había convertido en un conflicto regional. Por su parte, el movimiento de poseionarios urbanos llegó a su clímax en las ciudades de Torreón, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, Coahuila. De extracción predominantemente rural, los poseionarios simpatizaron pronto con los trabajadores agrícolas y continuamente les enviaban alimentos, los ayudaban a distribuir volantes, y participaban en manifestaciones en los centros urbanos de la región. Muchos estudiantes y ejidatarios se sumaron a las acciones de solidaridad y en abril de 1976 los trabajadores agrícolas tomaron posesión de la tierra. Para entonces los patrones no daban señales de ceder a las demandas laborales, y ésta fue la razón de que la lucha se transformara en un movimiento agrario poscapitalista. En mayo el gobernador accedió a proceder con la expropiación de la tierra y a apoyar las peticiones de crédito por parte de los nuevos ejidatarios.

A finales de los años ochenta, los ejidatarios de Batopilas se habían vuelto productores colectivos ejemplares con una organización de la producción autogestionaria y democrática. Además, muchos otros ejidos siguieron su ejemplo: querían revivir la experiencia de la antigua Unión Central en la cual alguna vez militaron sus padres. También constituyeron la Coalición de Ejidos Colectivos de La Laguna, y se adhirieron a la organización nacional de organizaciones independientes de oposición: la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas, UNORCA, fundada el 6 de abril de 1985 (*El Día*, 1985b).

Sin embargo, Batopilas y los otros nueve ejidos de la coalición no son más que una pequeña fracción de los ejidos de La Laguna. La mayor parte de ellos siguen desintegrados o bajo el firme control de los aparatos económicos del Estado.

Conclusión

Los trabajadores agrícolas de La Laguna han sido los que más se acercan a la idea clásica del proletario, tanto desde el punto de vista estructural como desde el cultural, al menos a principios del periodo que nos ocupa: los agentes de clase eran trabajadores agrícolas que vivían predominantemente de su salario y cuyos objetos originales de lucha se centraban en demandas de tipo laboral (salarios y contrato colectivo). No es de extrañar que esos agentes de clase se comprometieran en la producción poscapitalista al obtener tierras en la forma de ejidos colectivos, pues estaban ellos acostumbrados a la cooperación capitalista antes del reparto, aunque las ganancias que generaban las acumulaban en forma privada los dueños de las tierras. Así pues, los productores directos estaban listos para propugnar una organización productiva democrática y al mismo tiempo autogestionaria.

CUADRO 9
Trayectorias de clase política y objetos de lucha en La Laguna

<i>Momento</i>	<i>Actores</i>	<i>Objetos</i>	<i>Resultados</i>
Momento uno 1935-1947	Obreros agrícolas	Salarios/contrato colectivo	Autogestión/ ejido colectivo
Momento dos 1947-1965	Productores colectivos no capitalistas	Defensa del colectivo y crédito para hacerse obreros-campesinos	Fragmentación, campesinización subordinación al Estado
Momento tres 1965-1975	Obreros-campesinos, algo proletarizados	Créditos y agua para empresas campesinas viables	Control estatal, ejidos individuales fragmentados, con líderes corruptos
Momento cuatro 1975-1990s	Semiproletarios bajo control estatal	Salarios, crédito, y más tierra	Control estatal, ejidos fragmentados, organización, poscapitalista en coalición ejidal

Fuente: Elaborado con el análisis de este capítulo.

Según aumentaba el poder económico y político de los productores colectivos de La Laguna, sin embargo, se convirtieron en el principal objetivo de ataque y boicot del Estado. Las políticas estatales pro-capitalistas de los momentos segundo y tercero (véase cuadro 9) tuvieron el efecto de transformar la condición estructural misma de los agentes de clase. Sus unidades cooperativas y autónomas de producción fueron gravemente fragmentadas, convirtiendo a los productores directos en trabajadores agrícolas dependientes del Estado y su red de líderes corruptos y oportunistas. Hacia el momento cuarto, sin embargo, el grueso de los ejidatarios de La Laguna se había convertido más claramente en un semiproletariado muy dependiente de los salarios (anticipos) del Estado.

Esta forma de proletarización estatista ciertamente no entrañaba una formación política popular-democrática salvo al principio, cuando los productores directos mantenían el control de su proceso productivo. Los cambios de la situación estructural de los agentes de clase provocados por el Estado dieron también origen a cambios culturales que modificarían sustancialmente los objetivos originales de la lucha. De hecho, los cambios estructurales en La Laguna entrañaban un viraje desde una cultura más bien proletaria fácilmente convertible en poscapitalista, a una cultura de tipo campesino enfocada en la producción individual. Sin duda, tal cultura campesina tenía una orientación mercantil más que de subsistencia, debido a que durante generaciones los productores directos habían estado fuertemente integrados a los ciclos comerciales capitalistas del algodón. Lo que explica este cambio cultural es el hecho de que los ejidatarios habían conservado cierta capacidad de decisión individual a nivel del proceso de producción inmediata. Así, por ejemplo, han surgido ciertas diferencias de producción individual entre los ejidatarios fortaleciendo las tendencias individualistas.

Cuando la Unión Central era todavía fuerte, se identificó con las políticas del Partido Comunista o del Partido Popular Socialista, dependiendo de la época. Esa identificación a veces dio como resultado que se usara la organización económica de los ejidatarios como un vehículo de los propósitos políticos del partido. Los efectos de estas prácticas fueron muy perjudiciales para la organización productiva de La Laguna. En primer lugar, la organización productiva tuvo que proceder a menudo conforme a consideraciones políticas, más que económicas, con consecuencias negativas para la productividad. En segundo lugar, una vez que estuvo clara la identificación entre los colectivos y el partido político de izquierda, los primeros se volvieron un blanco fácil cuando el Estado decidió golpear a las organizaciones de izquierda a pesar de que los colectivos eran por lo general unidades económicas muy productivas. Entonces, si bien

eran independientes del Estado, las organizaciones de clase no eran autónomas respecto del partido (ya fuera el PCM o el PPS). La importancia de esta diferencia entre independencia y autonomía ha sido debidamente subrayada en la bibliografía mexicana reciente sobre los movimientos agrarios (Moguel, Botey y Hernández, 1992; De Grammont, 1996a; Díaz-Polanco y Sánchez, 2003).

Como se adelantó en los capítulos 1 y 2, el Estado mexicano no tuvo empacho en ser inconsecuente con sus políticas agrarias nacionales de una región a otra. Durante el cardenismo las políticas eran generalmente no capitalistas en regiones como La Laguna, donde había un movimiento fuerte y militante. Todos los peones estaban organizados en sindicatos y conformaban una fuerza tremenda para detener la producción agrícola y, con la solidaridad de los trabajadores urbanos, la industrial. Por lo tanto, fue la verdadera fuerza de los productores directos de La Laguna lo que explicó el carácter predominantemente no capitalista de la intervención que inicialmente ejerció el Estado en ese sitio. No obstante, como veremos en el capítulo siguiente, donde la correlación regional de fuerzas favorecía una burguesía agroindustrial, el propio Estado cardenista no dudó en secundarla en contra de los productores agrícolas directos.

Capítulo 6

Atencingo: campesinado-empresarial y diferenciación social*

LA REFORMA agraria en México, como se vio en el capítulo 3, fue resultado de una de las revoluciones más importantes del siglo xx (1910-1920), la cual aparentemente (re)creó al campesinado (Wolf, 1969). En la industria azucarera, sin embargo, al igual que en otras agroindustrias (por ejemplo la del tabaco [Mackinlay, 1999]), el Estado tenía mayor interés en asegurarse el estricto control de la producción agrícola para su procesamiento industrial que en crear un campesinado. El resultado social de la reforma agraria en dichos sectores fue la virtual proletarización de los productores directos. En estos casos, el Estado se puso directamente al servicio de los grandes intereses industriales.

Paradójicamente, al abrazar el liberalismo económico a partir de mediados de los años ochenta, el Estado mexicano virtualmente emprendió una contrarreforma agraria que introduce las condiciones para que prospere cierto tipo de campesinado. Los cambios que contiene la nueva Ley Agraria de 1992 ponen de cabeza los principales postulados de la legendaria reforma agraria que realizó sus principales avances durante los años treinta. La nueva ley, resultado de revisar el artículo 27 de la Constitución mexicana, da por concluida formalmente la responsabilidad del Estado en cuanto a redistribuir las tierras. También hace posible la venta y privatización de lo que había sido el ejido inalienable y fomenta asociaciones entre capitalistas privados y ejidatarios (Barry, 1995; Cornelius, 1992; DeWalt, Rees y Murphy, 1994; Gates, 1993, 1996; y el capítulo 3 de este libro).

Para decirlo simple y llanamente, la paradoja histórica es que mientras la ya legendaria reforma agraria en realidad proletarizó a grandes masas de productores agrícolas directos, mientras que la actual “contrarreforma”

*Agradezco los generosos y solícitos comentarios de Marilyn Gates y Peter Singelmann, así como los que me hicieron cuatro dictaminadores anónimos de *Rural Sociology*, antes de la publicación de Otero (1998a), partes de la cual se incluyen en este capítulo. Horacio Mackinlay, Jaime Moisés Bailón y David Myhre me dieron comentarios igualmente útiles para Otero (1998b), escrito del cual también se usan algunas partes aquí.

ha sentado las condiciones para campesinizar cuando menos a una minoría de ellos. De hecho, si ese campesinado se desarrolla en la producción cañera, seguirá subordinado a las necesidades y los intereses de los propietarios de ingenios. Dada la naturaleza neoliberal de las actuales reformas, los productores directos se ven hoy forzados a asumir una responsabilidad mucho mayor que en decenios anteriores frente al proceso productivo en la agricultura; de lo contrario, corren el riesgo de ser desplazados del mercado de productores agrícolas (Otero y Singelmann, 1996; Chollett, 1995; Núñez Madraso, 1995). Además la nueva Ley Agraria establece las condiciones para adquirir —y vender— títulos individuales de propiedad y, con ello, para la reconcentración de las propiedades agrarias.

En este capítulo se examina el proceso de la formación política clasista de los cañeros de la región de Atencingo, localizada en el suroeste del estado de Puebla, junto al estado de Morelos, cuna de Emiliano Zapata, en el cálido y fértil valle de Izúcar de Matamoros. Mi exposición se basa en las pocas fuentes publicadas sobre la región, investigación de archivo, y observaciones de campo a partir de 1988, así como en una encuesta aplicada a una muestra representativa de los cañeros en 1995. Mi trabajo de campo se realizó durante estadías de un mes que tuvieron lugar en julio de 1988, junio de 1992, junio de 1994 y, finalmente, junio-julio de 1995. Se realizaron entrevistas estratégicas con ejecutivos y empleados de ingenios, dirigentes campesinos, ejidatarios, propietarios privados de tierras, autoridades locales, trabajadores de ingenio y dirigentes sindicales. La investigación de archivos se realizó en las oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria en Puebla. Se consultaron todos los archivos pertenecientes al ejido de Atencingo y sus anexos. Los nueve anexos del gran ejido colectivo con el tiempo se convirtieron en ejidos, cada uno en los siguientes pueblos: Atencingo, Colón, Jaltepec, La Galarza, Lagunillas, Raboso, Rijo, San José Teruel y San Nicolás Tolentino. La competente ayuda de Francisco Javier Gómez Carpinteiro, de la Universidad Autónoma de Puebla, facilitó la investigación en los archivos y la aplicación de la encuesta.

Gómez Carpinteiro y cuatro de sus discípulos más avanzados de antropología social de la Universidad Autónoma de Puebla aplicaron el cuestionario de la encuesta a una muestra aleatoria de 250 cañeros en los meses de junio y julio de 1995. Yo mismo entrené al equipo en las sutilezas de las preguntas de la encuesta y la producción cañera, y el propio Francisco había hecho investigación de campo en San José Teruel para su tesis de maestría (Gómez Carpinteiro, 1995).

Se tomó una muestra de 20 ejidos o comunidades de un total de 39 que abastecen de caña de azúcar al ingenio de Atencingo. Nueve de ellos eran

las comunidades que originalmente conformaban el Ejido de Atencingo y Anexos en 1938. Los nueve se incluyeron en la muestra, pues se consideró que las luchas en contra del ejido colectivo y en aras de convertirse en pequeños productores campesinos, por estar centradas en estos ejidos, pudieron haber originado ciertas diferencias en cuanto a orientación cultural y preferencias políticas. Los otros 11 ejidos se eligieron al azar de entre las restantes 30 comunidades cañeras. Una vez elegidas las 20 comunidades, se tomaron muestras aleatorias de ejidatarios de cada una, usando la nómina más reciente de productores de caña de azúcar en la región, proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las cifras obtenidas de cada comunidad fueron proporcionales a su representación de productores de caña de toda la zona, cuyo número asciende a 5,000. El tamaño de la muestra fue de 250 para obtener un error inferior a tres desviaciones estándares. La aplicación de cada cuestionario completo se llevaba casi 1 hora, con preguntas que iban desde la organización de la producción familiar hasta opiniones culturales y políticas. Una gran mayoría de productores se mostró entusiasta a participar en el estudio aportando sus puntos de vista.

La historia agraria y el medio cultural

La región de Atencingo ha sido rica en diversidad fitogenética y uno de los valles más fértiles, sobre todo propicio para la producción de caña de azúcar. Aunque dicha diversidad genética ha menguado considerablemente debido al monocultivo, la región sigue siendo una de las más productivas en caña de azúcar. El resto del estado de Puebla dedica gran parte de sus tierras al cultivo del maíz, típico de los campesinos de México. En el valle central de Puebla tan sólo, unas 50,000 familias campesinas producen maíz en aproximadamente 95,000 hectáreas. Así pues, este cultivo ocupa hasta el 80 por ciento de las tierras agrarias en el estado. De esta producción, menos del 40 por ciento de los productores directos vendían maíz fuera de sus propios pueblos en 1970 (Felstehausen y Díaz-Cisneros, 1985: 286). Ochenta y siete por ciento de las tierras laborables del estado son de temporal y el resto de riego. La propiedad de la tierra labrantía se concentra en un pequeño número de propietarios: 25 por ciento de la tierra se concentra en sólo 1 por ciento de las unidades de producción, mientras que el 37 por ciento se distribuye entre millares de ejidatarios con una superficie promedio de 3 hectáreas cada uno (Cortés Sánchez, 1981: 50-51).

Éste es el contexto más amplio de la región de Atencingo en el que enfocaremos nuestra atención: los ejidos de la región en relación con el ingenio azucarero capitalista localizado en el pueblo de Atencingo. William Jen-

kins, ex cónsul estadounidense en Puebla, que se había hecho de una considerable riqueza e influencia política en su puesto oficial y mediante ciertas inversiones ajenas a la agricultura, puso en marcha un complejo económico en el valle en 1921, cuando compró el ingenio y las tierras de la hacienda de Atencingo. A esto siguió durante principios de los años veinte su paulatina adquisición de todas las haciendas vecinas, localizadas en los pueblos mencionados arriba. Esto fue posible porque sus antiguos dueños eran económicamente débiles y estaban atemorizados por las presiones de la reforma agraria que resultaron de la Revolución. Jenkins comenzó a reconstruir el ingenio de Atencingo y otros ingenios anexos a las antiguas haciendas fueron desmantelados para trasladar sus equipos a Atencingo. Entonces Jenkins nombró a Manuel Pérez, español reconocido como el mejor agrónomo cañero de México, como administrador del complejo industrial. Pérez conservó su puesto hasta el momento de su muerte, ocurrida unos 20 años después. Con el tiempo, el ingenio azucarero se expandió hasta cobrar gran importancia en la economía nacional.

Durante los años veinte y treinta, crecieron las demandas populares por el reparto de tierra. Para entonces, los campesinos ávidos de tierras conformaban también el ejército de reserva de mano de obra para Jenkins. Cuando la fuerza de trabajo local resultó insuficiente, se despachó a los empleados del ingenio a reclutar en los pueblos cuadrillas de trabajadores eventuales.

Debido al exceso de mano de obra de la región, Pérez pudo reclutar fácilmente trabajadores eventuales externos, sustituir a los deficientes y someter a los ya empleados a condiciones de trabajo que en otras circunstancias habrían sido inadmisibles (Ronfeldt, 1973: 16).

La formación política clasista en Atencingo

Los principales grupos y clases sociales que intervienen en la producción de azúcar son los cultivadores de caña de azúcar, comúnmente llamados cañeros, los cortadores de caña, los obreros y empleados del ingenio, y los industriales. Los cañeros pueden ser ejidatarios, agricultores privados, o los propios dueños del ingenio que han integrado la producción industrial y la agrícola. En México, sin embargo, los ejidatarios producen el 70 por ciento de la caña de azúcar (71 por ciento en Atencingo), lo que pone de relieve la importancia de la nueva legislación sobre tenencia de la tierra. Hasta 1988 los cañeros fueron uno de los grupos relativamente favorecidos entre los beneficiarios de la reforma agraria. Como el azúcar ha sido considera-

da un elemento básico de la dieta popular, el Estado ha desempeñado una función central en el control de la producción de caña y su transformación industrial en azúcar. La relación entre los cañeros y el Estado llegó a ser de dependencia para aquéllos aunque con cierta reciprocidad: el Estado contaba con la lealtad política de los cañeros y éstos recibían ingresos bajos pero seguros (Singelmann, 1993; Otero y Singelman, 1996). Las reformas neoliberales de índole legal y política de mediados de los años ochenta han eliminado fundamentalmente esta relación recíproca, poniendo esencialmente en duda tanto la lealtad política al Estado como los ingresos otrora seguros de los cañeros y otros grupos campesinos (Barry, 1995; Gates, 1993, 1996; Otero y Singelmann, 1996, Singelmann, 2004).

Los cultivadores de caña han pasado por diversos cambios estructurales en los últimos decenios, desde una situación sumamente proletarizada, fuertemente dependiente de los ingresos salariales del ingenio y con casi ninguna autonomía en el proceso de producción, hasta su situación actual caracterizada por una clase de productores fragmentada y semiproletarizada en la que del 25 al 35 por ciento consiguen convertirse en campesinos empresariales. Dos fases intermedias constituyeron una experiencia efímera con la producción autónoma y cooperativa que acabó en confrontaciones entre los productores agrícolas y la administración del ingenio (1947-1952), y la fase de control estatal en que el gobierno designaba al administrador de la cooperativa agrícola (1952-1961).

Creación del proletariado agrícola "en sentido amplio"

En 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas preparaba un programa nacional de reforma agraria muy ambicioso, los varios miles de campesinos sin tierra que quedaban en la región de Atencingo manifestaron cada vez mayor impaciencia, militancia y resistencia. Como la mayoría de estos campesinos sin tierra vivían en pueblos que ya se habían entregado como dotaciones ejidales, las autoridades ejidales locales solicitaban ampliar los ejidos existentes o formar otros nuevos para darles cabida.

Las mejores tierras de la región de Atencingo eran propiedad de William Jenkins. Sin embargo, cuando los campesinos estaban a punto de conseguir que se escucharan sus demandas por estas tierras, Jenkins se asoció con su amigo, el gobernador del estado, quien intervino para convencer al presidente Cárdenas de que los trabajadores residentes en el complejo de Atencingo debían tener derecho a reclamar la propiedad. Su objetivo era controlar la producción de caña a través del ingenio, aunque tuviera que renunciar a la propiedad de la tierra. De manera por demás oportuna, no

sólo para Jenkins sino también para muchos otros propietarios de haciendas y plantaciones industrializadas de México, el 9 de agosto de 1937 Cárdenas promulgó nuevas leyes (las cuales habían sido aprobadas en 1934) que confirmaban y tipificaban los derechos de los peones residentes sobre las tierras que laboraban. Antes de esta ley, sólo los campesinos vecinos tenían derecho a recibir tierras, mientras que los peones residentes quedaban excluidos de los beneficios de la reforma agraria (Ronfeldt, 1973).

Además, para darle mayor atractivo al arreglo, Jenkins ofreció legar las tierras a sus peones y trabajadores, renunciando a recibir compensación por su propiedad. Por lo tanto, 8,268 hectáreas fueron asignadas a 2,043 de los peones residentes aptos que vivían en la zona de Atencingo y otras ocho localidades. La expropiación excluyó la máxima propiedad privada que Jenkins tenía derecho a conservar, unas 150 hectáreas en Atencingo. También se excluyeron 2,585 hectáreas ocupadas por construcciones o consideradas no aptas para el cultivo. La nueva legislación contenía un buen número de disposiciones que asegurarían el suministro continuo de materia prima para el ingenio de Jenkins. Todas las tierras tendrían que trabajarse de manera colectiva y sólo se plantaría caña de azúcar, rotándola con arroz cada 3 años. Los asuntos financieros y agrícolas del gigantesco ejido serían administrados por una nueva sociedad cooperativa. Aunque se suponía que esta cooperativa sería administrada por el ejido y sólo se admitieron ejidatarios como socios de la misma, al administrador del ingenio industrial se le confirió poder considerable sobre sus operaciones. Se le permitía, por ejemplo, elegir y designar al administrador de la cooperativa de ejidatarios (Ronfeldt, 1973).

Así pues, aunque muchos de los campesinos de esta región lucharon por la Revolución y la devolución de las tierras que habían poseído y siguieron siendo zapatistas fervientes, perdieron la batalla decisiva con Jenkins. Gracias a las relaciones políticas de Jenkins, los trabajadores menos revolucionarios y activistas del valle fueron los que obtuvieron las mejores tierras. Todos los puestos de liderazgo de la cooperativa, ya fueran por elección o designación, los ocuparon individuos leales a la administración del ingenio. En la práctica, por lo tanto, los ejidatarios de Atencingo siguieron siendo peones del ingenio. Como antes, su contratación seguía siendo incierta y no tenían derechos prácticos sobre el nuevo ejido colectivo de Atencingo y sus anexos. Vivían únicamente de sus salarios, puesto que no se les distribuyeron utilidades entre 1938 y 1947. Cualquier descontento era aplacado mediante la represión y no pudo surgir ninguna organización importante durante casi todo este periodo. Como esos productores directos eran ejidatarios y, por ende, tenían acceso formal a la tierra, Luisa Paré los llamaría "proletariado en senti-

do amplio" (1977). En otras palabras, en ese momento los cañeros eran proletarios disfrazados de campesinos cuyo proceso laboral era controlado por el ingenio azucarero capitalista.

En este periodo inicial (1938-1947), la intervención estatal se las arregló para producir un resultado político hegemónico-burgués por lo que hace a los cañeros. Como lo expresa De Grammont: "[...] después de la creación del ejido colectivo y, por lo menos hasta 1945, el ingenio tuvo una mejor situación que en los años anteriores pues el Estado prácticamente había acabado con su principal enemigo: los zapatistas" (1979: 206). Es decir, a los zapatistas les quitaron su bandera de lucha con la transferencia de la tierra a otros miembros de las clases subalternas rurales: los peones acasillados de Jenkins. Como a estos últimos no les cambió sustancialmente su situación inmediata, políticamente siguieron subordinados al proyecto hegemónico-burgués. Sólo unos años más tarde, con el surgimiento de un liderazgo democrático, estos productores directos plantearían una lucha de carácter popular-democrática.

Producción autogestionaria y democrática: un resultado efímero

En 1945, los ejidatarios comenzaron a hacer las siguientes demandas: dividir el ejido colectivo en nueve ejidos independientes (es decir, uno para cada localidad), creación de una nueva cooperativa controlada por los ejidatarios, y asignación interna de parcelas individuales; y que se concediera libertad a los ejidatarios para sembrar otros cultivos que no fueran caña de azúcar y arroz. Evidentemente, estas demandas pretendían crear una economía campesina independiente contra el dominio del capital industrial. No importaba que la posición económica de clase de los productores directos fuese la de un proletariado agrícola en sentido amplio. Sus demandas entrañaban un claro carácter campesino.

Así pues, la contradicción principal hasta 1945 se dio entre los ejidatarios y sus representantes en la sociedad cooperativa, quienes en realidad representaban los intereses del ingenio industrial. Una vez que en 1947 éstos fueron sustituidos por dirigentes que realmente representaban a los ejidatarios, la contradicción pasó a darse entre la cooperativa de ejidatarios y la administración del ingenio. En ese momento los ejidatarios asumieron el carácter de productores directos en cooperativa y trataron de defenderse del capital industrial. Habían dejado de ser obreros agrícolas asalariados para convertirse en productores de bienes en cooperativa (Paré, 1979b).

Esta situación produjo nuevas divisiones entre los propios ejidatarios. Una vez que fueron capaces de controlar el aparato administrativo de la

cooperativa, los dirigentes se percataron de los problemas que suponía la división en parcelas: podía debilitar a la cooperativa frente al ingenio, en caso de que éste tuviese que negociar directamente con cada uno de los 2,000 ejidatarios. La capacidad estructural de clase potencialmente derivada de la gran organización cooperativa ejidal se vería fragmentada.

De esta suerte, surgieron varios enfoques entre los ejidatarios y sus dirigentes, los cuales estaban estrechamente vinculados con las orientaciones culturales que prevalecían en la región. Uno de esos enfoques era oponerse a la división del ejido para conservar una posición sólida en su lucha contra del ingenio. Otro grupo de dirigentes sustentaba un enfoque semejante, pero los movía la posibilidad de convertirse en caciques a través del control de la cooperativa. Porfirio Jaramillo, democráticamente electo en 1947 como administrador de la cooperativa, mantuvo una política ambigua que reflejaba los otros enfoques de sus bases: propuso mantener un solo ejido dividido en parcelas individuales, pero explotarlo colectivamente en lo referente a la caña de azúcar y de manera individual en el caso de los otros cultivos. Un grupo diferente que obtenía beneficios del ingenio se opuso de manera sistemática a Jaramillo para poder seguir sacando provecho de la relación que hasta entonces mantenía. Otros estaban convencidos de la necesidad de parcelar el ejido y comenzaron a oponerse al gobierno de Jaramillo que ellos mismos habían elegido.

Así que, lejos de mantenerse unidos en su lucha contra el ingenio, ocurrieron múltiples divisiones entre los ejidatarios que difirieron la confrontación con el antagonista principal, debilitando su capacidad organizativa de clase. Todo esto, desde luego, tuvo mucho que ver con la preferencia cultural de la mayoría de los ejidatarios por volverse pequeños productores campesinos independientes, basados en la fuerza de trabajo familiar, más que miembros de una cooperativa o de un ejido colectivo. Carentes de una fuerte tradición democrática, pensaban que el ejido podría volverse, más que en la base de una lucha unificada, en una organización para ser controlados por parte del ingenio o de un patrón poderoso (Gómez Carpinteiro, 1995).

Durante la administración de Jaramillo, ciertos acontecimientos importantes reforzaron la orientación cultural campesina de los cañeros. Tras la cosecha de 1946-1947, se distribuyeron utilidades entre los ejidatarios por primera vez en los 9 años de historia del ejido. De 1946 a 1952 se hicieron importantes inversiones en maquinaria para independizar al ejido respecto del ingenio. Previamente el ejido tenía que rentar la mayor parte de los medios de transporte de la caña al ingenio, lo que suponía para éste otra forma de control. Además, el banco del gobierno reemplazó al ingenio como única fuente de crédito ejidal en 1948.

Otro acontecimiento crucial que tuvo lugar en el periodo jaramillista (1947-1952) fue la asignación de "parcelas económicas" a los ejidatarios: cada miembro recibía una parcela de una hectárea para que su familia pudiera producir cultivos diferentes de la caña de azúcar. Esto fue el resultado de la orientación campesina del proletariado agrícola de Atencingo (definido económicamente) y vino a reforzarla. Orilló también a los productores directos a la condición de semiproletariado, atrapado entre el ingreso salarial por la producción de caña y su ingreso a partir de las pequeñas parcelas que ahora controlaban. Los principales cultivos de estas parcelas eran el maíz y el frijol, sobre todo para el autoconsumo, lo que complementaba al ingreso salarial. Ocasionalmente se plantaban jitomates y otras verduras y legumbres, cuyos excedentes se vendían en el mercado local. La conversión de este proletariado en un semiproletariado relativamente desahogado y de fuerte orientación campesina marcaría las demandas de las luchas futuras en la región de Atencingo. Los productores directos se concentrarían siempre en resistir la proletarianización y tratar de volverse pequeños productores mercantiles independientes, o campesinos-empresariales.

En medio de los contradictorios objetivos de la administración de la cooperativa y su base social, la experiencia de la producción democrática y autogestionaria llegó a su fin después de tan sólo 5 años, en 1952. Pese a todos los esfuerzos de la administración democrática de la cooperativa, fracasaron las políticas financieras y de producción relativas a la caña de azúcar. Tal fracaso se debió principalmente al boicot sistemático por parte del ingenio, el cual exacerbó las divisiones internas del ejido. Ejemplo de los efectos de este boicot es que el ingenio dejó sin procesar la caña de azúcar y no pagó por ella como estaba previsto en el decreto de 1943. El resultado fue una disminución drástica de la producción azucarera por parte de los ejidatarios, quienes después de 1949 se dedicaron más bien a otros cultivos. En 1951-1952, la producción de caña había disminuido 50 por ciento (Ronfeldt, 1973).

Esta situación crítica llevó finalmente al Estado a planear la intervención directa para asegurar el suministro continuo de materia prima al ingenio. El 29 de enero de 1952, el presidente de México emitió un decreto en virtud del cual se creaba un comité reorganizador para supervisar la administración de Atencingo y sus anexos. El mandato principal de esta comisión, encabezada por el gobernador del estado, era designar al administrador de la cooperativa del ejido. El Estado, pues, apoyó al ingenio para hacer que los ejidatarios regresaran a su situación de trabajadores asalariados *de facto*, y para estimular las ganancias industriales. Como lo describe Ronfeldt, sin embargo, durante este periodo "[...] la comisión gubernamental reemplazó a la adminis-

tración del ingenio como blanco principal de una nueva lucha de oposición por el poder y la reforma (1973: 105)".

Un aspecto que Ronfeldt (1973) omite en su historia política de Atencingo (obra por lo demás excepcional) es la presencia del Partido Comunista Mexicano hasta la expulsión de Jaramillo por el Estado. Porfirio Jaramillo, miembro del PCM, fue reclutado del vecino estado de Morelos para encabezar a los ejidatarios de esta región.¹¹ Durante el tiempo en que Jaramillo fungió como administrador de la cooperativa (1947-1952), muchos ejidatarios de Atencingo se hicieron miembros del PCM, como había ocurrido en La Laguna y otras regiones con una agricultura predominantemente capitalista (Carr, 1986). Durante el régimen del presidente Miguel Alemán (1946-1952), en plena Guerra Fría, el enfoque de Jaramillo, que promovía soluciones democráticas y populares, difícilmente habría durado mucho. El gobierno de Alemán sistemáticamente boicoteó los ejidos colectivos con dirigencias socialistas o comunistas que proliferaron durante el gobierno de Cárdenas (Carr, 1986; Hewitt de Alcántara, 1978).

Un ejidatario del ex anexo de Lagunillas recuerda, no obstante, que en esa época "[...] había muchas células [unidad organizativa básica de un partido de cuadros] del partido [el PCM]. Todavía tengo el libro sobre los *Problemas del leninismo* con el que nos adoctrinaban". Ese ejidatario, habiendo sido comunista en la etapa jaramillista, hacia los decenios de los setenta y ochenta fue uno de los dirigentes principales de la agricultura individual en contraposición con la colectiva. De hecho, afirma haber sido el promotor del primer grupo individual en contra del colectivo de Lagunillas, una de las nueve localidades originarias. Además, en 1988 había defendido ya la idea de privatizar el ejido. En buena medida, la explicación de este cambio que sufrieron él y la mayoría de los ejidatarios en esta región se halla en las formas específicas de "colectivismo" que sufrieron antes y después de la experiencia jaramillista: al principio el colectivo era prácticamente un apéndice del ingenio, y luego se volvió una empresa cuasiestatal. Ambas formas distan mucho de la producción autogestionaria y democrática en que los productores directos tienen el control del proceso productivo. En todo caso, el resultado fue un conflicto entre el impulso de Jaramillo hacia este tipo de producción cooperativa y la aspiración cultural de la mayoría de los cañeros por convertirse en productores campesinos independientes. Como la salida popular democráti-

¹¹Esta información proviene de diversos ejidatarios fundadores entrevistados en distintas ocasiones desde 1988 (sus nombres estarían disponibles para otros investigadores). Ronfeldt (1973) recordó que la administración de Jaramillo fue objeto de sabotaje durante sus 2 últimos años, pero no mencionó la importante función que desempeñó la filiación comunista de Jaramillo.

ca era más el proyecto del dirigente que la aspiración de sus bases en esos momentos, no pudo consolidarse. Cuando este conflicto se agravó con la respuesta represiva del Estado, el resultado fue el firme control estatal durante casi 10 años.

Del control estatal al cacicazgo

La respuesta del Estado a la administración de Jaramillo fue enérgica, autoritaria y represiva. Impuso a dos administradores de la cooperativa que, a su vez, controlarían la mayor parte de los asuntos agrícolas y políticos de la región de 1952 a 1961. Aunque se distribuyeron ganancias entre los ejidatarios durante la primera administración, sistemáticamente se discriminó a los ejidatarios de la oposición y se fomentó el colaboracionismo. Esto fue posible a través de un sistema clientelar que estableció el primer administrador, quien también introdujo pistoleros como forma de control social. Porfirio Jaramillo y otros dirigentes del movimiento de oposición fueron asesinados durante esta administración. El ingenio en general se vio favorecido por el Estado en cuanto que tuvo un suministro creciente y sin interrupción de caña. Expresando su desacuerdo con el Estado, sin embargo, los ejidatarios se unieron al Frente Zapatista Nacional. Así pues, la intervención negativa del Estado en contra de los cañeros, a la larga tuvo como resultado que éstos tomaran una postura política de oposición, tal como se esperaba desde el punto de vista de la teoría de la formación política clasista aquí propuesta.

Después de que finalizaron los dos periodos de control estatal por presiones desde abajo, un ejidatario elegido desde las bases se hizo cargo de la administración, pero a la larga se convirtió en cacique. La historia de Atencingo en este periodo (1961-1970) fue de cada vez más faccionalismo, corrupción y violencia como forma de control, y de fenómenos económicos erráticos en la producción de caña. El principal protagonista de esta historia fue el dirigente neojaramillista Guadalupe Ramírez, quien pasó a ser el nuevo administrador de la cooperativa. Para los ejidatarios, el hecho de que él haya llegado al puesto simbolizaba en un principio el triunfo del movimiento de oposición en contra del control estatal. Las promesas de Ramírez durante su campaña electoral se centraban en la división del ejido, la parcelación de las tierras, y en derogar el decreto presidencial de 1952, el cual imponía el control del Estado. Este último objetivo se alcanzó inmediatamente al ser impuesto como condición para que los ejidatarios pudieran elegir al administrador de su cooperativa, pero las demandas más fundamentales fueron rápidamente soslayadas debido a múltiples obstáculos

legales y burocráticos. Por lo que hace a las filiaciones organizativas, Ramírez pronto rompió relaciones con el Frente Zapatista Nacional independiente, para unirse a la Asociación Nacional de Productores de Caña de Azúcar, miembro de la Confederación Nacional Campesina, afiliada a su vez al PRI gobernante.¹² De esta manera, el régimen de Ramírez siguió sirviendo al Estado y a los intereses industriales, sacando provecho de los beneficios del poder administrativo y del control sobre el sistema clientelar: la intervención positiva del Estado agravada por el liderazgo corrupto y autoritario tuvo un resultado político de tipo hegemónico-burgués.

El evidente triunfo de los ejidatarios al elegir a uno de los suyos para el puesto de administrador no pasó de ser una ilusión en cuanto al control real sobre el proceso laboral y los medios de subsistencia. Sobrevino entonces una nueva confrontación entre las aspiraciones de los ejidatarios y las de los dirigentes, pero a diferencia de la que se dio en el periodo de Jaramillo, esta vez el dirigente servía a la administración del ingenio y al Estado. Este resultado pone de relieve la necesidad de estudiar el papel del liderazgo en la formación política de las clases. Dependiendo del tipo de liderazgo, aun cuando al Estado se le arranque un triunfo desde abajo por parte de los productores directos, el resultado final de la lucha bien puede terminar siendo de carácter hegemónico-burgués. Este ejemplo pone de relieve la importancia de la interacción entre las determinantes que aquí se discuten: las culturas regionales, la intervención estatal, y los tipos de liderazgo. Pero, desde luego, el autoritarismo y la represión tienen sus límites y pronto generan la oposición de las clases subalternas, como veremos en seguida.

Los nuevos campesinos-empresariales, los proletarios y el semiproletariado

El dominio de Guadalupe Ramírez llegó a su fin en 1970, con la creciente presión de los cañeros en favor de que se dividiera el ejido y se parcelara la tierra. La autorización del gobierno para que se dividiera el gigantesco ejido,

¹²La CNC es uno de los pilares organizativos del PRI, al igual que la Confederación de Trabajadores de México (CTM), su contrapartida laboral, y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Ésta, en la cual se agremian maestros, burócratas y otros miembros de grupos urbanos, comprende también a "pequeños" propietarios de la que por muchos años se llamó Confederación Nacional de Pequeños Propietarios (CNPP). En contraste con la CNC, se supone que la CNPP agremia a los productores agrícolas no ejidatarios, que abarcan todo el espectro desde los pequeños propietarios campesinos hasta la burguesía agraria. Esta última, sin embargo, tiende a agremiarse en otras organizaciones de cabildeo (De Grammont, 1990; Mares, 1987). En 1993 la CNOP cambió su nombre por el de FNOC (Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos) y la CNPP pasó a ser la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR) que, conforme a la ley agraria de 1992, tiende a borrar la antigua distinción entre ejidatarios y pequeños propietarios.

unida a la expulsión de Ramírez de la administración de la cooperativa, fue un verdadero triunfo para los campesinos. Tendrían que pasar varios años, sin embargo, antes de que los campesinos fueran capaces no sólo de parcelar los ejidos sino de obtener también crédito individual para la producción de caña de azúcar y, finalmente, títulos de propiedad individual sobre las tierras que trabajaban. La división formal y legal del ejido en nueve ejidos, uno para cada una de las localidades que constituían Atencingo y sus anexos no tuvo lugar sino hasta finales de 1973 y principios de 1974. Pero antes habían prosperado las presiones para parcelar cada ejido entre sus miembros constituyentes. Esta lucha habría de crecer por el faccionalismo cada vez mayor en cada ejido, lo que contribuyó aún más a la transformación de su capacidad organizativa de clase, la cual había quedado latente (ejerciéndose a veces) en la posibilidad de la lucha unida con base en el gran ejido indiviso. A ojos de los ejidatarios el ejido colectivo había funcionado fundamentalmente como un instrumento del Estado para ejercer control sobre ellos más que como su propia capacidad de clase para velar por sus intereses (Gómez Carpinteiro, 1997).

El primer documento de archivo del parcelamiento de la tierra conforme a las “áreas de responsabilidad individual” dentro del sistema de producción colectiva se refiere a un grupo de campesinos del ex anexo de San José Teruel el 11 de junio de 1972. Está dirigido a la autoridad estatal de la reforma agraria, acusando a Guadalupe Ramírez y otros ex líderes de ordenar los trabajos de varios ingenieros que se encontraban dividiendo las tierras, siendo que la ley establecía que trabajaran de manera colectiva. El 10 de mayo de 1974, sin embargo, hubo una petición formal de varios ejidatarios de Lagunillas para formar un grupo independiente del ejido colectivo para trabajar según los lineamientos de la “responsabilidad individual”. Si bien organizar la producción conforme a lineamientos individuales era permitido por la ley, las autoridades gubernamentales dejaron claro que ello no equivalía a tener títulos individuales de propiedad agraria ni permitía a los ejidatarios obtener crédito individual. Así pues, la administración de las parcelas siguió siendo colectiva. No fue hasta 1983 cuando se otorgó crédito individual por áreas de responsabilidad individual (Gómez Carpinteiro, 1995). Aunque esas zonas se habían otorgado individualmente desde 1974-1975, los ejidatarios jamás recibieron dinero del proceso agrícola aparte de sus salarios. Recibían salario de peones y se quejaban de que se les hacían muchas deducciones por conceptos tales como festividades, campos deportivos, puentes, canales, etcétera.

Como las nuevas demandas se centraban en la producción y el crédito individuales, las protestas y agitaciones políticas de decenios anteriores se

disolvieron en mezquinas "grillas" políticas. La única lucha regional importante después de la división y el parcelamiento ocurrió en 1983, cuando todos y cada uno de los ejidatarios tuvieron que acatar el decreto cañero de 1979 que exigía a los cañeros afiliarse a cualquiera de las dos organizaciones del PRI que representaban formalmente sus intereses económicos. Mediante esta provisión, la cual se renovó en los últimos decretos cañeros hasta 1991, se forzaba a cada cañero a elegir entre la CNC y la CNPP (ambas filiales del PRI) para afiliarse política y económicamente. De esta manera, se impedía legalmente a los cañeros constituirse en organizaciones de oposición.¹³ A quienes no declaraban filiación alguna, cada ingenio azucarero les descontaba la cuota sindical correspondiente para repartirla entre las dos organizaciones del PRI de manera proporcional a la filiación regional total.

La CNC obtuvo en 1982 un crédito para la operación colectiva de la maquinaria agrícola pero, dada la fobia de los ejidatarios respecto del colectivismo, más del 70 por ciento de los cañeros de Atencingo optaron por afiliarse a la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios que en 1993 pasaría a llamarse Confederación Nacional de Productores Rurales. Resulta una ironía sintomática que los cañeros de Atencingo, en su mayoría, se afiliaran a la CNPP, pues la costumbre era que fueran sobre todo los pequeños propietarios privados quienes se afiliaban a la CNPP, como su nombre lo indica. Por otra parte, los campesinos supuestamente se identifican con la Confederación Nacional Campesina, que es a la que la mayoría de los ejidatarios regularmente se afilian. No obstante, la CNPP realmente no se dedica tanto a la organización política sino que funciona como una organización económica en que los dirigentes mantienen cierta distancia de la política y normas oficiales del PRI y están menos politizados que en la CNC o la CTM. Sin embargo, sigue siendo una organización afiliada al PRI.

La filiación política y económica de los cañeros de Atencingo refleja el hecho de que las aspiraciones de muchos son convertirse en campesinos-empresariales en lugar de ser campesinos de subsistencia o semiproletarios que se dividen entre el trabajo asalariado y la agricultura de subsistencia. Dada la producción dual de caña de azúcar, verduras, y otros cultivos los campesinos-empresariales de Atencingo han llegado a encontrarse en una situación económica más bien compleja. No constituyen una burguesía agraria propiamente dicha. Como productores de caña de azúcar, general-

¹³Esto no impidió que un buen número de agricultores se afiliaran a una organización neocardenista de la región después de las elecciones nacionales fraudulentas de 1988. En su mayoría, sin embargo, los agricultores conservan su filiación forzosa a una de las organizaciones oficiales, a las que utilizan más como instrumentos económicos que políticos.

mente contratan fuerza de trabajo de tres tipos: trabajadores “libres” que viven en las comunidades ejidales, es decir sin acceso a la tierra salvo en lo que se refiere a producir para un patrón a cambio de un salario; hijos de ejidatarios, los mayores de los cuales esperan heredar las propiedades ejidales; y trabajadores migratorios del valle y las comunidades campesinas de las tierras altas (Lara, 1979). Como pequeños productores mercantiles, sin embargo, los agricultores siguen teniendo al capital industrial como su principal enemigo en la producción cañera. Además, con la producción de verduras en las parcelas económicas, los ejidatarios no enfrentan ni a los trabajadores asalariados ni al capital monopólico. Más bien, el carácter de esta parte de su producción es típicamente el que tienen los pequeños productores mercantiles en un mercado competitivo. Esta verdadera estratificación que entraña el desarrollo de un estrato intermedio entre el ingenio industrial y el proletariado sin tierra impide la alianza entre ellos para enfrentar al ingenio capitalista. Además, los ejidatarios se benefician evidentemente de la explotación de los trabajadores asalariados.

A fin de cuentas, habiendo logrado dividir el ejido y parcelar las tierras, los agricultores cañeros se privaron efectivamente de la posibilidad de formar organizaciones de clase con base en los ejidos como capacidad estructural de clase (este concepto se discutió en el capítulo 2 de este libro). Las formas concretas en que los ejidos funcionaron para los ejidatarios durante la época del colectivismo generaron una tremenda fobia ante cualquier cosa que tenga que ver con esta forma de organización, a pesar de los indicios claros y ciertos de que la producción cooperativa es económicamente superior a la individual cuando está bajo el control de los propios productores directos.

Que la organización colectiva de la producción fue económicamente mejor para los ejidatarios se demuestra en los cuadros 10 y 11. Estos cuadros se basan en ocho de los nueve ejidos. Sólo San José Teruel siguió trabajando colectivamente como un grupo aislado. Los ejidos de La Galarza, Raboso, Colón y Rijo tenían cada uno dos grupos: uno colectivo y el otro individual; pero Atencingo, Jaltepec y Lagunillas se habían fragmentado más drásticamente en seis o siete grupos cada uno. Los cuadros, en los que se muestra el ingreso mensual promedio bruto y la productividad promedio por ejidatario, dejan bien claro dos cosas:

1. que en los ejidos donde había dos grupos, uno de ellos colectivo, este último invariablemente tenía mayor productividad (véase cuadro 10); y
2. que la productividad decreció a medida que iban proliferando los grupos dentro de cada ejido (véase cuadro 11).

Aunque la extensión promedio de tierra de cada ejidatario varía de uno a otro ejido, las diferencias en productividad también refleja las diferencias en calidades relativas de la tierra, de manera que San José Teruel, por ejemplo, con el mayor número de hectáreas, tenía la menor calidad de tierra. Por lo tanto, las diferencias en cuanto a índice de productividad se deben a muchas variables, entre ellas las diferentes etapas de los plantíos de caña. Sin embar-

CUADRO 10
Región de Atencingo: ingreso bruto mensual por cañero, por tipo de organización, zafra, 1987-1998^a

<i>Ejido</i>	<i>Superficie Promedio (ha)</i>	<i>Número de miembros</i>	<i>Ingreso mensual bruto (pesos corrientes, 1988)</i>	<i>Índice de productividad^b</i>
Teruel	4.0	144	738,725	33.56
<i>La Galarza</i>				
Colectivo	2.5	127	801,939	44.99
Individual	2.5	154	710,005	28.37
<i>Raboso</i>				
Colectivo	2.5	140	629,428	13.80
Individual	2.5	99	567,139	2.54
<i>Colón</i>				
Colectivo	4.0	107	664,646	20.17
Individual	4.0	30	462,339	-16.41
<i>Rijo</i>				
Colectivo	n/d ^c	53	1'020,887	84.58
Individual	n/d ^c	58	731,315	32.23
Atencingo ^d	2.2	332	483,476	-12.58
Jaltepec ^d	2.9	309	513,189	-7.21
Lagunillas ^d	2.8	441	418,362	-24.36

Fuente: Elaborado a partir de los siguientes documentos internos del ingenio de Atencingo, proporcionados por los miembros de su personal administrativo en 1988: *Padrón de Productores del Ingenio de Atencingo, S.A., Resumen General Diario de Caña Recibida en Báscula, Zafra 1987/1988*. Las cifras de los promedios de superficie en cada ejido fueron proporcionadas por el superintendente de operaciones de campo.

^a El salario mínimo en 1988 era de 240,000 pesos/mes.

^b Este índice se deriva simplemente de la diferencia porcentual entre el ingreso ponderado mensual de todos los cañeros en los ocho ex anexos de Atencingo y el promedio dentro de cada grupo ejidal, por tipo de organización. El promedio general es de 553,072 pesos/mes.

^c n/d = no disponible.

^d Atencingo, Jaltepec y Lagunillas se han fragmentado en cinco a seis grupos cada uno, véase cuadro 11.

go, desde mi punto de vista, tales diferencias de productividad se explican sobre todo por la forma de organización productiva. Así pues, desde el punto de vista económico, los datos de estos cuadros proporcionan un poderoso argumento a favor de la producción cooperativa. No obstante, debido a la fragmentación política interna, 1988 fue el último año en que hubo grupos colectivos en la región de Atencingo.

CUADRO 11

Atencingo, Jaltepec y Lagunillas: ingreso mensual bruto por cañero y por grupo ejidal, zafra 1987/1988^a

<i>Ejido</i>	<i>Superficie Promedio (ha)</i>	<i>Número de miembros</i>	<i>Ingreso mensual bruto (pesos corrientes, 1988)</i>	<i>Índice de productividad^b</i>
Atencingo	2.2	332	483,476	-12.58
Grupo núm.				
núm. 1		129	444,520	-19.63
núm. 1A		54	520,571	-5.88
núm. 2		93	543,886	-1.66
núm. 2 Colectivo		4	443,690	-19.78
núm. 3		42	425,460	-23.07
Jaltepec	2.9	309	513,189	-7.21
Grupo núm.				
núm. 1		137	548,940	- 0.74
núm. 1A		99	506,387	- 8.44
núm. 2		23	453,859	-17.94
núm. 3		27	455,401	-17.66
núm. 4		15	407,806	-26.27
núm. 5		8	199,338	66.96
Lagunillas	2.8	441	418,362	-24.36
Grupo núm.				
núm. 1		173	441,097	-20.25
núm. 1A		92	406,769	-26.45
núm. 1B		80	474,252	-14.25
núm. 2		66	361,925	-34.56
núm. 2A		25	293,730	-46.89
núm. 3		5	318,942	-42.33

Fuente: Elaborado a partir de los siguientes documentos internos del ingenio de Atencingo, proporcionados por los miembros de su personal administrativo en 1988: *Padrón de Productores del Ingenio de Atencingo, S.A., Resumen General Diario de Caña Recibida en Báscula, Zafra 1987/1988*. Las cifras de los promedios de superficie en cada ejido fueron proporcionadas por el superintendente de operaciones de campo.

^aEl salario mínimo en 1988 era de 240,000 pesos/mes.

^bEste índice se deriva simplemente de la diferencia porcentual entre el ingreso ponderado mensual de todos los cañeros en los ocho ex anexos de Atencingo y el promedio dentro de cada grupo ejidal, por tipo de organización. El promedio general es de 553,072 pesos/mes.

Si bien los productores individuales enfrentan hoy menos obstáculos por parte del Estado para controlar sus procesos de producción, el contexto general en el que habían funcionado en los decenios pasados ha cambiado sustancialmente desde mediados de los años ochenta, pero particularmente a partir de la privatización de los ingenios azucareros que comenzó en 1988. De hecho, el nuevo escenario supone un cambio fundamental en una de las variables que hasta ahora se han usado para explicar el carácter de las organizaciones políticas de las clases: la intervención estatal. Desde luego, el Estado sigue presente pero ante todo para hacer cumplir las leyes de la reforma neoliberal: una dinámica que se centra en el mercado.

Privatización y reestructuración de la industria azucarera

Como a mediados de los años setenta la mayor parte de los ingenios azucareros de México estaban al borde de la quiebra, el Estado inició un proceso de nacionalizaciones en virtud del cual llegó a poseer, en 1982, 54 de los 64 ingenios existentes. Fue ése un intento de preservar los empleos y establecer un control más estricto de la producción y distribución del azúcar. Tras la crisis que sobrevino en 1982, sin embargo, el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) puso en marcha una reestructuración profunda de la economía mexicana y su forma de insertarse en el capitalismo internacional. A partir de una estrategia de sustitución de importaciones en la industria, mediante una vigorosa intervención estatal con subsidios y proteccionismo, México adoptó un modelo orientado a la exportación y al adelgazamiento del Estado. Esto significó eliminar subsidios, privatizar empresas estatales y abrir las puertas a la competencia y la inversión extranjeras para promover la eficiencia y la productividad en la economía nacional (Otero, 1996a). La "elección" de privatizar la industria azucarera no sólo la tomó el gobierno de Miguel de la Madrid; fue también una condición que impuso el Fondo Monetario Internacional dentro del plan de ajuste estructural de 1986 para México (Singelmann, 1993). Otra de las razones fue el impresionante aumento de la demanda interna de azúcar, tanto por parte de los consumidores directos como de las industrias secundarias (productoras de pan dulce, caramelos, refrescos, etcétera).

Dicha reestructuración de la industria azucarera representa un cambio fundamental en las formas de intervención estatal (Otero y Singelmann, 1996). Desde 1953, la Financiera Nacional Azucarera, S.A., empresa paraestatal, financió la totalidad de la producción azucarera en

México para impedir que aumentaran los precios del edulcorante: los precios del azúcar no sufrieron cambios de 1958 a 1969, y fueron los más bajos del mundo (Igartúa, 1987: 25). Aparte de este subsidio al consumidor y a las industrias secundarias, los costos de producción también aumentaron debido a la gran ineficiencia y falta de incentivos de los industriales para renovar sus equipos. En un estudio realizado por Nacional Financiera sobre la eficiencia del equipo industrial de los ingenios azucareros se concluyó que, en 1969, sólo el 25 por ciento operaba con equipo moderno, 45 por ciento con equipo semiobsoleto y 30 por ciento con equipo totalmente obsoleto (Igartúa, 1987: 27). Esta situación de ineficiencia industrial pronto habría de repercutir en los agricultores cañeros, cuyos ingresos dependían en parte de cuánta azúcar extraían los ingenios de su caña de azúcar.

A mediados de los años ochenta, los cañeros estaban ya en condiciones de intercambio desventajosas con respecto a los productos industriales (García Chávez, 1992). Sufrían doblemente por el aumento de precios de los insumos y por la disminución relativa del precio de sus cosechas. Al mismo tiempo, la propia industria que en buena medida ya estaba en manos del gobierno, se estaba administrando según criterios políticos más que de eficiencia económica. El dilema del gobierno era enorme: tenía que promover la acumulación de capital en la industria azucarera y satisfacer, al mismo tiempo, las demandas de los agricultores cañeros por precios más altos para su cultivo, ofrecer edulcorantes a los consumidores domésticos a precios políticamente aceptables, mantener salarios y condiciones de trabajo aceptables para los obreros de los ingenios y, además, subsidiar los precios de las materias primas para las industrias secundarias. Por si fuera poco, la industria sufría de un alto grado de corrupción y burocracia excesiva para mantener los niveles de empleo. A fin de cuentas, la industria azucarera era un mal negocio para el Estado (Singelmann, 1993; Chollett, 1995; Flora y Otero, 1995).

Así pues, en un esfuerzo por aumentar la competitividad y la eficiencia, el gobierno mexicano comenzó a reprivatizar los ingenios azucareros en 1988. La intervención del Estado en la economía, nuevamente reducida, ha significado, entre otras cosas, la eliminación de la mayoría de los subsidios a los precios de la caña de azúcar y otros productos agrícolas. En consecuencia, se está redefiniendo la vieja alianza entre los agricultores cañeros y el Estado. Han dejado de existir los ingresos bajos pero seguros que los cañeros daban por descontado a cambio de su lealtad política al Estado y al partido dominante. Esta nueva situación plantea desafíos tremendos a los agricultores de la caña en tanto productores y a

Si bien los productores individuales enfrentan hoy menos obstáculos por parte del Estado para controlar sus procesos de producción, el contexto general en el que habían funcionado en los decenios pasados ha cambiado sustancialmente desde mediados de los años ochenta, pero particularmente a partir de la privatización de los ingenios azucareros que comenzó en 1988. De hecho, el nuevo escenario supone un cambio fundamental en una de las variables que hasta ahora se han usado para explicar el carácter de las organizaciones políticas de las clases: la intervención estatal. Desde luego, el Estado sigue presente pero ante todo para hacer cumplir las leyes de la reforma neoliberal: una dinámica que se centra en el mercado.

Privatización y reestructuración de la industria azucarera

Como a mediados de los años setenta la mayor parte de los ingenios azucareros de México estaban al borde de la quiebra, el Estado inició un proceso de nacionalizaciones en virtud del cual llegó a poseer, en 1982, 54 de los 64 ingenios existentes. Fue ése un intento de preservar los empleos y establecer un control más estricto de la producción y distribución del azúcar. Tras la crisis que sobrevino en 1982, sin embargo, el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) puso en marcha una reestructuración profunda de la economía mexicana y su forma de insertarse en el capitalismo internacional. A partir de una estrategia de sustitución de importaciones en la industria, mediante una vigorosa intervención estatal con subsidios y proteccionismo, México adoptó un modelo orientado a la exportación y al adelgazamiento del Estado. Esto significó eliminar subsidios, privatizar empresas estatales y abrir las puertas a la competencia y la inversión extranjeras para promover la eficiencia y la productividad en la economía nacional (Otero, 1996a). La "elección" de privatizar la industria azucarera no sólo la tomó el gobierno de Miguel de la Madrid; fue también una condición que impuso el Fondo Monetario Internacional dentro del plan de ajuste estructural de 1986 para México (Singelmann, 1993). Otra de las razones fue el impresionante aumento de la demanda interna de azúcar, tanto por parte de los consumidores directos como de las industrias secundarias (productoras de pan dulce, caramelos, refrescos, etcétera).

Dicha reestructuración de la industria azucarera representa un cambio fundamental en las formas de intervención estatal (Otero y Singelmann, 1996). Desde 1953, la Financiera Nacional Azucarera, S.A., empresa paraestatal, financió la totalidad de la producción azucarera en

México para impedir que aumentaran los precios del edulcorante: los precios del azúcar no sufrieron cambios de 1958 a 1969, y fueron los más bajos del mundo (Igartúa, 1987: 25). Aparte de este subsidio al consumidor y a las industrias secundarias, los costos de producción también aumentaron debido a la gran ineficiencia y falta de incentivos de los industriales para renovar sus equipos. En un estudio realizado por Nacional Financiera sobre la eficiencia del equipo industrial de los ingenios azucareros se concluyó que, en 1969, sólo el 25 por ciento operaba con equipo moderno, 45 por ciento con equipo semiobsoleto y 30 por ciento con equipo totalmente obsoleto (Igartúa, 1987: 27). Esta situación de ineficiencia industrial pronto habría de repercutir en los agricultores cañeros, cuyos ingresos dependían en parte de cuánta azúcar extraían los ingenios de su caña de azúcar.

A mediados de los años ochenta, los cañeros estaban ya en condiciones de intercambio desventajosas con respecto a los productos industriales (García Chávez, 1992). Sufrían doblemente por el aumento de precios de los insumos y por la disminución relativa del precio de sus cosechas. Al mismo tiempo, la propia industria que en buena medida ya estaba en manos del gobierno, se estaba administrando según criterios políticos más que de eficiencia económica. El dilema del gobierno era enorme: tenía que promover la acumulación de capital en la industria azucarera y satisfacer, al mismo tiempo, las demandas de los agricultores cañeros por precios más altos para su cultivo, ofrecer edulcorantes a los consumidores domésticos a precios políticamente aceptables, mantener salarios y condiciones de trabajo aceptables para los obreros de los ingenios y, además, subsidiar los precios de las materias primas para las industrias secundarias. Por si fuera poco, la industria sufría de un alto grado de corrupción y burocracia excesiva para mantener los niveles de empleo. A fin de cuentas, la industria azucarera era un mal negocio para el Estado (Singelmann, 1993; Chollett, 1995; Flora y Otero, 1995).

Así pues, en un esfuerzo por aumentar la competitividad y la eficiencia, el gobierno mexicano comenzó a reprivatizar los ingenios azucareros en 1988. La intervención del Estado en la economía, nuevamente reducida, ha significado, entre otras cosas, la eliminación de la mayoría de los subsidios a los precios de la caña de azúcar y otros productos agrícolas. En consecuencia, se está redefiniendo la vieja alianza entre los agricultores cañeros y el Estado. Han dejado de existir los ingresos bajos pero seguros que los cañeros daban por descontado a cambio de su lealtad política al Estado y al partido dominante. Esta nueva situación plantea desafíos tremendos a los agricultores de la caña en tanto productores y a

las uniones cañeras del PRI que desde principios de los años ochenta los habían “representado”. Como ya no pueden estar seguras de concesiones especiales por parte del Estado, las organizaciones cañeras buscan afanosamente nuevas formas de hacer política con sus agremiados. Al mismo tiempo, a 3 lustros de haberse reprivatizado los ingenios azucareros, la industria se ha concentrado notoriamente en unas cuantas corporaciones oligopólicas. La mayoría de los cañeros las consideran una nueva amenaza para sus ingresos. De hecho, en 2001 ya se habían acumulado tantas deudas en algunos ingenios que no podían pagar sus cuotas al IMSS, ni la caña a los cañeros. Paradójicamente, el gobierno de centro-derecha de Vicente Fox se vio en la necesidad de asumir el control de 21 ingenios en septiembre de ese año, con la promesa de reprivatizarlos en cuanto pusiera el Estado en orden sus finanzas. La aparente contradicción consistió, de hecho, en cargar las deudas de los industriales azucareros a los contribuyentes de México. Por tanto, la administración de Fox estaba siendo leal a esa clase, además de resolver el problema político que se había creado por la falta de pagos a los cañeros. Pero veamos cómo se desarrolló esta situación.

El ingenio de Atencingo fue uno de los primeros que se vendieron en 1988, en parte porque sus proveedores de caña cuentan con algunas de las mejores tierras del país. La planta industrial se vio agobiada por problemas de burocracia excesiva y corrupción, pero durante los 8 años previos a su venta se había instalado una nueva planta. Tan sólo esta inversión puede explicar en buena medida las grandes pérdidas que manifestaba el ingenio de Atencingo en los años anteriores a su privatización. La instalación de la nueva planta tuvo múltiples problemas técnicos y retrasos, por lo que se llevó un total de 8 años en lugar de los 2 que se habían programado.¹⁴

La venta del ingenio de Atencingo en sí puede considerarse como una ganga para sus nuevos propietarios: el gobierno quería darles un incentivo para incorporarlos a la reestructuración industrial. El valor en libros del ingenio era de 65.22 millones de dólares en 1988, pero se vendió tan sólo en 20.65.¹⁵ Además, la venta se arregló mediante un enganche de tan sólo el 10 por ciento de esta cantidad, con la diferencia a pagarse en 10 años. Los nuevos propietarios, sin embargo, tendrían que ser administradores

¹⁴Durante mi primera visita a Atencingo, pocos días después de haberse anunciado su venta, el personal administrativo del ingenio se mostró inusitadamente servicial. Durante varios días, prácticamente sin restricción alguna, tuve acceso a sus estados financieros, archivos de relaciones industriales, nómina de pagos, retiros y datos agrícolas. Tal apertura fue disminuyendo en las visitas sucesivas hasta desaparecer en 1995, cuando se habían desarrollado relaciones de mayor antagonismo con los cañeros.

¹⁵A falta de cifras en pesos constantes, es decir deflacionados, se dan estas cifras en dólares estadounidenses para dar una mejor idea de cuáles serían los montos actuales.

muy hábiles para enfrentar la peliaguda empresa política de reestructurar la industria en un sector sumamente conflictivo.

El Grupo Escorpión, nuevo dueño corporativo del ingenio de Atencingo, era el segundo productor de refrescos embotellados de México en 1988. Englobaba ocho compañías embotelladoras del centro y el sur de México, entre ellas la Embotelladora Metropolitana que produce Pepsi-Cola para la ciudad de México. Como esta industria es un importante consumidor de azúcar, el Grupo Escorpión decidió integrarse hacia atrás para controlar su materia prima.

Durante la primera reunión entre los nuevos dueños y los representantes nacionales y locales de la CNPP en julio de 1988, a la cual asistí como asesor técnico de los cañeros, aquellos hicieron un buen número de promesas que pueden ayudarnos a delinear el perfil de su enfoque gerencial. Dijeron, por ejemplo, que el 90 por ciento de los rendimientos de las 102 hectáreas del Campo de Abajo (terreno dedicado a la experimentación con nuevas variedades de caña) se dedicaría a inversiones sociales en la comunidad, como escuelas, instalaciones deportivas, etcétera. Afirmaron también que los gerentes locales tendrían autonomía total en sus decisiones, con una supervisión mínima por parte de las oficinas generales de la corporación. Esperaban expandir en 50 por ciento la caña procesada e introducir nuevas técnicas para producir directamente azúcar líquida, en vez de producir primero azúcar refinada y luego licuarla para la producción de refrescos. Además, se introduciría un sistema computarizado de contabilidad para proveer cifras claras a cada productor. Se ampliarían las oportunidades de empleo, pero el ingenio no podría ser el empleador principal de los trabajadores extra. La meta, ultimadamente, era hacer de la parte industrial de la operación la más eficiente de México.

Después de casi 10 años de esa primera reunión, hacia 1998 dos de las promesas más importantes que aún no se habían cumplido eran las relativas a las nuevas técnicas y a las inversiones en los proyectos sociales de la comunidad a partir de las utilidades del Campo de Abajo. Aunque el sistema de contabilidad computarizada ya se había implementado, se hicieron escasas inversiones en nuevas técnicas de producción. Además, 50 hectáreas del Campo de Abajo se utilizaron para construir viviendas para los trabajadores del ingenio, pero los cañeros no se han beneficiado con ello.

Al concluir la privatización de la industria azucarera en 1993, había ocurrido una gran concentración industrial. Sólo quedaban 50 de los 64 ingenios en funciones que había en 1988, y se esperaba que éstos se consolidaran en 25 (Aguilar, 1993). Hasta 2001, el Grupo Escorpión había sido

propietario de nueve ingenios y controlaba más del 30 por ciento de la producción azucarera de México, lo cual había surgido de las necesidades del conglomerado embotellador de Pepsi-Cola y su impulso de ganarle mercado a la Coca-Cola, su competidor más importante. Y parece que lo estaba consiguiendo hacia mediados de los años noventa. El Grupo Gemex (cuyas acciones se cotizan públicamente en la bolsa de valores de Nueva York), padre corporativo de Escorpión, era la franquicia más grande de Pepsi-Cola en el mundo por cuanto al volumen de ventas y la cobertura territorial (Varela y Villegas, 1993). Generaba 100 millones de dólares en ventas anuales tan sólo en el área metropolitana de la ciudad de México (Olguín, 1993). Coca-Cola de México destituyó a su presidente ejecutivo en 1994, en parte debido a que "[...] no consiguió apropiarse unos cuantos ingenios azucareros cuando se privatizó esa industria [...] Ahora la compañía se ve forzada a comprarle azúcar a los distribuidores de Pepsi que fueron más previsores" (*El Financiero Internacional*, 1994).

Para los cañeros, la reestructuración industrial significó un importante cambio en la manera de operar. De una situación en que gozaban de diversas garantías sociales por parte de un Estado paternalista, ahora tienen que luchar por sí mismos sin subsidio alguno frente a un comprador enorme y poderoso de su cultivo, interesado solamente en la maximización de ganancias para sí mismo. Si bien el Estado y los dueños anteriores del ingenio eran también grandes y poderosos, en ambos casos el Estado actuaba asimismo con criterio político para asegurar un mínimo de garantías sociales a los cañeros y su lealtad política.

La nueva situación confronta a los cañeros con desafíos y oportunidades económicas a la vez. Algunos de ellos saldrán adelante si adoptan un enfoque campesino-empresarial y cumplen con los nuevos requisitos de eficiencia. Los datos de la encuesta realizada en 1995 indican que en la categoría de campesinos-empresariales entrarán de 25 a 35 por ciento de los cañeros de la región de Atencingo (en otras regiones, probablemente menos). Sin embargo, la mayoría volverá a los cultivos de subsistencia u optará por vender sus tierras a sus vecinos más empresariales y por sumarse al mercado del trabajo asalariado. En seguida se presentan datos de algunos de los resultados de las distribuciones de frecuencia más importantes, relativas a las preguntas sobre los puntos de vista de los cañeros sobre el ingenio y su relación con éste, sus expectativas en el nuevo escenario mercantil y su orientación cultural.

Las preguntas tocantes a las relaciones entre los cañeros y la administración del ingenio revelan claramente la desconfianza por parte de aquéllos. Las preguntas sin respuesta en estos temas van desde 1.2 por ciento (3

de los encuestados) a 2.4 por ciento. En cuanto a la oportunidad con que el ingenio hace los pagos, el 57.6 por ciento de los cañeros declaró que generalmente se realizaban con demora. Según el 68 por ciento, la cantidad recibida en préstamos era insuficiente, en tanto que el 78 por ciento declaró que se liberaban más tarde de lo necesario. El pago o liquidación final llegaba tarde según el 87.2 por ciento. La verdad objetiva sobre esta última cuestión es que el pago se hizo tarde, por lo menos en 1995: se realizó cuando ya había transcurrido el periodo legal de gracia de 30 días posteriores al término oficial de la zafra (o cosecha de la caña de azúcar). Esta práctica se volvió consuetudinaria en muchos ingenios, hasta que el Estado tuvo que volver a tomar su control en 2001. El hecho de que no todos los entrevistados dijeran que el pago se hacía con retraso refleja probablemente que unos cuantos, menos del 13 por ciento, le tenían buena voluntad al ingenio o que estaban acostumbrados a recibir con demora sus liquidaciones, o a que no sabían de la obligación legal del ingenio en cuanto a tener que pagarles de manera oportuna.

A la pregunta general, “¿confía usted en la nueva administración del ingenio?”, 47.6 por ciento respondió “menos que antes” y, además, el 90.8 por ciento consideró que la caña no se pesaba con exactitud al momento de entregarla al ingenio. Pese a tal falta de confianza en el ingenio, los cañeros siguen cultivándola. Las principales razones de esto tienen que ver con que este cultivo proporciona la mayor seguridad y que sólo con él los cañeros pueden conseguir crédito para sus cultivos. Estas dos razones explican el 78.6 por ciento de las respuestas a por qué los agricultores se apegan a la caña de azúcar (el 43.6 por ciento aduce “un ingreso más seguro”, y el 25.6 por ciento afirma que “pueden conseguir crédito”).

La opinión de los cañeros es de lo más pesimista con respecto a la privatización del ingenio y al decreto azucarero de 1991 que exige mayor productividad y eficiencia (tanto de los industriales como de los agricultores). A la pregunta de si los cambios benefician a los cañeros, el 85.6 por ciento respondió “no”, el 6 por ciento “sí” y el 8.4 por ciento no respondió. Otra pregunta sobre el mismo asunto suscitó una respuesta muy semejante. La pregunta era: “de los efectos positivos y negativos de los cambios recientes (previamente descritos), ¿cuáles serán los más duraderos?” El 83.6 por ciento respondió que “los negativos” mientras que sólo el 12 por ciento dijo que “los positivos”, con 4.4 por ciento de abstenciones.

Al preguntarles si la nueva situación podría traer consigo nuevas oportunidades, las respuestas de los cañeros no fueron tan pesimistas. A este respecto se hicieron varias preguntas redactadas de manera diferente, pero

obtuvieron las mismas respuestas. Éstas se resumen en el cuadro 12. Aunque estos resultados tienden a estar divididos, al menos una proporción considerable de los entrevistados piensa que también habrá oportunidades aparte de desafíos y nuevos riesgos. Poco más de la mitad de los cañeros no cree que exista riesgo de perder sus tierras, pero más de un tercio (los que respondieron "sí" o "tal vez") considera que sí existe tal peligro.

CUADRO 12
Opiniones de los cañeros sobre nuevos desafíos y oportunidades

<i>Pregunta o tema</i>	<i>No</i>	<i>Sí</i>	<i>Quizás</i>	<i>No sabe</i>	<i>Sin respuesta</i>
¿Hay nuevas oportunidades?	45.6	32.4	7.6	7.2	7.2
¿Hay nuevas dificultades?	22.0	62.0	2.4	3.2	10.4
¿Hay nuevos riesgos?	37.6	36.8	2.4	7.2	15.6
¿Hay riesgos de perder la tierra?	50.8	26.0	8.0	8.8	6.4

Fuente: Encuesta a cañeros de la región de Atencingo, 1995.

Otra pregunta sobre las oportunidades y riesgos tuvo un conjunto ligeramente diferente de respuestas posibles, con resultados muy semejantes a los arriba expresados. La pregunta fue: "¿Es realista el nuevo programa del gobierno que espera que los campesinos se conviertan en productores empresarios?" Las respuestas se presentan en el cuadro 13.

CUADRO 13
¿Es realista que el gobierno espere el desarrollo de empresarios-campesinos?

<i>Respuesta</i>	<i>Número</i>	<i>%</i>
No	113	45.2
Quizás	75	30.0
Sí	27	10.8
No sabe	17	6.8
Sí, con ayuda del gobierno	13	5.2
Sin respuesta	5	2.0
Totales	250	100.0

Fuente: Encuesta a cañeros de la región de Atencingo, 1995.

La identidad es un indicador importante de la orientación cultural y se relaciona con las estrategias productivas que probablemente adoptarán los agricultores de la caña. Se hizo una pregunta directa sobre la identidad y se dio a los entrevistados varias opciones de respuesta. También podían responder con sus propias palabras para expresar su identidad. Los resultados fueron los siguientes: el 55.6 por ciento se consideraba simplemente "campesino", el 16.8 por ciento, "trabajador", el 6.4 por ciento, "campesino-empresario", el 2.4 por ciento, "arrendatario", y el 17.6 por ciento señaló "otras" categorías que abarcaban las de "ejidatario", "productor", "propietario", y "agricultor". Las preguntas sin respuesta representaron únicamente el 1.2 por ciento (o tres entrevistados).

Una de las preguntas sobre identidad era: "¿quién tendrá más oportunidades de éxito en la nueva situación?" Las respuestas aparecen en el cuadro 14, donde es claro que una proporción considerable de los cañeros de Atencingo, 39.2 por ciento, considera que lo más importante es invertir el capital propio para enfrentar con éxito las nuevas oportunidades. Muy cerca le sigue un aspecto relacionado de gran importancia, con el 34.4 por ciento: "contratación de mano de obra" como factor para el éxito. Estos dos aspectos (73.6 por ciento) son ingredientes fundamentales en la producción de una clase de campesinos-empresariales. El indicio de que son pocos los de la región de Atencingo que se pasarán a la producción de subsistencia (por elección propia) es que únicamente el 6 por ciento respondió que "los que usan sus cultivos para autoconsumo" tendrán éxito.

CUADRO 14

Tipo de productor con mayores oportunidades de triunfar en el contexto actual

<i>Tipo de cañero</i>	<i>Número</i>	<i>%</i>
Los que inviertan más capital	98	39.2
Los que contraten más trabajadores	86	34.4
Los que inviertan más con crédito	48	19.2
Los que usen sus cultivos para el autoconsumo	15	6.0
Los que vendan sus tierras	1	0.4
Sin respuesta	2	0.8
Totales	250	100.0

Fuente: *Encuesta a cañeros de la región de Atencingo, 1995.*

La pregunta representada en el cuadro 15 adopta el punto de vista opuesto al de la anterior: "¿cuál enfoque sobre el cultivo forzará más probablemente a los agricultores a abandonar el cultivo de la caña de azúcar?" Está muy claro que la mayoría considera que el reducir la inversión laboral de la familia sería una forma segura de fracasar en este negocio, lo que pone de relieve el carácter doméstico, campesino de la operación. Curiosamente, el atenerse al crédito también es considerado por más de la cuarta parte de los entrevistados como un riesgo que puede acabar en el abandono del cultivo de la caña de azúcar. Y digo "curiosamente", porque el 100 por ciento de los ejidatarios cañeros han dependido por décadas del financiamiento del gobierno o alguna otra institución bancaria (por conducto del ingenio).

CUADRO 15

Tipo de productor con mayores probabilidades de dejar el cultivo de la caña

<i>Tipo de cañero</i>	<i>Número</i>	<i>%</i>
Los que inviertan menos trabajo familiar	113	45.2
Los que dependan más de los créditos	68	27.2
Los que se enfoquen en cultivos de autoconsumo	39	15.6
Los que contraten más trabajadores	24	9.6
Los que inviertan más capital	5	2.0
Sin respuesta	1	0.4
Totales	250	100

Fuente: *Encuesta a cañeros de la región de Atencingo, 1995.*

Desde el punto de vista político, los cañeros siguen atrapados por la única opción legal de afiliarse a las uniones del PRI. Con todo, estas organizaciones, a su vez, se enfrentan a desafíos sin precedentes en lo que hace a controlar y conservar a sus agremiados en medio de las políticas neoliberales del Estado que les impiden dar a los agricultores mayor apoyo a cambio de su filiación. Esto es válido especialmente para la CNPP, cuyos miembros siempre se han interesado más en el desempeño económico que en las ventajas políticas que les ofrece el Estado. Por lo tanto, la continua imposición de reformas neoliberales generará una incapacidad cada vez mayor de las organizaciones sindicales para controlar a sus agremiados (Singelmann, 2004). De ahí que es seguro que nuevas luchas de oposición y de tipo

popular-democrático surjan en el campo mexicano, como de hecho ha estado sucediendo a partir de 2002.

Si esto es válido para la industria azucarera, lo es aún más para la mayor parte de los otros sectores de la agricultura que han tenido una relación menos íntima y relativamente menos favorecida con el Estado. Esto se demuestra por la aparición en 1993 de El Barzón, movimiento de deudores rurales integrado por agricultores pequeños y medianos. Este movimiento social de casi un millón de miembros ha expandido sus bases en un 50 por ciento con la integración de los pequeños y medianos deudores urbanos (Rodríguez Gómez y Torres, 1994; *La Jornada*, 1995, González, 2004). La insurrección chiapaneca de enero de 1994 no ha sido sino la más radical de las nuevas luchas que han de surgir en el campo mexicano a raíz de las reformas neoliberales (Collier, 1994; Harvey, 1996a; Hernández Navarro, 1995; Gilbreth y Otero, 2001).

Recapitulación teórica

El propósito de esta sección es discutir teóricamente el material presentado en este capítulo, confrontando la teoría que se ofrece en este libro con las posturas campesinista y proletarista ya establecidas. Esta argumentación se centra en los elementos principales de la formación política de las clases: los objetos de la lucha y los resultados organizativos. En el caso de Atencingo, podemos dividir el periodo histórico estudiado en 5 momentos, cada uno de los cuales presenta una combinación diferente de elementos en relación con los principales actores que intervienen, es decir, los trabajadores agrícolas originales que se volvieron beneficiarios de las dotaciones ejidales de los años treinta. En el cuadro 16 se presenta un resumen de estas combinaciones.

Lo más sorprendente de este cuadro, desde la perspectiva proletarista, es que sin importar su grado de proletarización, los trabajadores agrícolas nunca plantearon demandas proletarias en su lucha. Por el contrario, cuando estaban más proletarizados, en el momento tres, fue cuando la lucha por la división y el parcelamiento del ejido colectivo controlado por el Estado fue más encarnizada. Y fue en ese momento (1971) cuando los actores sociales lograron finalmente su objetivo de producir en parcelas asignadas de manera individual.

Paradójicamente, esto ocurrió en el contexto del gobierno de Luis Echeverría, cuando los colectivos se enfrentaban al rígido control del Estado. Más adelante, Echeverría intentó restablecer el control estatal mediante la creación

CUADRO 16
Trayectoria de clase política y objetos de lucha en Atencingo

<i>Momento</i>	<i>Actores</i>	<i>Objetos</i>	<i>Resultados</i>
Momento uno 1938-1947	Trabajadores agrícolas	Tierra, producción individual para la subsistencia	Caparazón de ejido colectivo, control privado; burgués-hegemónico
Momento dos 1947-1965	Igual que arriba, con "parcelas económicas	Tierra, producción individual para el mercado	De autogestión al control estatal; fac- ciones de oposi- ción
Momento tres 1965-1975	Más proletariza- dos, con parcelas económicas redu- cidas	Tierra, producción individual para el mercado	División y parce- lación del ejido colectivo, con su- bordinación indi- vidual de los cañe- ros al Estado; burgués-hegemó- nico
M o m e n t o cuatro 1975- 1988	Campesinos-em- presariales, dife- renciación social	Crédito para agri- cultura viable, ma- yores precios para caña	Control estatal de cañeros individua- les; burgués-hege- mónico
Momento cin- co 1988-2001	Campesinos-em- presarios, con ma- yor diferenciación social, algunos cañe- ros buscan refugio en la producción de autosubsistencia	Subsidios estatales, precios justos del ingenio, buenos dirigentes	Control privado de corporación con capital transnacio- nal (Pepsico); bur- gués-hegemónico, potencialmente de oposición electo- ralmente

Fuente: Elaborado a partir del análisis en este capítulo.

de la Comisión Nacional Cañera, declarando de "interés público" el cultivo de la caña de azúcar en octubre de 1975 (Pérez Arce, 1979: 33-36).

La intención de esta nueva agencia estatal era restablecer la producción colectiva manteniendo un trato individual con cada ejidatario, con base en

la calidad de la caña de azúcar. En ese momento, los campesinos-empresariales de reciente creación se organizaron en la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar afiliada a la CNC. Su lucha se centró entonces en obtener créditos para una operación agrícola viable y en obtener aumentos en los precios de garantía de la caña de azúcar. Esas luchas se mantuvieron siempre dentro de las estructuras corporativistas y no representaron amenaza alguna a la hegemonía burguesa.

Lo que explica la contradicción (desde la perspectiva proletarista) entre la posición de los agentes de clase en la producción y los objetivos de su lucha es la cultura profundamente enraizada de naturaleza campesina. Si bien esa cultura se modificó desde luego en virtud de los avances del capitalismo y la comercialización, los actores sociales se las arreglaron para conservar un gran interés en el control individual de la producción. Este interés se intensificó a raíz de que su dirigente democráticamente electo, Porfirio Jaramillo, fue capaz de permitir que a cada ejidatario se le asignara una parcela de una hectárea para cultivos de autosubsistencia.

Por otra parte, y al contrario de lo que habrían esperado los campesinistas radicales, el carácter campesino de las demandas de Atencingo no fue suficiente para que éstas no dieran origen a luchas de oposición. Debido a que su liderazgo, con la excepción de Porfirio Jaramillo, dependió de relaciones clientelares con políticos o la administración del ingenio, su organización se integró siempre al discurso y la política hegemónicos-burgués. Incluso en los periodos más combativos (especialmente 1947-1952), las facciones de oposición de Atencingo buscaron el favor de las autoridades estatales para plantear sus posturas políticas. Así pues, el carácter "de oposición" de estas facciones fue sólo relativo a la política interna del ejido, pero no en relación con el Estado. Casi siempre los ejidatarios de Atencingo tuvieron el cuidado de mantener su distancia respecto de las organizaciones de verdadera oposición, por temor a disgustar a sus aliados potenciales dentro de la burocracia estatal.

De esta forma, la historia de Atencingo nos brinda al menos tres lecciones teóricas. Primera, la posición de clase de los agentes no basta para predecir el objeto de las luchas ni el carácter de las organizaciones que se crean para la lucha. Ésta es la lección más general. Hay que recurrir al estudio de la intervención estatal y cómo se generan sus políticas, si desde arriba o por la presión desde abajo. Además, hay que ver cómo interactúa esta política con el tipo de liderazgo, el cual puede mantener o comprometer la independencia de la organización. Dependiendo del caso, el resultado podría ser de oposición, popular-democrático, o bien hegemónico-burgués.

Segunda, una vez que la lucha adquiere un carácter campesino, aun cuando la emprendan los trabajadores agrícolas, no necesariamente tiene carácter revolucionario, en contra de lo que quisieran los campesinistas radicales. De hecho, los campesinistas reformistas pueden tener razón en este aspecto: si se consolida la economía campesina, puede ser que realmente aumente la producción, pero no necesariamente la productividad. Ya que la producción campesina generalmente aumenta al intensificarse el trabajo dedicado a unas tierras en particular. Así pues, los campesinos pueden producir mayores rendimientos por hectárea, pero con una inversión mayor de mano de obra. El triunfo campesino más grande, el cual significó el desmantelamiento de la producción cooperativa, de hecho resultó en disminución de la productividad, como se aprecia en los cuadros 10 y 11.

Los resultados políticos pueden considerarse congruentes con lo que los proletaristas esperan de las luchas campesinas. El problema de los proletaristas es que en Atencingo los actores sociales no eran sino trabajadores agrícolas (económicamente definidos), y este hecho por sí mismo no resultó en luchas de carácter popular-democrático ni revolucionario. Además la economía campesina puede coexistir con el desarrollo general del capitalismo, aunque no sin problemas. De hecho, no bien los trabajadores de Atencingo obtuvieron sus parcelas individuales, el proceso de diferenciación social se aceleró considerablemente.

Con todo, dada la clara tendencia a la diferenciación social de los productores campesinos dentro del capitalismo, queda claro que estos productores directos tienen una contradicción general con el mismo. No veo, entonces, razón fundamental alguna para que los nuevos campesinos-empresariales no puedan ser interpelados para sumarse a un discurso popular-democrático que desemboque en una nueva hegemonía en donde ellos tengan una mejor cabida. El principal aspecto que hay que subrayar es, por lo tanto, el siguiente: los campesinos parcelarios o de subsistencia, o los campesinos-empresariales, no son intrínsecamente revolucionarios ni conservadores como, respectivamente, los conciben los campesinistas y los proletaristas; lo único que quieren es que los actores externos como el Estado los dejen producir conforme a su propia lógica. El que se integren a un discurso hegemónico-burgués o popular-democrático dependerá del contexto específico en que se desarrollen los campesinos o campesinos-empresariales. Es verdad, argumentaría yo, que tienen mucho mejores oportunidades de sobrevivir en un contexto global popular-democrático que en uno de tipo hegemónico-burgués, pero la condición es que dicha sociedad realmente sea democrática y no una en que el Estado imponga la forma de producción que, según sus burócratas, sea la mejor para los productores directos.

El socialismo de Estado ha demostrado dolorosamente tener muchos problemas, particularmente en su relación con los productores agrícolas (Szélenyi, 1988). Lo que se requiere, pues, es un socialismo democrático que dé cabida a todo tipo de productores y de culturas (Angus, 2001).

La tercera lección teórica es que el Estado cardenista se mostró proclive a ser inconsecuente con su propia política agraria concerniente a los ejidos colectivos, dada la correlación regional de fuerzas de clase en Atencingo. La distribución de tierras en Atencingo fue cronológicamente la última de nuestros tres estudios de caso iniciales y, en contraste con las otras dos regiones, el Estado favoreció en Atencingo la puesta en práctica del ejido colectivo por parte del ingenio azucarero capitalista y mantenerlo bajo su control. Éste no fue el caso ni en La Laguna ni en el Valle de El Yaqui (véase el capítulo 7): en estas regiones, las intervenciones del Estado fueron efectivamente no capitalistas, y favorecieron a los productores directos que a la sazón se habían convertido en ejidatarios colectivos. Se les dio un amplio apoyo a sus esfuerzos organizativos y también en la forma de créditos del Banco Ejidal durante el cardenismo. Los ejidatarios de Atencingo, en cambio, estaban obligados por ley a producir solamente caña de azúcar y a contar únicamente con el ingenio como fuente de créditos. Así que su ejido no era más que el caparazón de lo que en realidad era un simple apéndice del ingenio capitalista. Más tarde surgieron inconsecuencias análogas en la política del Estado, pero de signo inverso, sobre todo durante el gobierno de Luis Echeverría. En esta época, el Estado promovía la reanudación de un colectivismo estatizado, mientras que en Atencingo permitía el desmantelamiento del gran ejido colectivo y el parcelamiento de las tierras.

Conclusión

Dada la gran heterogeneidad de las posiciones estructurales de clase en el agro de Puebla, las luchas agrarias de la región de Atencingo han estado a todas luces dominadas por las demandas del grupo más homogéneo: los ejidatarios. Desde los años treinta, su lucha se centró en la resistencia a la proletarianización y por convertirse en campesinos. La victoria llegó finalmente en 1971. Desde entonces el problema de los productores directos pasó a ser en qué tipo de campesinos se convertirían, en campesinos de subsistencia orientados hacia el autoconsumo o en campesinos-empresariales orientados al mercado. Otra salida que ha vuelto nuevamente al escenario ante la reestructuración neoliberal (en el momento cinco) es, desde luego, vender la tierra y atenerse sistemáticamente a los ingresos salariales.

La propia organización ejidal confería a sus miembros una capacidad estructural para la lucha coherente y unificada. Les ofrecía un marco legal y organizativo en el cual fincar sus demandas. Sin embargo, tal capacidad estructural no entrañaba ninguna direccionalidad predeterminada sobre el carácter de su formación política clasista. Más bien, cada uno de los dos aspectos críticos de este proceso era función de factores mediadores diferentes de las posiciones estructurales de clase: las demandas u objetos de la lucha respondían a las orientaciones culturales prevalecientes y en transformación, y acababan en una lucha campesino-empresarial de tipo mercantil por la tierra y la autonomía productiva; las organizaciones de clase resultantes, a su vez, dependían estrechamente del carácter de las intervenciones del Estado y del tipo de liderazgo entre los ejidatarios. La intervención estatal determinaba el resultado organizativo en función de que las organizaciones fuesen de tipo hegemónico-burgués, de oposición o popular-democrático. Esto dependía de si las intervenciones eran favorables o contrarias a la reproducción social de los productores directos, y de si la iniciativa para tales intervenciones provenía del Estado o desde abajo. Por su parte, causalmente el liderazgo se asociaba sobre todo con que la organización resultante fuera independiente y autónoma respecto del Estado o de la clase dominante, y con el carácter de las alianzas o afiliaciones con otras organizaciones. El liderazgo es una variable que requiere de mayor estudio, y probablemente adquiera mayor importancia a medida que el sistema político de México consolida la transición hacia la democracia electoral. El desarrollo del liderazgo ciudadano y democrático hará cimbrar aún más las bases del corporativismo y la hegemonía burguesa.

Mientras que en la primera fase de las luchas ejidales (1947-1952) se obtuvo un efecto popular-democrático, el resultado general más predominante fue de tipo hegemónico-burgués. Irónicamente, mientras prosperaban las demandas campesinas en el ámbito de este proletariado agrícola (definido económicamente), se debilitaba su capacidad estructural para las luchas unificadas. Con el surgimiento de la reforma neoliberal estatal, incluso las antiguas organizaciones corporativistas del PRI están teniendo que cambiar: o se vuelven organizaciones económicas más eficientes o debilitarán aún más su influencia política entre los cañeros. Ni estas organizaciones ni el Estado al que han representado en primer lugar, son capaces de ofrecer a los cañeros los ingresos bajos pero seguros de antaño. Así pues, se ha roto la dependencia recíproca aunque desigual que había entre estos actores. Los acontecimientos estructurales y políticos habrán de depender más que nada de las nuevas orientaciones culturales entre los cultivadores de caña, sus estrategias productivas en la interacción con las

fuerzas del mercado y los tipos de liderazgo que se desarrollan. Estos factores, sobre todo el tipo de liderazgo, tendrán una determinada repercusión en el carácter de las alianzas que se establezcan con otras organizaciones en la sociedad civil y la autonomía o falta de autonomía de las organizaciones de clase.

El Estado seguirá proporcionando el contexto general en que tengan lugar las luchas rurales, y en momentos críticos como septiembre de 2001 podrá responder inclusive en formas que favorezcan a los productores directos. Pero, como se señaló arriba, tal vez los principales beneficiarios de la renacionalización de 21 ingenios hayan sido sus ex dueños, más que los propios cañeros. Éstos siguen ante la incertidumbre de quiénes serán los próximos dueños, una vez que se vuelvan a privatizar los ingenios. Lo que queda claro en la era neoliberal es que el Estado tiene ahora una menor capacidad para responder a las presiones de sus actores sociales. En la medida en que los cañeros se vayan desencantando de sus antiguas organizaciones al tiempo que son incapaces de restablecer las garantías sociales de antaño, pueden comenzar a buscar otras opciones organizativas.

De las diversas culturas regionales que existen entre los productores de caña, sólo dos se enfocan en tratar de elevar al máximo las ganancias: una es, desde luego, la de los empresarios capitalistas; la otra, la de los campesinos-empresariales. La diferencia principal entre estas culturas reside en cómo cada tipo de productor trata de alcanzar su objetivo de maximización de la ganancia: en tanto el productor capitalista lo hace con base en los mecanismos capitalistas típicos de explotar la fuerza de trabajo y sus ventajas comparativas, el campesino-empresarial parte aún de la lógica de la unidad doméstica campesina. Ésta se enfoca en aprovechar al máximo el trabajo familiar en tanto que es su recurso más abundante y se enfrenta a restricciones mayores en cuanto a la disponibilidad de capital y tierra. La opción de tratar de obtener el máximo de ventajas comparativas en otros cultivos simplemente no existe para el campesino-empresarial, debido a la insuficiencia de recursos y opciones financieras. La dependencia financiera respecto del Estado o del ingenio azucarero se da por sentada.

Esta mezcla de orientaciones culturales y estrategias productivas campesinas (o capitalistas) plantea una grave antinomia para la reforma neoliberal en la industria azucarera mexicana: el problema de la escala productiva seguirá presente cuando menos en el corto y mediano plazos, en tanto la mayoría de los cañeros sigan siendo más bien pequeños agricultores. De igual forma, la cultura campesina de subsistencia no necesariamente se adaptará a las expectativas neoliberales de una mayor racionalización del uso de la tierra, la maquinaria, etcétera. Por otro lado, si bien los produc-

tores capitalistas podrían resolver el problema de la escala productiva y el uso "racional" de los recursos técnicos (conforme a su motivación productiva), existe en ellos una clara tendencia a perder interés en conservar la caña de azúcar como su producto principal: el propio contexto neoliberal ofrece opciones más atractivas, como el cultivo de frutas y verduras para la exportación, con las que no se contaba antes.

Estas antinomias nos llevan a una conclusión lógica. Mientras los cañeros capitalistas consolidan esa cultura (capitalista), tendrán un menor interés en abastecer al ingenio azucarero capitalista y dominante y en cambio, se inclinarán a buscar mejores opciones financieras en cultivos de exportación. Una opción es que el propio ingenio habrá de hacerse plenamente responsable de la producción de caña de azúcar, como ocurre ya en los estados de Nayarit y Sinaloa, en una forma renovada de agricultura de plantación corporativa en que el ingenio renta y opera entre el 80 y el 90 por ciento de las tierras ejidales (Otero, 1998b).

Sin embargo, en Atencingo la tendencia es hacia fortalecer el desarrollo de un nuevo tipo de productor: el campesino-empresarial con franca orientación mercantil, pero que trabaja conforme a una lógica básicamente familiar. Si se tiene en cuenta que desde los años cincuenta surgió una cultura campesina-empresarial en la región, lo que se ha considerado en 1992 como una contrarreforma agraria habrá de resultar en una paradoja histórica. Esta reforma establecerá finalmente las condiciones para que surja una vigorosa clase campesino-empresarial. A la inversa, la mayoría de los cañeros probablemente se verá forzada a los tradicionales cultivos de subsistencia, o a dejar el campo e integrarse al mercado laboral de las ciudades de México o incluso de los Estados Unidos y el Canadá. Conforme se acelere la diferenciación social en los ejidos, los ejidatarios cañeros dejarán de ser esa categoría social relativamente homogénea que habían sido en decenios anteriores. Surge así la cuestión de si el ejido adoptará un nuevo significado en tanto capacidad organizativa de clase en el contexto neoliberal y, dado el caso, a qué grupo interno de ejidatarios vendrá a favorecer políticamente.

Capítulo 7

El valle de El Yaqui: hacia la producción autogestionaria y democrática*

EL NOROESTE de México generalmente se considera como la región donde el capitalismo se ha desarrollado más completamente en cuanto a la agricultura. Este capítulo se centra en el sur de Sonora, concretamente en el valle de El Yaqui. Nos atendremos a un conjunto de complejas trayectorias de clase tanto por lo que se refiere a las clases subordinadas como en cuanto a las dominantes. La preocupación central se referirá a la formación de una burguesía agraria feroz que separó violentamente a los productores directos de sus medios de producción. Este proceso de acumulación originaria o primitiva, que comenzó a principios del siglo XIX, significó desplazar la frontera mexicana más hacia el noroeste, en dirección de Estados Unidos, aplastando a su paso a los indios yaqui y mayo, entre muchos otros pueblos. De productores campesinos, muchos de estos indios se convirtieron en un semiproletariado agrícola. Aunque algunas tierras se distribuyeron con la reforma agraria del gobierno de Cárdenas (1934-1940), la burguesía ávida de tierra no se detuvo frente a la barrera legal que significaba el ejido para expandir su producción agrícola en uno de los valles más fértiles del país.

Localizado en la parte sur de Sonora, el valle de El Yaqui colinda con el de El Mayo. Estos dos valles reciben sus nombres de los pueblos indígenas que habitan la región y los dos ríos principales que riegan sus tierras. Mayos y yaquis combatieron valientemente contra el gobierno central de México en todos los intentos que hizo éste por despojarlos de sus tierras durante el siglo XIX. Sin embargo, las historias de estas dos tribus divergieron considerablemente en el decenio de 1880, en plena expansión porfiriana hacia el noroeste (Spicer, 1969a, 1969b, 1980).

En esa época, se “pacificó” finalmente a los mayos, quienes aceptaron la victoria militar, política, económica y, a la larga, cultural, del boyante ca-

*Este capítulo está basado en Otero (1990), para cuya escritura tuve el beneficio de las sugerencias y críticas incisivas de David Barkin, Roger Bartra, Barry Carr y Nora Hamilton.

pitalismo de la sociedad mexicana. De hecho, los mayos iniciaron un proceso rápido de aculturación que corrió al parejo con su proletarización. Como trabajadores eran una mano de obra sumamente valorada. Los yaquis también eran tenidos en muy alto concepto, aunque su obstinada preocupación por la autonomía los llevó a oponerse a la colonización con mucha mayor tenacidad que los mayos. Durante decenios y a muy alto costo peleaban su guerra de resistencia. Fueron masacrados, casi exterminados y deportados a regiones lejanas de México (Oaxaca y Yucatán). Algunos huyeron a Arizona. A la larga muchos de esos exiliados regresarían a sus tierras, a mediados de los años veinte, para establecer comunidades en las que reconstruirían su cultura. También ellos se beneficiaron de la reforma agraria en 1937, durante el gobierno de Cárdenas.

Como en La Laguna, hacia los años setenta el grueso de los productores directos agrícolas se había proletarizado, si no completamente, sí en gran medida. El carácter estacional de la producción agrícola hizo imposible que la mayoría de ellos consiguiera trabajos asalariados permanentes en este sector. Entonces tuvieron que completar sus ingresos con actividades comerciales o con empleos marginales. La posición estructural que dominó en este caso fue la de proletario o semiproletario en cerca del 75 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola (Hewitt de Alcántara, 1978: 228). Dada la larga experiencia de cooperación capitalista en esta región, las luchas agrarias de los años setenta se distinguieron por su carácter poscapitalista.

Como se aclaró en el capítulo 2, el término "poscapitalista" califica una situación en que los semiproletarios se resisten con éxito a la proletarización mediante una forma de producción centrada en la autogestión y el control democrático del proceso laboral. Es una forma de producción cooperativa en la que se hacen intentos deliberados para obtener grados considerables de independencia respecto del Estado y del capital privado. Se debe tratar con el mercado capitalista, pero su propia organización se plantea, de manera que prefigura el futuro, como la semilla de una forma poscapitalista de organización de todas las actividades económicas: una autogestión desde abajo y un control democrático de la producción. Aunque la demanda central en Sonora era precisamente la tierra, iba acompañada también de demandas por maquinaria, instalaciones y, lo que es más importante, el control sobre el proceso productivo. Así, la demanda de tierra dejó de tener un carácter meramente campesino, al asumir uno de naturaleza globalmente poscapitalista.

Ahora bien, las intervenciones estatales han estado dominadas por el desproporcionado poder de la burguesía agraria del sur de Sonora. Por lo tanto, las organizaciones de clase que surgieron tenían un carácter de opo-

sición, aunque desde finales de los años cuarenta hasta principios de los sesenta fueron duramente reprimidas y, con mucho, dismanteladas. Sólo hasta mediados de los años setenta el semiproletariado agrícola fue capaz de organizarse para enfrentar al Estado y a la poderosa burguesía agraria.

Como se muestra en este capítulo, la resultante Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles de El Yaqui y El Mayo (que en lo sucesivo llamaremos "coalición") nos brinda hoy lecciones ejemplares de organización tanto en lo político (independiente y autónoma) como en lo económico (autogestio-naria y democrática) para el movimiento agrario de México y otros lugares. Si bien su "modelo" no puede reproducirse como tal, otros movimientos regionales de México se han acercado a la coalición no sólo para brindarle su entusiasta solidaridad, sino también para aprender las "lecciones" de su experiencia. Está claro que la coalición misma se construyó con base en las lecciones previas del movimiento agrario posrevolucionario de México. Lo que sigue es una relación más pormenorizada de su formación política clasi-sista centrada en los cambios estructurales, políticos y culturales de la región de El Yaqui en el sur de Sonora.

La historia agraria y el medio cultural

Antes del porfiriato (1876-1910), la lejanía geográfica de Sonora permitió a los yaquis, pápagos, seris y mayos permanecer al margen de la República durante casi todo el siglo XIX. Pero la suerte cambió conforme el capitalismo buscó expandirse hacia las fértiles tierras del noroeste de México. Además, los indios pasaron a ser mano de obra potencial.

De los cinco ríos principales de Sonora (Magdalena, Sonora, Metate, Yaqui y Mayo) sólo el Yaqui fluía todo el año (Aguilar Camín, 1977). Esto podría explicar la conmovedora historia de luchas por controlar las tierras y el agua del valle de El Yaqui. Acaso también explique algunas de las diferencias culturales entre yaquis y mayos. Los yaquis fueron capaces de soste-ner una economía independiente durante un periodo más prolongado des-pués de sus primeros contactos con la sociedad mexicana. En cambio, los mayos, debido a su más débil base material para la reproducción social, se vieron forzados a vender su fuerza de trabajo antes del decenio de 1850 en empresas mineras de Álamos, uno de los primeros asentamientos urbanos de blancos y mestizos en la región mayo (Hu-DeHart, 1981, 1984).

La pacificación de los mayos fue la base de la proverbial industriiosidad de Sonora (Aguilar Camín, 1977), y dio a la burguesía naciente la mano de obra más empeñosa y resistente del estado. Tras su pacificación, el gobier-no federal concedió parcelas pequeñas a unos cuantos mayos, pero la ma-

yoría de ellos trabajaban como asalariados en los ranchos, minas y haciendas. Este pequeño "favor" (tierra y empleos), aunado a la incesante represión que habían sufrido, hizo de los mayos una fuerza de trabajo relativamente dócil. En términos de nuestra teoría de la formación política clasista, se podría decir que, con esa intervención estatal en su favor, los mayos fueron articulados dentro del discurso hegemónico-burgués, a la vez que se convertían en una valiosa mano de obra.

Este proceso de acumulación originaria o primitiva, como la llamaría Karl Marx, consiste en la separación de los productores directos respecto de sus medios de producción y en separarlos de cualquier relación de dependencia anterior, como lo podría haber sido el peonaje por endeudamiento. Al completarse este doble proceso de "liberación", los productores directos no tienen forma de sostenerse a sí mismos si no es vendiendo su fuerza de trabajo. Este proceso se relaciona íntimamente con la expansión del capitalismo estadounidense hacia su propio suroeste y el noroeste de México. En 1900 comenzaron a entrar en Sonora las compañías colonizadoras estadounidenses, bajo los auspicios de la simpatía gubernamental y la intermediación de políticos locales influyentes con estrechos lazos familiares con la burguesía agraria naciente. A la burguesía sonoreNSE le interesaba invitar a las compañías extranjeras para promover la inmigración de capitalistas emprendedores que estimularan la economía estatal. Esa inmigración se vio acompañada por una fuerte penetración de inversiones, tecnología y la cultura empresarial que caracterizaba al suroeste de Estados Unidos. El interés primordial eran las ganancias, las cuales se procuraron con estricta y voraz racionalidad (Aguilar Camín, 1977: 55-59).

Durante la Revolución mexicana (1910-1920), la gran mayoría de los indios yaqui había sido asesinada, deportada o forzada al exilio por el ejército de Porfirio Díaz. Los que se quedaron fueron a la larga reclutados por el ejército revolucionario de Álvaro Obregón, con la promesa de devolverles sus tierras. No fue hasta principios de los años veinte cuando se permitió a los yaquis deportados volver a sus territorios tribales. Durante su Presidencia (1920-1924), Obregón se vio forzado a cumplir su promesa. Los poderosos intereses capitalistas, sin embargo, fueron más fuertes que la voluntad de Obregón para cumplir su palabra. Después de su vuelta del exilio o la deportación, los miembros de la tribu fueron reducidos a la margen norte del río Yaqui, es decir, *fuera de las tierras fértiles del valle* que están del lado sur. Cuando acudieron ante Obregón para protestar, el ejército mexicano ocupó de inmediato los asentamientos yaquis.

Luego de más de veinte años de masacre, deportación y experiencias de trabajo asalariado, no obstante, los yaquis que habían vuelto reconstru-

yeron su economía campesina centrada en cultivos de subsistencia como el maíz, el frijol y las calabacitas. Además de las dotaciones de tierras a los yaquis, se formaron algunos ejidos antes del periodo cardenista (1934-1940), pero eran de naturaleza más bien simbólica. Los 38 ejidos que había contaban con 188,055 hectáreas de tierras marginales, cultivadas por 4,071 ejidatarios y sus familias. Debido a la pobreza de estas tierras, muchos yaquis y otros trabajadores mestizos tuvieron que vender su fuerza de trabajo en la región para poder completar sus ingresos.

En 1935 las condiciones habían empeorado para los productores directos. A los trabajadores agrícolas se les pagaba 1.56 pesos al día, en comparación con los 2.33 pesos que se pagaban en 1929. La polarización de la distribución de la tenencia de la tierra era profunda. De las 10,409 parcelas registradas por el primer censo agrícola de 1930, 5,577 (o 53.6 por ciento) tenían menos de 10 hectáreas cada una, y tan sólo controlaban el 0.3 por ciento de la tierra. Sólo había 38 ejidos de 50 o más hectáreas, que controlaban 0.4 por ciento de la tierra. Finalmente, el sector latifundista (con un promedio de más de 1,000 hectáreas por parcela), controlaba el 89 por ciento de la tierra y representaba sólo el 8.8 por ciento de las propiedades privadas (Sanderson, 1981: 91-93). Este sector pronto sería sacudido por la reforma agraria cardenista en Sonora.

El cardenismo: ¿fin de la hegemonía de la burguesía agraria?

En 1937, se distribuyeron 17,000 hectáreas de tierras de riego entre 2,160 trabajadores sin tierra. Las 27,638 hectáreas restantes de tierras de riego quedaron divididas entre 840 terratenientes, conforme a la superficie legal máxima de 100 hectáreas permitida por la legislación cardenista. También se distribuyeron otras 36,000 hectáreas de tierras áridas a los ejidos en 1937, y una cantidad semejante se otorgó a los terratenientes en compensación por las 17,000 hectáreas irrigadas que se habían otorgado a los ejidatarios. Sin embargo, la proporción de tierras propiedad de los ejidos disminuiría ostensiblemente en el siguiente decenio (hasta el 17 por ciento), debido a una expansión sin precedente de la frontera agrícola en virtud del desarrollo de la infraestructura de riego por parte del Estado, misma que benefició sobre todo a los terratenientes privados (Siles-Alvarado, 1968).

Con el reparto de tierras durante el periodo cardenista, la organización para la producción en la mayor parte de las tierras de riego era colectiva y el Banco Ejidal tenía un importante papel en el otorgamiento de créditos y asistencia técnica. Creado por Cárdenas para apoyar financiera y técnicamente a los nuevos ejidos colectivos, el Banco Ejidal fue esencial en los pri-

meros años de la reforma agraria para conseguir niveles satisfactorios de productividad. En los primeros años (1938-1943), los rendimientos promedio de los ejidos colectivos eran mayores que el promedio regional de todas las formas de tenencia (Sanderson, 1981: 146).

A la sazón (1937) los yaquis no sólo luchaban por la tierra a la manera típica de los campesinos; también luchaban por su nacionalidad, su cultura y su identidad indígenas. Cuando el Estado distribuyó tierras entre ellos, sin embargo, tuvieron que aceptar las reglas que les imponía, entre las cuales estaba la fuerte injerencia de sus aparatos económicos en la organización de la producción agrícola. Por lo tanto, la economía campesina que acababan de reconstruir los yaquis se convirtió en operaciones colectivas estrechamente supervisadas por el Banco Ejidal. Esto colocó a los nuevos ejidatarios en una situación muy vulnerable, tanto en relación con el Estado como con la burguesía agraria.

De hecho, al menos para los yaquis, la victoria en la lucha por la tierra resultó en una derrota definitiva en su lucha nacional, aunque todavía pudieron reproducir y elaborar elementos de su cultura. A partir de entonces tuvieron que someterse al Estado nacional mexicano y en sus propios términos; el Estado ganó la iniciativa en lo que respecta al futuro del desarrollo agrícola de la región. Se establecieron así las condiciones para la integración de los yaquis a la vida nacional con todo lo que esto supone, a saber, la integración al proceso del desarrollo capitalista. Ésta fue también la condición, sin embargo, para la transformación gradual de las luchas indígenas y campesinas en luchas popular-democráticas y poscapitalistas. Pero habrían de pasar más de 30 años para que surgieran y se afirmaran este tipo de luchas.

El fin de la reforma agraria y el ataque contra los ejidos colectivos

El fin de la reforma agraria de Cárdenas puede fecharse en 1938, cuando se estableció el productivismo al final de su gobierno. En ese momento, toda la política estatal se encauzó a fomentar el proceso de industrialización, y la agricultura se subordinó a esta meta. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ideología de la Guerra Fría llegó a predominar en el gobierno mexicano. La CNC y la CTM se convirtieron en poderosas armas políticas del Estado para controlar a los campesinos y a los obreros. Al igual que en La Laguna (véase el capítulo 5), uno de los objetivos por destruir eran precisamente los ejidos colectivos, ya que se habían convertido en poderosos baluartes de las organizaciones socialistas y de oposición, y también porque su ejemplo era visto como una amenaza ideológica por las empresas capitalis-

tas. Al impulso productivista de la política económica se sumaba el compromiso con la ideología individualista y en contra de los ejidos colectivos.

Este afán individualista y de propiedad privada se sumó a la presión de la burguesía para que el gobierno extendiera certificados de inafectabilidad que garantizaban a quienes los poseían que sus tierras no podrían ser expropiadas durante 25 años. En esto se insistió hasta la saciedad como condición para que pudiera desarrollarse cabalmente la iniciativa privada en la agricultura. Entre 1938 y 1950, los terratenientes de Sonora recibieron 41 certificados de inmunidad que amparaban 598,460 hectáreas (Sanderson, 1981: 147). Aunque la mayor parte de esta tierra originalmente se destinaba a pastizales, a la larga se hizo laborable mediante grandes inversiones del gobierno en infraestructura para riego, como se mencionó arriba, y los certificados de inmunidad todavía eran válidos.

La nueva ley de crédito reforzó el impulso individualista al reducir la explotación colectiva a una mera opción legal, en lugar de ser la forma oficialmente preferida de organización agraria, y

al derogar la condición de que los ejidos utilizaran comunal [o colectivamente –G.O.] los créditos para infraestructura a mediano y largo plazos. Más tarde, en 1947, las organizaciones de crédito ejidal quedaron bajo el control del Banco Ejidal, el cual asumió autoridad plena para la capitalización, el desarrollo y la comercialización de las funciones de crédito del ejido, a expensas de las sociedades locales (Sanderson, 1981: 144-145).

En ese momento el Banco se convirtió en el patrón virtual de los ejidatarios –al convertirlos en una especie de trabajadores del Estado con apariencia de campesinos y apropiarse de su proceso productivo. Aunque las estructuras legales y el escenario general para dismantelar los colectivos se establecieron a finales de 1942, las agencias gubernamentales sólo comenzaron su campaña tenaz en su contra al comienzo del periodo presidencial de Miguel Alemán, en 1946. Así pues, las políticas del Estado se habían puesto claramente a favor de la burguesía agraria y en contra de los ejidatarios.

En respuesta a las políticas desfavorables del Estado, los ejidatarios empezaron a formar organizaciones de oposición. Muchos se afiliaron a la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) de que se habló en el capítulo 5. Esta organización se asoció al recién formado Partido Popular (PP, llamado más tarde Partido Popular Socialista o PPS), bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano, quien había sido secretario general de la CTM durante el cardenismo.

Durante el gobierno de Cárdenas, los miembros de los ejidos colectivos se afiliaron a la CNC y a la CTM (Carr, 1986). El Estado había establecido una alianza popular con los campesinos y los obreros, y sus dirigentes incluso podían militar en el Partido Comunista al tiempo que tenían puestos ejecutivos en la CNC o la CTM para los que habían sido democráticamente electos.

Cuando Miguel Alemán llegó al poder, con la Guerra Fría y la ideología anticomunista, esas lealtades dejaron de ser posibles. Rápidamente se expulsó a los líderes comunistas de la CNC y la CTM. Ambas organizaciones comenzaron a adoptar un papel completamente diferente: de haber sido representantes auténticos de sus agremiados, se volvieron aparatos corporativos del Estado para el control político de campesinos y obreros. Al tanto de estos cambios generales, "la CNC adoptó una postura cada vez más individualista hacia la tenencia y explotación de la tierra durante los años cuarenta, aliándose incluso con los terratenientes de algunos estados para presionar al régimen para la estabilización de la tenencia de la tierra" (Sanderson, 1981: 138).

El Banco Ejidal se convirtió también en una de las principales armas del Estado en contra de los ejidos colectivos. Sólo les daba crédito si tenía la certeza absoluta de recuperar su dinero. Esto, en sí, no tuvo un efecto tan adverso. Pero en 1949, quienes querían mantener la organización colectiva de sus ejidos se topaban con grandes dificultades para obtener cualquier crédito y para ellos se suspendieron completamente los préstamos a mediano plazo, con lo que se coartaban definitivamente sus posibilidades de ponerse al día en cuanto a mecanización y avances técnicos en general. A la inversa, el Banco mostraba una gran disposición para ayudar a los ejidatarios a obtener ganancias cuando éstos, a su vez, se mostraban dispuestos a fragmentar sus ejidos colectivos en parcelas individuales. Sin embargo, esta disposición favorable del Banco respecto de los individualistas sólo duró hasta 1950. Para entonces la mayoría de los ejidos colectivos habían sido desmantelados (Sanderson, 1981: 175-178).

Sanderson cita una reveladora declaración de un editorial de *El Imparcial*, diario de Hermosillo, Sonora, que apareció el 21 de junio de 1950, en que se afirmaba que el gobierno había decidido atacar los bastiones del PP con una "arma poderosa: la economía". El editorial pasa a explicar la lógica política de ese ataque:

[...] el Banco Ejidal entró al juego para reorganizar no sólo la Unión de Ejidos, sino las sociedades de crédito que dependen de ella, liquidando de una vez por todas todo lo que huele a Partido Popular a fin de darle paso [...] a la bandera de la CNC, filial [...] del PRI (citado en Sanderson, 1981: 141).

La historia de la relación entre el Banco y los colectivos de los valles de El Yaqui y El Mayo es sorprendentemente similar a la de La Laguna (véase el capítulo 5). El Banco claramente se apropió los procesos productivos de los ejidos y precipitó su fracaso económico. Esto desde luego logró el objetivo estatal de debilitar la base de poder de la UGOCM y el PPS, organizaciones de oposición que tímidamente desafiaban la hegemonía del PRI.

En cuanto a la operación de los ejidos, Erasmus nos hace una descripción de ella en 1959. Afirma este autor que la única fuente de crédito de los colectivos es el Banco. Y en todos los casos es el Banco

quien determina qué ha de sembrarse, supervisa el trabajo y vende las cosechas. El Banco puede comprar maquinaria agrícola para el colectivo o pagar a contratistas para que limpien, aren, planten y cosechen. En este renglón, rara vez financia otra cosa que las operaciones mecanizadas. Para que los miembros de los colectivos puedan subsistir entre cosechas, el Banco les adelanta un salario diario que luego les deduce de los beneficios de la cosecha (Erasmus, 1961: 214-215).

Inaugurada en 1939, la Unión Central, organización económica creada por los productores directos para la autogestión de sus ejidos colectivos y otras actividades agrícolas, se mantuvo bajo su control directo hasta 1953, como ocurrió con su contrapartida Lagunera. Administraba un centro de máquinas, una tienda en que vendía refacciones mecánicas y neumáticos, una estación de gasolina, un departamento de comercialización de cosechas e insumos e incluso una línea de autobuses suburbanos. Además, la Unión daba preferencia a sus ejidos filiales en cuanto a negociar para sus cosechas precios más altos que los que obtenían los empresarios privados (Hewitt de Alcántara, 1978: 181-182).

De manera análoga a lo que ocurría en La Laguna, la Unión Central en El Yaqui mantuvo vínculos políticos con los que a la larga se convertirían en la UGOCM y el PPS. El liderazgo local también había sido parte de la CNC o la CTM hasta que se vio claramente durante el alemanismo (1946-1952) que estas organizaciones no ofrecían posibilidades de llevar a cabo el plan cardenista para desarrollar el ejido colectivo. Maximiliano R. López, dirigente de la lucha agraria de los años treinta, fue director de la Unión Central en los cuarenta, como ocurrió en los años treinta con Arturo Orona en La Laguna. López siguió perteneciendo a la CTM hasta 1947. Pero una vez iniciada la contrarreforma alemanista, se alió con otros dirigentes campesinos regionales —Jacinto López, Ramón Danzós Palomino, Bernabé Arana y Arturo Orona— para formar la UGOCM. Esta organización de masas a la larga

establecería nexos con el PPS de Lombardo. La UGOCM se formó para oponerse a la CNC y la CTM en la esfera de la economía y la sociedad civil, en tanto que el PPS combatiría al propio PRI en la sociedad política.

El Estado premiaba a los ejidatarios que desertaron del colectivismo, pero también se proponía reducir el número de agremiados en la Unión Central. En 1953, el gobierno atacó a esta organización económica robando maquinaria de las empresas administradas por la Unión. Maximiliano López fue asesinado cuando viajó a la ciudad de México para elevar la denuncia correspondiente. Éste fue el tiro de gracia para la Unión Central. Tras este homicidio, las organizaciones regionales que conformaban la Unión Central ya no serían más que organizaciones en el papel.

Según Cynthia Hewitt de Alcántara, el estado de desorganización económica, política y cultural en que quedaron los ejidos después del boicot oficial se ejemplifica en la comunidad de "Benito Juárez", típica de los valles de El Yaqui y El Mayo a principios de los años setenta. La vida en ellos se había profanado y metalizado y apenas podía hablarse de vida comunitaria en ellos. La participación organizada en los asuntos de la comunidad se limitaba a una o dos reuniones anuales de los padres de familia, convocada por el único profesor de la escuela del pueblo. Durante años, los miembros del ejido no se habían reunido a hablar sobre sus problemas comunes. Esto era comprensible, desde luego, ya que las cuatro sociedades de crédito estaban dominadas por un solo hombre rico que rentaba tierras de sus colegas. Ni siquiera había una fiesta anual para conmemorar el aniversario de la reforma agraria en el valle de El Yaqui. En el pueblo de Benito Juárez,

que una vez fuera ejido colectivo, no existe espíritu comunitario alguno. Por el contrario, abundan las intrigas y los celos, como en el valle entero después de los terribles años cincuenta [...] Es éste el extremo lógico al que se ha llegado luego de una campaña prolongada y sistemática de desorganización de los ejidos del valle. Ni siquiera la religión ha servido para sanar las heridas de esta sociedad: como lo expresa uno de los habitantes de Benito Juárez [...] "en este lugar no hay más Dios que los billetes [de dinero]". Dos o tres veces apareció en el pueblo un sacerdote católico, pero ya no volvió porque nadie asistía a sus misas (Hewitt de Alcántara, 1978: 226).

El proceso de aculturación se difundió ampliamente, aunque con algunas diferencias entre los indios mayos y los yaquis. Los mayos estaban

más integrados con los blancos y mestizos, aunque el 50 por ciento de la población de la región mayo era de indios. Por contraste, los yaquis (unos 12,000 en 1959) vivían en su mayoría aislados de la población no indígena, salvo en la estación de Vicam, donde se veían más blancos (Erasmus, 1961: 191). Esta diferencia puede explicarse por los muchos conflictos entre los yaquis y la más numerosa sociedad de blancos y mestizos a lo largo de la historia de México, lo que los llevó a mantener la solidaridad y la identificación cultural en mayor medida que a los mayos (Hu-DeHart, 1981, 1984).

En los años sesenta, la burguesía agraria había consolidado su poder económico y político al grado de que los ejidos establecidos durante el cardenismo sucumbirían a su insaciable deseo de penetración capitalista en la agricultura sonorense. Los impedimentos legales a esta penetración no bastaron para mantener a la burguesía sonorense fuera de las tierras fértiles que se otorgaban a los ejidatarios indios o mestizos. A mediados de los años sesenta, el 80 por ciento de las tierras ejidales se rentaban a agricultores capitalistas, y los poseedores de títulos ejidales trabajaban a menudo por un salario en sus propias parcelas (Hewitt de Alcántara, 1978: 193).

Al boicot sistemático contra los ejidos colectivos se sumaba una política de "divide y vencerás", con la que el Estado premiaba a algunos ejidatarios para que se integraran en las organizaciones de masas que controlaba. La UGOCM y el PPS estaban sumamente debilitados o más bien nunca llegaron realmente a tener una fuerza considerable debido a la también sistemática represión que enfrentaron. Al mismo tiempo, la propagación de las relaciones capitalistas de producción resultó en un considerable detrimento de las culturas mayo y yaqui, ya que la aculturación o adopción del vestido y la cultura dominantes proporcionaba a los indios mejores condiciones individuales para desempeñarse conforme a las nuevas reglas del mercado. Por desgracia para la burguesía agraria, este deterioro de la cultura indígena-campesina habría de unirse a la nueva cultura que surgía del mismo proceso de producción capitalista al que los productores directos se exponían cada vez más como trabajadores asalariados. Esta combinación tendría un efecto importante en las futuras luchas agrarias que estarían dominadas por una nueva cultura de resistencia a la proletarianización. En éstas, la demanda por la tierra se vería acompañada por las demandas de otros medios de producción y por el control democrático del proceso de producción en general. Por lo anterior, se trataría de demandas de tipo poscapitalista en lo económico y popular-democráticas en lo político.

El nuevo movimiento agrario: hacia la producción autogestionaria y democrática

Al boicot que sufrieron los ejidos colectivos en el periodo 1947-1954 sobrevino una expansión tremenda de la frontera agrícola en Sonora. Este proceso fortaleció en gran medida a la burguesía agraria y brindó abundantes oportunidades de empleo a la fuerza de trabajo en expansión. En efecto, la superficie irrigada del estado aumentó de 150,000 hectáreas en 1940 a 552,000 (368 por ciento) en 1960. Aunque la agricultura de Sonora se fue haciendo cada vez más mecanizada, tal expansión de la frontera agrícola dio pie al crecimiento de oportunidades laborales hasta principios de los años setenta. La población económicamente activa en la agricultura creció de 61,500 en 1940 a 133,700 (217 por ciento) en 1960, reflejando un índice de crecimiento mucho más lento que el de la superficie de riego. Para 1970, en más de 700,000 hectáreas había poco más de 100,000 personas empleadas en la agricultura (Ferra Martínez, 1987: 4-5).

La agricultura sonorense comenzó a experimentar los efectos de la crisis capitalista a principios de los años setenta (como se vio en el capítulo 4). Las otrora pujantes uniones de crédito administradas por la burguesía agraria entraron en una fase de fuertes pérdidas en el periodo 1971-1974 (Quintero, 1982). El descenso de los precios del algodón llevó a muchos empresarios del valle de El Yaqui a redestinar gran parte de sus tierras al cultivo del trigo, el cual supone intensa mecanización y baja contratación de mano de obra. Se requieren aproximadamente 96 días/hombre/hectárea para el cultivo del algodón, en contraste con unos 7.5 para el trigo. En Sonora, hubo una reducción de 108,436 hectáreas de algodón, lo que originó el desempleo de 36,166 trabajadores por día en 1975 (Canabal Cristiani, 1984: 219). Entre 1974 y 1975, el número de jornaleros agrícolas desplazados de la agricultura en todo el país llegó a 7'233,366.

En 1970, el 73 por ciento de la población económicamente activa en la agricultura sonorense eran trabajadores rurales, mientras que el uno por ciento de esa población poseía el 42 por ciento de las tierras laborables. Mientras tanto, se había hecho cada vez mayor la intensidad en el uso del capital en las operaciones agrícolas. Según algunas estimaciones, mientras que en 1940 la inversión en maquinaria representaba un tercio de la inversión en salarios, 20 años después la inversión en maquinaria excedía a las nóminas de pagos en 50 por ciento (Jiménez Ricárdez, 1976). Estos cambios originaron un excedente de mano de obra, con el efecto de reducir los salarios y aumentar aún más los rendimientos capitalistas, hasta que se llegó al desencadenamiento de la crisis de sobreproducción.

Así pues, a mediados de los años setenta, tres factores influyeron en el surgimiento de una movilización social en lucha por la tierra y el control del proceso productivo:

1. el desempleo creciente y deterioro de las condiciones materiales de las masas;
2. un proceso general de radicalización de la lucha de clases en todo el país a resultas del agravamiento de las crisis agrícola capitalista y campesina; y
3. la lucha interburguesa por la sucesión presidencial de 1976.

En 1975, el proletariado y el semiproletariado agrícola estaban muy desorganizados o afiliados a la CNC oficial, la Central Campesina Independiente, o a la UGOCM-Jacinto López, todas las cuales habían suscrito el Pacto de Ocampo con el presidente Luis Echeverría, en virtud del cual se comprometían a mantener la paz social en el campo. La UGOCM había sufrido fuerte represión y experimentado varias escisiones por esa época. Dos de ellas conservaban su nombre y sólo se distinguían por el apellido. Así, la UGOCM-Jacinto López pasó a integrarse bajo el discurso hegemónico-burgués y el control estatal al adherirse al Pacto de Ocampo. El Consejo Agrarista Mexicano (CAM) también se hizo miembro del Pacto de Ocampo (Ferra Martínez, 1982; Sanderson, 1981).

Sin embargo, la facción izquierdista de la UGOCM fue inicialmente la UGOCM-PPS, ligada al Partido Popular Socialista. Pero luego se llamó UGOCM-PPM, reflejando una escisión dentro del propio PPS y la formación del nuevo Partido del Pueblo Mexicano. En tanto el PPS se había vuelto casi un apéndice “de izquierda” del PRI oficial, el PPM representaba la vuelta a sus posturas tradicionalmente lombardistas. La UGOCM-PPM, pues, pertenecía a esta tradición de una izquierda nacionalista y de antecedentes estalinistas.

Además, la CCI (Central Campesina Independiente) tenía también cierta influencia en Sonora, pero esta organización había sufrido asimismo una división en 1975. La CCI-Garzón se unió al gobiernista Pacto de Ocampo, en tanto la CCI-Danzós se convirtió en 1975 en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, o CIOAC. El nombre CIOAC reflejaba nuevos debates dentro del Partido Comunista (PCM), donde autores proletaristas como Roger Bartra y Sergio de la Peña ejercían una importante influencia sobre la interpretación de los cambios de la estructura agraria mexicana. Como vimos en el capítulo 2, estos análisis tendían a ver una gran promesa para el socialismo en la presencia cada vez mayor de un proletariado agrícola. En consecuencia, la CIOAC comenzó a propugnar la lucha por la sindicaliza-

ción por encima de la tradicional lucha por la tierra en el campo. Esta central estaba dirigida por miembros del PCM que siguieron enarbolando la estrategia leninista o proletarista hasta 1982.

A la sazón, el PCM inició una serie de transformaciones que reflejaban tanto los cambios en el orbe comunista como una mayor influencia del eurocomunismo. Éste era partidario de la ruta electoral al socialismo, más que de la tradicional ruta revolucionaria de inspiración leninista. Primero el PCM se convirtió en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) en 1982, y en 1987 pasó a ser el Partido Mexicano Socialista (PMS). En las elecciones de 1988 el PMS apoyó al candidato presidencial de una coalición amplia, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas. Fue muy extendida la creencia de que Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones de 1988, pero el PRI impuso a su candidato Carlos Salinas. El PMS, a su vez, se disolvió en 1989 para formar el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que existe aún hoy día como representante de la amplia coalición de ex comunistas, maoístas, trotskistas, ex miembros del PRI y otros nacionalistas.

Así pues, a finales de los años setenta las luchas en el campo de Sonora estaban dominadas por concepciones proletaristas de izquierda y el control oficial de la mayor parte de las organizaciones de masas; la lucha por la tierra realmente había perdido impulso. Tanto las organizaciones oficiales como las de oposición dedicaron sus mejores esfuerzos a sindicalizar a los jornaleros agrícolas (Ferra Martínez, 1982). No obstante, esta insistencia estrechamente economicista del liderazgo de los movimientos sociales sería pronto impugnada desde abajo, por las propias masas. Ellas plantearían un nuevo objeto de lucha: la demanda por la tierra, sí, pero unida a las demandas por el resto de los medios de producción y el control democrático del proceso productivo en su totalidad.

Las tomas de tierras de 1975

El 19 de octubre de 1975, los solicitantes de tierras (grupos de gente formalmente organizada para demandar tierras, registradas ante la Secretaría de la Reforma Agraria, como lo preveía el artículo 27 de la Constitución mexicana hasta 1992) afiliados a la CAM y a la CCI-Garzón, ocuparon tres parcelas próximas al pueblo de San Ignacio Río Muerto en Sonora. La mayoría eran residentes de este pueblo. La prensa local y nacional dio amplia difusión al incidente, mientras que las organizaciones de propietarios exigieron medidas enérgicas por parte del gobernador de Sonora, Carlos Biebrich, acusándolo de debilidad.

El 23 de octubre, Biebrich envió a la policía judicial, respaldada por tropas del ejército, a expulsar a "los invasores". Se expulsó "pacíficamente" a los ocupantes de dos de las parcelas, pero la expulsión de la que era propiedad de la familia Dengel fue muy violenta: siete de los ocupantes fueron asesinados, 30 heridos y muchos más arrestados, pese al hecho de que ya habían accedido a salirse de la propiedad. A consecuencia de estas medidas sangrientas, Biebrich se vio forzado a renunciar a la gobernatura el 25 de octubre y fue reemplazado por un viejo político, Alejandro Carrillo Marcor (Oswald, Rodríguez y Flores, 1986).

Las ocupaciones de octubre de 1975 se realizaron en medio del conflicto interburocrático e interburgués por la sucesión presidencial de 1976. Biebrich había sido un personaje importante en la promoción de la precandidatura priísta de Mario Moya Palencia, uno de los favoritos de la burguesía mexicana. Por la misma época de las ocupaciones de tierras se anunció un candidato oficial diferente: José López Portillo. Así pues, los acontecimientos de Sonora fueron aprovechados por las diferentes facciones del PRI con fines de desquite. Con todo, este hecho aislado ciertamente no explica la movilización agrarista de Sonora. El semiproletariado agrícola actuó a consecuencia de la crisis económica de México, y luego de muchos años de luchar por la tierra por las vías legales ante las instancias gubernamentales sin obtener resultado alguno. Como el Estado se rehusó invariablemente a intervenir en su favor, este semiproletariado generó un vigoroso movimiento de oposición.

De la movilización espontánea a la alianza de organizaciones de oposición

Tras la masacre de octubre, los productores directos comenzaron a llevar a cabo tomas de tierras fuera del marco de las organizaciones oficiales. Incluso organizaciones independientes como la UGOCM-PPM y la CIOAC se quedaron atrás, porque también éstas inicialmente consideraban que los acontecimientos de octubre se debían simplemente a luchas burocráticas internas y habían decidido permanecer neutrales.

Hacia finales de 1975, los dirigentes regionales de los grupos peticionarios de tierras, los más de los cuales se habían afiliado a la CNC, la CCI o la UGOCM-Jacinto López, comenzaron a sostener reuniones secretas para decidir sobre sus tácticas de lucha. La mayoría de estos dirigentes había roto ya con las organizaciones oficiales del Pacto de Ocampo; las masas ya no estaban dispuestas a seguir con el pacto colaboracionista del gobierno.

La madrugada del 3 de abril de 1976, unos 800 peticionarios tomaron el bloque 407 (cada bloque consistía en unas 400 hectáreas), propiedad lla-

mada San Pedro, que pertenecía a la familia Bórquez Esquer. Localizado en el corazón del valle de El Yaqui, a unos 10 kilómetros de Ciudad Obregón, San Pedro tenía varios edificios densamente rodeados de árboles, que formaban una barrera protectora natural en caso de represión armada por parte del Estado (Sanderson, 1981: 191). Los ocupantes tomaron varias medidas de precaución adicionales: cavaron zanjas en las dos rutas de acceso, dejando sólo el espacio necesario para que cruzaran sus propios vehículos, y colocaron explosivos en sitios estratégicos en caso de que esas entradas fueran súbitamente bloqueadas. Asimismo, pusieron reflectores poderosos para iluminar las dos rutas de acceso por la noche y prepararon a grupos armados para la defensa (Ferra Martínez, 1982: 15-16).

La familia Bórquez era una de las familias terratenientes más connotadas de la región, y su influencia en el gobierno era considerable. Sus miembros habían optado por la forma usual de evitar las restricciones legales a la tenencia privada de la tierra de la legislación agraria, registrando 400 hectáreas bajo los nombres de cuatro hermanos Bórquez. Al aumentar la descendencia, la familia compraba más propiedades y las registraba bajo el nombre del nuevo heredero. "En 1975 la familia Bórquez, con 97 miembros, había reunido casi 27,000 hectáreas de tierra" (Benjamin y Buell, 1985).

Unas cuantas horas después de la toma de tierras, los militares rodearon el bloque 407. El 6 de abril, el gobierno envió a dos representantes de la Secretaría de la Reforma Agraria a negociar. Aunque los ocupantes de las tierras accedieron a la intermediación, también tomaron como rehenes a los representantes hasta que el gobierno retirara sus fuerzas armadas de las inmediaciones del bloque 407.

Durante la intervención del ejército, los ocupantes recibieron amplio apoyo y solidaridad por parte de otros grupos de solicitantes de tierras, de familiares, de los indios yaqui y de estudiantes. Muchos de esos simpatizantes acamparon afuera del sitio de los militares en demostración de solidaridad.

Mientras tanto, los peticionarios establecieron una organización formal para representar sus intereses, conocida como el Frente Campesino Independiente (FCI). Sus demandas reflejaban claramente un carácter de clase que rebasaba ampliamente el del campesinado:

- Que se entregaran los latifundios a los campesinos (*sic*) organizados colectivamente, dando prioridad a los trabajadores agrícolas de la parcela expropiada.
- Que se expropiaran los latifundios sin compensación.

- Que se nacionalizaran los bancos privados.
- Que se redujera la concesión máxima de la propiedad privada [de 150] a 20 hectáreas.
- Que los campesinos (*sic*) controlaran la comercialización de sus cosechas y los recursos naturales.
- Que se concediera derecho de sindicalización y de huelga a los trabajadores agrícolas.
- Que se derogara el “amparo agrario” a los latifundistas.¹⁶
- Que se formaran brigadas campesinas y grupos de autodefensa.
- Que se anularan los certificados de inafectabilidad que protegían tierras laborables y pastizales.
- Que hubiera representación democrática de los campesinos.
- Que se concediera crédito barato y suministro de maquinaria a los campesinos pobres (Ferra Martínez, 1982: 22).

Evidentemente, este programa exige reformas que trascienden con mucho la visión “campesina” de cómo debe manejarse la tierra. No obstante, muchos estudiosos de izquierda llaman “campesinos” a los agentes de estas luchas, con base en que la tierra sigue siendo la demanda fundamental. Mi argumento al respecto es que la demanda de tierras adopta un carácter cualitativamente distinto una vez que se articula discursivamente con las otras demandas arriba especificadas. El carácter global de tales demandas lleva a la formulación de un proyecto hegemónico alternativo de contenido político popular-democrático, donde las unidades de producción asumirían un carácter poscapitalista.

¿Campesinos, proletarios o semiproletarios?

Ferra Martínez (1982), Quintero (1982) y Canabal Cristiani (1984) demuestran que hasta el 80 por ciento de los solicitantes de tierras eran asalariados temporales o permanentes en la agricultura o las agroindustrias y que algunos eran hijos de ejidatarios o jornaleros, no tenían tierras y vivían en comunidades ejidales. En sus conclusiones, Ferra Martínez sostiene que las luchas por las tierras y la sindicalización se estaban haciendo cada vez más complementarias. Sin embargo, no distingue entre los contenidos diferentes dentro de la propia lucha por la tierra. Evidentemente, el programa del FCI (arriba citado) es de un carácter profundamente popular-democrático y

¹⁶El derecho de amparo es una poderosa arma legal para los terratenientes en contra de la acción de la ley agraria.

poscapitalista en sus demandas generales. Sorprendentemente, incluso Roger Bartra (1982) habla del "campesinado" sonorense.

A mi juicio, los actores de estas luchas deberían ser considerados propiamente semiproletarios agrícolas, no campesinos, por lo que hace a sus relaciones de producción y reproducción. Ocupan diversas "posiciones de clase" durante el año (como los "polibios" de Michael Kearney —véase el capítulo 2), pero muy probablemente la mayor parte de su ingreso se deriva del empleo asalariado. Dada la naturaleza temporal del empleo asalariado, sin embargo, luchar por la sindicalización probablemente no sea la mejor estrategia para este semiproletariado. Su experiencia laboral les dice que los empleos asalariados en la agricultura no son muy estables y son difíciles de hallar en la industria. Tampoco les brindan mayor seguridad económica. Vistas así las cosas, la lucha por la tierra puede redituarse a la larga en cuanto a empleo y seguridad.

Económicamente, la lucha de los semiproletarios del noroeste de México es de contenido poscapitalista más que proletario. Han estado inmersos en relaciones de cooperación capitalista por varias generaciones, lo que naturalmente los hace preferir organizar la producción cooperativamente. Como la mercantilización ha penetrado en casi todas las esferas de la vida regional, se prefiere orientar la producción hacia el mercado. Su lucha no es sólo por la tierra, sino también por los otros medios de producción, por la organización cooperativa y por el control autogestionario y democrático del proceso productivo. En cierta medida, pues, su lucha semeja la de la toma de una fábrica por parte de proletarios industriales. Esa lucha no es necesariamente proletaria, sino poscapitalista, por cuanto sus actores se resisten a proletarizarse: en realidad desean trascender su condición proletaria apropiándose completamente del control del proceso de producción. Esta lucha establece las condiciones para que aparezca un proyecto hegemónico poscapitalista y popular-democrático.

En suma, el hecho de que la tierra siga siendo un objeto central de la lucha no determina por sí mismo el carácter político o económico de las luchas en el campo. Además de lograr el acceso a la tierra y otros medios de producción, hay otros elementos del carácter de las luchas:

1. la organización para la producción que se prefiera y procure (familiar o cooperativa);
2. el carácter de las organizaciones de clase frente al Estado y la burguesía (de oposición o colaboracionista); y
3. el grado de independencia y autonomía de la organización y las alianzas que establece con otras organizaciones de izquierda o populares (o de derecha en caso contrario).

Como se verá, las luchas de Sonora resultaron, conforme a todos estos criterios, en una lucha poscapitalista en lo económico y popular-democrática en lo político.

La expropiación de tierras

El 19 de noviembre de 1976, es decir, pocos días antes de concluir el periodo presidencial de Luis Echeverría, fueron expropiadas casi 100,000 hectáreas de los valles de El Yaqui y El Mayo. Cerca de 37,131 hectáreas eran de riego y las restantes de pastizales. Tres cuartas partes de las tierras de riego pertenecían a 21 familias, varias de ellas con estrechas relaciones de parentesco entre sí. Casi el 75 por ciento de las tierras de pastura eran propiedad de solamente cuatro personas, una de ellas Faustino Félix, ex gobernador de Sonora. Se afectó un total de 40 por ciento de las tierras de propiedad privada en el valle de El Yaqui (Benjamin y Buell, 1985). Se expropiaron las tierras de 72 familias, muchas de ellas representantes también de intereses industriales y comerciales. Esta medida se tomó inmediatamente después de la segunda devaluación del peso en ese año (luego de 22 años estabilidad cambiaria), cuando estaban en su apogeo la fuga de capitales, los rumores y el pánico. Uno de los rumores más descabellados era que se daría un golpe militar dirigido por el propio Echeverría para continuar en la Presidencia.

Una vez que el FCI y las otras organizaciones de oposición forzaron al Estado a expropiar tierras de la burguesía agraria más productiva, el Estado devolvió el golpe incluyendo tan sólo un pequeño porcentaje de miembros de la FCI como beneficiarios de los nuevos ejidos. En estos casos, se dividió a los miembros del mismo grupo de solicitantes para asignarlos a ejidos diferentes. Las organizaciones del Pacto de Ocampo se movilizaron inmediatamente para aprovecharse del conflicto y tratar de controlar políticamente la situación, ya que la mayoría de los beneficiarios pertenecían formalmente a ellas (Ferra Martínez, 1982; Camarena Castellanos y Encinas Terrazas, 1982).

Pero esta vez las bases de esas organizaciones habían aprendido una lección importante del FCI. Se dieron cuenta de que si habían recibido las tierras no había sido gracias a la intervención de la CNC, la CCI, la CAM o la UGOCM-Jacinto López, sino a resultados de sus propias movilizaciones independientes. Así que la mayoría se salió muy pronto de esas organizaciones corruptas (Canabal Cristiani, 1984: 174).

El semiproletariado agrícola de Sonora había estado inmerso en el clima de las luchas de oposición protagonizadas por el FCI. Si bien la mayoría de sus miembros no había recibido dotaciones de tierra, su conciencia ya

había trascendido su individualidad y subjetividad para volverse conciencia colectiva del semiproletariado de la región. Se habían aprendido las lecciones de combatividad, solidaridad y autonomía del Estado y, finalmente, se había puesto al descubierto el papel corporativista de las organizaciones del Pacto de Ocampo. Estas organizaciones ya no podrían ocultar su verdadero carácter como aparatos políticos del Estado, actuando sobre todo como medios para controlar a las masas y pisoteando sus intereses para favorecer al Estado y a la dominación burguesa.

En el proceso de redistribución de tierras, Echeverría violó su propio Código Agrario de 1972 en dos aspectos: primero, la tierra distribuida era sólo de 5 hectáreas de riego por cada ejidatario, cuando la ley establecía un mínimo de 10 hectáreas. Esto limitaba gravemente la capacidad de empleo de la tierra para cada ejidatario; segundo, la presa del valle de El Yaqui ya funcionaba a toda su capacidad. Así que Echeverría propuso "extender el distrito de riego azotado ya por la sequía y la escasez permanente de abastecimiento hidráulico" (Sanderson, 1981: 194).

A pesar de los problemas materiales que suponían estas violaciones de la ley, los nuevos ejidatarios enfrentaron airoso la situación. De hecho, sorprendieron a todos los sectores de la sociedad mexicana con su labor ejemplar tanto en lo económico (productividad) como en lo político (democracia).

Evaluaciones de la Coalición de Ejidos Colectivos

Antes el gobierno nos decía qué hacer y qué no hacer. Ahora nosotros le decimos qué hacer por nosotros.

(Agricultor de la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles de El Yaqui y El Mayo, citado en Benjamin y Buell, 1985).

Todas las evaluaciones de la experiencia de la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles de El Yaqui y El Mayo indican que ésta ha sido de lo más benéfica para los productores directos e incluso para la nación. Un reportero investigador del *unomásuno* recalca especialmente los logros en cuanto a productividad e independencia política luego de ocho años de las tomas de tierras (Coo, 1984a, 1984b). Entrevistó al presidente local del Partido de Acción Nacional (PAN), de centro-derecha, e incluso él tuvo que conceder: "Esos amigos han logrado una productividad *muy interesante* y, además, trabajando muy bien la tierra han invertido sus utilidades en equipo y agroindustrias, lo que da a su trabajo una dimensión *muy interesante*" (citado en Coo, 1984a: 8, cursivas en el original).

Otro aspecto que se trata en el reportaje del *unomásuno* es la autonomía de los productores directos para formar su propia organización, con consi-

derables márgenes de independencia respecto del Estado y la burguesía (Coo, 1984b: 7). Por su parte, el Institute for Food and Development Policy de San Francisco, California, envió a una reportera al valle de El Yaqui en el verano de 1985. Una breve reseña de su visita se publicó en el boletín mensual *Food First News* del Instituto (1985). La reportera califica de ejemplar la experiencia de la Coalición, y a su juicio ofrece muchas lecciones positivas a otras luchas populares de la agricultura del Tercer Mundo. El informe completo del Instituto aparece en Benjamin y Buell (1985).

Estos afortunados resultados responden en gran medida a las intervenciones adversas del Estado que tuvieron que enfrentar los productores directos anteriormente. Si el Estado a la larga intervino en su favor, esto se debió a que los trabajadores políticamente organizados le impusieron sus políticas de la misma forma como impusieron la redistribución de las tierras. A esto se le llamó en el capítulo 2 el “momento subjetivo” en la dinámica política de las clases, en el cual una clase subordinada, una vez constituida políticamente, es capaz de determinar la dirección de ciertas políticas estatales en su favor sin perder su independencia política respecto del Estado.

Como muchas intervenciones favorables del Estado resultaron directamente de la iniciativa y la fuerza política de los productores directos, tales intervenciones no sirvieron para que el Estado se apropiara de sus organizaciones o las cooptara. Antes bien, los trabajadores fueron los actores colectivos, los sujetos del proceso, de manera que sus nuevos triunfos redundaron en el fortalecimiento de sus organizaciones de clase. En este “momento subjetivo” las clases subordinadas llevaron la ventaja; de ahí el epígrafe de esta sección: “Antes el gobierno nos decía qué hacer y qué no hacer. Ahora nosotros le decimos qué hacer por nosotros.” Desde luego que esta nueva situación suponía lograr mayores grados de autonomía respecto de los aparatos económicos del Estado, y un liderazgo democrático (Gordillo, 1985a, 1985b, 1988). El liderazgo democrático y el mantener estatutariamente la independencia de la Coalición han sido factores cruciales en sostener el momento subjetivo de esta organización clasista.

Programa y desempeño de la Coalición

Además de luchar por conseguir las 10 hectáreas a que tenían derecho por ley los ejidatarios, el programa de la Coalición comprendía también:

1. la lucha en contra del capital comercial por mejores condiciones de mercado;

2. el autofinanciamiento de los ejidos y la independencia respecto del Banco a través de la creación de una Unión de Crédito;
3. establecer otras actividades productivas como empresas de lácteos y de textiles a partir del cultivo del algodón; y
4. construir unidades urbanas para dar vivienda adecuada a los ejidatarios cerca de sus lugares de trabajo y facilitar la formación de relaciones comunitarias en su vida cotidiana.

Muchas de estas actividades se planearon para dar más oportunidades de empleo a los ejidatarios y a sus hijos e hijas, y para fortalecer económica y políticamente su organización (Canabal Cristiani, 1984: 215).

En el cuadro 17 se muestran los rendimientos por hectárea en los ejidos de la Coalición para trigo, soya y maíz, y se comparan con los rendimientos promedio de los sectores ejidal y privado y con el rendimiento promedio del valle de El Yaqui. Para la comparación sólo se eligieron los tres cultivos más importantes para la Coalición. El trigo es el cultivo más importante y por lo general a él se dedica más del 50 por ciento de las tierras de la Coalición. Los otros cultivos ocupan del 2.5 al 30 por ciento de la tierra laborable. Esta pauta de aprovechamiento del suelo es semejante en los sectores ejidal y privado (Oswald, Rodríguez y Flores, 1986: 282).

Excepto en 1980-1981 y 1985-1986 para el trigo y en 1982 y 1985 para la soya, los rendimientos de la Coalición fueron siempre mayores que el promedio regional. Quedaron apenas por debajo de la productividad del sector privado y generalmente tuvieron mayores rendimientos en cuanto a la producción de maíz. La razón por la cual la Coalición no ha tenido rendimientos iguales ni mayores que los del sector privado en todos los cultivos es bastante clara: porque tiene la política expresa de ahorrar costos a base de eliminar productos químicos para la agricultura. En efecto, los técnicos de la Coalición han comprobado que los mayores rendimientos no compensan el mayor costo de tales productos. Así que las diferencias mínimas de rendimiento entre los ejidos de la Coalición y las plantaciones del sector privado entrañan menores costos para la Coalición y métodos menos nocivos para el medio ambiente regional, gracias a que se recurre menos a los productos agroquímicos.¹⁷

¹⁷ Entrevista personal con Israel Gaxiola, coordinador del Departamento Técnico de la Coalición, Ciudad Obregón, Sonora, 23 de diciembre de 1987.

CUADRO 17
 Rendimiento por hectárea en los principales cultivos del valle de El Yaqui,
 por tipo de organización productiva, 1980-1986
 (En toneladas métricas)

<i>Trigo</i>				
<i>Ciclo agrícola</i>	<i>Coalición</i>	<i>Sector ejidal</i>	<i>Sector privado</i>	<i>Promedio regional</i>
1980-1981	4.351	4.579	4.613	4.403
1981-1982	5.314	5.215	5.465	5.190
1982-1983	5.008	4.864	5.106	4.941
1983-1984	5.243	4.988	5.312	5.121
1984-1985	4.876	4.744	5.009	4.861
1985-1986	4.543	4.408	4.837	4.595
<i>Soya</i>				
1982	2.009	2.054	2.188	2.108
1983	1.826	1.646	1.838	1.710
1984	1.644	1.545	1.689	1.608
1985	1.978	2.013	2.180	2.092
1986	2.154	2.114	2.127	2.119
<i>Maíz^a</i>				
1981-1982	3.944	4.033	4.341	4.136
1982-1983	4.163	3.801	4.044	3.914
1983-1984	4.153	3.908	3.900	3.905
1984-1985	4.244	4.069	4.236	4.113
1985-1986	4.714	3.896	4.078	3.958

Fuentes: Basado en datos del Departamento de Asistencia Técnica, Coalición de Ejidos Colectivos de los valles de El Yaqui y El Mayo (proporcionados por Israel Gaxiola, coordinador), para rendimientos de la Coalición; en datos del Departamento de Estadística Agrícola, Distrito de Riego 148, Cajeme, Sonora, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (información sobre el Distrito 41, Valle de El Yaqui), para datos sobre promedios regionales de los sectores ejidal, privado y regional.

^a Los datos para la Coalición son para el ciclo de verano en cada año, los de los otros sectores son para el ciclo de invierno. Por lo tanto, algo de la variación en los rendimientos puede deberse a diferencias en el ciclo agrícola.

Como organización formal, la Coalición se fundó en mayo de 1978, luego de la eficaz lucha en contra de la retención de las utilidades del ejido por parte de Banrural para pagar a los terratenientes afectados. Fue ésta la primera batalla emprendida —con éxito— en contra de una intervención desfavorable del Estado. La lección que obtuvieron los productores directos es que tendrían que consolidar su organización clasista no sólo para defenderse en contra de las imposiciones del Estado, sino también para proponer medidas concretas tocantes a la organización productiva. El departamento técnico de la Coalición se estableció inmediatamente después de esta lucha (Castaños, 1982).

La siguiente batalla importante fue para conseguir la independencia financiera respecto del Banrural, cuando los ejidatarios se negaron a pagar las primas a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. (Anagsa), otra compañía estatal. Esta compañía sólo protegía los créditos del Banco y no las pérdidas de utilidades del productor. Así que la Coalición creó su propio fondo común con cuotas que antes pagaban a Anagsa, y dio una cobertura más amplia que la de Anagsa: 100 por ciento de las pérdidas de los cultivos en lugar del 70 por ciento que cubría Anagsa. El Banrural inmediatamente se opuso a esta iniciativa, amenazando con retirar el crédito de la Coalición si ésta no se aseguraba con Anagsa. Mediante la movilización combativa de los productores directos, la Coalición ganó la batalla. Pese a que el fondo común se inició sin capital, salvo por los fondos proporcionados por los préstamos del Banco por seguro agrícola, en 1982 tenía un capital de 41'876,786 pesos. Con Anagsa, los ejidatarios nunca supieron cuál era el destino que se daba a sus propios pagos.

La lucha por la autonomía respecto del Banrural, sin embargo, habría de ir más lejos. En vista de los chantajes recibidos del Banco, que amenazaba con negar el crédito agrícola, la Coalición decidió crear su propia Unión de Crédito, así como un departamento de comercialización, pues hasta entonces el Banco se había encargado de comercializar las cosechas. La Unión de Crédito comenzó sus operaciones en 1979. En 1982 había 43 ejidos miembros, organizados en tres "uniones de ejidos", y más tarde se afiliarán otros.

Las noticias sobre la Unión de Crédito de la Coalición se difundirían por el estado de Durango y por todas partes hasta Chiapas y el sureste de México. Un grupo de campesinos de Durango solicitó incorporarse y en 1981 se iniciaron las operaciones con resultados muy satisfactorios. La Unión de Uniones Ejidales de Chiapas solicitó a la Secretaría de Finanzas una concesión para formar su propia Unión de Crédito (Coalición, 1982).

Además de las ventajas de comercialización que se obtuvieron con el departamento de comercialización, este departamento también ha contribuido en la compra de insumos agrícolas. Por ejemplo, mediante un contrato con Fertimex, compañía estatal, han podido comprarse fertilizantes a precios de mayoreo.

Se ha transmitido a la Coalición el impulso inicial organizativo y democrático de las bases del FCI. Su organización interna permite y alienta la participación directa de todos sus miembros. De los 76 ejidos que se constituyeron después de la expropiación de 1976, el 50 por ciento de ellos ahora forma parte de la Coalición. Se realizan reuniones mensuales de asamblea en cada ejido, con una asistencia del 70-90 por ciento de sus miembros. Cada ejido elige a sus nuevos dirigentes (para el comisariado ejidal) cada tres años: un presidente, un secretario y un tesorero. No se permite la reelección para periodos consecutivos, para evitar que se perpetúe el poder de una sola persona (Benjamin y Buell, 1985).

La tendencia de la mayor parte de los movimientos agrarios en México a elegir a las personalidades más carismáticas ha cambiado a favor de los ejidatarios con las mejores capacidades ejecutivas. Un comité rotativo intermedio, compuesto por los representantes de cada ejido (presidentes del comisariado ejidal) se reúne mensualmente, y existe un presidente de toda la Coalición. Además, otros departamentos diversos se dedican a funciones especiales, como el departamento técnico y el departamento de comercialización.

La Coalición ha contratado a un numeroso personal técnico, pero los agricultores tienen buen cuidado de que estos profesionales no tomen decisiones por sí mismos. Su única función es proporcionar a los ejidatarios la información necesaria para que ellos tomen las decisiones dentro de su organización y con sus procedimientos democráticos.

Como las antiguas dotaciones de tierras no comprendían terrenos para instalaciones de vivienda, la mayoría de los ejidatarios tenían las suyas muy dispersas, a menudo lejos de sus lugares de trabajo. La Coalición, por consiguiente, tuvo que dar una batalla para adquirir terrenos para un proyecto de urbanización ejidal. Finalmente obtuvieron el apoyo del gobernador de Sonora, Samuel Ocaña, y obtuvieron 410 hectáreas para zonas urbanas en los valles de El Yaqui y El Mayo: "En 1985, los ejidos habían construido 12 zonas urbanas. Con 5,600 casas, así como escuelas locales, guarderías diurnas e instalaciones de recreo, constituye el proyecto de vivienda campesina más grande de todo México" (Benjamin y Buell, 1985: 9). De esta manera, el proyecto contribuye también a reunir a los ejidatarios en comunidades urbanas, más cerca de los lugares de

CUADRO 18
Trayectoria de clase política y objetos de lucha en el valle de El Yaqui

<i>Momento</i>	<i>Actores</i>	<i>Objetos</i>	<i>Resultados</i>
Momento uno 1938-1947	Productores cooperativos no capitalistas	Tierra, nacionalidad	Ejido colectivo autogestionario; popular democrático
Momento dos 1947-1965	Igual que arriba, con fragmentación de los colectivos hacia producción individual	Mantener la producción autogestionaria, crédito	Fragmentación ejido colectivo, campesinización; subordinación formal al estado; de oposición débil y reprimida
Momento tres 1965-1975	Semiproletarios, más proletarizados que en La Laguna	Crédito y agua, para una producción campesina viable	Renta de parcelas ejidales y mayor fragmentación de los ejidos colectivos; burgués-hegemónico
Momento cuatro 1975-1988	Semiproletarios, más proletarizados que en La Laguna	Tierra, producción colectiva y autogestionaria	Autogestión democrática y cooperativa de la producción; popular-democrática
Momento cinco 1988-1996	Productores poscapitalista	Precios justos de insumos y cultivos, reducir dependencia de agroquímicos e insumos importados	Autogestión democrática y cooperativa de la producción; popular-democrática, con tendencias hacia nuevo corporativismo en algunos líderes

Fuente: Elaborado a partir del análisis en este capítulo.

trabajo agrícola; reduce el desempleo y, desde luego, proporciona vivienda para sus familias. El último aspecto es tenido en alta estima por los ejidatarios, la mayoría de los cuales no tenía casa propia antes del proyecto de urbanización. Dadas las elevadas temperaturas de la región de El Yaqui, todas las viviendas del ejido se equiparon con aire acondicionado en al menos una habitación. Esta característica es impensable para la vivienda de la clase campesina u obrera de otras regiones cálidas de México.

Los rasgos culturales que se han desarrollado en la experiencia de la Coalición dan gran importancia a un espíritu de trabajo arduo, a la eficiencia, al trabajo colectivo, a la solidaridad con otras clases subalternas y a la independencia respecto del Estado. En una encuesta llevada a cabo en 1981 con una muestra de 5 por ciento de los miembros de cada ejido, 76.5 por ciento respondieron que preferían la forma de organización colectiva a la individual o familiar. Porcentaje muy alto, considerando el grado al que se promovió la ideología individualista en los decenios de los cincuenta y los sesenta. Aunque el 32 por ciento matizó sus respuestas (por ejemplo, "siempre y cuando mantengamos una buena organización y no surjan divisiones", o "mientras todos compartamos el trabajo por igual", etcétera.), la gran mayoría está de parte de la organización colectiva. En lo que se refiere a la participación, el 64 por ciento respondió que contribuían a determinar qué cultivos, semillas, fertilizantes y otros insumos debían usarse en su ejido, y el 51 por ciento afirmaron que participaban en la formulación de las reglas internas del ejido (Camarena Castellanos y Encinas Terrazas, 1982: 124-138).

Algunos de los nuevos rasgos culturales, favorables al colectivismo, la solidaridad y la participación, se manifiestan en la siguiente descripción de lo que la Coalición considera sus dos compromisos fundamentales:

Que quede muy claro: la Coalición de Ejidos Colectivos tiene un compromiso doble: consigo misma, que todos los ejidos colectivos que la integran se desarrollen económicamente, pero deben luchar por conseguir mejoras en todos los demás aspectos; que tengan una mayor participación en la solución de sus problemas; que toda asamblea general de cada ejido constituya una fuerza que impida la entrada a la reacción; que no busquen resolver sus problemas mediante soluciones personales ni sectoralizando o dividiendo los ejidos sino que analicen y propongan las mejores soluciones como un solo hombre, anteponiendo el interés colectivo al interés y el prestigio personales. En cuanto a todas las organizaciones en lucha de las clases campesi-

na y obrera del país, debemos lo que se ha logrado al hecho de que no estamos solos. Formamos parte de una unidad de campesinos, obreros y profesionistas comprometidos [...] Queremos sellar este compromiso: ponemos lo que tenemos a la disposición de la lucha de los trabajadores de México. Nuestra experiencia, como en el caso de Chiapas, para la constitución de una Unión de Crédito; nuestra asociación, como en el caso de Durango, está abierta al ingreso de nuevos miembros. Con todo esto fortalecemos nuestra unidad política y económica (Coalición, 1982: 21-22).

Esta declaración se hizo en la reunión anual de 1982 en apoyo de los ejidos colectivos de Sonora, patrocinada por la propia Coalición y docenas de organizaciones de obreros, campesinos y profesionales. Estas reuniones anuales han sido parte de las manifestaciones de solidaridad que le han ofrecido a la Coalición amplios sectores de la izquierda y las organizaciones democráticas de México, adoptando como suya la lucha de la Coalición. Esta alianza es evidentemente de tipo popular-democrático.

Epílogo

Los dos últimos decenios se han señalado por crisis económicas recurrentes en México y por devaluaciones de la moneda, que han hecho casi prohibitivas las importaciones, en un contexto en que la mayoría de las empresas industriales y las operaciones agrícolas modernas dependen fuertemente de la importación de maquinaria y materias primas. Los ejidos de la Coalición no son la excepción. Los problemas económicos de México afectan gravemente a la Coalición, la cual depende en gran medida de la importación de maquinaria de Estados Unidos, concretamente de la International Harvester, la Ford International y la Allis Chalmers (Benjamín y Buell, 1985: 10).

En un congreso de especialistas y dirigentes agrarios efectuado en Culiacán, Sinaloa en 1987, Juan Leyva Mendivil, ex presidente de la Coalición, presentó una ponencia como representante de la Alianza Campesina del Noroeste, ALCAN, la cual incluye ejidos de Sonora y Sinaloa. El documento constituye un análisis económico de los efectos de la crisis actual sobre la producción agrícola en sus ejidos.

Los costos de producción, por ejemplo, excedieron con mucho a los precios del trigo. De 1980 a 1986 los precios de sus cosechas aumentaron 1,633 por ciento en comparación con los aumentos en costos del 2,528 por ciento. Convirtiendo los costos a kilogramos de trigo, en 1980

se requerían 2,110 kilogramos para cubrir los costos por una hectárea. Para 1986 los ejidatarios tenían que producir 3,270 kilogramos para los mismos efectos. En contraste, en 1980 las utilidades fueron 2,390 kilogramos por hectárea, frente a sólo 1,230 kilogramos en 1986. Las dificultades para enfrentar el cambio tecnológico y la sustitución de maquinaria son evidentes en las cifras siguientes. En 1982, los ejidos necesitaban 306 toneladas métricas de trigo para comprar una trilladora; en 1986 necesitaban 965 toneladas métricas para reemplazarla (Leyva Mendivil, 1987).

Dada la cantidad relativamente pequeña de tierra por ejidatario que se recibió en 1976 (5 hectáreas), el empleo externo sigue siendo necesario. En un estudio realizado en 1982 por un grupo de la Universidad Nacional Agrícola de Chapingo, entre el 5 por ciento de los ejidatarios, el 60 por ciento del ingreso provenía del empleo en el ejido, y el 40 por ciento de la venta de fuerza de trabajo fuera del ejido (Quintero, 1982).

Uno de los problemas de la Coalición ha sido que no todas sus empresas agroindustriales han funcionado adecuadamente. El ejemplo más drástico de una decisión económica inadecuada fue la compra de una despepitadora de algodón a la compañía Anderson Clayton a mediados de los años ochenta. Esta adquisición se dio en el contexto de un interés menguante por el cultivo de algodón en la región y cuando la despepitadora estaba prácticamente en quiebra. En consecuencia, la Coalición enfrentaba grandes dificultades económicas para pagar la despepitadora a finales de los años ochenta y requería un préstamo de 214,600 dólares para mantener sus operaciones en general (Díaz Leal, 1987).

En 1987, en medio de tales dificultades y de la coyuntura electoral (por las elecciones presidenciales de 1988), el entonces gobernador Rodolfo Félix Valdez y sus funcionarios presionaron fuertemente a la Coalición para adherirse formalmente a la CNC del PRI. Pese a que el presidente de la Coalición, Juan Díaz Leal, parecía dispuesto a proceder a cambio de ayuda económica, las bases le impidieron adoptar tal medida. No estaban dispuestas a comprometer su autonomía política estratégica a cambio de una supuesta ayuda. Esto habría significado la claudicación y cooptación de la Coalición. Más tarde, 44 presidentes de los comisariados ejidales se reunieron con el gobernador para explicar la postura estatutaria de la Coalición para mantenerse independiente respecto de *todas* las organizaciones políticas. No obstante lo anterior, una de las tres uniones ejidales que integraban la Coalición, la "19 de noviembre", la más activa y mejor organizada, se adhirió formalmente a la CNC a principios de noviembre de 1987.

Fue bastante curioso observar durante el trabajo de campo que, aunque la mayoría de los dirigentes de la Coalición se había vuelto a adherir personalmente a la CNC y al PRI, todos los que entrevisté en noviembre de 1987 consideraban que la Coalición como tal *no* debía unirse a las organizaciones sindicales oficiales. Probablemente haya sido estratégicamente afortunado para la Coalición haber desarrollado mecanismos democráticos para impedir tal posibilidad, aun cuando su presidente pueda haber estado dispuesto a renunciar a la lucha por la autonomía política. Para la Coalición, el futuro económico depende en gran medida de su propia fuerza y movilización política. Esta posición se mantenía cuando visité de nuevo la región en 1996.

El Yaqui: recapitulación teórica

Es difícil ver cómo los campesinistas o los proletaristas habrían podido prever el sorprendente resultado de las luchas agrarias en Sonora. A decir verdad, fueron un tanto desalentadoras para los proletaristas. Rorger Bartra (1982), por ejemplo, interpretó este movimiento agrario como el último recurso del "populismo tecnocrático" para apaciguar la inquietud agraria. Por el contrario, Arturo Warman (1980) celebró el hecho de que incluso los trabajadores agrícolas luchaban por demandas supuestamente "campesinas".

En su artículo sobre el problema del proletariado agrícola, luego de advertir que los trabajadores sonorenses habían sido separados de sus medios de producción durante tres o cuatro generaciones, Warman declara: "Este grupo proletario recientemente se ha organizado alrededor de demandas estrictamente agrarias y no [en torno a demandas] proletarias, con todo lo que ello implica" (1980: 172). Hay dos falacias en el tratamiento que Warman le da al problema. La primera es que identifica la demanda de la tierra como una demanda "estrictamente agraria", es decir, por la tierra, lo cual para él equivale a una demanda campesina. Como he argumentado en este y otros capítulos, debe atenderse a la totalidad de las demandas para valorar el carácter discursivo de las luchas "agrarias". Además, el análisis de los objetos de la lucha necesita complementarse con el de las organizaciones de clase para la lucha. Sólo mediante estos dos criterios, más las alianzas que establece, podremos determinar adecuadamente el carácter político clasista de un movimiento social.

La segunda falacia se da cuando Warman se ocupa de los "proletarios agrícolas permanentes", quienes según él generalmente se alían con los

capitalistas rurales. Mi duda en este punto es si Warman se refiere en verdad a los proletarios agrícolas, o a obreros asalariados que ocupan lo que Erik Olin Wright ha llamado "posiciones contradictorias de clase" entre el capital y el trabajo (1978, 1979). Al menos para Sonora, es muy probable que los trabajadores permanentes tengan puestos de supervisión, es decir posiciones contradictorias de clase entre los obreros y los patrones. El solo hecho de que controlan la fuerza de trabajo de otros, pone a los supervisores más cerca de los intereses del patrón que los de los demás trabajadores. De ahí que no sea extraño que se alíen con sus patrones.

La interpretación de Bartra falla también al menos por dos razones: primera, califica de "campesinos" a los actores sociales, atendiendo meramente a su demanda por tierra (al igual que Warman), cuando en realidad constituían un semiproletariado muy dependiente de los salarios (si hemos de conservar un concepto estructural de la clase económica basado en la producción como el propio R. Bartra lo ha propuesto). Segunda, supone que la iniciativa de redistribución de tierras surgió del Estado (a manos de su fracción tecnocrática), de manera parecida a como lo hizo Sanderson (1981), cuando en realidad ocurrió lo contrario: el movimiento impuso al Estado la política de redistribución de tierras, dada la correlación de fuerzas de clase en la región.

El desarrollo capitalista en el campo mexicano ha resultado en un proceso de "descampesinización sin proletarización completa" (véase el capítulo 4). Así pues, hablando con rigor, los nuevos sujetos económicos que emergen son semiproletarios: no pueden atenerse únicamente a los salarios para satisfacer sus necesidades de reproducción, pero tampoco a la agricultura. Por lo tanto, el resto de las relaciones sociales que establecen para lograr su reproducción económica pueden ser conducentes para la preservación o formación de elementos culturales no capitalistas, aunque muchas de éstas se desarrollen dentro de un contexto de mercado. Dada la heterogeneidad estructural de países como México, debemos trascender el análisis economicista y de reduccionismo de clase para estudiar la formación política de las clases. Ya he enfatizado la importancia de otros factores: las culturas regionales, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo.

Capítulo 8.

El EZLN y la expansión de las fronteras nacionales hacia dentro: democracia, cultura indígena y ciudadanía*

El PRIMERO de enero de 1994 entrará en los libros de historia como la fecha que marca una notable paradoja en el México contemporáneo. Apenas inauguraba el país su ingreso en el “primer mundo”, simbolizado por el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuando estalló una rebelión armada en el estado de Chiapas. A medida que el gobierno llamaba a un cese al fuego después de escasos 12 días de lucha armada, surgió un nuevo movimiento social cuestionando la dirección del futuro de la nación imaginado por el Estado y su maquinaria electoral dominante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Quienes se sumaron al nuevo movimiento son principalmente campesinos mayas, tanto miembros como bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus simpatizantes nacionales e internacionales.

En este capítulo se examina la formación política del campesinado indígena a partir del levantamiento zapatista, cómo ha contribuido a la consolidación de la sociedad civil y, a través de ello, a consolidar la transición a la democracia electoral en México. Estos logros se han dado a pesar de que las demandas materiales y legislativas concretas de los zapatistas distan mucho de ser logradas, lo cual demuestra que el proceso de formación política clasista puede redundar, cuando menos, en la consolidación de los procesos ciudadanos y la sociedad civil. Puesto que el movimiento del campesinado indígena que ha encabezado el EZLN se ha dado en el contexto de la configuración de una débil democracia liberal, se examinan también los desafíos ideológicos que plantea la lucha por los derechos indígenas. El principal desafío consiste en que la ideología liberal enfatiza el tratamien-

*En este capítulo utilizo algunos párrafos de publicaciones anteriores, incluyendo una en coautoría con Chris Gilbreth (Gilbreth y Otero, 2001). En los casos en que uso materiales de sus entrevistas, lo hago notar en el texto. Utilizo también algunos fragmentos de un artículo con la coautoría de Heidi Jugenitz (Otero y Jugenitz, 2003). Agradezco tanto a mis coautores como a los dictaminadores anónimos de *Latin American Perspectives* y la *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, respectivamente, así como a estas revistas por permitirme usar estos materiales aquí.

to igualitario de los ciudadanos en tanto individuos, mientras que el movimiento campesino-indígena exige el reconocimiento de la cultura indígena y de los pueblos indios. Por un lado, las políticas paternalistas y asimilacionistas del indigenismo oficial posrevolucionario han tratado a los indígenas como objetos de la asistencia pública, con el fin último de asimilarlos a la cultura mestiza dominante. Pero por otro lado los indígenas exigen el reconocimiento a la diferencia cultural y el trato como grupo, no sólo como individuos. La exigencia incluye el derecho a la autonomía como sujetos de derecho público, lo que daría a los pueblos indios la habilidad para autogobernarse.

Uno de mis argumentos principales es que el movimiento social detonado por el levantamiento zapatista ha sido una de las fuerzas motrices de la democratización electoral en México, más significativa aún que los partidos de oposición. Históricamente éstos habían sido debilitados o jalados hacia una alianza con el PRI —caso típico de la “oposición leal” ejercida por el Partido de Acción Nacional (PAN)—, con lo cual se facilitaron cambios que dejaron intacta la naturaleza autoritaria del sistema político. En contraste con ello, el proceso de formación política-clasista generado por el EZLN ha propiciado niveles más altos de actividad política e inspirado la profundización del debate democrático. La diferencia principal entre partidos y movimiento zapatista consiste en dónde han enfocado sus esfuerzos cada uno: mientras que aquellos se enfocaron en reformar el autoritarismo de la sociedad política desde adentro, el EZLN ha interpelado a la sociedad civil para presionar por una democratización desde abajo. El EZLN promovió, por ejemplo, una serie de reuniones de las organizaciones indígenas de México, esfuerzos que culminaron en la formación del Congreso Nacional Indígena como organización clasista del campesinado indígena.

El levantamiento zapatista puso al sistema político mexicano en una encrucijada: o se endurecía más y perdía aún más legitimidad, o transitaba en una dirección democrática. En efecto, tal como lo anticipé en 1996, uno de los escenarios posibles para 2000 era que el PRI continuase con el endurecimiento de sus políticas de control social. Pero esta dirección difícilmente habría sido compatible con la imagen requerida para México dentro del TLCAN. Mi argumento en aquella ocasión fue que el escenario más factible históricamente para el proceso electoral de 2000 sería precisamente un resultado liberal-democrático en el que el PAN ganase las elecciones presidenciales (Otero, 1996b: 242). Según aquel análisis, este resultado se daría mediante la combinación de dos variables, una económica y otra política: la continuación del modelo económico neoliberal y una democratización electoral surgida desde abajo. Esta predicción resultó ser acertada y el 2 de

julio de 2000 una clara mayoría de los mexicanos eligieron a Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN) como presidente. Ahora bien, una democracia meramente electoral y de procedimientos difícilmente atenderá las preocupaciones y exigencias de una sociedad civil revigorizada que logró el cambio electoral. Mi argumento es que la continuación de la actividad ciudadana y la movilización popular-democrática tienen el potencial de redirigir la transición política de México hacia una democracia más incluyente en la cual el gobierno tenga que responder a un amplio rango de intereses sociales. Desde luego, esto dista todavía de lograrse, pero las capacidades organizativas de la sociedad civil para dar esta lucha ya están en plena formación.

En las primeras tres secciones aplico los conceptos de la teoría político-cultural de la formación clasista para entender el movimiento zapatista. La primera sección se enfoca en la manera en que las demandas materiales han sido articuladas a las demandas étnico-identitarias, en función de las culturas regionales que prevalecen en Chiapas y otras regiones indígenas. La segunda sección discute la respuesta estatal ante el levantamiento y las prácticas represivas que ha usado para debilitar al movimiento zapatista. En la tercera sección se discuten las formas emergentes de liderazgo entre la dirección zapatista y la nueva cultura política que promueve. La cuarta sección describe algunas de las reformas electorales pos-1994, a las cuales contribuyó el levantamiento zapatista y la movilización subsiguiente de la sociedad civil, y que aceleraron el proceso de democratización. En la quinta sección se discuten los temas conceptuales y normativos que se requiere resolver para llevar adelante el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena en una democracia emergente como la mexicana. Lo central por resolver es el cómo expandir las fronteras nacionales hacia dentro del propio país para reconocerles un lugar digno y justo a los pueblos indios. La sección final esboza las principales conclusiones teóricas, sustantivas y de política estatal para lograr tal expansión del Estado.

Culturas regionales, construcción de la identidad colectiva y demandas indígenas

En el México contemporáneo la etnicidad es parte de las culturas regionales y en esta medida juega un papel en la conformación de las demandas y los objetos de lucha. En el sureste de México, una gran proporción de la población es indígena y, en algunas áreas, la gente que se identifica con esta etnicidad es la mayoría. Nos podríamos preguntar, entonces: ¿qué es lo que constituye la base de la movilización política de los campesinos indíge-

nas? ¿Su situación de clase o su estatus étnico como indígenas? Tal como en los casos anteriores, la respuesta es que no se pueden separar los dos aspectos, excepto en términos analíticos. Es decir, en el caso del movimiento zapatista, hay que considerar el paquete completo de las demandas que se reivindican, tanto las materiales como las culturales. Veamos pues cómo ha articulado esta organización sus reivindicaciones.

El EZLN como organización política clasista

Como se ha mencionado arriba, el EZLN se inició como una organización guerrillera típica, lanzando una ofensiva militar frontal contra el Estado el 1o. de enero de 1994, al tiempo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entraba en efecto. Después de tan sólo 16 días de combate, sin embargo, respondió favorablemente a la propuesta gubernamental de negociar la paz.

En su primer comunicado, el EZLN ni siquiera mencionaba el derecho a la cultura indígena como demanda; se enfocaba en reivindicaciones económicas y políticas que incluían los derechos al: “trabajo, tierra, vivienda, alimentos, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” (EZLN, 1994). No obstante lo anterior, desde la primera entrevista que concedió a la prensa el 1o. de enero de 1994, el *Subcomandante Marcos* indicó que el TLCAN representaba una sentencia de muerte para los pueblos indios de México. Quedaba claro también desde un principio que la vasta mayoría de los milicianos del EZLN y sus bases de apoyo eran indígenas.

Pero el tema central al inicio del levantamiento era el de las disparidades socioeconómicas, particularmente en torno a la distribución de la tierra (Collier, 1994; Harvey, 1996a; Montemayor, 1997). En muchas partes de la zona de conflicto (las municipalidades orientales de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas), los campesinos mayas habían tomado y ocupado las tierras después de 1994, en busca de mejorar sus condiciones de vida. Un movimiento por la reforma agraria había estado en acción desde los años setenta (Harvey, 1998a), pero el levantamiento politizó aún más a los campesinos mayas e hizo incrementar su militancia. En muchos casos, los terratenientes abandonaron sus propiedades durante la rebelión, temiendo por su seguridad personal. Mucha de esta tierra permaneció desocupada por varios años, habiéndole sacado el ganado y los implementos de trabajo. En otros casos, se tomó la tierra o se “recuperó” y se formaron nuevas comunidades. Un representante de la Nueva Población Moisés-Gandhi, en Ocosingo, explicó por qué vinieron a ocupar las tierras los miembros de la comunidad:

Esta propiedad era de nuestros abuelos, que hablaban tzeltal y no se podían comunicar en español. Debido a esto, les quitaban sus tierras. Convertían sus milpas en grandes ranchos ganaderos, y a nuestros abuelos los hacían trabajar como peones. Luego los forzaron a cultivar pequeños trozos de tierra en las laderas para trabajarlas como propias. Cuando nacieron nuestros padres, ya no había suficiente tierra. Y muchas familias se vieron forzadas a buscar trabajo como peones en otras fincas. Nosotros tuvimos que vivir en otras comunidades. Por lo tanto nosotros no robamos estas tierras; cuando los dueños se fueron después del levantamiento, nosotros las recuperamos como nuestras (entrevista por Chris Gilbreth, Ocosingo, octubre de 1996; citada en Gilbreth y Otero, 2001).

Puesto que la tierra era el punto central del conflicto en sus inicios, el levantamiento zapatista y las ocupaciones de tierras subsecuentes inflamaron las relaciones interétnicas. Los ladinos —o no-indígenas— expresaron su resistencia a la idea de que los pueblos indios reclamasen tener el mismo derecho a ser miembros de la sociedad mexicana. Un ganadero que había abandonado su tierra muy adentro del territorio zapatista dijo: “Los indios no quieren trabajar porque son flojos. Zapata tenía razón cuando dijo que «la tierra es para los que la trabajan», pero se le olvidó agregar que es «para los que la quieran trabajar» y «para los que saben trabajarla productivamente»” (entrevistado por Chris Gilbreth, Comitán, diciembre de 1996; citado en Gilbreth y Otero, 2001). Este desdén por una cultura enraizada en la agricultura de subsistencia ha sido un reflejo de la actitud que los zapatistas querían transformar.

El levantamiento zapatista dio inicio a un nuevo énfasis sobre el poder cultural que los indígenas querían arrancar desde abajo. A medida que la imagen del indígena rebelde recorrió México y el mundo, los artesanos tzotziles de San Cristóbal reaccionaron rápidamente al tejer máscaras en sus muñecos, y labrando pequeños rifles de madera para ponerlos en sus manos. Los nuevos muñecos zapatistas fueron un éxito comercial instantáneo. Los vendedores indígenas han explicado con orgullo cuál de los comandantes zapatistas está representado en cada uno de sus muñecos y muñecas, que replicaban las fotos que salían en primera plana en los diarios locales y nacionales mostrando a las mujeres y los hombres zapatistas negociando con los funcionarios del gobierno. Ver que a sus compañeros indígenas en sus trajes tradicionales se les trataba con respeto ha llegado a ser una fuente de orgullo y sorpresa para muchos mayas. El impacto de este nuevo poder cultural ha contribuido al crecimiento del movimiento des-

pués de 1994, a medida que las comunidades en Los Altos y en la zona norte empezaron a apoyar el proyecto zapatista abiertamente.

Durante el primer mes después del levantamiento, la mayoría de las organizaciones de los campesinos indígenas de Chiapas, así como las de otros estados, manifestaron su acuerdo con las metas del EZLN, si no con sus medios. Muy pronto el EZLN empezó a re-articular su programa para incluir explícitamente la demanda por la cultura y los derechos indígenas, a la vez que aceptó dar esta lucha por la vía pacífica, con el apoyo de la sociedad civil. En efecto, la cultura y los derechos indígenas constituían uno de los cuatro temas centrales a ser negociados con el gobierno mexicano, y el primero que se habría de negociar. Los otros temas incluían la tierra y cuestiones económicas, la reforma del Estado y los derechos de la mujer (Harvey, 1996a, 1998a). En preparación para estas negociaciones, el EZLN lanzó una convocatoria nacional para realizar un foro indígena en Chiapas. Del total de 57 pueblos indios en México, representantes de 35 de ellos acudieron al foro en enero de 1996. El Foro Nacional Indígena siguió el principio del EZLN de "mandar obedeciendo" (CCRI-CG-EZLN, 1994), instando a los delegados zapatistas a derivar sus posiciones para la mesa de negociaciones democráticamente, a partir de las preocupaciones planteadas por los representantes de la sociedad civil. Sus resoluciones se reflejaron, aunque no en su totalidad, en los Acuerdos de San Andrés firmados entre el gobierno y el EZLN el 16 de febrero de 1996 (Hernández Navarro y Vera Herrera, 1998). Otra resolución del foro fue que se iba a formar el Congreso Nacional Indígena, el cual se organizaría en octubre de ese mismo año.

De muchas maneras, el Foro Nacional Indígena fue un parteaguas para las culturas indígenas de México. El historiador Jan de Vos lo describió de la siguiente manera:

Éste es el primer foro nacional de este tipo para los pueblos indios en México. Ha sido una forma muy importante de demostrarle al gobierno que los pueblos indios en Chiapas no están haciendo demandas meramente locales. Un gran número de culturas indígenas y organizaciones de todo el país ha hecho eco de sus demandas... El foro demostrará el carácter nacional de las demandas indígenas (entrevistado por Chris Gilbreth, San Cristóbal de Las Casas, enero de 1996; citado en Gilbreth y Otero, 2001).

Un segundo foro al que convocó el EZLN, sobre la reforma del Estado mexicano, se reunió 6 meses después, en julio de 1996. De nuevo se dio cita en San Cristóbal, y en esta ocasión se reunieron intelectuales de

todo México para discutir los temas de la democracia política, la democracia social, la soberanía nacional y la democracia, la participación ciudadana, los derechos humanos, la reforma de la justicia, y los medios de comunicación. A. Manuel López Obrador, entonces presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se reunió con Marcos para discutir la posibilidad de una alianza estratégica para las elecciones del Congreso nacional en 1997. El propósito de este foro fue sentar las bases para la firma de un segundo acuerdo entre el EZLN y el gobierno. Sin embargo, el proceso de paz se suspendió un mes más tarde debido a la frustración del EZLN por la falta de avance en la implementación de los Acuerdos de San Andrés. El 2 de septiembre de 1996 se suspendieron las negociaciones, a lo que siguió una oleada represiva contra los activistas por los derechos humanos en Chiapas.

El apoyo masivo al EZLN por parte de las organizaciones de campesinos indígenas a lo largo y ancho de México se mostró de nuevo durante la marcha de su dirigencia a la ciudad de México entre febrero y marzo de 2001, cuando se disponían a tener su audiencia ante el Congreso de la Unión para argumentar a favor de la ley Cocopa. Esta iniciativa de ley, formulada por la multipartidaria Comisión para la Concordia y la Pacificación del Congreso en 1996, intentaba implementar los Acuerdos de San Andrés mediante una legislación concreta que posibilitara otras leyes reglamentarias. La Cocopa había planteado a las dos partes en conflicto que tenían que aceptar o rechazar la iniciativa en su conjunto, puesto que se basaba en el acuerdo previo entre las partes. Aunque la ley no resolvía todos los asuntos contenidos en los Acuerdos de San Andrés, después de una consulta con sus bases, el EZLN resolvió aceptarla. El entonces presidente Zedillo, sin embargo, primero pidió 15 días para “estudiar” la ley, y luego hizo una contrapropuesta, ante lo cual el EZLN suspendió el diálogo que sostenía sobre otros de los temas centrales. No tenía caso seguir hablando, dijeron los zapatistas, si el gobierno no iba a cumplir lo que negociaba.

Con la nueva administración de Vicente Fox, uno de cuyos primeros actos de gobierno fue, precisamente, enviar la iniciativa de la Cocopa al Congreso para su consideración, se abrían nuevas posibilidades de resolver el *impasse* entre zapatistas y gobierno. El EZLN apostó a jugar en el proceso legislativo y envió 23 comandantes y un subcomandante en una marcha a México, para defender la iniciativa de la Cocopa ante el pleno del Congreso de la Unión. Al viajar por las regiones de mayor población indígena entre Chiapas y la ciudad de México, la dirigencia del EZLN fue recibida por masas de miles de personas que expresaban entusiastamente su apoyo a la lucha indígena. En cada región, los zapatistas recibían el “bastón de mando” de los jefes de los pueblos indios de por donde pasaban. Ésta fue una

muestra más de que el EZLN se había convertido en el principal representante del campesinado indígena de México (se pueden consultar los periódicos principales de circulación nacional, que cubrieron la marcha con secciones especiales. Véase, por ejemplo, *La Jornada* en el Internet: <http://www.jornada.unam.mx/> sobre todo los días entre finales de febrero y mediados de marzo de 2001. En este portal se pueden consultar los números diarios desde marzo de 1996).

Culturas regionales y tipos de demandas

Los tipos de demandas u objetos de lucha que podemos observar en México rural son primordialmente los siguientes: campesinos, proletarios, campesino-empresariales, indígena-comunitarios, y poscapitalistas. Ciertas orientaciones culturales corresponden a estas etiquetas básicamente económicas. Algunos argumentarían con respecto de las demandas indígena-comunitarias que se trata de una lucha de tipo posmoderno, en la medida en que estaría centrada en cuestiones identitarias (Esteve, 1999). Sin embargo, puesto que la existencia y la reproducción de la identidad indígena depende en gran medida del acceso a la tierra, yo argumentaría que las demandas indígena-comunitaria tienen una base en la clase económica del campesinado. La identidad indígena claramente condiciona las demandas de tipo indígena-comunitario en el sentido de que incorpora por lo menos una preferencia parcial por una forma comunitaria de producción y una identidad étnica específica, según el pueblo indio del que se trate. Ahora bien, esto no es un argumento en favor del marxismo tradicional sobre la primacía de las relaciones económicas de clase. Más bien, se trata de afirmar que los intereses económicos no se forman exclusivamente a partir de la experiencia en las relaciones de producción, sino también en las de reproducción, las cuales incluyen las relaciones en la unidad doméstica, las de parentesco y las comunitarias (véase capítulo 2). La manera como se ensambla este conjunto de relaciones materiales y simbólicas tiene un impacto considerable sobre las culturas regionales y los procesos de formación de identidades colectivas. En la teoría político-cultural de la formación clasista, las culturas regionales conforman primordialmente los objetos de lucha o las demandas en los movimientos agrarios.

Los grupos, comunidades y clases en las regiones indígenas de México han sostenido diferencias en su cultura étnica por siglos. Y esto no significa que todos los sistemas normativos actuales en las comunidades indígenas sean de origen anterior a la colonia. Muchos antropólogos e historiadores han demostrado cabalmente que la gente forma y conforma sus

valores y tradiciones de manera interactiva, a partir del contacto con gente de otros grupos étnicos, especialmente en resistencia a grupos o clases dominantes. Por lo tanto, muchas o la mayoría de las “tradiciones” culturales en una región indígena podrían haberse creado recientemente (Assies, 2000; Kearney y Varese, 1995; Kicza, 2000a; Stern, 1987; Wearne, 1996; Zárate Hernández, 2000). No obstante, tales tradiciones serán específicamente indígenas en la medida en que tales tradiciones hayan surgido parcial o totalmente como formas de resistencia ante el grupo dominante en la sociedad. Es decir, aquí partimos del hecho de que los indios han sido siempre grupos subordinados en la historia a partir de la conquista. En esta concepción del ser indio, nada tiene que ver la biología; se trata de una construcción netamente social. Sandstrom (2000), por ejemplo, ha concluido que la identidad indígena (*indianness*) se puede resumir en unas cuantas características (cinco en su tipo ideal), ninguna de las cuales es biológica. Esto emana del hecho de que la identidad étnica, al igual que la mayoría de las identidades culturales, se construye socialmente (Assies 2000). Como lo plantea Sandstrom:

La etnicidad es a menudo situacional en el sentido de que la gente decide cuándo y cómo afirmar su identidad utilizando diferentes estrategias en tiempos distintos. Un factor adicional que complica la cuestión es que la auto-definición de un grupo cambia a través del tiempo para poder enfrentar ciertos desafíos, y los símbolos que la gente elige para representar su identidad pueden ser modificados, creados de nuevo, eliminados intencionalmente, o resucitados de un periodo previo (2000: 272).

Al contrario de lo que se podría plantar desde una perspectiva marxista tradicional sobre el sujeto, entonces, no podemos considerar la etnicidad meramente como una concepción ideológica que contiene “falsa conciencia”. En la medida en que la etnicidad y sus valores culturales asociados tengan efectos reales sobre la acción y la vida sociales, deberían tomarse como determinantes sociales de importancia. En el caso de las luchas zapatistas, la reivindicación de los derechos y la cultura indígenas se convirtió en un punto nodal de su lucha.

Por su parte, el punto focal de la identidad indígena funciona en la lucha como el principal móvil detrás de la lucha por la autonomía y el control sobre los recursos naturales. La autonomía les permitiría a las comunidades indígenas lidiar con sus propios asuntos en cuestiones de gobierno y manejo de sus recursos naturales. Tal autogestión se daría de acuerdo con

los sistemas normativos de cada pueblo (Burguete Cal y Mayor, 2000a; Van der Haar, 2001; Díaz-Polanco y Sánchez, 2003). Así pues, la autonomía se concibe como la condición para reivindicar y sustentar la identidad cultural indígena. De aquí que los estados liberales se sientan amenazados por las movilizaciones indígenas contemporáneas: porque la cultura indígena enfatiza la identidad y los valores comunitarios y va en más allá de los derechos individuales y la propiedad privada individual. Como lo plantea Rodolfo Stavenhagen, “las demandas por el derecho a la autonomía se pueden entender plenamente sólo en relación con la larga historia de opresión, exclusión y explotación. Tal es el caso de los pueblos indios” (2000: 13).

Intervención estatal tras el levantamiento zapatista

Muy pronto después del levantamiento, el gobierno parecía estar a favor de establecer el cese al fuego y negociar con el EZLN. El gobierno nombró un comisionado de paz y, apenas 3 meses después del levantamiento, representantes del EZLN y del gobierno se reunieron cara-a-cara en San Cristóbal. La primera ronda de negociaciones se rompió en junio de 1994 cuando se aproximaban las elecciones, pero el proceso fue reestablecido en la primavera de 1995 en respuesta a una acción militar del gobierno de Ernesto Zedillo orientada a arrestar a la dirigencia del EZLN. Las negociaciones de 1995-1996 en San Andrés Larráinzar establecieron el marco para la discusión y el proceso para llegar a firmar acuerdos ya mencionados.

El reinicio de las negociaciones se dio como parte de un acuerdo que requería que el gobierno limitase el número de tropas en las partes bajas del este del estado como medida de seguridad para las comunidades civiles que se veían amenazadas por su presencia. A pesar de este acuerdo, los soldados siguieron llegando masivamente a las regiones conocidas por su apoyo al EZLN mientras continuaban las pláticas de paz durante 1996. La política gubernamental de buscar la paz, por una parte, y usar la represión, por la otra, fue interpretada por las organizaciones de derechos humanos como una forma de “guerra de baja intensidad”, que tiene paralelos con las estrategias de contrainsurgencia que se usaron en las guerras de Vietnam y Centroamérica (López Astráin, 1996; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 1996; *La Jornada*, 2 de marzo de 1997). En la guerra de baja intensidad, el ejército utiliza las relaciones públicas a favor de los ciudadanos que se alinean con el gobierno, dándoles en recompensa alguna ayuda material, servicios de salud, o trabajos en la construcción de caminos, mientras que se hostiga e intimida a las comunidades en resistencia. Los ataques por parte de la policía de seguridad pública y el ejército

federal a los “municipios autónomos” (que así han sido declarados por las fuerzas del EZLN a partir de la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 –véanse Van der Haar, 2001; Mattiace, Hernández y Rus, 2002) demuestran que en Chiapas las tácticas de guerra de baja intensidad han sido combinadas con prácticas coercitivas directas por parte del Estado.

La ofensiva militar del gobierno en febrero de 1995 en el este de Chiapas dio como resultado el establecimiento de docenas de nuevos campos militares del ejército federal. Las bases han servido para reestablecer la presencia del Estado en la región y reducir el grado en que las comunidades podían llevar a cabo sus actividades de oposición. Numerosos viajes dentro de esta zona entre 1995 y 2001 nos han provisto de una experiencia de primera mano sobre el grado en que se ha transformado la vida cotidiana debido a la presencia de los soldados. Ha habido patrullajes regulares por tierra y aire. Ha sido común para los locales y fuereños el ser interrogados en bloqueos militares o sorprendidos por los bajos y sobrevuelos repentinos de algún avión, o helicópteros volando en círculo, o ser sujetos a la vigilancia. Bajo tales condiciones, la libertad de expresión política ha sido reducida sustancialmente. A veces, hasta las actividades de la oposición local han sido consideradas como subversivas por los soldados federales y los paramilitares.

Los trabajadores parroquiales han testificado acerca del impacto negativo que ha tenido la presencia militar sobre la vida cotidiana. El costo de la vida ha aumentado debido al aumento de demanda de productos básicos como jabón, azúcar, sal, y aceite. La inflación de los precios locales ha sido acompañada por la baja en la producción de alimentos, en la medida en que los agricultores no pueden sentirse seguros al trabajar en sus distantes tierras de cultivo. Además, se ha reportado que los soldados abusan del consumo de alcohol y de drogas y han establecido redes de prostitución. En comunidades donde se sufre de pobreza extrema, ha habido reportes de muchachas indígenas que se han visto forzadas a la prostitución para procurar alimentos para sus familias.

Si bien el gobierno ha ofrecido apoyo material a los civiles con fines de cooptación política, no ha reducido la presencia de sus tropas (salvo una disminución temporal entre diciembre de 2000 y junio de 2001). En algunos casos, la ayuda era distribuida por funcionarios locales del PRI, lo cual dejaba claro que la asistencia era para las familias que habían sido cooptadas y apoyaban al gobierno. Estas políticas y la presencia de los soldados han disminuido el apoyo a los zapatistas, polarizado a las comunidades entre lealtades divididas, y también se ha desatado la violencia a medida que los que apoyan al gobierno, hechos fuertes por las autoridades locales del

PRI, han sido alentados a formar grupos paramilitares para atacar a los simpatizantes del EZLN, particularmente en las regiones fuera de la zona de conflicto ubicada en la parte baja oriental (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 1996). En algunos casos, la violencia ha sido apoyada por el gobierno, mientras que en otros ha sido tolerada oficialmente y se ha permitido que persista a través de la impunidad institucionalizada (Human Rights Watch, 1997). El portugués José Saramago, premio Nobel de literatura, criticó la afirmación del entonces presidente Zedillo de que “no hay guerra en Chiapas”. Por el contrario, dijo Saramago: “Hay guerras que son guerras y hay «no-guerras» que son lo mismo que las guerras” (citado por Güemes, 1999). La comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, también criticó el nivel de violaciones e impunidad en Chiapas durante su visita en 1999 (véase *La Jornada*, 27 y 28 de noviembre de 1999).

La violencia paramilitar apareció primero en las municipalidades de habla chol en 1995: Tila, Salto de Agua, Yajalón, Sabanilla y Chilón. Éstas constituyen la zona norte del estado. En un principio no estaba claro si la violencia era parte de un patrón más amplio de conflicto, pero las movilizaciones populares subsecuentes demostraron que el apoyo a las demandas del EZLN ya se había extendido hacia la zona norte. Consecuentemente, la violencia contra la movilización popular en la zona norte ha sido interpretada como una contramedida directa por el creciente apoyo regional que ha habido por el EZLN (Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, 1998).

Durante una misión de derechos humanos en 1996 para investigar la relación entre la creciente violencia y la militarización del gobierno en la región, se dieron testimonios que vinculaban a los políticos del PRI y a miembros de la policía de seguridad pública del estado en la zona norte con la provisión clandestina de armas y entrenamiento de civiles que se oponían violentamente al EZLN. El ejemplo más notorio de esto ha sido la transformación de una organización para el desarrollo rural, llamada irónicamente Paz y Justicia, en el frente para la violencia paramilitar apoyada por el gobierno estatal del PRI. Las acciones violentas de Paz y Justicia han resultado en el desplazamiento de miles de familias que no apoyan al PRI, obligándolas a abandonar sus casas, y en una serie de confrontaciones y asesinatos en ambos lados del conflicto. En cierto momento, fue imposible para los observadores de los derechos humanos entrar en la zona norte, después de que se habían dado dos incidentes en que milicianos de Paz y Justicia dispararon contra una misión de observadores y contra una caravana asistencial (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 1996).

Para 1997, el mismo patrón de violencia comenzó a aparecer en Los Altos de Chiapas, a medida que una racha de enfrentamientos locales entre gobierno y bases de apoyo del EZLN resultó en varias muertes y el desplazamiento de cientos de familias. Esta situación culminó en la masacre de 45 mujeres, niños y hombres indígenas mientras rezaban en una pequeña capilla en el paraje de Acteal, municipio de Chenalhó, el 22 de diciembre de 1997. La investigación subsiguiente expuso los vínculos directos entre los milicianos paramilitares responsables por la matanza y el gobierno municipal del PRI y las fuerzas de seguridad pública del estado (Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, 1998).

A pesar de la represión y las medidas de cooptación por parte del Estado, el apoyo al EZLN seguía siendo sólido. Después de casi 2 años de silencio en protesta por la legislación espuria de 2001, las bases de apoyo zapatistas lanzaron una manifestación masiva, en la que llenaron la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas el 1o. de enero de 2003. Más de 20,000 hombres, mujeres y niños indígenas, muchos de ellos con machete en mano, colmaron la plaza central por más de tres horas. Durante el mitin hablaron siete comandantes del EZLN (Bellinghausen, 2003). Habría que atribuir la continuación de la movilización zapatista, en buena medida, al hecho de que el liderazgo principal del EZLN se ha mantenido incorruptible, democrático y cercano a sus bases. Veamos pues cuáles han sido sus características principales.

Liderazgo zapatista, autonomía y nueva cultura política

Resistiremos hasta que el que mande, mande obedeciendo
(CCRI-CG-EZLN, Segunda declaración de la Selva Lacandona, 1994)

La última mediación que interviene en la formación política clasista está constituida por los tipos de liderazgo y sus correspondientes modos internos de participación de las bases, los cuales afectan el proceso de la formación político-clasista por lo menos de dos maneras: en primer lugar, contribuyen a determinar las alianzas que las organizaciones establecen con otros grupos, clases, y/o comunidades; y, en segundo lugar, conforman la habilidad de las organizaciones clasistas para avanzar más allá de una posición meramente de oposición para convertirse en popular-democráticas al resistir la cooptación estatal. Entre más democráticos sean sus dirigentes y más participativos sus mecanismos para la toma de decisiones, será más probable que una organización se convierta en popular-democrática. Al resistir el globalismo neoliberal y la lógica del mercado, el EZLN ha exhibido un tipo de liderazgo que refleja su visión de una democracia verdadera, dentro de

un Estado multicultural. Al examinar el impacto del tipo de liderazgo sobre la formación política, podemos ver cómo ha contribuido la naturaleza participativa del EZLN al carácter popular-democrático de su organización.

Como se ha discutido en capítulos anteriores, se pueden observar por lo menos tres tipos de liderazgo en el México rural: carismático-autoritario, corrupto-oportunista y democrático-participativo. Estas etiquetas presuponen que el liderazgo es primordialmente de tipo individual o personal. Si bien esto tiende a ser verdad en el México mestizo, tenemos que modificar el concepto en alguna medida para el caso del EZLN y muchas de las comunidades indígenas, en donde el liderazgo tiende a ser de tipo colectivo (Taylor, 2000). Aunque no cabe duda de que el *Subcomandante Insurgente Marcos* haya sido el vocero principal del EZLN desde su primera aparición pública, también debería quedar claro que esta organización ha hecho todo lo posible por dispersar la atención de esta figura. De hecho, el propio símbolo de la máscara indica que, para los zapatistas, “todos somos Marcos”. Esto significa que cualquier otro dirigente podría asumir la posición de Marcos, ya que permanecerían anónimos. Además, el máximo organismo de autoridad en el EZLN es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General, que está constituido por los representantes civiles de las bases de apoyo del EZLN. De ahí que Marcos sea el *subcomandante*, pues responde ante esta máxima autoridad.

En contraste con la cultura política personalista y jerárquica que hemos padecido en México, el EZLN ha conducido su toma de decisiones de una manera “prefigurativa”, es decir, a la manera como plantea que deberían de tomarse las decisiones en una sociedad democrática. A pesar de ser una organización armada, las decisiones principales las ha tomado democráticamente entre sus bases de apoyo civiles. De esta forma, el EZLN le ha dado credibilidad a sus propuestas para el cambio, demostrando que, de hecho, hay métodos posibles para un gobierno democrático alternativo. Como dice Luis Hernández Navarro,

El EZLN y el movimiento indígena son actores sociales que están aquí para quedarse. Su modo de hacer política es diferente al acostumbrado: Tienen un pie en la tradición y otro en la modernidad. En una época de incertidumbre han probado ser actores confiables. Hacen lo que dicen y dicen lo que hacen (2001).

Veamos cuál ha sido el estilo de dirigencia que propone y practica el EZLN.

El liderazgo del EZLN se ha destacado por promover una relación “dialógica” con sus bases, en el sentido en que Paulo Freire (1970, 1982) utili-

zaba el término. Es decir, Freire lo utilizaba para describir la relación ideal entre maestros y estudiantes, dentro del marco de una educación como práctica para la libertad. Desde esta perspectiva, la relación dialógica se tiene que distanciar de la concepción tradicional –“bancaria”– de la educación, en la que el maestro “deposita” el conocimiento y la información en los estudiantes, quienes mantendrían una actitud pasiva. En contraste con ello, una relación dialógica es aquella en la que se presupone que los estudiantes ya poseen información y conocimiento considerables. El maestro estaría ahí principalmente para ayudar a los estudiantes a sacar y sistematizar ese conocimiento. Al hacerlo, los estudiantes adquieren conciencia de su situación social y los propios maestros también aprehenden de los estudiantes en el proceso. Esto es lo que sucedió con los jóvenes revolucionarios que llegaron del norte de México a Chiapas a principios de los años ochenta y constituyeron al EZLN (Le Bot, 1997; Womack, 1999).

Aunque estos revolucionarios inicialmente tenían una concepción típicamente vanguardista y elitista de la organización, su trato con los indígenas de Chiapas ultimadamente tuvo que ser dialógico. Si bien trataron de imponer su visión leninista de la organización, fueron derrotados y los indígenas impusieron su manera democrática de tomar decisiones. Hay que destacar que una parte de esta cultura democrática había sido introducida por los catequistas de la diócesis de San Cristóbal durante los años setenta. Ellos introdujeron el eslogan de “mandar obedeciendo” que luego adoptó el EZLN (Womack, 1999).

Dos hechos de la mayor significación en torno al liderazgo indígena son los siguientes: el primero es que Marcos no apareció en ningún momento durante las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de San Andrés en 1996, las cuales duraron casi un año. El equipo negociador del EZLN estuvo compuesto por nueve representantes indígenas de diferentes regiones de Los Altos y la selva, que siempre incluyó dos mujeres. Varios delegados del EZLN usaron sus trajes ceremoniales, que consistían en sombreros de ala ancha con listones colgando, túnicas de algodón, capas de lana, cinturones tejidos y huaraches de cuero. Las máscaras que cubrían sus rostros tenían el propósito de ocultar sus identidades individuales para resaltar la naturaleza colectivista de la lucha.

El segundo hecho significativo es la comparecencia que hizo el EZLN en el Congreso de la Unión en marzo de 2001, la cual fue considerada por los reporteros del *New York Times* como “un hito para los indios rebeldes de Chiapas” (Thompson y Weiner, 2001). Esta comparecencia, en la que la mayoría de los observadores creía que el orador principal sería Marcos, quedó en manos de 23 comandantes indígenas, de los cuales cuatro tomaron la palabra, y una mujer –la comandanta Ester– fue la que se tomó el mayor

tiempo. El *Subcomandante Marcos* ni siquiera entró al recinto legislativo y la comandanta Ester explicó por qué: dijo que Marcos los obedecía a ellos, a los comandantes que representan a la población civil de las comunidades de base del EZLN; y a Marcos, como principal estratega militar de la organización, le habían ordenado quedarse afuera, pues un militar no tenía cabida en su comparecencia pacífica ante el Congreso (Aponte, Becerril y Pérez Silva, 2001).

Por último, un elemento crítico en la formación política de las clases es la manera como la dirigencia se relaciona con otros movimientos, partidos políticos y el Estado. Esto es crucial para el establecimiento de alianzas y mantener (o perder) la independencia y autonomía política de la organización. Por ejemplo, una decisión consecuente del EZLN, expresada por el subcomandante Marcos, fue rechazar la “ayuda” que les ofreció el nuevo Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1997, después de lanzar una ofensiva guerrillera contra el Estado, con el objetivo de tomar el poder estatal. Marcos respondió que la única ayuda que el EZLN necesitaba era la de las organizaciones de la sociedad civil (Le Bot, 1997). Con esta respuesta, el EZLN daba por lo menos dos mensajes: primero, no tenía la intención de tomar el poder estatal, y segundo, su principal interlocutor para lograr un cambio en las relaciones de poder con el Estado lo constituyen las organizaciones de los otros grupos, clases y comunidades subalternas de la sociedad civil y cuyas estrategias y tácticas son pacíficas.

Un ejemplo mucho menos afortunado de una alianza que pudo haber sido más corta fue la que el EZLN estableció con el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1999 a 2001. Si bien el movimiento inicialmente expresaba el descontento legítimo de una juventud de ingresos medios y bajos-medios hacia las políticas de privatización de la educación superior, el Consejo General de Huelga (CGH) continuó con la táctica de huelga aun cuando el rector había renunciado y el siguiente había dado marcha atrás a los cambios que se planeaban anteriormente. Prolongar en este contexto el apoyo del EZLN al CGH causó un daño considerable para decenas de miles de estudiantes, profesores y demás personal de la UNAM. No fue sino hasta después de que la facción radical del movimiento estudiantil atacó violentamente a un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en febrero de 2001 que el EZLN reconsideró su apoyo al CGH. En una carta abierta a Carlos Monsiváis, Marcos hizo una pequeña declaración en el sentido de que “el CGH había perdido sus interlocutores”. Si tal reconocimiento se hubiese hecho más temprano, el EZLN habría disfrutado un mayor apoyo en la ciudad de México.

Con todo, la dirigencia colectiva del EZLN se ha mantenido unificada y con vínculos cercanos a sus bases de apoyo. Si logra mantener y reproducir el tipo de liderazgo que ha generado hasta ahora, el EZLN habrá tenido un logro notable en la sustentación de uno de los elementos más críticos de la formación política clasista –independencia del Estado y autonomía de otras organizaciones– a la vez que retenga la capacidad de establecer alianzas y negociar con el Estado. Directa e indirectamente, este factor contribuye a la consolidación de la sociedad civil y con ello a la transición democrática.

Insurrección zapatista, sociedad civil y democratización

La insurrección del EZLN de entrada representó un rompimiento con las estrategias tradicionales asociadas con los movimientos guerrilleros en Latinoamérica. Desde la *Primera declaración de la Selva Lacandona* (EZLN, 1994), el EZLN pedía a los poderes Legislativo y Judicial de México que “se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo” al primer mandatario. Como señalan atinadamente Héctor Díaz-Polanco y Consuelo Sánchez, el EZLN desconocía al Ejecutivo por haber usurpado el poder mediante el fraude electoral de 1988, pero reconocía a los otros poderes instituidos del país (2003: 73-74). Tampoco se proponía convertirse en una vanguardia leninista que quería tomar el poder estatal. Por el contrario, llamaba al pueblo a unirse en su lucha de desconocer al ilegítimo gobierno para que en las zonas liberadas el pueblo pudiera “elegir, libre y democráticamente a sus propias autoridades” (EZLN, 1994).

En la *Segunda declaración de la Selva Lacandona*, lanzada el 10 de junio de 1994 en rechazo a la primera oferta del gobierno para resolver el conflicto, el EZLN propuso más firmemente una democratización desde abajo, basada en la sociedad civil y la no violencia en vez de la guerra de guerrillas. Se podría decir que su estrategia cambió pronto de una lucha armada a una lucha gramsciana por la construcción de una hegemonía alternativa en la esfera de la sociedad civil. Puso el énfasis, precisamente, en el potencial de lo que llamó vagamente la “sociedad civil” (que en el uso del EZLN significa primordialmente los individuos, grupos y organizaciones independientes de las estructuras corporativistas del Estado) para lograr el cambio democrático. La visión de los zapatistas contrastaba agudamente con la política del PRI de intentar una transición a la democracia electoral dosificada, anteponiendo siempre las reformas neoliberales de libre mercado que habían tenido un impacto negativo sobre el campesinado (Collier, 1994; Barry, 1995; Harvey, 1998a, 1998b; Bartra A., 2004).

La *Segunda declaración de la Selva Lacandona* plantea una encrucijada para un sistema político que defiende los intereses de caciques, los grandes intereses comerciales y el narcotráfico: o se suicida al darle cumplimiento a las demandas del pueblo, pues la clase dominante lo dejará de apoyar, o el pueblo lo fusila con la movilización democrática (CCRI-CG-EZLN, 1994). Pero también se afirma que el cambio del sistema de partido de Estado es solamente una “condición necesaria, pero no suficiente” para el tránsito a la democracia. Esto se confirmaría después de 2000, cuando ha quedado claro que una verdadera transición democrática va a mucho más que la mera alternancia entre dos partidos que representan a las mismas clases dominantes. Se requiere que el sistema político, de hecho el Estado mismo, se transforme en una dirección popular-democrática para que las reivindicaciones más apremiantes de las clases subalternas puedan ser atendidas. De lo contrario, México seguirá siendo un país lleno de exclusiones, y los campesinos indígenas seguirán ocupando el lugar central de éstas.

Luego plantea la *Segunda declaración*... la forma en que tendrían que cambiar los partidos políticos si han de responder al nuevo reclamo democrático:

El EZLN ha entendido que el problema de la pobreza mexicana no es sólo la falta de recursos. Más allá, su aportación fundamental es entender y plantear que cualquier esfuerzo, en algún sentido o en todos, sólo pospondrá el problema si estos esfuerzos no se dan dentro de un nuevo marco de relaciones políticas nacionales, regionales y locales: un marco de democracia, libertad y justicia. El problema del poder no será quién es el titular, sino quién lo ejerce. Si el poder lo ejerce la mayoría, los partidos políticos se verán obligados a confrontarse a esa mayoría y no entre sí (CCRI-CG-EZLN, 1994).

Es decir, los partidos políticos, o se democratizan, o se volverán en fuerzas políticas irrelevantes. Una implicación de este párrafo es que cualquier esfuerzo meramente reformista y asistencial, dentro del Estado mexicano actual, sólo lo reforzaría. Considero que ha sido esta conciencia tan clara lo que ha mantenido al EZLN en una posición que a algunos les parece intransigente, pero que en realidad obedece a la necesidad de mantener su independencia del Estado y su autonomía de otras organizaciones políticas, como los partidos. Sólo así se puede seguir avanzando en la lucha por una transformación de fondo, que modifique las raíces estructurales que causan la miseria, la marginación, la injusticia y, por todo ello, la falta de libertad y democracia.

Dos párrafos después, la *Segunda declaración*... hace sus planteamientos sobre el perfil democrático mínimo al que se debe acceder y del cambio que se requiere en la cultura política. Dice que no se trata de un mundo nuevo, sino sólo de su antesala:

... esta revolución no concluirá en una nueva clase, fracción de clase o grupo en el poder, sino en un “espacio” libre y democrático de lucha política. Este “espacio” libre y democrático nacerá sobre el cadáver maloliente del sistema de partido de Estado y del presidencialismo. Nacerá una relación política nueva. Una nueva política cuya base no sea una confrontación entre organizaciones políticas entre sí, sino la confrontación de sus propuestas políticas con las distintas clases sociales, pues del apoyo real de éstas dependerá la titularidad del poder político, no su ejercicio [...] Pero no sólo [deberán convencer a sus bases], también se verán “vigilados” por ese país al que conducen de modo que estén obligados a rendir cuentas regulares y al dictamen de la Nación respecto a su permanencia en la titularidad del poder o su remoción (CCRI-CG-EZLN, 1994).

Se plantea también la idea de que los partidos deben dejar de enfrasarse en sus grillas entre sí, y pasar a discutir con las clases sociales sus diversas propuestas de gobierno. Si a éstas satisfacen, podrán ser reelectos; si no, habrá que removerlos mediante plebiscito o algún otro mecanismo democrático por inventar para la revocación de la titularidad del poder.

A lo largo del gobierno priísta de 71 años, los candidatos presidenciales fueron escogidos por el presidente saliente (a través del llamado “dedazo”), lo cual aseguraba la victoria aunque se tuviera que usar el fraude electoral si era necesario. La institución presidencial dominaba los poderes Judicial y Legislativo, mientras que la sociedad civil se veía cooptada a través de organizaciones de masas controladas por el Estado (Córdova, 1974; Hellman, 1983; Camp, 1996; Cornelius, 2000; Davis, 1994; Mackinlay y Otero, 2004). Los partidos de oposición fueron insignificantes antes de 1978, cuando existían sólo cuatro partidos registrados legalmente. De estos partidos, dos habían propuesto al mismo candidato presidencial del PRI en varias de las elecciones anteriores a 1981; aparecían más bien como apéndices del partido de Estado. Tan sólo el PAN, de derecha, representaba una oposición seria (Loaeza, 1997), y en 1976 se había visto inmerso en una crisis interna que le impidió nombrar candidato presidencial. Este hecho llevó al Estado a iniciar una reforma electoral desde arriba para evitar una crisis de legitimidad. La reforma

les daría registro legal a varios partidos políticos, siendo el más relevante de ellos el Partido Comunista Mexicano (PCM), el cual había lanzado un candidato sin tener el registro y logró más de 800,000 votos en 1976. Tras una serie de fusiones con otros partidos, los herederos del PCM eventualmente formaron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), uniéndose con una facción nacionalista del PRI y otros partidos de izquierda en 1989 (Bruhn, 1996; Woldenberg, 1997; Sánchez, 1999).

Antes del levantamiento de 1994, el sistema de partidos no había tenido incentivos suficientes para efectuar una reforma del Estado significativa; ni siquiera una reforma electoral que permitiese una competencia que les diera verdaderas posibilidades de triunfo a los partidos de oposición en el Congreso y la Presidencia. No fue sino hasta que apareció el EZLN como una amenaza externa al sistema de representación política que los partidos se vieron obligados a efectuar cambios sustanciales en la ley electoral (Prud'home, 1998; Gilbreth y Otero, 2001). Inmediatamente después del levantamiento, el secretario de gobernación y anterior gobernador de Chiapas, Patrocinio González, fue obligado a renunciar y se anunciaron reformas electorales que permitirían la presencia de observadores internacionales y nacionales para dar seguimiento a las elecciones presidenciales de agosto de 1994. Además, para 1996 el Instituto Federal Electoral (IFE) fue transformado en una institución independiente, a cargo de ciudadanos no partidarios (antes era controlado por el secretario de gobernación). Durante las elecciones a la mitad de sexenio, en 1997, la oposición obtuvo triunfos inéditos, ganando por primera vez en la historia el control de la Cámara de Diputados, a la vez que Cuauhtémoc Cárdenas, miembro del PRD, fue elegido para ser el primer jefe de gobierno electo del Distrito Federal en la historia moderna de México. En 1999, el propio PRI tuvo un proceso de elecciones primarias para elegir a su candidato presidencial para las elecciones de 2000, rompiendo con la tradición del "dedazo". Aunque los críticos han cuestionado la competitividad de estas elecciones primarias, representaron una contribución considerable al tardado proceso de democratización en México.

Hasta antes de julio de 2000, no obstante lo anterior, quedaban obstáculos significativos en el camino a la democracia electoral. A México se le podía seguir caracterizando como un país semidemocrático, puesto que el fraude electoral seguía siendo practicado (Semo, 1999). Asimismo, el sistema político no había pasado la prueba de la alternancia del poder ya que el PRI había monopolizado el control del Ejecutivo federal durante más de 70 años. La democracia también se veía amenazada por el lamentable récord del Estado en el respeto a los derechos humanos y el estado de dere-

cho. Las fuerzas de seguridad empleaban prácticas autoritarias rutinariamente, incluyendo amenazas, tortura, intimidación y represión en contra de movimientos opositores (Human Rights Watch, 1997). La vinculación del Estado con la masacre de 45 indígenas en Acteal, Chiapas el 22 de diciembre de 1997 fue emblemática de las condiciones represivas que amenazaban los requisitos básicos de una democracia liberal: el respeto de los derechos civiles y políticos, elecciones competitivas y un grado significativo de participación política (Linz y Stepan, 1996).

El levantamiento de 1994 y el movimiento social que le sucedió fueron objeto de una oleada de comentarios por parte de intelectuales mexicanos que le atribuyeron un efecto democratizador, a pesar de haberse iniciado como organización armada. El sociólogo Roger Bartra comentó: "La guerra de Chiapas ha provocado el mayor estremecimiento político y cultural que haya sufrido el sistema político mexicano en el último cuarto de siglo" (citado por Méndez Asencio y Cano Gimeno, 1994: 11). Bartra argumentó que si bien la violencia usada por los rebeldes debía considerarse antidemocrática, había producido el resultado inesperado de revivir los prospectos para la democracia en México: "Nos encontramos ante la paradoja de que el EZLN ha abierto el camino hacia la democracia" (1994: 1). Por su parte, el historiador Antonio García de León escribió: "La contribución del EZLN a la transición, o a la constelación de pequeñas transiciones, hacia la democracia es ahora un hecho histórico innegable" (1995: 17). Por último, el célebre crítico cultural y analista de los movimientos sociales, Carlos Monsiváis, ha estado de acuerdo en considerar que el EZLN ha traído un impulso al proyecto democrático (1995). El impacto que ha tenido el EZLN en la democratización de México se puede apreciar mejor en el despertar de la sociedad civil.

El levantamiento zapatista ha inspirado el florecimiento de organizaciones y apoyos a nivel nacional e internacional. La "sociedad civil" respondió de muchas maneras: mediante protestas para que el gobierno detuviese la guerra; organizando cordones de seguridad para rodear el sitio del diálogo cuando las pláticas de paz estaban en sesión; llevando abastecimientos a las comunidades de la selva rodeadas por unidades del ejército federal; estableciendo "campos de paz" y observando las condiciones de los derechos humanos en las comunidades bajo amenaza de la presencia militar; organizando proyectos alternativos de salud, educación, y productivos; formando organizaciones no-gubernamentales (ONG) para dar seguimiento al respeto de los derechos humanos; construyendo grupos civiles de apoyo zapatista; y participando en foros y encuentros convocados por el EZLN para discutir los derechos indígenas y la democracia (EZLN 1996).

Se ha dado, entonces, una gran movilización por fuera de los canales tradicionales de la política, motivada por el llamado del EZLN a la “sociedad civil” a luchar por la democracia (CCRI-CG-EZLN, 1994). Parafraseando a John S. Dryzek (1996), se podría decir que México está avanzando en un proceso de profundización de la democracia en *contra* del Estado, *aparte* del Estado y *más allá* del Estado (esto último si consideramos también todas las movilizaciones solidarias que se han dado a escala internacional por una solución pacífica al conflicto en Chiapas). Esta lucha democrática contrasta con la lucha tradicional que habían estado dando los partidos políticos, que se restringía a la democratización de la sociedad política. En efecto, la nueva lucha en el ámbito de la sociedad civil es la más prometedora en la época del globalismo neoliberal.

Expandir las fronteras nacionales hacia dentro: derechos indígenas y ciudadanía

El discurso sobre ciudadanía rara vez ha proveído un marco neutral para resolver las disputas entre grupos mayoritarios y minoritarios; lo más frecuente es que ha servido como pretexto bajo el cual la nación mayoritaria extiende su lenguaje, instituciones, derechos de movilidad, y poder político a costa de la minoría, y todo en nombre de convertir a las minorías presuntamente “desleales” y “problemáticas” en “buenos ciudadanos”.

(Kimlicka y Norman, 2000: 11)

El propósito de esta sección es clarificar algunas cuestiones conceptuales y normativas clave sobre los derechos indígenas y la ciudadanía, con miras a establecer las condiciones bajo las cuales se podría avanzar en la democratización de México. La pregunta general que me planteo es: ¿cómo se pueden acomodar las demandas por los derechos y la cultura indígenas para lograr la justicia y extender la ciudadanía, a la vez que se respeten los derechos de los demás? Esta discusión se basa en parte en una revisión crítica del tratamiento general que recientemente han hecho Will Kymlicka y Wayne Norman sobre este tema. La importancia del trabajo de estos teóricos políticos canadienses, particularmente del de Kymlicka (1995), reside en el hecho de que ha influenciado varios círculos académicos liberales y posliberales a lo largo de las Américas, así como también en Europa y otros lugares (Kymlicka y Opalski, 2001).

Mi esperanza es contribuir a establecer una base conceptual y normativa para un diálogo entre el Estado y los pueblos indios que lleve a negociar la forma específica en que se puedan expandir las fronteras nacionales hacia dentro. El propósito de tal expansión sería dar una cabida justa y digna a los pueblos indios. Propongo establecer esta base mediante la yuxtaposi-

ción del marco de Kymlicka y Norman, que se podría catalogar como un enfoque estatal, desde arriba, con la perspectiva desde abajo de la teoría político-cultural de la formación clasista que aquí hemos presentado. Comienzo con algunas visiones mexicanas de cómo se podría concebir la nación desde una perspectiva que trascienda la ideología liberal.

El desafío para el Estado liberal es cambiar desde una visión de sus sujetos constitutivos como individuos solamente, a una que también reconozca alguna noción de “ciudadanía étnica” (De la Peña, 1997) o ciudadanía de grupo. Las colectividades étnicas tendrían que poder ser consideradas como sujetos del derecho público, siendo la autonomía y la autodeterminación algunos de sus derechos centrales. Estos derechos ya están contemplados en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual México es uno de los países signatarios (Van Cott, 2000). En vez de perder territorio, el Estado-nación ganaría en cuanto a su habilidad para ser más inclusivo de la gente que ha estado más marginada de los beneficios del “desarrollo”. Para el filósofo mexicano Luis Villoro, el objeto de reconocer a los pueblos indios no sería regresar a la comunidad indígena ancestral, premoderna, la cual impone sus prejuicios colectivos a todos sus miembros individuales. Una comunidad moderna se basaría en “la protección irrestricta de las libertades personales fundamentales, las cuales no podrían violarse por ninguna decisión comunitaria” (Villoro, 2001: 28). Es decir, los derechos individuales prevalecerían sobre los comunitarios.

El comandante David del EZLN expresó su idea acerca de una democracia posliberal y multicultural muy elocuentemente en tzotzil en 1996: lo que los indios quieren, dijo, es vivir en “un mundo donde quepan todos los mundos”. En México creímos que se había dado un avance dramático al respecto con la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 (Hernández Navarro y Vera Herrera, 1998). Pero luego se vino el prolongado *impasse*, estimulando una de las mayores discusiones públicas sobre los derechos indígenas y la reforma del Estado (Franco Mendosa, 2000; Díaz-Polanco y Sánchez, 2003). Si bien el Congreso de la Unión pasó una legislación que reconoce a los pueblos indios en 2001 como *objeto* de asistencia pública, lo que ellos piden es ser *sujetos* del derecho. En efecto, los asuntos más críticos como la autonomía y el autogobierno se dejaron para ser definidos por parte de las asambleas legislativas de los estados. Por lo tanto, esa ley fue rechazada casi unánimemente por los pueblos indios y, desde luego, por el EZLN. Pues mientras no se reconozcan los derechos de los pueblos indios a nivel federal, sus tierras y territorios quedan abiertos a la explotación capitalista sin que tengan ninguna forma de intervenir en el asunto (Harvey, 2002). El Subcomandante Insurgente Marcos abunda sobre esto, citando el

estudio de una organización de derechos humanos acerca de los planes del gobierno de Fox para el “desarrollo” local:

El hecho de que no fuera aprobada la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas [como la propuso la Cocopa] dejó muy claro para las organizaciones indígenas de Guerrero que es un trabajo bien planeado en el sentido de tener una ley indígena muy acorde a las necesidades del capital transnacional. Las comunidades no van a ser capaces de poder decidir al interior de sus propios territorios y sobre todo de poder diseñar planes que tengan que ver más con el etnodesarrollo y donde sean las comunidades las que decidan (citado en Marcos, 2003; véase también Carlsen, 2004).

¿Cómo pueden entonces avanzar el Estado mexicano y los pueblos indios hacia una resolución de sus antagonismos e *impasse*? Aunque planteado en términos ligeramente distintos, los ideales de reconocimiento y aceptación de la diferencia cultural están contenidos en la noción de “integración multicultural” propuesta por Kymlicka y Norman (2000). Puesto que estos autores han teorizado esta cuestión principalmente con relación a democracias liberales avanzadas, su aparato conceptual y normativo, sin duda, representa un desafío considerable para ser implementado en democracias emergentes como las de América Latina.

El desafío principal a resolver es doble. Primero, hay que resolver el problema de la ideología de las clases dominantes. La legislación reciente refleja que estas clases se rehúsan a “conceder” derechos indígenas significativos o a traducirlos de derechos constitucionales a una legislación reglamentaria más específica. La idea que se tenía de la nación en el siglo XIX que, la concebía como una entidad cultural homogénea (Hale, 1996), sigue prevaleciendo aún en el siglo XXI. Hasta los modernistas de “izquierda” proponen el fomento del desarrollo capitalista como medio para asimilar a los pueblos indios (Blanco, 2001). La pregunta que vamos a discutir enseguida, entonces, es la siguiente: ¿en qué medida pueden trascender las clases dominantes esta ideología, como para acomodar y *reconocer* la diferencia cultural?

El segundo desafío que plantea el pensamiento posliberal tiene que ver con el hecho de que la reivindicación de las demandas indígenas incluye el ir más allá del reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas. Requiere también, en la mayoría de los casos, la redistribución de tierra como condición para la reproducción social de la cultura. O por lo menos requiere el otorgar autonomía para la autogestión en los territorios que los pue-

blos indios habitan actualmente. Dado que desde 1995 apenas se ha discutido el primer desafío, en esta sección me voy a limitar a discutir los aspectos ideológicos y normativos de los derechos indígenas y la ciudadanía, y sólo voy a esbozar los problemas que implica el segundo desafío.

Los asuntos de los derechos indígenas y la ciudadanía han sido centrales en dos importantes debates dentro de la teoría política durante los años noventa: Uno fue sobre los derechos de las minorías y el multiculturalismo (Díaz-Polanco y Sánchez, 2003), y otro acerca de la ciudadanía y las virtudes cívicas. En gran medida, éstos han sido debates separados y, sin embargo, los defensores de los derechos minoritarios y de la ciudadanía, respectivamente, han expresado sospechas mutuas (Kymlicka y Norman, 2000). Los defensores de los derechos de las minorías, por su parte, sospechan que las apelaciones al ideal de la “buena ciudadanía” necesariamente conllevan la subordinación de la minoría al gobierno de la mayoría (Samson, 1999). Por su parte, quienes promueven una virtud cívica robusta y una ciudadanía democrática desconfían de las apelaciones a los derechos de las minorías como reflejo de los estrechos intereses que ellos tratan de superar (Assies, 2000: 19). Debido a estas sospechas mutuas, cualquier teoría política atractiva y plausible debe atender estas dos preocupaciones. En lo que sigue ofrezco una síntesis crítica del intento que han hecho Kymlicka y Norman (2000) por resolver ambas preocupaciones.

El debate sobre los derechos de las minorías ha visto dos oleadas, la primera de las cuales se enfocó en las demandas de “justicia” por parte de las minorías para que se reconocieran sus diferencias culturales. La segunda oleada, que trato más abajo, tiene que ver con la manera como se articula la justicia para las minorías con la cuestión de la ciudadanía. De acuerdo con la ideología liberal, la justicia requiere instituciones estatales que sean neutrales a las diferencias culturales o al color de la piel, puesto que todos los ciudadanos tendrían que ser tratados como iguales. Desde este punto de vista, asignar derechos o beneficios sobre la base de la membresía en grupos de atributos particulares o culturalmente distintos sería moralmente arbitrario e inherentemente discriminatorio. Sería necesario crear ciudadanos de primera y de segunda clase. De aquí que la primera objeción que enfrenta cualquier paladín de los derechos de las minorías tiene que “mostrar que las desviaciones de las reglas sobre neutralidad a las diferencias que se adopten para acomodar las diferencias étnico-culturales no serían inherentemente injustas” (Kymlicka y Norman, 2000: 3).

El problema con las instituciones neutrales a la diferencia (*color-blind* o *difference-blind*) es que, si bien se ostentan como neutrales, de hecho contienen un sesgo hacia las necesidades, intereses e identidades del grupo ma-

yoritario. Por lo tanto, se requiere reconocer los derechos minoritarios para poder ayudar a remediar sus desventajas. En nuestro caso, si el Estado mexicano no reconoce y respeta la cultura y la identidad indígenas, el resultado puede ser un serio daño a su dignidad y respeto por sí mismos, a la vez que se daña la posibilidad de que se sientan parte integral de una identidad nacional "trascendente". La idea es que, con su reconocimiento, los pueblos indios pueden simultáneamente reproducir sus culturas e integrarse mejor como ciudadanos a la nación mexicana.

Tengo por lo menos una reserva con la discusión de Kymlicka y Norman sobre los derechos de las minorías: su tendencia a hablar desde el punto de vista de la cultura dominante. Al hacerlo, los derechos se "darían" o "concederían" a los grupos minoritarios. El supuesto implícito es que sólo ciertos grupos tendrían derechos más fuertes por su asociación con la lengua y la cultura más fuertes, es decir los criollos y mestizos en el caso de México. Estos grupos tendrían el derecho a tener "una" cultura societal —la de la mayoría, dice Richard Day al criticar a Kymlicka en torno al multiculturalismo en Canadá. El problema es que Kymlicka (1995) supone implícitamente que la cultura dominante, los herederos de los colonizadores, tienen un derecho teórico-liberal para tener tal cultura societal (Day, 2000: 212). En el trabajo de Kymlicka, nos dice Day, "hay una referencia constante a una voz pasiva «nosotros» que decide qué concesiones se les darán a «ellos»" (2000: 215). Lo que mitiga esta reserva al trabajo de estos autores es que de todas maneras proponen que las clases dominantes deberían de conceder derechos a las minorías, y no por ello perderían control sobre el Estado. Por eso se caracterizó esta teoría como una perspectiva desde arriba.

Ahora bien, desde el punto de vista de la teoría político-cultural de la formación clasista, debería quedar claro que, en tanto la hegemonía burguesa prevalezca, difícilmente habrá concesiones o dádivas por parte del Estado, a no ser aquellas dirigidas a cooptar a los grupos, clases y comunidades subordinados. Por lo tanto, cuando se trate de derechos y cultura indígenas, éstos tendrán que ser arrancados del Estado con una presión continua desde abajo. Tal presión plantea otras interrogantes acerca del prospecto del reconocimiento legal y práctico de estos derechos por parte de las clases dominantes, y de que éstas acepten la posibilidad de que tal reconocimiento fortalecerá, en vez de debilitar, a México como Estado-nación.

De hecho, otra preocupación de los paladines de la ciudadanía es que el darles o reconocerles derechos a las minorías podría debilitar los derechos ciudadanos más amplios, por ejemplo, mediante la búsqueda de la secesión. Éste fue el argumento del presidente Zedillo para recular de los

Acuerdos de San Andrés en noviembre de 1996, a pesar de que sus propios representantes los habían firmado en febrero del mismo año. Lo que concluyen Kymlicka y Norman en este respecto es que, en la mayoría de los casos, los derechos de las minorías se pueden introducir sin problemas a la vez que se fortalece la ciudadanía. Sin embargo, previenen estos autores, se trata de un asunto que hay que resolverlo empíricamente, es decir, caso por caso, dependiendo de la situación concreta. El problema mundial sobre este asunto queda ampliamente destacado al observar las siguientes cifras: existen entre 5,000 y 8,000 grupos étnico-culturales y sólo aproximadamente 200 estados, de los cuales el 90 por ciento de ellos son multiculturales (Kymlicka y Norman, 2000: 13). De aquí que surja la necesidad de que los estados tengan métodos para “manejar” el conflicto étnico.

Estos métodos incluyen algunos que ahora se consideran ilegítimos, pues tratarían de eliminar el conflicto étnico, en algunos casos físicamente, tales como el genocidio y las transferencias forzadas de población, o por la vía de la asimilación, o el control hegemónico. Aún la partición o secesión tienen sus problemas, en la medida en que estos métodos sencillamente transfieren el conflicto étnico a la nueva entidad. Por lo tanto, la integración multicultural es el método más viable y justo para reducir o eliminar el conflicto étnico. Tanto la integración multicultural como la asimilación involucran la configuración de alguna identidad trascendente. Sin embargo, la integración multicultural es preferible, puesto que no requiere –como la asimilación– la eliminación de las identidades de los grupos culturales subordinados. Esto último sí es un requisito de la asimilación: los grupos subordinados tienen que adoptar la identidad cultural del grupo mayoritario para formar parte de la nación.

Ahora bien, ¿cómo se puede respetar la diversidad cultural en una sociedad pluralista, sin que a la vez se “dañen o erosionen los lazos y las virtudes ciudadanas?” preguntan Kymlicka y Norman (2000: 17). La peculiaridad de los pueblos indígenas, nos responden ellos mismos, es que generalmente ellos buscan “la habilidad para mantener ciertas formas de vida y creencias tradicionales a la vez que no obstante participan en sus propios términos en el mundo moderno” (2000: 20). Este punto enfatiza correctamente la naturaleza no-antagónica de las reivindicaciones culturales de los indígenas dentro de una democracia liberal. Como lo plantean nuestros autores de manera enfática:

En la medida en que la conquista histórica de los pueblos indios y el haberles arrancado sus derechos al autogobierno estuvieron fundados en ideologías racistas e imperialistas, entonces la restauración de los dere-

chos de autogobierno se puede ver como la afirmación de la igualdad de posición y valor de los pueblos indios. De esta y otras formas..., lejos de erosionar el estatus ciudadano, "el acomodar la diferencia es la esencia de la verdadera igualdad (Kymlicka y Norman, 2000: 33).

Esta última frase es una cita que hacen los autores de una jurisprudencia de la Suprema Corte canadiense de 1986, en la cual se interpretaban las provisiones constitucionales canadienses sobre la igualdad para grupos minoritarios. Su conclusión debe ser muy sorprendente para los defensores de la ciudadanía: que la verdadera igualdad pasa por reconocer y acomodar las diferencias.

Si bien Kymlicka y Norman ofrecen una discusión convincente acerca de la naturaleza no antagónica de los derechos y la cultura indígenas, descuidan un asunto crítico, por el cual las clases dominantes no se van a convencer simplemente con los argumentos de sus teóricos políticos. Se trata del hecho de que las luchas indígenas generalmente incluyen la demanda por la tierra y el territorio, los cuales son condiciones críticas para su reproducción material y cultural. Este punto puede realmente convertirse en antagónico, por lo menos con respecto a las fracciones locales o regionales de las clases dominantes. En estos casos, el Estado puede actuar en función del bien común de la sociedad más amplia mediante un proceso de reforma agraria, aún si debe compensar económicamente a los terratenientes afectados. Sólo de esta forma se puede reivindicar la expropiación originaria de los pueblos indios y establecer las condiciones para su reproducción cultural. Pero esto no sucederá sin la presión desde abajo que sólo un grupo formado políticamente puede ejercer.

En América Latina, la discusión acerca de los derechos indígenas, la ciudadanía y la democracia también se ha presentado en la forma de una desconfianza o sospecha mutua. Willem Assies (2000) ha planteado el contexto conceptual y normativo de esta discusión, con respecto a las luchas indígenas por el territorio y el autogobierno. Ofrece una buena síntesis de la discusión, a la vez que establece las conexiones con las teorías sobre los movimientos sociales, el debate sobre la transición democrática y la reforma neoliberal. Al final de cuentas, sin embargo, Assies parece cargarse hacia el lado de la ciudadanía, en vez de hacia el de los derechos indígenas, como si ambos tuviesen que ser mutuamente incompatibles. De hecho, afirma que la fortaleza del movimiento indio podría depender de su avance hacia la formulación de propuestas nacionales para los problemas indígenas; que deberían avanzar también hacia la formulación de propuestas indígenas en relación a los problemas nacionales. Assies lo plantea de la siguiente manera:

...considerando su crítica a las formas de dominación y organización económica presentes, los movimientos de los pueblos indios son parte de un “movimiento popular”, pero al mismo tiempo sus reivindicaciones de derechos particulares sobre la base de ser “originarios” a veces se constituye en una fuente de fricción con los movimientos que buscan los derechos ciudadanos ampliamente definidos en el contexto de una revisión a fondo del imaginario político de la democracia contemporánea (Assies, 2000: 19).

En otras palabras, Assies parece sugerir que los pueblos indios deberían subordinar sus intereses “particulares” y encaminarse hacia los intereses “más amplios” (¿universales?, ¿nacionales?) de los otros grupos populares con un imaginario democrático. Las feministas que luchaban en partidos socialistas por sus reivindicaciones durante los años setenta también escucharon argumentos similares: que las mujeres tenían que subordinar sus reivindicaciones de género a las demandas clasistas. Los logros centrales del feminismo han estado fundados, por el contrario, en dar la lucha por las reivindicaciones de género a la vez que se daban otras luchas por el socialismo democrático.

El problema con la posición de Assies reside en su supuesto subyacente de que hay una dicotomía mutuamente excluyente entre aquellos que luchan por los derechos multiculturales y los que defienden los derechos ciudadanos. Como nuestra discusión de Kymlicka y Norman ha mostrado, sin embargo, la mayoría de las aprehensiones que expresan los defensores de la ciudadanía en torno a los derechos de las minorías carecen de fundamento. Tal vez la principal contribución cultural y política del movimiento indígena es, precisamente, el haber cuestionado fundamentalmente la presunción de que el ser mexicano debe excluir, por fuerza, otras identidades culturales. La visión radical de la democracia y el multiculturalismo que proponen los zapatistas va mucho más allá de la concepción de un “interés nacional” preconstituido y trascendente. Propone, en cambio, que cada grupo se constituya políticamente para construirse un espacio civil. El EZLN no desea convertirse en la vanguardia de los grupos subordinados a la manera de los partidos leninistas. Por el contrario, los nuevos grupos, comunidades y clases, constituidos políticamente, fortalecerían la sociedad civil y contribuirían a la construcción de un “mundo donde quepan todos los mundos”. Para avanzar en esta dirección se requiere una reforma fundamental del Estado, con una hegemonía alternativa y popular-democrática; una hegemonía con un imaginario político y cultural que admita la integración multicultural de todos los mexicanos.

Conclusiones

A partir de la discusión precedente, podemos llegar por lo menos a tres conclusiones: una teórica, otra de orden sustantivo y una normativa para la formulación de política estatal. Primero, necesitamos una teoría sintética como la político-cultural de la formación clasista para entender los movimientos sociales contemporáneos cuyas reivindicaciones sean tanto materiales como identitarias, y definitivamente para entender los movimientos de campesinos indígenas.

En términos de sus demandas específicas, el EZLN ha logrado hasta ahora apenas un triunfo de papel: los Acuerdos de San Andrés sobre cultura y derechos indígenas de 1996. Estos acuerdos, sin embargo, no han sido traducidos a leyes reglamentarias para implementar sus conceptos, y por lo tanto el EZLN continúa siendo una organización de oposición. Pero en términos organizacionales y de crecimiento de la sociedad civil, el EZLN ha tenido un éxito mucho más sustancial. De hecho, he argumentado más arriba que el EZLN ha de verse como un factor crucial para impulsar una mayor “espesura” (*thicken*) de la sociedad civil (Fox, 1996a) que resultó en la derrota electoral del PRI en 2000 (Gilbreth y Otero, 2001). Por lo tanto, a pesar de que el EZLN no ha llegado aún a su “momento subjetivo de lucha”, es claramente una organización de oposición y popular-democrática que ha contribuido a la consolidación de la sociedad civil.

La segunda conclusión, de orden sustantivo, es que las luchas de los campesinos indígenas representan un desafío significativo para expandir las fronteras nacionales hacia dentro, en la medida en que sus planteamientos van directamente en contra de algunos elementos clave de la ideología del globalismo neoliberal. Para integrar exitosamente a los campesinos indígenas al desarrollo nacional como ciudadanos con igualdad, en los términos planteados por sus propias organizaciones, se requiere que el Estado-nación avance más allá de un régimen liberal-democrático para que pueda reconocer las diferencias de los pueblos indios. En este sentido, las naciones deben expandir sus fronteras desde dentro, en Estados reconstituidos, para poder acomodar a sus pueblos indios y otros grupos, comunidades y clases subordinados.

La tercera conclusión, de política estatal, procede de la discusión conceptual y normativa aquí presentada. Se refiere a la dinámica política presente y futura, no sólo en México sino en todos los Estados-nación de América Latina con poblaciones indígenas significativas: con la integración multicultural sería posible transitar desde una “dialéctica entre los contrarios” hacia una “dialéctica entre los diversos” en la cual las diferencias se puedan

resolver mediante la discusión, la negociación y el diálogo. Una condición para tal transición es que las clases dominantes entiendan primero que la dinámica ancestral de la lucha entre los pueblos indios y los Estados latinoamericanos ha estado inmersa en una dialéctica entre los contrarios por medio milenio, sin que ninguna de las partes haya sido vencida definitivamente. Sería posible, desde luego, seguir otro medio milenio dentro de esta dinámica, mediante la represión de los pueblos indios y/o comprando a sus dirigentes o bien cooptando a sus movimientos. Pero este enfoque sólo desplazaría el antagonismo y el conflicto hacia el futuro.

Por lo menos con relación a los pueblos indios, existe en las sociedades capitalistas contemporáneas un claro prospecto de resolver sus principales reivindicaciones mediante la expansión de los actuales marcos hegemónicos. Se requiere también, desde luego, afectar los intereses materiales de algunas fracciones de las clases dominantes, pero esto se podría hacer mediante una compensación económica. Una vez que se resuelvan dichos antagonismos, sin embargo, sería concebible transitar hacia una nueva dinámica basada en una “dialéctica entre los diversos” y dejar atrás la dialéctica entre los contrarios, antagónica por definición. La recompensa para todos sería que una gran proporción de los ciudadanos, los grupos sociales, las comunidades y las clases vivirán en una sociedad más integrada culturalmente, participativa, cohesiva, igualitaria, deliberativa, justa y democrática.

Capítulo 9

Conclusión: ¿adiós al campesinado?

EN ESTE capítulo final mi propósito es triple: la primera sección se dedica a resumir brevemente el argumento principal de este libro. En la segunda hago una recapitulación sobre las líneas principales del debate mexicano sobre la cuestión agraria y señalo algunos problemas políticos y de investigación que quedan por ser resueltos. Con base en la literatura reciente sobre el tema, la última sección discute las implicaciones políticas del neoliberalismo en México rural y los prospectos para una democracia societal.

Teoría e historia

El argumento más general de este libro ha sido que la formación política de las clases conlleva la consolidación de la sociedad civil. A su vez, una sociedad civil vigorosa es una de las condiciones para poder profundizar la transición a la democracia. En contraste con teorías anteriores, que tendían a enfatizar las relaciones económicas para extrapolar el comportamiento político de las clases, la alternativa que he ofrecido es una teoría político-cultural de la formación clasista. Más específicamente, he argumentado que el proceso de formación política de las clases ha estado condicionado por las formas prevaletentes de las culturas regionales, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo, además del vínculo causal con la posición de los agentes de clase en las relaciones de producción. Asimismo, en el México rural ha sido el semiproletariado, más que el proletariado o el campesinado, el que ha ocupado el centro de las luchas agrarias desde el último tercio del siglo xx.

La formación política de las clases ha sido postulada como un proceso complejo y multidireccional que es virtualmente imposible de predecir si se atiende tan sólo a las posiciones de las clases dentro de las relaciones de producción. Propuse que este proceso se constituye a partir de dos elementos fundamentales: los objetos de la lucha y las organizaciones de clase,

cuyo carácter depende en gran medida de su independencia y autonomía relativas respecto del Estado y la clase dominante, así como del tipo de organizaciones con las cuales establecen alianzas y solidaridad. Si bien la cultura regional, la intervención estatal y los tipos de liderazgo tienen indudablemente un vínculo causal con las relaciones de producción, la mediación que ejercen es más esclarecedora para explicar y predecir la formación política de las clases: la cultura regional prevaleciente define por lo general los objetos de la lucha, mientras que la intervención estatal determina el carácter de las organizaciones de clase. Además, los tipos de liderazgo contribuyen a determinar la medida en que las organizaciones de clase mantienen su independencia del Estado y su autonomía respecto de otras organizaciones políticas, así como el tipo de organizaciones con las cuales se establecen alianzas.

Así pues, para averiguar el carácter de la formación política de las clases se debe mirar a los aspectos interrelacionados de los elementos que la componen. Al estudiar los objetos de la lucha, debemos preguntarnos cuáles son las formas de organización productiva a que se quiere llegar después de triunfar en la lucha por la tierra: si esta organización se basa en la producción individual, cooperativa o en la comunitaria, y si su orientación es de carácter no mercantil (de subsistencia) o mercantil (cultivo comercial). Por lo que se refiere a las organizaciones de clase, debemos preguntarnos si son de oposición, hegemónico-burguesas o popular-democráticas. Este aspecto está determinado tanto por la intervención estatal como por el tipo de liderazgo. Cuando es el Estado el que tiene la iniciativa de hacer ciertas concesiones, el resultado más posible es la cooptación del movimiento; pero cuando la iniciativa surge desde abajo, entonces es posible construir una organización de tipo popular-democrático. Esto último, a su vez, se puede consolidar dependiendo del tipo de alianzas que se establezcan con otras organizaciones políticas y clasistas, lo cual depende en buena medida del tipo de liderazgo.

Si tuviéramos que jerarquizar las tres mediaciones especificadas arriba en cuanto a su impacto, tendríamos que decir que la acción del Estado es la más determinante, por cuanto éste siempre puede recurrir a la represión sistemática y/o a la cooptación de la dirigencia de los movimientos sociales en vías de formación política. Sin embargo, debe quedar claro que estas opciones estatales son de carácter temporal: la represión sistemática redundaría en disminuciones correspondientes en la legitimidad del Estado y la hegemonía de las clases dominantes. Por su parte, la cooptación puede dejar de ser económicamente viable para el Estado, sobre todo en la medida en que se tenga que recurrir a la afectación de

otras clases o grupos sociales para lograr la cooptación de un movimiento social.

Económicamente, no importa si las organizaciones productivas son básicamente cooperativas, comunitarias o individuales, siempre y cuando sus actores sociales posean cierto grado de autonomía para constituir el carácter político de su organización como popular-democrático. Políticamente, la expansión de las organizaciones clasistas popular-democráticas representa un fortalecimiento de la sociedad civil frente al Estado. Tales organizaciones adquieren el poder de influir, para su propio beneficio, en las intervenciones estatales. Se da de esta manera, un acercamiento entre las bases que constituyen la sociedad civil y el Estado, el cual por lo tanto se vuelve más democrático.

En nuestros estudios de caso, la Coalición sonorense y el EZLN en Chiapas establecieron alianzas y relaciones de solidaridad con las fuerzas más democráticas y progresistas de México y aun de otros países en el último caso. También pudimos ver varios casos de luchas agrarias que asumieron un carácter poscapitalista en la producción y fueron políticamente popular-democráticas en las primeras dos regiones estudiadas. Pese a su carácter efímero, incluso Atencingo fue el escenario de la formación embrionaria de un semiproletariado que libraba una lucha poscapitalista. Tal fue el caso durante la administración de la cooperativa en manos de Porfirio Jaramillo (1947-1952). Su brevedad se debió a que los productores directos realmente tenían un objetivo de lucha diferente del de sus propios dirigentes: en lugar de producir cooperativamente, no obstante lo democrático de su liderazgo, eligieron luchar por la división del gran ejido y la parcelación individual de la tierra. La cultura campesina prevaleciente en la región fue un factor de lo más determinante para el resultado. Por lo tanto, salvo en la administración de Jaramillo, siempre ocurrió que la organización de clase en Atencingo acabara siendo integrada a la política y al discurso hegemónico-burgués: el resto de las facciones triunfantes se mantuvieron leales a su filiación corporativista. Las facciones de oposición fueron asimiladas tan pronto como obtuvieron el control administrativo de los asuntos ejidales, o en cierto modo fueron favorecidas por la intervención estatal. No se dio el paso hacia el “momento subjetivo” de la formación política clasista. Para que se dé ese momento subjetivo se requiere que emerjan intervenciones estatales favorables a partir de la propia iniciativa y presión desde abajo, por parte de los productores directos, más que del Estado.

La fase inicial de la colectivización, así en La Laguna como en El Yaqui, representó también casos de formación política clasista con carácter popu-

lar-democrático y poscapitalista. En ambos casos, durante dos o tres generaciones fueron gravemente socavadas las culturas no-mercantiles de tipo campesino, a pesar de lo cual el proletariado y el semiproletariado agrícolas participaron en una cultura no capitalista: asumieron democráticamente el control del proceso de producción poscapitalista. Lo que impidió que se consolidara esta formación económica y política no fue la disparidad de demandas entre el liderazgo y los agremiados, sino el ataque y el boicot apabullantes por parte del Estado.

Si bien en un principio favoreció la organización poscapitalista de los productores directos, la reforma agraria de Cárdenas de hecho estableció las condiciones para el cambio de carácter de las intervenciones del Estado que afectarían sus luchas futuras. Después del reparto de tierras y la formación de los ejidos colectivos, los nuevos ejidatarios tuvieron que someterse a las reglas del juego que imponía el Estado mexicano. En particular, tuvieron que someterse al aparato económico más impositivo del Estado en lo que se refiere al ejido: el Banco Ejidal. Si bien el Banco pasó al principio por una fase democrática en la que alentaba la independencia económica y autogestionaria de los ejidos colectivos, a la larga fue usado para destruir dicha organización. En efecto, el Estado, por así decirlo, confiscó o se apropió la organización de los ejidatarios del valle de El Yaqui y de La Laguna, controlando sus procesos productivos. En el valle de El Yaqui el efecto fue un proceso acelerado de deterioro de la economía ejidal, con el fortalecimiento simultáneo de la agricultura capitalista privada. En La Laguna se inició un proceso de proletarización en que el Estado se convirtió en el nuevo patrón. En ambos casos el trabajo asalariado estaba ampliamente difundido, pero fue incapaz de cubrir la reproducción cabal de los productores directos.

Así que, en sentido estricto, los nuevos sujetos económicos y sociales que surgieron de estos procesos eran estructuralmente semiproletarios: no podían atenerse solamente al salario para satisfacer sus necesidades de reproducción. Por lo tanto, el resto de las relaciones de reproducción que debían establecer contribuyó a la preservación o a la formación de elementos culturales no capitalistas. En el contexto de la creciente comercialización y la profundización de las relaciones de producción capitalistas, la condición semiproletaria presupone dos formas de vida interrelacionadas:

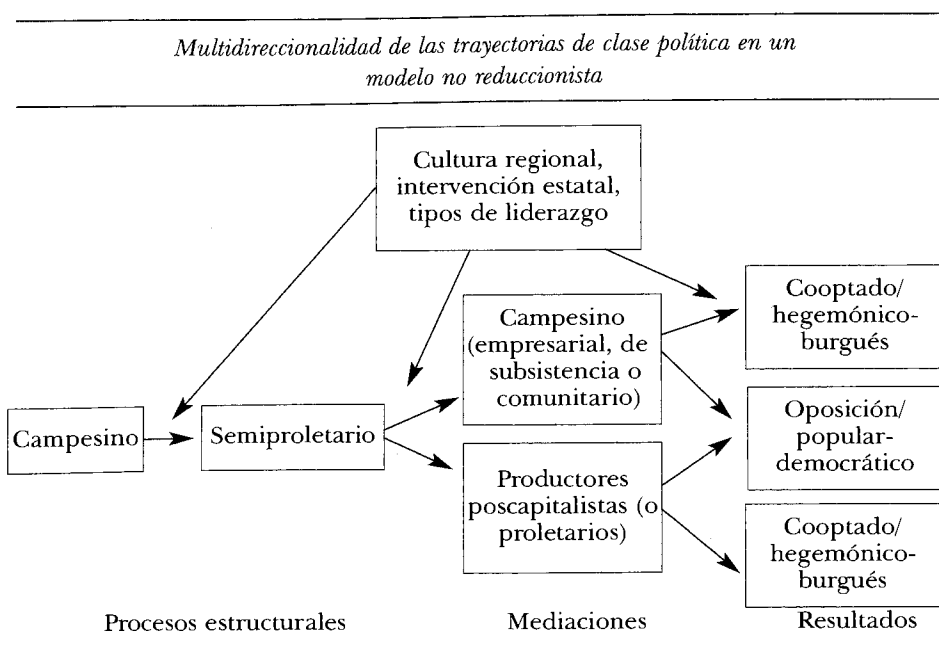
1. el trabajo "colectivo", por decirlo así, cuando venden su fuerza de trabajo a los capitalistas agrícolas, es decir la cooperación capitalista; y
2. aprovechar las relaciones sociales de reciprocidad, parentesco y solidaridad para lograr la reproducción en épocas de desempleo.

Estas relaciones sociales y los valores que les son propios pueden propiciar un objeto de lucha no capitalista o incluso poscapitalista, como en el caso de Sonora (y Batopilas, en Coahuila, ambos en los años setenta): producción cooperativa, autogestionaria y democrática.

Uno de los hallazgos fundamentales de este estudio se refiere al “momento subjetivo” de la formación política de las clases. Aunque este proceso se ha planteado predominantemente como la “variable dependiente”, es decir, el factor que hay que explicar o causado, una vez que ciertas clases se han formado políticamente, su organización se convierte también en una “variable independiente”, que explica o tiene un efecto causal en el proceso mismo de su formación futura o consolidación como clase política. Es decir que, una vez que las clases forman o consiguen controlar a sus organizaciones para la lucha, pueden imponer intervenciones estatales favorables a sus intereses, al tiempo que sus prácticas refuerzan los valores culturales que determinaron sus luchas en un principio. En este libro vimos casos embrionarios de este momento subjetivo en las primeras tres regiones hacia finales de los años treinta y principios de los cuarenta. Pero los ejemplos más claros de este hallazgo surgieron de los casos de la Coalición de Ejidos Colectivos de Sonora (véase capítulo 7) y, aun cuando todavía se encuentra en desenlace, el caso de la lucha zapatista en Chiapas.

Las trayectorias políticas de clase descritas en los capítulos 5 a 7 suscitan, entre otras cosas, un enigma fundamental que he tratado de resolver en este libro: ¿por qué los agentes de clase que partieron de la misma posición en las relaciones de producción en los años treinta, la de trabajadores agrícolas, siguieron diferentes trayectorias políticas de clase y arribaron a destinos diversos en cada uno de estos estudios de caso? Mi análisis de las regiones de México nos lleva a concluir que, en sí misma, la posición de clase no es un factor suficiente para predecir el destino de clase en el proceso de su formación política. Para explicar este proceso se requiere de una teoría político-cultural como la que aquí se ha ofrecido. Concretamente, la formación político-clasista puede tener varias direcciones en que las culturas regionales, la intervención del Estado y los tipos de liderazgo desempeñan un papel crítico en la determinación de su carácter. Esquemáticamente, el modelo que aquí se ha propuesto de la formación política clasista podría representarse mediante la gráfica 5.

GRÁFICA 5



Como puede verse, en esta teoría político-cultural, tanto los campesinos-empresariales, como los campesinos enfocados en la subsistencia o los comunitarios para el caso, así como los proletarios y los productores poscapitalistas, tienen un potencial semejante para formarse políticamente. Es decir, cualquier tipo de productor puede ser articulado político-culturalmente a un proyecto hegemónico-burgués asimilable por el Estado, o bien a uno de tipo popular-democrático. No existe pues ninguna orientación política intrínseca ni necesaria, y mucho menos suficiente, que se asocie con la posición estructural de clase. Más bien, lo que determina los resultados políticos es la influencia de las culturas regionales específicas, el carácter de la intervención estatal y los tipos de liderazgo.

A lo largo de este análisis he considerado las culturas regionales, la intervención estatal y el liderazgo como factores que “median” (en vez de “causar” o determinar directamente) entre la estructura socioeconómica y la formación política de los actores de las clases económicas. Esto obedece a una sencilla razón. De ninguna manera ha sido mi intención pasar totalmente por alto el papel causal de los procesos estructurales de clase. De hecho, el modelo alternativo de causalidad que propongo en el capítulo 2 pone en claro que los propios procesos estructurales de clase intervienen en

una relación causal con las culturas, la intervención estatal y los tipos de liderazgo regionales. Estos factores, sin embargo, no pueden derivarse ni simple ni directamente de la estructura social. Cada ámbito de la sociedad tiene su propia autonomía relativa, aunque mutuamente se relacionan entre sí (Archer, 1996). Como las temporalidades de la estructura de clase, la cultura regional, las intervenciones del Estado y los liderazgos por lo regular son muy diferentes, se debe dar cabida a complejas interacciones causales, en vez de ceñirse a esquemas económicos unidireccionales al analizar los procesos de la formación política de las clases. Debe quedar claro, por ejemplo, que aun cuando se transforme una estructura de clases regional predominantemente campesina, tendrán que pasar una o dos generaciones antes de que los valores asociados con dicha estructura sean sustituidos por la nueva.

Otra particularidad de este estudio, en contraste con anteriores investigaciones sobre la cuestión agraria, es la siguiente: le he dado más importancia a los *procesos* estructurales de clase que a las *posiciones* de clase en sí. Estas últimas están comprendidas en aquéllos. Sin embargo, los procesos estructurales de clase comprenden también las relaciones sociales de reproducción. Y es precisamente esta esfera la que se ha considerado aquí como más importante por lo que se refiere a la determinación de la cultura regional. Sin duda, la posición de clase entra también en juego en la conformación de la cultura, al grado de que la propia reproducción está determinada en buena medida por la posición de clase. Pero, al menos analíticamente, es necesario separar las dos esferas de los procesos estructurales de clase: relaciones de producción y relaciones de reproducción. Cuando existen relaciones de explotación, la producción se refiere predominantemente a las relaciones entre explotadores y explotados; la reproducción, en cambio, se refiere predominantemente a las relaciones sociales entre los explotados. El distinguir entre los dos ámbitos de los procesos estructurales bien nos puede indicar que tienen efectos importantes y duraderos en las culturas regionales, lo cual a su vez impacta los tipos de liderazgo que pueden surgir.

Trascender el debate mexicano

En esta sección, primero volveré a enunciar las principales posiciones en la polémica sobre la cuestión agraria mexicana. Después señalaré los principales argumentos que en este análisis se han puesto en duda y esbozaré algunos de los problemas que quedan por resolver en las investigaciones futuras y la práctica política.

Se recordará del capítulo 2 que los campesinistas y los proletaristas generalmente derivan repercusiones políticas del análisis de las posiciones estructurales de clase. Ésta es una característica fundamental de la polémica. Otra es que la mayoría de los autores han generalizado sus afirmaciones al país entero, usualmente con base en el trabajo de campo realizado en una región en particular, como lo señaló Cynthia Hewitt de Alcántara (1984) en su crítica de la antropología mexicana. Estas dos características han resultado en formulaciones inadecuadas de programas políticos. Ni la lucha sindical (proletaristas) ni la lucha por la tierra (campesinistas) pueden considerarse políticas adecuadas para todo el campo mexicano. Si se quieren diseñar mejores políticas para los grupos y clases subalternos en México rural, se deben atender todos los elementos constitutivos de la formación política de las clases.

La terminación formal de la reforma agraria en 1992 representa hoy el obstáculo más grande para la lucha por la tierra. Se podría decir que la “estructura de las oportunidades políticas” para el desarrollo del movimiento agrario han decrecido radicalmente. Esto deja semiproletarizados a productores que siguen teniendo acceso a la tierra y tienen que luchar por la mejora de la asistencia institucional a la producción campesina. Como vimos en el capítulo 3, la reforma neoliberal ha desmantelado la mayor parte de las instituciones estatales que otorgaban esa asistencia. En ciertos aspectos, dado el grado de burocratización y corrupción al que habían llegado las agencias estatales, esta tendencia podría verse como un desarrollo positivo para el México rural. Pero deben crearse nuevas instituciones con una nueva lógica. Las organizaciones de grupos, comunidades y clases subordinados del campo pueden desempeñar una función desde abajo en cuanto a determinar el papel que deban desempeñar dichas instituciones, a la vez que se tienen que introducir claros mecanismos de control de los burócratas, que incluyan el rendimiento de cuentas (Fox y Aranda, 1996) y la posibilidad de sustituirlos en caso de que falten a su responsabilidad.

Este estudio se concentró sobre todo en aquellas regiones donde la reforma agraria dio origen a la organización de ejidos colectivos, los cuales representan el 12 por ciento de los ejidos creados después de la Revolución. Esto obedeció a una elección metodológica: deliberadamente se enfocaron las operaciones más capitalistas de antes de la reforma, pues es en ellas donde se esperaba encontrar a los productores directos agrícolas más proletarizados. Tal elección metodológica maximiza la posibilidad de falsificar las tesis proletaristas con las cuales yo simpatizaba antes de iniciar mi investigación. En efecto, el caso de Atencingo demuestra cómo, pese a la profunda proletarianización de los productores directos, sus demandas fundamenta-

les giraban en torno a preocupaciones de naturaleza campesina. Si así ocurrió incluso en condiciones en que las posiciones de clase se habían proletarizado en gran medida, pero dentro de ámbitos culturales campesinos, ¿qué puede esperarse de las luchas de los productores directos que se encuentran en una posición meramente semiproletaria o campesina? Claramente, entonces, se demostró lo inadecuado que es el reduccionismo clasista, basado exclusivamente en las relaciones de producción.

En las regiones con estructuras de clase más campesinas o semiproletarias, pues, por más proletarizados que estén los productores directos, probablemente enfocarán sus luchas en tener acceso a la tierra para una producción individual o comunitaria. El que esto se oriente básicamente hacia la autosubsistencia o hacia el mercado dependerá del grado de mercantilización y desarrollo capitalista de cada región. Surge entonces otro problema: ¿en qué medida estos tipos de productores directos están en condiciones de formar y sostener organizaciones de clase de oposición? ¿Estarán sus organizaciones condenadas inevitablemente a integrarse al discurso hegemónico-burgués, dadas sus inclinaciones “pequeño burguesas” o pueden establecer alianzas con otras organizaciones de oposición y de izquierda, dentro de un proyecto popular-democrático?

A lo largo del siglo xx la historia posrevolucionaria de México corrobora el hecho de que las luchas campesinas han sido de la mayor importancia. Pero fue el aparato estatal el que se aprovechó de esta realidad: en efecto, la estabilidad del sistema político mexicano puede explicarse, en gran medida, por la capacidad del Estado para integrar las luchas campesinas a sus “estructuras de mediación” (Bartra, 1978). Desde luego, esta alianza entre el Estado y los campesinos se ha dado de maneras contradictorias, en las que se combinan las intervenciones favorables a los productores directos, para la cooptación, con las medidas represivas. Pero la esencia del reformismo mexicano consistía en articular las demandas democráticas, pues eran absorbidas y satisfechas parcialmente por el aparato estatal. Esto tenía el efecto de cooptar o confiscar las organizaciones clasistas, evitando al mismo tiempo la formación de un polo popular-democrático que pudiese antagonizar al bloque de poder burgués.

Por lo tanto, deben recalcar dos hechos fundamentales sobre el carácter de las luchas campesinas: por un lado, después de la reforma agraria cardenista, la economía campesina y el capitalismo pudieron vivir y crecer juntos. Este hecho pone fundamentalmente en tela de juicio el supuesto carácter revolucionario intrínseco de las demandas campesinas que postulaban los campesinistas radicales. Por el otro, sin embargo, observamos un grave menoscabo de la economía campesina desde mediados de los años

sesenta, el cual puso de relieve las verdaderas grietas y contradicciones de su desarrollo en un contexto capitalista. Esto condujo a una mayor movilización de las masas semiproletarizadas que exigían tierras y se apoderaban de ellas. Pero hemos visto que la lucha por la tierra adoptó características diferentes, dependiendo de cómo se articulaba con otras demandas, y de qué tipo de organizaciones de clase surgieron de ella.

Por su parte, la mayoría de los autores proletaristas usaban la presencia de los salarios como el indicador inequívoco de la proletarización. Y como el trabajo asalariado ha existido durante mucho tiempo en el campo mexicano, no dudaban en prescribir la sindicalización como táctica central de la lucha. Dado que el proceso de diferenciación se consideraba sumamente avanzado, los proletaristas descartaban generalmente la posibilidad de que las luchas por la tierra tuvieran potencial revolucionario alguno; cualquier lucha por la tierra era calificada de "campesina" y, por ende, de contenido "pequeño burgués" y conservador (Posadas y García, 1986: 182). Además, no se hacían distinciones entre los productores proletarizados de diferentes regiones culturales. En consecuencia, dada su gran diversidad, la política sindical puede no ser adecuada a todas las regiones de México.

En efecto, si bien se lograron algunos avances mediante la sindicalización, por cuanto se redujo la jornada laboral y se pagaron salarios mínimos en el campo, las experiencias de las luchas obreras en el México rural frecuentemente han sido desastrosas. Incluso cuando se lograban esas demandas a corto plazo, su precio era la represión enérgica en contra de los dirigentes (Posadas y García, 1986). La lucha por la sindicalización ha encontrado una respuesta más bien simple por parte de la burguesía agraria: cuando los obreros amenazan con la huelga, o reprimen a sus dirigentes o contratan a otros trabajadores de la reserva virtualmente ilimitada de mano de obra agrícola o bien, aumentan la mecanización (De Grammont, 1986).

El Estado mexicano se ha negado sistemáticamente a reconocer legalmente los sindicatos auspiciados por organizaciones independientes (como la CIOAC). Por lo tanto, los trabajadores no tienen la protección de la legislación laboral. Incluso la CTM y la CNC, que también tienen organizaciones laborales, han tenido problemas para registrar legalmente sus sindicatos oficialistas. Y si los trabajadores asalariados optan por adherirse a estos sindicatos, generalmente son condenados a someterse a líderes corruptos y a las decisiones del Estado.

No afirmo que la sindicalización y en general las luchas de tipo laboral deban descartarse en el México rural, y menos ahora que la reforma agraria se ha dado legalmente por concluida. Hay unos cuantos casos en que los tra-

bajadores agrícolas efectivamente han firmado contratos colectivos con las empresas agrícolas, amén de que estos generalmente estén afiliados a organizaciones oficiales (De Grammont, 1986). Sin embargo, deben quedar muy claras las condiciones por demás adversas a las que se enfrenta la puesta en práctica de una táctica sindicalista: la reserva virtualmente ilimitada de trabajadores agrícolas, en la que siempre se cuenta con esquiroles; la respuesta del Estado y la patronal generalmente muy represiva frente a la sindicalización; y el carácter transitorio de la mayor parte de los puestos asalariados, lo que representa una incapacidad estructural para la organización clasista de los trabajadores del campo, en virtud de los continuos cambios de patrón y compañeros de trabajo que deben encarar (Salazar y Paré, 1986). De ahí que las luchas obreras sean viables en un número más bien limitado y definido de situaciones, generalmente en el norte y el noroeste de México.

Lo más importante a destacar, sin embargo, es que no existe ningún requisito de que los productores directos sean proletarios o campesinos para que sus luchas sean de carácter progresista y popular-democrático. Hay que trascender el análisis económico para poder ver las relaciones político-culturales en la formación clasista. Desde esta perspectiva, se amplían sustancialmente las posibilidades de alianzas en el campo, desde los luchadores por la tierra, los que luchan por mejores condiciones para los asalariados, hasta los que ya tienen tierra y luchan por la apropiación del proceso productivo, la autogestión, etcétera. Todos estos tipos de productores pueden ser articulados en un proyecto hegemónico alternativo de tipo popular-democrático.

Neoliberalismo, sociedad civil y democracia

El propósito central de esta sección es reseñar algunos de los libros que han aparecido recientemente, sobre todo en inglés, acerca de la política en el campo mexicano durante la época del neoliberalismo. Algunos de los temas políticos que plantea el neoliberalismo en México rural han sido explorados en tres artículos de la colección de Laura Randall, *Reforming Mexico's Agrarian Reform* (1996). Éstos se pueden resumir de la siguiente manera: Primero, el levantamiento armado en Chiapas, discutido por Neil Harvey (1996b), acentúa la vasta heterogeneidad de la estructura agraria mexicana. En el caso de Chiapas, la legislación y las instituciones públicas representan los intereses de las clases económicamente dominantes. Por lo tanto, introducir la democracia en este contexto requiere de una reforma estructural de considerables proporciones. Estos temas son aún más elaborados en Harvey (1998a).

Ahora bien, por lo que se refiere al papel del Estado en el México rural, Armando Bartra sugiere que está declinando significativamente en términos de la producción económica; y sin embargo se está haciendo más directa, paternalista y efectiva en cuanto a su eficiencia electoral clientelar (1996: 174). En otras palabras, el corporativismo tradicional, que se daba a través de las organizaciones como la CNC, está siendo remplazado o complementado por un neocorporativismo vía Pronasol o Procampo. El dinero distribuido por estas agencias en 1994 tuvo una meta claramente electoral para el PRI-gobierno, distribuyéndolo entre unas 3.5 millones de familias. Esto significa que unos 10 millones o 15 millones de electores fueron a las urnas debidamente remunerados y con razones para agradecer electoralmente al partido oficial (Bartra, 1996: 183).

Por último, la colaboración de Jonathan Fox en la antología de Randall complementa estos análisis con una discusión de la información directamente electoral de las elecciones presidenciales de 1994, usando como principales fuentes al Instituto Federal Electoral y Alianza Cívica. Su artículo se enfoca en determinar la medida en que los electores pueden ejercer su derecho al voto secreto, o si enfrentan presiones, y la presencia de los partidos de oposición en las áreas rurales. Primero, Fox confirma algo de la información proporcionada por Armando Bartra, en relación con la distribución de fondos de Procampo: se distribuyeron más de 2.8 millones de cheques dentro de las 2 semanas anteriores a las elecciones, en violación de la promesa gubernamental de que dejaría de distribuir cheques 2 semanas antes. Observa luego Fox que es imposible medir el grado en que el acceso a los fondos de desarrollo del gobierno condiciona el apoyo electoral. Pero el grado en que se violó el voto secreto se puede tomar como un indicador de la masa de electores que se sintieron vulnerables a quienes trataron de ejercer presión por haberles dado acceso a los programas de desarrollo (Fox, 1996b: 190). Otra información contextual que presenta Fox es que el voto en el México rural está cargado definitivamente hacia el PRI: "En las áreas «muy urbanas» [Zedillo] habría ganado sólo el 34 por ciento, pero en las «muy rurales» recibió el 77 por ciento de los votos contados" (Fox, 1996b: 191).

Las violaciones del voto secreto en las elecciones presidenciales de 1994 variaron considerablemente, desde no tener pantallas que cubrieran al elector, hasta el que hubiera alguien vigilando la votación, y electores que mostraban sus votos a otra gente. Tales violaciones respondieron a un claro patrón, consistente con los hallazgos de Alianza Cívica: "que las elecciones presidenciales de 1994 incluyeron dos procesos distintos el día de la votación, uno «moderno» y relativamente limpio, y otro lleno de irregularida-

des, entre las que se encontraron amplias violaciones a la secrecía del voto y presiones directas de caciques locales sobre los electores" (Fox 1996b: 05). Estas irregularidades fueron, desde luego, más descaradas en lugares donde los partidos de oposición no pudieron ser parte del comité ejecutivo de las casillas. Puesto que los partidos de oposición tuvieron la menor capacidad para enviar representantes a la mayoría de las municipalidades indígenas, éstas fueron las que gozaron las menores posibilidades de garantizar el acceso al voto secreto.

El libro de Fox y Aranda, *Decentralization & Rural Development in Mexico* (1996), por su parte, es un estudio pionero importante sobre la nueva política del Banco Mundial, que supuestamente estaría más orientada hacia la eliminación de la pobreza, y tendría una mayor sensibilidad hacia temas ambientales, indígenas y de género. Los autores plantean las preguntas correctas sobre cómo aumentar tanto la rendición de cuentas (*accountability*) por parte tanto del gobierno como del banco en sus decisiones de desarrollo. Algunas condiciones clave para reducir la brecha entre metas de política y práctica son las siguientes: aumentar efectivamente la participación basada en la comunidad, dar mayor acceso público a la información antes de implementar proyectos y crear canales institucionales adecuados para investigar quejas por parte de los diversos grupos de interés (*stake holders*).

De acuerdo con Fox y Aranda, el neoliberalismo ha originado dos tendencias políticas relacionadas con la descentralización. Una es apartarse del clientelismo tradicional para moverse en la dirección de una participación comunitaria, creación de empleos, vigilancia e implementación comunitarios de los proyectos. La segunda tendencia es hacia un sesgo reducido en contra de las municipalidades más pobres para que reciban fondos de transferencia. Varias reformas municipales desde 1983 han dado a las municipalidades un aumento de responsabilidad en la provisión de servicios y se crearon concejos municipales para descentralizar la administración municipal. En aquellos lugares donde estas dos tendencias fueron convergentes, como en su estudio de caso en Oaxaca, el resultado ha sido un aumento en la capacidad del gobierno municipal para responder a las necesidades de desarrollo con mayor eficiencia y responsabilidad. De lo contrario, si la descentralización se combina con la persistencia del autoritarismo, entonces el resultado no es aumentar la responsabilidad, sino el autoritarismo. El mensaje central de este libro es, entonces, que un enfoque democrático y desde abajo en el diseño e implementación de los proyectos de desarrollo es el más prometedor para las comunidades rurales.

Por último, en *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*, Hubert Cartón de Grammont (1996a) ha compilado otra excelente colec-

ción de ensayos que analizan los nuevos desafíos para las organizaciones sociales del campo. De Grammont ha sido uno de los más activos y prolíficos promotores de los estudios rurales en México en los últimos 2 decenios (1986, 1995, 1990; De Grammont y Tejera Gaona 1996). En efecto, él fue el organizador clave del primer congreso de la Red de Estudios Rurales en Taxco, Guerrero, en 1994, y luego del segundo en Querétaro en febrero de 1998. En este segundo congreso, la red se constituyó formalmente en la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER), la cual se reunirá periódicamente como asociación profesional.¹⁸

En su introducción, De Grammont plantea que ha surgido un nuevo dualismo en el campo: por una parte está un grupo cada vez más reducido de “productores viables”, quienes pueden jugar un papel exitoso dentro de las nuevas reglas de mercado y seguir siendo sujetos del crédito oficial y privado. Por otra parte, está un grupo creciente de “los pobres”, que cuando mucho pueden ser sujetos para recibir apoyos de los programas asistenciales del gobierno, los cuales no ayudan mucho en la producción.

Una de las principales contribuciones de esta compilación es que implícitamente clarifica lo que significa “sociedad civil” en el México rural. A partir de la exploración de la complejidad y heterogeneidad de los productores rurales y sus organizaciones, el lector se puede dar una idea mucho mejor de la que se recibe de la versión más bien simplificada de “sociedad civil” que ha popularizado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Este último parece implicar que la sociedad civil estaría constituida exclusiva o primordialmente por las organizaciones de las clases y los grupos subalternos. Si este fuese el caso, entonces una sociedad civil en expansión equivaldría directamente a un cambio en la correlación de fuerzas entre Estado y sociedad. El propio De Grammont, sin embargo, describe las organizaciones del sector privado en el campo. Y resulta que, aunque las organizaciones del sector privado no sean monolíticas, sí han sido actores clave para influenciar que las políticas agrícolas cambiasen en una dirección neoliberal y hacia la promoción del TLCAN.

Ahora bien, si algunas organizaciones de los agricultores privados, pequeños, medianos y grandes, se han vuelto más militantes durante los años noventa es porque sus canales corporativistas de antaño para ejercer presión sobre la política agrícola han dejado de ser efectivos. En el marco de la emergencia de esta nueva ciudadanía, surgen tres tipos de actores sociales:

¹⁸La dirección del portal de la AMER es: <http://serpiente.dgsca.unam.mx/piisecam-rer> Por su parte, el grupo de discusión electrónica llamado “Scholars for Mexican Rural Development”, del cual soy su facilitador, tiene el siguiente portal: <http://anthap.oakland.edu/anthap1/mrdindex.htm>, el cual tiene muchos vínculos con otros sitios útiles sobre México rural.

como individuos, en tanto organizaciones por tipo de campesino o productor, y como movimientos sociales. Los movimientos sociales adquieren cada vez más el carácter de amplios frentes constituidos por organizaciones locales y regionales que toman su distancia de los partidos políticos. Esto no obsta para que tengan algunos vínculos con alguno de los partidos políticos existentes, o aun con el aparato estatal, pero también pueden ser independientes del Estado. Si bien tales organizaciones clasistas pueden describirse como “multipartidarias”, puesto que sus miembros pueden ser también militantes de algún partido, su lealtad primordial es hacia su organización social, más que hacia su membresía partidaria. Ésta es claramente una tendencia positiva, pues indica que las organizaciones se están alejando del corporativismo, por un lado, y consolidando la sociedad civil por el otro.

Mientras que el movimiento campesino de los años sesenta y setenta se centró en la lucha por la tierra (Bartra, 1979a, 1979b), el nuevo foco de las luchas rurales desde los ochenta ha cambiado hacia una serie de preocupaciones relacionadas con la organización productiva (De Grammont, 1996b). Además, los movimientos sociales rurales han luchado por la autogestión y la producción democrática (Otero, 1989b), la apropiación del proceso productivo en general (Gordillo, 1988), el control territorial y la autonomía (Moguel, Botey y Hernández, 1992; Rubio, 1996), la apropiación de la vida social y política también (Harvey, 1996c). Con el levantamiento del EZLN, por último, la reforma democrática del Estado ya no se puede posponer (Harvey, 1996c, 1998a).

Las organizaciones de los nuevos movimientos sociales también han recurrido a nuevas formas de acción social y formas de expresión. La acción directa y la lucha y movilización intensiva han sustituido en gran medida a la negociación y la subordinación política. Por lo tanto, el eslabón más débil del corporativismo tradicional es el vínculo que se da entre las organizaciones sociales y el PRI. Es por esto que las nuevas movilizaciones rebasan completamente a los canales tradicionales de representación y formulación de políticas.

La contribución del propio De Grammont (1996b) discute principalmente la organización del sector privado, desde los pequeños productores hasta las grandes corporaciones agroindustriales y describe sus contradicciones internas. Si bien esos productores están de acuerdo en que la tierra debe privatizarse, hay algunos que están en favor de un agrarismo privado de pequeños productores, con algún apoyo estatal y se oponen al TLCAN; mientras que otros, principalmente los que están en la mejor posición para exportar, apoyan en gran medida y de hecho promueven la reforma neoliberal. De Grammont ofrece un perfil del cambio de relaciones del sector

privado con el Estado, de una relación cercana hasta la relación actual beligerante, puesto que sólo los productores más grandes y productivos pueden esperar sobrevivir en el contexto neoliberal.

Los demás colaboradores de la antología coordinada por De Grammont estudian una serie de relaciones políticas en el campo, como la relación corporativista de la CNC y el nuevo movimiento campesino (Mackinlay, 1996), el papel de las organizaciones independientes (Rubio, 1996), el trabajo rural y las organizaciones laborales (Lara, 1996), las nuevas formas de representación a partir de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, UNORCA (Harvey, 1996c), el movimiento indígena en torno a la autonomía (Sarmiento Silva, 1996), otros tipos de organizaciones productivas para la comercialización (De la Fuente y Morales, 1996), grupos productivos de mujeres (Espinosa G., 1996), y expresiones de resistencia contra la nueva Ley Agraria (López Mojardín, 1996).

Esta antología ofrece una riqueza de información sobre nuevos procesos organizativos basada en fuentes primarias y material etnográfico. A partir del nuevo dualismo planteado por De Grammont, se puede anticipar que los grupos más ricos y productivos de agricultores y agroindustriales serán los más exitosos en ejercer presión sobre el Estado. En efecto, éstos podrían estar creando una nueva forma de corporativismo, más autónoma para hacer avanzar sus intereses. Los productores pobres y medianos, sin embargo, encontrarán tal relación cada vez más frustrante y muchos de ellos se verán forzados a abandonar la agricultura por completo. Pero antes de que ello suceda es probable que seamos testigos de un crecimiento mucho mayor de la parte subordinada pero combativa de la sociedad civil, la del tipo de sociedad civil a que tan a menudo se hace referencia y se elogia en los comunicados del EZLN (Bartra A., 2004).

Por último, ofrezco la reseña de un libro sobre la lucha por la autonomía entre los pueblos indios, los cuales constituyen cerca de la mitad de la población rural de México. El libro *Indigenous Autonomy in Mexico*, coordinado por Araceli Burguete Cal y Mayor, contiene una variedad de ensayos escritos por académicos, activistas y representantes indígenas de una variedad de organizaciones políticas y sociales, con ideologías e inclinaciones políticas diversas. Su mayor valor reside en que la mayoría de los escritos consiste en “sistematizaciones” de la lucha por la autonomía, hechas por sus propios protagonistas, lo cual rara vez se ofrece al público académico y general. Hay también capítulos de conocidos estudiosos, como Rodolfo Stavenhagen, Héctor Díaz-Polanco, y la propia Araceli Burguete Cal y Mayor, los cuales son muy valiosos. La variedad de las experiencias en la lucha in-

dígena por la autonomía es notable. Aprehendemos acerca de las luchas históricas por la autonomía de los yaquis, con el capítulo de Hilario Molina, quien fue coordinador general del Programa de Educación de la Tribu Yaqui en 1998. Luego vienen las luchas más contemporáneas.

Margarito Ruiz Hernández da seguimiento a la historia de la lucha legislativa por la autonomía de los pueblos indios a escala nacional en México. Su capítulo describe la historia de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), la cual se formó en 1990. Una de las metas clave de esta organización fue crear un cuarto nivel de gobierno, entre los municipios y los estados: este serían las Regiones Autónomas Pluriétnicas, o RAP. La máxima autoridad sería el Consejo de Representantes: "Todos los grupos étnicos (tanto indios como no-indios) estarían representados por igual dentro de este cuerpo, sin importar el peso demográfico de cada uno." Este cuerpo sería elegido mediante voto universal, directo y secreto cada 3 años, de acuerdo al principio de mayoría relativa (p. 25).

La ANIPA ha sido una de las organizaciones clave entre las que han influenciado la agenda del EZLN después del levantamiento de 1994, pero ya había estado metida en la construcción organizativa y la movilización desde años anteriores. Junto con el resto de las organizaciones que constituyeron el Consejo Mexicano de los 500 Años, fueron recipientes de la medalla "Roque Dalton" en 1994, pero decidieron rechazarla en favor de la comandancia del EZLN. Para ellos, el EZLN representaba "la estrella más pequeña, elegida para ir al frente en el universo de la resistencia indígena" (citado en p. 28). Desafortunadamente, dice el autor, "este buen inicio de las relaciones bilaterales se hizo tenso cuando se dejó de tener una comunicación directa con el EZLN, cuando se dio entrada al concepto de los «asesores», algunos de los cuales le robaron a la lucha indígena el derecho de expresar sus propios pensamientos, sentimientos, propuestas y proyectos para una sociedad deseable" (p. 28). Como veremos más adelante, la presencia de los asesores en el curso de las negociaciones con el Estado, ha sido una fuente de fricción considerable al interior del movimiento indígena, pues compromete la autonomía de sus organizaciones.

La primera lucha por la autonomía en el último cuarto del siglo xx se dio en Juchitán, Oaxaca. Su descripción la da su legendario dirigente y anterior presidente municipal, Leopoldo de Gyves. Algo que se pone de relieve son las formas en que la organización social regional entró en relación política con uno de los partidos de izquierda con presencia nacional. La Coalición de Obreros, Campesinos y Estudiantes del Istmo (COCEI) estableció una alianza entre iguales con el principal partido de izquierda, que a través de varias transformaciones (véase el capítulo 7) ahora se llama el Par-

tido de la Revolución Democrática o PRD. De Gyves considera que esta relación ha sido ejemplar sobre la forma como se ha de ejercer la autonomía entre las organizaciones sociales con simpatías por formar coaliciones con el PRD u otros partidos. Una de las preocupaciones que plantea para las municipalidades indígenas es el logro de reformas profundas del Estado para hacer del federalismo una realidad. Esto fortalecería a los gobiernos locales y contribuiría a profundizar la lucha democrática.

Marcelino Díaz de Jesús y Pedro de Jesús Alejandro escriben acerca de la lucha por la autonomía de los indios nahua en la región del Alto Balsas del estado de Guerrero. Estos pueblos de Guerrero, como los de Chiapas, han estado implementando una autonomía de facto, “sin pedirle permiso al poder” (p. 157). La autonomía política en esta región, entonces, va más adelante que la legislación mexicana.

En el estado de Chiapas, en el sureste de México, al cual se dedican seis capítulos de *Indigenous Autonomy in Mexico*, las experiencias con la autonomía han sido tan variadas como sus propias metas, actores políticos y logros (véase también Van der Haar, 2001). Tal vez una de las diferencias clave resultan del grado en el que cada región tuvo la presencia de la política indigenista del Estado, que pretendía lograr la integración de los indígenas a la sociedad nacional mestiza. Pues debe quedar claro que si bien el indigenismo glorificaba a los indios del pasado, su desprecio por los contemporáneos le hacía ver sólo un destino para ellos: la aculturación y la adopción de los valores “modernos” de la sociedad mestiza. Otras fuerzas externas también tuvieron un impacto importante y diferencial en varias regiones de Chiapas, incluyendo los catequistas, que se guiaban por la teología de la liberación y los “asesores” o activistas políticos que llegaron del norte de México durante los años setenta (“los norteros”). En la región Tojolob’al centro-oriental, escribe Antonio Hernández Cruz que la lucha por la autonomía se inició en los años ochenta, después de que los indígenas lograron por fin recuperar la tierra por la vía de la reforma agraria. Esto sentó las condiciones para la autonomía, la cual cambió su carácter varias veces en las últimas dos décadas. A diferencia de Los Altos de Chiapas, donde se enfocaron la mayoría de las políticas indigenistas y el Estado impuso sus aparatos corporativistas de cooptación, en la región Tojolob’al el Estado tuvo una presencia muy débil. Esta situación, sin duda, ayudó a consolidar la autonomía Tojolob’al.

Como se ha mencionado arriba, aunque la legislación mexicana se ha quedado atrás en el asunto de la autonomía, los pueblos indios no han esperado para implementarla. Así pues, el capítulo de Marcelino Gómez Núñez habla sobre las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP) y las múltiples

vías hacia la autonomía *de facto*. Ofrece una descripción detallada de cómo el movimiento por la autonomía se consolidó tras el levantamiento del EZLN en 1994.

Por su parte, Miguel González Hernández y Elvira Quintanar Quintanar escriben acerca de “La construcción de la Región Autónoma del Norte y el ejercicio del gobierno municipal” en Chiapas. Abren su capítulo diciendo que la meta de los indios de Chiapas es ser reconocidos como “pueblos con su propio territorio, identidad, cultura y derechos, y no como gentes marginadas” (p. 194). La región norte, que abarca ocho municipios, es 80 por ciento indígena. Su gente ha tenido mucho éxito en la recuperación de la tierra por tres vías o fases. Primero, cerca del 22 por ciento de su territorio anterior se recuperó a través de la Reforma agraria durante el cardenismo (1934-1940) y luego en los setenta. Este acceso a la tierra les permitió la reproducción económica y cultural a los pueblos indios. Para 1994, el proceso de movilización y la toma de tierras fueron impulsados por la rebelión del EZLN. Esto concluyó la recuperación física de la tierra, pero no toda se ha legalizado todavía. Una segunda fase ha consistido en el desarrollo de una economía campesina orientada a producir y retener sus excedentes, mediante la “recuperación y el desarrollo de las técnicas tradicionales que corresponden a las verdaderas necesidades y formas de ver la vida de nuestro pueblo” (pp. 196-197). Después del levantamiento del EZLN, la tercera fase se ha enfocado en la lucha por la identidad y la autonomía. En el frente político, la lucha se ha enfocado en la disputa por el gobierno municipal y la construcción de la autonomía regional.

Algo que González y Quintanar mencionan sólo de pasada es que los municipios del norte han enfrentado la más feroz represión por parte de las fuerzas paramilitares, con el apoyo y contubernio del gobierno, especialmente durante 1997 y 1998. No obstante lo anterior, la gente metida en experiencias de autonomía municipal ha experimentado una muy inclinada curva de aprendizaje. Han transformado la práctica de gobierno de una práctica de poder y corrupción a una de servicio. Las mujeres, en particular, se han incorporado a puestos de dirección, de acuerdo con la Ley de las Mujeres promulgada por el EZLN en 1994 (Stephen, 2002: 176-215).

La experiencia con el gobierno municipal en Ocosingo, el corazón del territorio zapatista, se ha dado desde 1997, cuando los dirigentes indígenas fueron elegidos para integrar el consejo municipal, de acuerdo con el capítulo de Ricardo Hernández Arellano. Su historia se basa en su propia experiencia como miembro del concejo. Ocosingo es el municipio más grande de los 111 de Chiapas, ocupa cerca del 15 por ciento de su territorio y contiene una gran reserva de la biosfera llamada Montes

Azules en la selva lacandona. Éste es el lugar donde se formó el EZLN, sobre la base asentamientos de pioneros que venían de varias partes del estado y representaban varios pueblos indios de Chiapas (Leyva Solano, 1998; Harvey, 1998a; Womack, 1999). Tal parece que esta convivencia, a la vez que afianzó las diversas identidades étnicas de cada pueblo de origen, también les formó una cultura de aceptación de las diferencias y el multiculturalismo.

En el último capítulo del libro, la coordinadora Araceli Burguete Cal y Mayor analiza los fundamentos estructurales de la lucha por la autonomía. Intitulado "Indigenous Empowerment: Trends toward Autonomy in the Altos de Chiapas Region", su capítulo discute la región chiapaneca que ha sido controlada más de cerca, primero por las autoridades coloniales, y luego por las del Estado nacional y las clases dominantes locales. Como se mencionó arriba, las políticas indigenistas se aplicaron vigorosamente en Los Altos durante la segunda mitad del siglo xx, orientadas a asimilar a los indígenas a la sociedad nacional. De aquí que Burguete empiece con una paradoja muy interesante: Ha sido esta región, donde se dio el indigenismo más fuerte, donde se ha dado la mayor declinación de la hegemonía ladino-mestiza, a medida que ha emergido el indianismo (entendido como la identidad india construida por los propios indios). Los años recientes se podrían caracterizar, nos dice la autora, "por un marcado sentido de autonomía en las acciones indígenas y bien podrían ser consideradas como luchas de *descolonización y reconquista*" (cursivas en el original, p. 260). Ha habido un crecimiento y consolidación de un sujeto autónomo, es decir, el poder indígena, particularmente desde los años sesenta. Y sin embargo, Burguete considera que es posible que emerja una "coexistencia étnica" en las ciudades de Los Altos.

A partir de los textos que he reseñado, podemos ver que el progreso hacia la democracia en México es lento, altamente restringido y limitado a una democracia de tipo liberal. En aquellos lugares donde se promueve o se permite la participación, sin embargo, como por ejemplo en los programas de desarrollo, entonces los resultados pueden ser más alentadores (por lo menos en el nivel económico). Ahora bien, la experiencia práctica en la lucha por la autonomía que se ha dado en Chiapas, Guerrero y otras regiones indígenas, se puede decir que el avance va más allá de lo que permite legalmente el marco de una democracia liberal. Está por verse si el pueblo de México quedará contento con logros de esta naturaleza o si seguirá luchando, como lo hacen los pueblos indios, por una transición más significativa, que le permita dirigir el propio modelo de desarrollo en una dirección más participativa y equitativa.

Conclusión

En la introducción al presente estudio argumenté que la formación política de las clases está relacionada con la emergencia de la sociedad civil, ya que se trata de la construcción de organizaciones voluntarias de los productores directos. En la medida en que emergen y se constituyen las organizaciones clasistas autónomas e independientes, así también se constituye la sociedad civil. En este sentido, la sociedad civil es también un terreno para la democratización. Hasta 1994, los partidos políticos habían experimentado un mínimo avance en la democratización electoral, pues estaban enfocados exclusivamente en la sociedad política o el Estado en sentido restringido. De hecho, la mayor parte de las reformas electorales que habían logrado resultaban en cambios que dejaban virtualmente intacto al autoritarismo del sistema político mexicano. Se daban muchos cambios para que todo siguiera igual. Si algo se logró fue la modernización del autoritarismo, con lo que se logró también la persistencia de la dominación del PRI (Otero, 1996a; Gilbreth y Otero, 2001).

El avance de la democracia en la sociedad política sólo tendrá sentido en la medida en que marche mano a mano con la consolidación de la democratización en la sociedad civil. Sólo así podrá hacerse realidad uno de los principios políticos fundamentales del EZLN que más han llamado la atención del público: “mandar obedeciendo”. Es decir, con una sociedad civil revigorizada, los representantes populares realmente tendrán que responder a los deseos del electorado y sus bases políticas: mandar obedeciendo. En esta visión de democracia, quienes no puedan rendir cuenta de sus actos como funcionarios, conforme a los intereses de sus bases, dejarán de ser electos. En casos límite, tendrán que abandonar sus cargos en virtud de algún procedimiento democrático de revocación. Habrá que instituir también mecanismos eficientes de consulta popular para la toma de decisiones estratégicas, como podría ser el plebiscito. Estos procesos podrían llevar a un sustancial aumento en el desarrollo de dirigentes democráticos. Mandar obedeciendo, pues, presupone no sólo la democratización de los procesos político-electorales; supone también la consolidación de una sociedad civil organizada que sea capaz de exigir cuentas claras a sus representantes y el desarrollo de una cultura democrática. Dentro de este nuevo paradigma de democratización, se trataría de avanzar hacia un proceso electoral justo y transparente, sí, pero también hacia la consolidación de los grupos, comunidades y clases subordinados mediante su organización política dentro de la sociedad civil.

Ciertamente, la era de la globalización y el neoliberalismo han florecido junto con la muerte del socialismo de Estado y la Guerra Fría. Un fac-

tor concomitante es que las futuras luchas de los grupos, comunidades y clases subordinados deben adoptar un carácter democrático. En otras palabras, debe buscarse un nuevo proyecto hegemónico a través de las luchas popular-democráticas en aras de la reforma del capitalismo. En un país como México, el cual apenas inicia la transición democrático-electoral, es de vital importancia que los partidos políticos adopten una actitud diferente frente a las organizaciones populares de los grupos y clases subalternos. En lugar de tratar de asimilarlos o cooptarlos como en el pasado y convertirlos en correas de transmisión de la política partidaria, los partidos políticos tendrán que respetar la autonomía de esas organizaciones y mandar obediéndolas. Por su parte, como lo ha sugerido Judith Adler Hellman (1994), las organizaciones populares también harían bien en renunciar a su desconfianza tradicional respecto de los partidos políticos y establecer con ellos alianzas tácticas, al tiempo que velen celosamente por su independencia respecto del Estado y su autonomía respecto de los partidos políticos. Sólo así se podrá sostener una sana dialéctica entre el sistema de representación y sus bases.

La alianza entre organizaciones y partidos popular-democráticos acaso no resulte en el derrocamiento del capitalismo, ni en la toma del poder estatal, pero sólo con tal alianza se podrán contener sus excesos de explotación y tal vez se pueda empujarlo hacia una democracia societal. En esta democracia, el poder ya no estará concentrado sólo en la sociedad política o en el Estado en sentido restringido, sino, precisamente, también en la sociedad civil. Habrá una gran multiplicidad de organizaciones que representen a una diversidad de grupos, comunidades y clases, que mantendrán su independencia del Estado y su autonomía respecto de otras organizaciones. Habrá, en fin, un mayor acercamiento entre sociedad política y sociedad civil. Pero ahora la que tendrá la última palabra será la sociedad civil. En este contexto, lejos de decirle adiós al campesinado, se le daría la bienvenida pues sus demandas se podrían acomodar en ese mundo donde quepan todos los mundos.

Bibliografía

- AGUILAR, Alberto, 1993, "Nombres, nombres y... nombres", *El Financiero*, octubre 15, p. 11.
- AGUILAR CAMÍN, Héctor, 1977, *La frontera nómada: Sonora y la Revolución mexicana*, México, Siglo XXI Editores.
- , 1982, *Saldo de la revolución*, México, Nueva Imagen.
- AGUILAR SOLÍS, Samuel y Hugo Andrés Araujo, 1984, *Estado y campesinado en La Laguna: La lucha campesina por la tierra y el excedente*, Folleto de Divulgación, vol. 1, núm. 5, Saltillo, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
- ALAVI, Hamsa, 1973, "Peasant Classes and Primordial Loyalties", *The Journal of Peasant Studies*, 1 (1).
- ÁLVAREZ, Sonia E., Evelina Dagnino y Arturo Escobar, (coords.), 1998, *Cultures of Politics, Politics of Cultures: Re-Visioning Latin American Social Movements*, Boulder y Oxford, Westview Press.
- ANGUS, Ian, 2001, "Subsistence as a Social Right: A Political Ideal for Socialism?", *Studies in Political Economy*, 65 (verano), pp. 117-135.
- APONTE, David, Andrea Becerril y Ciro Pérez Silva, 2001, "La comandanta Esther dio a conocer cuatro puntos que allanan el camino para el diálogo", *La Jornada*, 29 de marzo, <http://www.jornada.unam.mx/2001/mar01/010329/005n-1pol.html> (consultado el 29 de marzo de 2001).
- APPENDINI, Kirsten A. de, 1983, "La polarización de la agricultura mexicana: Un análisis a nivel de zonas agrícolas", pp. 181-216, en Gonzalo Rodríguez Gigena (coord.), *Economía mexicana*, Centro de Investigación y Docencia Económica.
- y Vania Almeida Salles, 1976, "Agricultura capitalista y agricultura campesina en México: Diferencias regionales en base de datos censales", pp. 29-68, en Rodolfo Stavenhagen et al., *Capitalismo y campesinado en México*, México, SEP-INAH.
- , 1980, "Precios de garantía y crisis agrícola", *Nueva Antropología*, México, año IV, núms. 13-14, mayo.
- , 1994, "Transforming Food Policy Over a Decade: the Balance for Mexican Corn Farmers in 1993", pp. 145-160, en Cynthia Hewitt de Alcántara

- (coord.), *Economic Restructuring and Rural Subsistence in Mexico*, La Jolla, CA, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- ARCHER, Margaret, 1996, *Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory*, edición corregida, Nueva York, Cambridge University Press.
- ARROYO ALEJANDRE, Jesús, 1989, *El abandono rural: un modelo explicativo de la emigración de trabajadores rurales en el occidente de México*, Guadalajara, Jalisco, Universidad de Guadalajara.
- BARCHFIELD, John W., 1979, "Land Tenure and Social Productivity in Mexico", LTC paper núm. 121 mimeo., Madison, Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison.
- BAITENMANN, Helga, 1998, "The Article 27 Reforms and the Promise of Local Democratization in Central Veracruz", pp. 105-123, en Cornelius y Myhre, 1998b.
- BARKIN, David y Billie DeWalt, 1989, "Sorghum and the Mexican Food Crisis", *Latin American Research Review*, 23 (3), 30-59.
- y Blanca Suárez, 1982, *El fin de la autosuficiencia alimentaria*, México, Centro de Ecodesarrollo y Nueva Imagen.
- BARRY, Tom, 1995, *Zapata's Revenge: Free Trade and the Farm Crisis in Mexico* Boston, South End Press.
- BARTRA, Armando, 1979a, *La explotación del trabajo campesino por el capital*, México, Editorial Macehual.
- , 1979b, *Notas sobre la cuestión campesina (México 1970-76)*. México: Editorial Macehual-ENAH.
- , 1996, "A Persistent Rural Leviathan", pp. 173-184, en Randall, 1996.
- , 2004, "Rebellious Cornfields: Toward Food and Labour Self-Sufficiency", en Otero, 2004.
- BARTRA, Roger, 1974a, *Estructura agraria y clases sociales en México*, México, Ediciones Era.
- , 1974b, *Marxismo y sociedades antiguas*, México, Grijalbo.
- , 1975a, "Sobre la articulación de modos de producción en América Latina", *Historia y sociedad*, México, segunda época, núm. 5, primavera.
- , 1975b, "Peasants and Political Power in Mexico: A Theoretical Model", *Latin American Perspectives*, vol. 5, núm. 2, issue 8, verano.
- , 1975c, "Campesinado y poder político en México", pp. ??, en Roger Bartra et al., *Caciquismo y poder político en México rural*, México, Siglo XXI Editores.
- , 1975d, "Y si los campesinos se extinguen...", *Historia y sociedad*, México, segunda época, núm. 8, invierno.
- , 1978, *El poder despótico burgués*, México, Ediciones Era.
- , 1981, *Las redes imaginarias del poder político*, México, Ediciones Era.

- , 1982, *Campesinado y poder político en México*, México, Ediciones Era.
- , 1986, *La democracia ausente*, México, Grijalbo.
- , 1993, *Agrarian Structure and Political Power in Mexico*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.
- y Gerardo Otero, 1988, "Crisis agraria y diferenciación social en México", *Revista Mexicana de Sociología*, 50 (1), pp. 13-50.
- BEALS, Ralph L., 1932, *The Comparative Ethnology of Northern Mexico Before 1750*, Berkeley, University of California Press.
- BELLINGHAUSEN, Herman, 2003, "Más de 20 mil indígenas preguntan al presidente Vicente Fox dónde está la paz", *La Jornada*, 2 de enero, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/003n1pol.php?origen=index.html> (consultado el 3 de enero de 2003).
- BENJAMIN, Medea y Rebecca Buell, 1985, "Coalition of Ejidos Report: The Coalition of Ejidos of the Valleys of Yaqui and Mayo, Sonora State, Mexico", San Francisco, California, Institute for Food and Development Policy.
- BLANCO, José, 2001, "La autonomía de los riesgos", *La Jornada*, 3 de abril, (portal: <http://www.jornada.unam.mx/2001/abr01/010403/017alpol.html>).
- BREMNER, Brian y Moon Ihlwan, 1998, "Korea: Rage and Despair", *Businessweek*, agosto 17, pp. 47-48.
- BRUHN, Kathleen, 1996, *Taking on Goliath: The Emergence of a New Left Party and the Struggle for Democracy in Mexico*, University Park, Pennsylvania State University Press.
- BUECHLER, Stephen M., 2000, *Social Movements in Advanced Capitalism: The Political Economy and Cultural Construction of Social Activism*, Nueva York y Oxford, Oxford University Press.
- BURAWOY, Michael, 1979, *Manufacturing Consent*, Chicago y Londres, University of Chicago Press.
- BURGETE CAL Y MAYOR, Aracely (coord.), 2000a, *Indigenous Autonomy in Mexico*, Copenhagen, International Work Group for Indigenous Affairs.
- , 2000b, "Indigenous Empowerment: Trends towards Autonomy in the Altos de Chiapas Region", pp. 259-275, en Burguete Cal y Mayor, 2000a.
- CAMARENA CASTELLANOS, Concepción y Javier Encinas Terrazas, 1982, "El ejido colectivo en la agricultura moderna: Un estudio de caso en el Valle del Yaqui, Sonora", tesis de licenciatura, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- CAMP, Roderic Ai, 1996, *Politics in Mexico*, Nueva York, Oxford University Press.
- CANABAL CRISTIANI, Beatriz, 1984, *Hoy luchamos por la tierra*, Colección Ensayos, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.

- CANCIAN, Frank, 1972, *Change and Uncertainty in a Peasant Economy: The Maya Corn Farmers of Zinacantán*, Stanford, Stanford University Press.
- , 1992, *The Decline of Community in Zinacantán: Economy, Public Life, and Social Stratification, 1960-1987*, Stanford, Calif., Stanford University Press.
- CARLSEN, Laura, 2004, "Conservation or privatization? Biodiversity, the global market, and the Mesoamerican Biological Corridor", en Otero, 2004.
- CARR, Barry, 1973, "Las peculiaridades del norte mexicano, 1880-1927: Ensayo de interpretación", *Historia Mexicana*, 22 (3), pp. 320-346.
- , 1980, "Recent Regional Studies of the Mexican Revolution", *Latin American Research Review*, 15 (1), pp. 3-14.
- , 1986, "The Mexican Communist Party and Agrarian Mobilization in the Laguna 1920-1940", ponencia presentada en el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, Boston, MA, E.U., 22-25 de octubre.
- y Steve Ellner, 1993, *The Latin American Left: From the Fall of Allende to Perestroika*, Boulder, CO, Westview Press.
- CARRASCO, Pedro, 1969, "Central Mexican Highlands: Introduction", en Vogt, 1969.
- CASTAÑEDA, Jorge G., 1993, *Utopia Unarmed: The Latin American Left After the Cold War*, Nueva York, Alfred A. Knopf.
- CASTELLANOS, Carlos Manuel, 1982, *Los ejidos colectivos de 1976: La lucha por la tierra en el valle del Yaqui*, Chapingo, Méx., Editorial Sáenz Colin y Asociados.
- CCRI-CG-EZLN (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 1994b, *Segunda declaración de la Selva Lacandona*, 10 de junio de 1994, disponible en <http://www.ezln.org/documentos/1994/19940610.es.htm> (consultado el 20 de mayo de 2003).
- CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS (CDHFBLC), 1996, *Ni paz ni justicia*, San Cristóbal de Las Casas, CDHFBLC.
- , 1998, *Acteal: entre el duelo y la lucha*, San Cristóbal de Las Casas, CDHFBLC.
- CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO JUÁREZ, A.C., 1998, *Chiapas: La guerra en curso*, México.
- CEPAL (Alejandro Schejtman), 1992, *Economía campesina y agricultura empresarial: Tipología de productores del agro mexicano*, México, Siglo XXI Editores.
- CHAYANOV, A.V., 1974, *La organización de la unidad económica campesina*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- CHOLLETT, Donna, 1995, "Restructuring the Mexican Sugar Industry: Campesinos, the State and Private Capital", pp. 23-40, en Singelmann, 1995.

- COALICIÓN DE EJIDOS COLECTIVOS DE LOS VALLES DEL EL YAQUI Y EL MAYO, 1982, *En defensa del ejido*, México, Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo.
- COELLO, Manuel, 1981, "¿Recampesinización en la descampesinización?", *Revista Mexicana de Sociología*, año XLIII, núm. 1.
- COLLIER, George A. y Elizabeth Lowery Quarantiello, 1994, *Basta! Land and the Zapatista Rebellion in Chiapas*, Oakland, Calif., Food First.
- CONTRERAS, Ariel José, 1977, *México 1940: Industrialización y crisis política*, México, Siglo XXI Editores.
- COO, Jorge, 1984a, "Probó el ejido colectivo ser más eficiente", *Unomásuno*, México, diciembre 15.
- , 1984b, "Libertad para organizarse, base del éxito en el Valle del Yaqui", *Unomásuno*, México, diciembre 17.
- COOK, María Lorena, 1996, *Organizing Dissent: Unions, the State, and the Democratic Teachers' Movement in Mexico*, University Park, Pa., Pennsylvania State University Press.
- COPARMEX, 1982, "Desplegado sobre el ejido", en *El Día*.
- CÓRDOBA, Arnaldo, 1972, *La formación del poder político en México*, México, Ediciones Era.
- , 1974, *La política de masas del cardenismo*, México, Ediciones Era.
- CORNELIUS, Wayne A., 1992, "The Politics and Economics of Reforming the Ejido Sector in Mexico: an Overview and Research Agenda", *LASA Forum*, 23 (3), pp. 3-10.
- , 2000, *Mexican Politics in Transition*, La Jolla, CA, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- , Ann L. Craig y Jonathan Fox (coords.), 1994, *Transforming State-Society Relations in Mexico: The National Solidarity Strategy*, U.S.-Mexico Contemporary Perspectives Series, 6, San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- y David Myhre, 1998a, "Introduction", pp. 1-20, en Cornelius y Myhre, 1998b.
- y David Myhre, (coords.), 1998b, *The Transformation of Rural Mexico: Reforming the Ejido Sector*, La Jolla, CA, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego (UCSD).
- CORTÉS SÁNCHEZ, Sergio, 1981, "Notas sobre la estructura económica de Puebla", *Crítica*, año III, núms. 8-9, enero-junio.
- COVARRUBIAS PATIÑO, Daniel, 1996, "An Opinion Survey in the Countryside - 1994", pp. 107-116, en Randall, 1996.
- CRAIG, Ann, 1983, *The First Agraristas: An Oral History of a Mexican Agrarian Reform Movement*, Berkeley, University of California Press.
- CUMBERLAND, Charles C., 1975, *La Revolución mexicana: Los años constitucionales*, México, Fondo de Cultura Económica.

- DAVIS, Diane, E., 1994, "Failed democratic reform in contemporary Mexico: from social movements to the state and back again", *Journal of Latin American Studies*, núm. 26, pp. 375-408.
- DAVIDSON, Alastair, 1984, "Gramsci, the Peasantry and Popular Culture", *Journal of Peasant Studies*, 11 (4), pp. 139-154.
- DAY, Richard J.F., 2000, *Multiculturalism and the History of Canadian Diversity*, Toronto, University of Toronto Press.
- DE GRAMMONT, Hubert C., 1979, "Historia de las luchas sociales en la zona de Atencingo", pp. 185-262, en Paré, 1979a.
- (coord.), 1986, *Asalariados Agrícolas y sindicalismo en el campo mexicano*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México y Juan Pablos Editor.
- , 1990, *Empresarios agrícolas y el Estado: Sinaloa 1893-1984*, México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
- (coord.), 1995, *Globalización, deterioro ambiental, y reorganización social en el campo*, México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México y Juan Pablos Editor.
- (coord.), 1996a, *Neoliberalismo y organización social en el campo mexicano*, México, Plaza y Valdés e Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
- , 1996b, "La organización gremial de los agricultores frente a los procesos de globalización en la agricultura", pp. 21-67, en De Grammont 1996a.
- y Héctor Tejera Gaona (coords.), 1996, *Nuevos procesos rurales en México: Teorías, estudios de caso y perspectivas*, 4 vols., México, UNAM, UAM, INAH.
- DE JANVRY, Alain, 1981, *The Agrarian Question and Reformism in Latin America*, Baltimore, Johns Hopkins University.
- , Gustavo Gordillo y Elisabeth Sadoulet, 1997, *Mexico's Second Agrarian Reform: Household and Community Responses*, Transformation of Rural Mexico Series, núm. 1, La Jolla, CA, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- DE LA GARZA, Enrique, 2004, "Manufacturing Neoliberalism: Industrial Relations, Trade Union Corporatism and Politics", en Otero, (coord.), 2004.
- DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Juan y Joaquín Morales Valderrama, 1996, "Crisis rural y respuesta campesina: La comercializadora agropecuaria de occidente," pp. 283-353, en De Grammont 1996a.
- DE LA PEÑA, Guillermo, 1997, "Sobre la ciudadanía étnica", ponencia presentada en la reunión de la Latin American Studies Association, Guadalajara, México, abril.
- DE LA PEÑA, Sergio, 1980, "Las fuerzas proletarias en México", pp. 109-144, en José María Calderón, *et al.*, *Economía y política en el México actual*, México, Editorial Terra Nova.

- , 1982, *Capitalismo en cuatro comunidades rurales*, México, Siglo XXI Editores.
- DEL CASTILLO, Gustavo, 1979, "Desarrollo de la hacienda algodonera", en Leticia Gándara, Gustavo del Castillo y William K. Meyers, *La Comarca Lagunera: Su historia. Parte II: Las haciendas algodoneras*, Cuadernos de la Casa Chata, México, Centro de Investigaciones Superiores del INAH.
- DEWALT, Billie R., Martha W. Rees y Arthur D. Murphy, 1994, *The End of Agrarian Reform in Mexico: Past Lessons, Future Prospects*, Transformation of Rural Mexico Series, núm. 3, Ejido Reform Research Project, La Jolla, CA, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- DIAMOND, Larry (coord.), 1992, *The Democratic Revolution: The Struggles for Freedom and Pluralism in the Developing World*, Nueva York, Praeger.
- DÍAZ LEAL, Juan, 1987, *Discurso del presidente de la Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles de El Yaquí y El Mayo*, conmemoración del 11 aniversario de la expropiación de tierras en Sonora (presidente en 1987-1989).
- DÍAZ-POLANCO, Héctor, 1997a, *Indigenous Peoples in Latin America: The Quest for Self-Determination*, Boulder, Colorado, Westview Press.
- , 1997b, *La rebelión zapatista y la autonomía*, México, Siglo XXI Editores.
- y Consuelo Sánchez, 2003, *México diverso: El debate por la autonomía*, México, Siglo XXI Editores.
- DOWNING, Theodore E., 1988, "A Macro-Organizational Analysis of the Mexican Coffee Industry, 1988-1977", pp. 175-193, en Philip Quarles van Ufford, Dirk Kruijt y Theodore Downing (eds.), *The Hidden Crisis in Development: Development Bureaucracies*, Tokyo y Amsterdam, United Nations University y Free University Press.
- DRESSER, Denise, 1991, *Neopopulist Solutions to Neoliberal Problems: Mexico's National Solidarity Program*, Current Issue Brief Series, núm. 3, La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- DRYZEK, John S., 1996, *Democracy in Capitalist Times: Ideals, Limits, and Struggles*, Nueva York y Oxford, Oxford University Press.
- DVORING, Folke, 1969, "Land Reform and Productivity: The Mexican Case, Analysis of Census Data", LTC paper núm. 63, mimeo., Madison, Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison.
- ECKSTEIN, Sholmo (Salomón), 1966, *El ejido colectivo en México*, México, Fondo de Cultura Económica.
- , 1970, "Collective Farming in Mexico: The Case of La Laguna", en Rodolfo Stavenhagen (coord.), *Agrarian Problems and Peasant Movements in Latin America*, Garden City, NY, Anchor Books.
- EDELMAN, Robert, 1987, *Proletarian Peasants: The Revolution of 1905 in Russia's Southwest*, Ithaca y Londres, Cornell University Press.

- El Día*, 1985a, "Lo regional se mueve: Entrevista a ejidatarios de Batopilas, Zacatecas (*sic*: debería decir Coahuila, en vez de Zacatecas)", junio 15.
- , 1985b, "UNORCA, unidos venceremos", abril 6.
- El Financiero Internacional* (edición semanal del diario *El Financiero*), 1994, "The Boardroom", (Los Ángeles, CA), agosto 8-14, p. 5.
- ENCINAS R., Alejandro (coord.) y Juan de la Fuente, Horacio Mackinlay y Emilio Romero, (comps.), 1995, *El campo mexicano en el umbral del siglo XXI*, México, Espasa Calpe.
- ERASMUS, Charles J., 1961, *Man Takes Control: Cultural Development and American Aid*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- ESCOBAR, Arturo y Sonia E. Álvarez (coords.), 1992, *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy and Democracy*, Series in Political Economy and Economic Development in Latin America, Boulder y Oxford, Westview Press.
- ESPINOSA G., Rosa Aurora, 1996, "Modernización y organización productiva en grupos de mujeres del sur de Guanajuato", pp. 397-439, en De Grammont, 1996a.
- ESTEVA, Gustavo, 1975, "La agricultura de México de 1950 a 1975: El fracaso de una falsa analogía", *Comercio Exterior*, México, vol. 25, núm. 12, diciembre.
- , 1978, "Y si los campesinos existen", *Comercio Exterior*, México, vol. 28, núm. 6, junio.
- , 1980, *La batalla en el México rural*, México, Siglo XXI Editores.
- , 1983, "Los campesinos existen", *Nexos*, México, año VI, vol. 6, núm. 71, noviembre.
- , 1999, "The Zapatistas and People's Power", *Capital & Class*, 68 (verano), pp. 153-183.
- EZLN, 1994, *Primera declaración de la Selva Lacandona*, disponible en <http://www.ezln.org/documentos/1994/199312xx.es.htm> (consultado el 20 de mayo de 2003).
- , 1996, *Crónicas intergalácticas: Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo*, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
- FALCÓN, Romana, 1977, *El agrarismo en Veracruz: La etapa radical (1928-1935)*, México, El Colegio de México.
- FELSTEHAUSEN, Herman y Heliodoro Díaz-Cisneros, 1985, "The Strategy of Rural Development: The Puebla Initiative", *Human Organization*, vol. 44, núm. 4, otoño.
- FERRA Martínez, Carlos, 1982, "El movimiento campesino de Sonora: 1975-1976", ponencia presentada en el Segundo Congreso Nacional sobre Problemas Agrarios, Chilpancingo, Guerrero, México, 7-11.
- , 1987, *Lucha de clases en el campo sonorense (de 1930 a la actualidad): Una propuesta de periodización*, ponencia presentada en la Primera Reu-

- nión sobre Problemas Rurales en el Noroeste de México y el Sureste de los Estados Unidos, Culiacán, Sin., 13-16 de enero.
- FLORA, Cornelia Buttler y Gerardo Otero, 1995, "Sweet Neighbors? The State and the Sugar Industries in the United States and Mexico under NAFTA", pp. 63-74, en Singelmann, 1995.
- FOLEY, Michael W., 1989, "Agricultural Policy and Politics: Theory and Practice," *Latin American Research Review*, xxiv (1), pp. 223-249.
- Food First News*, 1985, "Collective Farming: Can it Work?", núm. 22, verano.
- FOWERAKER, Joe y Ann Craig, 1990, *Popular Movements and Political Change in Mexico*, Boulder, Co., Lynne Rienner Publishers.
- FOWLER SALAMINI, Heather, 1979, *Movilización campesina en Veracruz (1920-1938)*, México, Siglo XXI Editores.
- FOX, Jonathan, 1993, *The Politics of Food in Mexico: State Power and Social Mobilization*, Ithaca, NY, Cornell University Press.
- , 1996a, "How Does Civil Society Thicken? The Political Construction of Social Capital in Rural Mexico", *World Development*, 24 (6), pp. 1089-1103.
- , 1996b, "National Electoral Choices in Rural Mexico", pp. 185-209, en Randall, 1996.
- y Josefina Aranda, 1996, *Decentralization & Rural Development in Mexico: Community Participation in Oaxaca's Municipal Funds Program*, Monograph Series, 42, La Jolla, CA, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- FREIRE, Paulo, 1970, *Pedagogy of the Oppressed*, Nueva York, Seabury Press.
- , 1982, *La educación como práctica de la libertad*, traducción de Lilien Ronzoni, México, Siglo XXI Editores.
- FRIEDMAN, Harriet, 1980, "Household Production and the National Economy: Concepts for the Analysis of Agrarian Formations", *The Journal of Peasant Studies*, 7 (2), pp. 158-184.
- GARCÍA CHÁVEZ, Luis Ramiro, 1992, *La agroindustria cañera de México frente a la apertura comercial*, México, Universidad Autónoma Chapingo.
- GARCÍA DE LEÓN, Antonio, 1995, "Prólogo", en *EZLN: Documentos y comunicados*, México, Ediciones Era.
- GARCÍA ZAMORA, Rodolfo, 1997, *La agricultura en el laberinto de la modernidad*, Serie Economía, Espacio y Población, Zacatecas, Facultad de Economía, UAZ.
- GATES, Marilyn, 1993, *In Default: Peasants, the Debt Crisis, and the Agricultural Challenge in Mexico*, Latin American Perspectives Series, núm. 12, Boulder, Colorado, Westview Press.
- , 1996, "The Debt Crisis and Economic Restructuring: Prospects for Mexican Agriculture", pp. 43-62, en Otero, 1996b.

- GEERTZ, Clifford, 1973, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, Nueva York, Basic Books.
- GIDDENS, Anthony, 1976, *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*, Londres, Hutchinson.
- , 1984, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge, Polity Press.
- GILBRETH, Chris y Gerardo Otero, 2001, Democratization in Mexico: The Zapatista Uprising and Civil Society, *Latin American Perspectives*, 28 (4), pp. 7-29.
- GILLY, Adolfo, 1974, *La revolución interrumpida; México, 1910-1920: una guerra campesina por la tierra y el poder*, 4a. edición, México, Editorial El Caballito.
- , 1998, "Chiapas and the Rebellion of the Enchanted World", pp. 261-334, en Nugent, 1998.
- GLEDHILL, John, 1995, *Neoliberalism, Transnationalization and Rural Poverty: A Case Study of Michoacán, Mexico*, Boulder, Colorado y Oxford, Westview Press.
- GÓMEZ CARPINTEIRO, Francisco Javier, 1995, "«Tanto que Costo:» Clase y cultura en la aplicación de la nueva Ley Agraria en un Ejido Cañero", tesis de Maestría, Departamento de Antropología, Universidad de las Américas (Cholula, Puebla, México).
- , 1997, "La construcción de la clase y el discurso ideológico en una comunidad cañera bajo un nuevo marco estructural", ponencia presentada en el Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, abril, Guadalajara, Jal., México.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo, 1965, *La democracia en México*, México, Ediciones Era.
- GONZÁLEZ, Humberto, "Convergence: Social movements in Mexico in the era of neoliberal globalism", en Otero, en prensa.
- GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, 1968, *La Confederación Nacional Campesina: Un grupo de presión en la reforma agraria mexicana*, México, B. Costa-Amic Editor.
- GORDILLO, Gustavo, 1985a, "La otra Sonora: El asalto al cielo de los campesinos", *El Día*, agosto 11.
- , 1985b, "El ejido, eje de la producción alimentaria", *El Día*, agosto 17.
- , 1988, *Campesinos al asalto del cielo: una reforma agraria con autonomía*, México, Siglo XXI Editores.
- GRAMSCI, Antonio, 1971, *Selections from the Prison Notebooks*, coordinación y traducción de Quintin Hoare y Geoffrey Nowell Smith, Nueva York, International Publishers.
- GÜEMES, César, 1999, "La no guerra de Chiapas es una guerra. Decir algo que molesta al gobierno, un *sino* cuando estoy en México", *La Jornada*, 28 de noviembre.

- GUTELMAN, Michel, 1974, *Capitalismo y reforma agraria en México*, México, Editorial Era.
- HALE, Charles A., 1996, "Political Ideas and Ideologies in Latin America, 1870-1930", pp. 133-206, en Leslie Bethell, (coord.), *Ideas and Ideologies in Twentieth Century Latin America*, Nueva York, Cambridge University Press.
- HAMILTON, Nora, 1982, *The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico*, Princeton, Princeton University Press.
- HANSEN, Roger D., 1974, *La política de desarrollo mexicano*, México, Siglo XXI Editores.
- HARRIS, Richard L., 1978, "Marxism and the Agrarian Question in Latin America", *Latin American Perspectives*, 5 (4), pp. 2-26.
- , 1992, *Marxism, Socialism, and Democracy in Latin America*, Boulder, Co., Westview Press.
- HARVEY, Neil, 1996a, "Rural Reforms and the Zapatista Rebellion: Chiapas 1988-95", pp. 187-208, en Otero, 1996b.
- , 1996b, "Impact of Reforms to Article 27 on Chiapas: Peasant Resistance in the Neoliberal Public Sphere", pp. 151-171, en Randall, 1996.
- , 1996c, "Nuevas formas de representación en el campo mexicano: La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), 1985-1993", pp. 239-282, en De Grammont, 1996a.
- , 1998a, *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*, Durham, NC, Duke University Press.
- , 1998b, "Rural Reforms and the Question of Autonomy in Chiapas", pp. 69-89, en Cornelius y Myhre, 1998b.
- , 2002, "PPP y derechos indígenas", *La Jornada*, 28 de diciembre, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2002/dic02/021228/013a-1pol.php?origen=opinion.html> (consultado el 28 de diciembre de 2002).
- HELLMAN, Judith Adler, 1983, *Mexico in Crisis*, 2a. ed., Nueva York, Holmes & Meir.
- , 1994, "Mexico and Popular Movements, Clientelism, and the process of Democratization", *Latin American Perspectives*, 21 (2), pp. 124-142.
- , 1995, "The Study of New Social Movements in Latin America and the Question of Autonomy", pp. 52-61, en Richard L. Harris y Sandra Halebsky (coords.), *Capital, Power, and Inequality in Latin America*, Boulder, Colorado y Oxford, Westview Press.
- HENRÍQUEZ, Elio, 2000, "Equivocó el gobierno su estrategia en Chiapas: Miguel Álvarez", *La Jornada*, 2 de septiembre.
- HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis, 1995, *Chiapas: la guerra y la paz*, prólogo de Carlos Monsiváis, México, ADN Editores.
- , 2001, "Recuento", *La Jornada*, 3 de abril, portal: <http://www.jornada.unam.mx/2001/abr01/010403/017a2pol.html> consultado en abril 3 de 2001).

- y Ramón Vera Herrera, (coords.), 1998, *Los acuerdos de San Andrés*, México, Ediciones Era.
- HEWITT DE ALCÁNTARA, Cynthia, 1978, *Modernización de la agricultura mexicana*, México, Siglo XXI Editores.
- , 1984, *Anthropological Perspectives on Rural Mexico*, Nueva York, Routledge y Keagan Paul.
- , 1994, "Introduction: Economic Restructuring and Rural Subsistence in Mexico", pp. 1-24, en Cynthia Hewitt de Alcántara (coord.), *Economic Restructuring and Rural Subsistence in Mexico*, Transformation of Rural Mexico, núm. 7, La Jolla, CA, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- HU-DEHART, Evelyn, 1981, *Missionaries, Miners & Indians: Spanish Contact with the Yaqui Nation of Northwestern New Spain*, Tucson, University of Arizona Press.
- , 1984, *Yaqui Resistance and Survival: The Struggle for Land and Autonomy, 1881-1910*, Madison y Londres, University of Wisconsin Press.
- HUMAN RIGHTS WATCH, 1997, *Implausible Deniability: State Responsibility for Rural Violence in Mexico*, Nueva York.
- IGARTÚA, Gabriela, 1987, "La crisis de la industria azucarera", pp. 19-45, en Paré, 1987.
- JENKINS, J. Craig, 1995, "Social Movements, Political Representation, and the State: An Agenda and Comparative Framework", pp. 14-35, en J. Craig Jenkins y Bert Klandermans (coords.), *The Politics of Social Protest: Comparative Perspectives on States and Social Movements*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- JIMÉNEZ RICARDEZ, Rubén, 1976, "Movimiento campesino en Sonora", *Cuadernos Políticos*, núm. 7, enero-marzo.
- KATZ, Friederich, 1982, *La guerra secreta en México*, 2 vols., México, Ediciones Era.
- KATNELSON, Ira y Aristide R. Zolberg, (coords.), 1986, *Working Class Formation: Nineteenth-Century Patterns in Western Europe and the United States*, Princeton, Princeton University Press.
- KAUTSKY, Karl, 1974, *La cuestión agraria*, México, Siglo XXI Editores.
- KEARNEY, Michael, 1996, *Reconceptualizing the Peasantry: Anthropology in Global Perspective*, Boulder, Colorado y Oxford; Westview Press.
- , 1998, "Mixtec Political Consciousness: From Passive to Active Resistance", pp. 134-146, en Nugent, 1998.
- y Stefano Varese, 1995, "Latin America's Indigenous Peoples: Changing Identities and Forms of Resistance", pp. 207-231, en Richard L. Harris y Sandor Halebsky, coords., *Capital, Power, and Inequality in Latin America*, Boulder, Colorado y Oxford, Westview Press.
- KEESING, Roger M., 1976, *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*, Nueva York, Holt, Rinehart, and Winston.
- KICZA, John E., 2000a, "Introduction", pp. XIII-XXVIII, en Kicza, 2000b.

- , (coord.), 2000b, *The Indian in Latin American History: Resistance, Resilience, and Acculturation*, revised edition, Wilmington, Delaware, Scholarly Resources, Inc.
- KRIESI, Hanspeter, Ruud Koopmans, Jan Willem Duyvendak y Marco G. Guigni, 1995, *New Social Movements in Western Europe: A Comparative Analysis*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- KYMLICKA, Will, 1995, *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*, Oxford, Oxford University Press.
- y Wayne Norman, 2000, "Citizenship in Culturally Diverse Societies: Issues, Contexts, and Concepts", pp. 1-41, en Will Kymlicka y Wayne Norman (coords.), *Citizenship in Diverse Societies*, Oxford, Oxford University Press.
- y Magda Opalski, (coords.), 2001, *Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe*, Nueva York, Oxford University Press.
- LACLAU, Ernesto, 1977, *Ideology and Politics in Marxist Theory*, Londres, New Left Books.
- y Chantal Mouffe, 1982, "Interview with Laclau and Mouffe." *Socialist Review*, vol. 12, núm. 6, noviembre-diciembre.
- , 1985, *Hegemony & Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, Londres, Verso.
- La Jornada, 1995, "Organizaron deudores marchas, mítines y bloqueos en varios estados", 29 de agosto, portal: <http://serpiente.dgsca.unam.mx/~jornanda/index.html> consultado el 29 de agosto de 1995.
- LANDSBERGER, Henry A., s/f., "Political, Social and Economic Determinants of the Success of Mexican Ejidos: A qualitative and Quantitative Study of Rural Organizations", Department of Sociology, University of North Carolina-Chapel Hill, mimeo.
- y Cynthia Hewitt de Alcántara, 1970, "Peasant Organizations in La Laguna, Mexico: History, Structure, Member Participation and Effectiveness", *Research Papers on Land Tenure and Agrarian Reform*, núm. 17, Inter-American Committee for Agricultural Development (CIDA-OAS).
- LARA, Sara, 1979, "La importancia de la comunidad campesina y las formas de conciencia social de los jornaleros de Atencingo", pp. 115-184, en Paré, 1979a.
- , 1996, "Mercado de trabajo rural y organización laboral en el campo mexicano", pp. 69-112, en De Grammont, 1996a.
- LE BOT, Yvon, 1997, *El sueño zapatista: entrevistas con el Subcomandante Marcos, el mayor Moisés y el comandante Tacho del Ejército Zapatista de Liberación Nacional*, traducción, Ari Cazés, Barcelona, Plaza y Janés Editores, S.A.
- LEGRAND, Catherine, 1986, *Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1850-1936*, Albuquerque, University of New Mexico Press.

- LEYVA MENDIVIL, Juan, 1987, Ponencia presentada como representante de la Alianza Campesina del Noroeste, Primera Reunión sobre Problemas Rurales en el Noroeste de México y el Sureste de los Estados Unidos, Culiacán, Sin., 13-16 de enero.
- LENIN, V.I., 1967, *The Development of Capitalism in Russia*, Moscú, Progress Publishers.
- LIGA DE AGRÓNOMOS SOCIALISTAS, 1940, *El colectivismo agrario en México: La Comarca Lagunera*, México, S/L.
- LINZ, Juan y Alfred Stepan, 1996, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, Southern America and Post-Communist Europe*, Baltimore y Londres, Johns Hopkins University Press.
- LOAEZA, Soledad, 1997, "Partido Acción Nacional: Opposition and the Government in Mexico", pp. 23-35, en Serrano, 1997.
- LÓMNITZ-ADLER, Claudio, 1992, *Exits from the Labyrinth: Culture and Ideology in the Mexican National Space*, Berkely, University of California Press.
- LÓPEZ ASTRÁIN, Martha Patricia, 1996, *La guerra de baja intensidad en México*, México, Universidad Iberoamericana y Editorial Plaza y Valdés.
- LÓPEZ CÁMARA, Francisco, 1967, *La estructura económica y social de México en la época de la reforma*, México, Siglo XXI Editores.
- LÓPEZ MOJARDÍN, Adriana, 1996, "A contracorriente: Expresiones de resistencia a las reformas de la legislación agraria", pp. 441-478, en De Grammont, 1996a.
- LOYOLA DÍAZ, Rafael, 1980, *La crisis Obregón-Calles y el Estado mexicano*, México, Siglo XXI Editores.
- MACKINLAY, Horacio, 1994, "El fin de la Reforma Agraria Mexicana y la privatización del ejido", *Polis 93, Anuario de Sociología*, pp. 99-130.
- , 1996, "La CNC y el «nuevo movimiento campesino» (1989-1994)", pp. 165-238, en De Grammont, 1996a.
- , 1999, "Institutional transformation in the Tobacco Sector: Collective or Individualized Bargaining?", pp. 9-50, en Richard Snyder, (coord.), *Institutional Adaptation and Innovation in Rural Mexico*, La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- y Gerardo Otero, 2004, "State corporatism and peasant organizations: Toward new institutional arrangements", en Otero, 2004.
- MARCOS, Subcomandante Insurgente, 2000, "Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, *La Jornada*, 2 de diciembre. (Portal: <http://www.jornada.unam.mx/2000/dic00/001203/oo6n1po.html>). Consultado el 2 de diciembre de 2000.
- , 2003, "Décima etapa/Guerrero: La fiscalía especial, *trampa* del Ejecutivo y Legislativo", *La Jornada*, 19 de Febrero de 2003, disponible en <http://www.jornada.unam.mx/2003/feb03/030219/006n1pol.php?origen=politica.html>, consultado el 19 de febrero de 2003.

- MARES, David, 1987, *Penetrating the International Market: Theoretical Considerations and a Mexican Case Study*, Nueva York, Columbia University Press.
- MARTÍNEZ-ALIER, Juan, 1977, *Haciendas, Plantations, and Collective Farms: Agrarian Class Societies—Cuba and Peru*, Londres, Frank Cass.
- MARX, Karl, 1967, *Capital*, 3 vols., Nueva York, International Publishers.
- , 1971, *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*, en Carlos Marx y Federico Engels, *Obras escogidas*, vol. I, Moscú, Editorial Progreso.
- , 1975, *El capital, libro I, capítulo VI (inédito)*, 5a. edición, México, Siglo XXI Editores.
- MATTIACE, Shannan L., Rosalva Aída Hernández y Jan Rus (coords.), 2002, *Tierra, libertad y autonomía: impactos regionales del zapatismo en Chiapas*, México, CIESAS.
- MATUTE, Álvaro, 1980, *La carrera del caudillo*, vol. 8 de *Historia de la revolución mexicana 1918-1924*, México, El Colegio de México.
- MEDIN, Tzvi, 1972, *Ideología y praxis política de Lázaro Cárdenas*, México, Siglo XXI Editores.
- , 1982, *El minimato presidencial: Historia política del maximato (1928-1935)*, México, Ediciones Era.
- MEIKSINS WOOD, Ellen, 1995, *Democracy against Capitalism: Renewing Historical Materialism*, Nueva York, Cambridge University Press.
- MEILLASSOUX, Claude, 1972, "From Reproduction to Production: A Marxist Approach to Economic Anthropology", *Economy and Society*, vol. I, núm. 1, febrero.
- , 1977, *Mujeres, graneros y capitales*, México, Siglo XXI Editores.
- MÉNDEZ ASENSIO, Luis y Antonio Cano Gimeno, 1994, *La guerra contra el tiempo: Viaje a la selva alzada*, prólogo de Roger Bartra, México, Ediciones Tema de Hoy.
- MOGUEL, Julio, Carlota Botey y Luis Hernández (coords.), 1992, *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, México, Siglo XXI Editores y CEHAM.
- MONSIVÁIS, Carlos, 1995, "La consulta del EZLN", en *EZLN: Documentos y comunicados*, México, Ediciones Era.
- MONTEMAYOR, Carlos, 1997, *Chiapas: La rebelión indígena de México*, México, Joaquín Mortiz.
- MOORE Jr., Barrington, 1966, *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Boston, Beacon Press.
- MUÑOZ, Patricia, Roberto Garduño y Ciro Pérez, 2001, "Ante diputados, Derbez reconoce que 95 por ciento de empresas del país enfrentan dificultades", *La Jornada*, 19 de septiembre.
- MYHRE, David, 1996, "Appropriate Agricultural Credit: A Missing Piece of Agrarian Reform in Mexico", pp. 117-138, en Randall, 1996.

- , 1998, "The Achilles' Heel of the Reforms: The Rural Financial System", pp. 39-65, en Cornelius y Myhre, 1998b.
- NADAL, Alejandro, 2000, "Corn and NAFTA: An Unhappy Alliance", *Seedling: The Quarterly Newsletter of Genetic Resources Action International*, (Barcelona) 17 (2), pp. 10-17.
- Nueva Antropología, 1981, número monográfico sobre el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), México, año V, núm. 17, mayo.
- NUGENT, Daniel, 1995, *Spent Cartridges of Revolution: An Anthropological History of Námiquipa, Chihuahua*, Chicago, University of Chicago Press.
- , (coord.), 1998, *Rural Revolt in Mexico: U.S. Intervention and the Domain of Subaltern Politics*, Durham y Londres, Duke University Press.
- NUJTEN, Monique, 1998, *In the Name of the Land: Organization, Transnationalism, and the Culture of the State in a Mexican Ejido*, The Hague, The Netherlands, Thesis Landbouw Universiteit Wageningen.
- NÚÑEZ MADRASO, Cristina, 1995, "New Social Actors in the Sugarcane Sector?", pp. 55-62, en Singelmann, 1995.
- NUTINI, Hugo G. y Betty Bell, 1980, *Ritual Kinship: The Structure and Historical Development of the Compadrazgo system in Rural Tlaxcala*, vol. 1. Princeton, Princeton University Press.
- , Pedro Carrasco y James M. Taggart, (coords.), 1976, *Essays on Mexican Kinship*, PITT Latin American Series, Pittsburgh, Pittsburgh University Press.
- OLGUÍN, Claudia, 1993, "México, principal punto de venta para PepsiCo", *El Financiero*, octubre 12, p. 15.
- OSWALD, Ursula, Rafael Rodríguez y Antonio Flores, 1986, *Campesinos protagonistas de su historia (La Coalición de los Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y el Mayo: Una salida a la cultura de la pobreza)*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco.
- OTERO SAN VICENTE, Napoleón, 1986, "Geología regional: una llanura aluvial llamada Comarca Lagunera", *Suma*, Torreón, Coahuila, núm. 8, abril.
- OTERO, Gerardo, 1981, "El Campesinado como sujeto revolucionario", *El Machete, Revista de Cultura Política*, núm. 9, enero, pp. 25-28.
- , 1983, "Lucha por la tierra y organización clasista del campesinado", *Crítica*, Puebla, núm. 14, febrero.
- , 1989, "Agrarian Reform in Mexico: Capitalism and the State", pp. 276-304, en William Thiesenhusen (coord.), *Searching for Agrarian Reform in Latin America*, Boston, Unwin Hyman.
- , 1990, "El nuevo movimiento agrario: Hacia la autogestión y la producción democrática", *Revista Mexicana de Sociología*, 52 (2), pp. 93-124.
- , 1996a, "Neoliberal Reform and Politics in Mexico: An Overview", pp. 1-26, en Otero, 1996b.

- (coord.), 1996b, *Neoliberalism Revisited: Economic Restructuring and Mexico's Political Future*, Boulder, Co. Westview Press.
- , 1998a, "Atencingo Revisited: Political Class Formation and Economic Restructuring in Mexico's Sugar Industry", *Rural Sociology*, 63 (2), pp. 272-299.
- , 1998b, "Culture and Productive Strategies among Sugarcane Growers in Puebla, Mexico", pp. 91-103, en Cornelius y Myhre, 1998b.
- , 2001, "Adoption of Agricultural Biotechnologies in North America: The Case of Recombinant Bovine Somatotropin in the La Laguna Region", ponencia presentada en el XXIII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, 6-8 de septiembre, Washington, D.C., E.U.
- , 2004, *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State, and Civil Society*, Londres y Nueva York, Zed Books.
- y Peter Singelmann, 1996, "Cañeros y estado en México: Garantías sociales y reestructuración económica en la industria azucarera", pp. 181-202, en *Nuevos procesos rurales en México: Teorías, estudios de caso y perspectivas*, Hubert C. de Grammont y Héctor Tejera Gaona (coords.), México, UNAM, UAM, INAH.
- , Peter Singelmann y Kerry Preibisch, 1995, "La fin de la réforme agraire et les nouvelles politiques agricoles au Mexique", pp. 241-273, en Henri Favre y Marie Lapointe (coords.), *Le Mexique: De la réforme néo-libérale à la contre-révolution: la présidence de Carlos Salinas de Gortari*, París, l'Harmattan.
- y Heidi Jugenitz, 2003, "Challenging National Borders from Within: The Political-Class Formation of Indigenous Peasants in Latin America", *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, 40 (5), pp. 503-524.
- PAIGE, Jeffrey M., 1975, *Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World*, Nueva York, Free Press.
- PARÉ, Luisa, 1977, *El proletariado agrícola en México*, México, Siglo XXI Editores.
- (coord.), 1979a, *Ensayos sobre el problema cañero*, México, UNAM.
- , 1979b, "El análisis económico de las clases sociales de Atencingo", pp. 59-113, en Paré, 1979a.
- (coord.), 1987, *El estado, los cañeros y la industria azucarera 1940-1980*, México, UNAM y UAM.
- PÉREZ ARCE, Francisco, 1979, "El marco jurídico y económico del problema cañero", pp. 13-36, en Paré, 1979.
- PETRAS, James y Henry Veltmeyer, 2001, "Are Latin American Peasant Movements Still a Force for Change? Some New Paradigms Revisited", *Journal of Peasant Studies*, 28 (2), pp. 83-118.

- POITRAS, Manuel, 2000, "Political-Economic Processes of the Introduction of Agro-Biotechnologies in the Mexican Countryside: The Case of rBST in La Laguna Dairy Farming", *Sociedades Rurales, Producción y Medio Ambiente*, 1 (1).
- POSADAS, Florencio y Benito García, 1986, "El movimiento de los obreros agrícolas en Sinaloa, 1977-1983", pp. 161-183, en De Grammont, 1986.
- POULANTZAS, Nicos, 1975, *Poder político y clases sociales*, México, Siglo XXI Editores.
- PREIBISCH, Kerry Lynn, 1996, "Rural Women – Mexico's «Comparative Advantage»? Lived Experiences of Economic Restructuring in Two Puebla Ejidos", tesis de maestría, Latin American Studies Program, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canadá.
- PRUD'HOMME, Jean François, 1998, "Interest representation and the party system in Mexico", pp. 169-192, en Philip D. Oxhorn y Graciela Ducatenzeiler (coords.), *What Kind of Democracy? What Kind of Market? Latin America in the Age of Neoliberalism*, University Park, Pennsylvania State University Press.
- PUCCIARELLI, Alfredo R., 1985, "El Dominio Estatal de la Agricultura Campesina: Estudio sobre los Ejidatarios Minifundistas de la Comarca Lagunera", *Revista Mexicana de Sociología*, año XLVII, núm. 3, julio-septiembre, pp. 41-84.
- QUINTERO M., Ariel, 1982, "La Coalición de Ejidos Colectivos de los Valles del Yaqui y Mayo", ponencia presentada en el Segundo Congreso Nacional sobre Problemas Agrarios, Chilpancingo, Guerrero, México, junio 7-11.
- RANDALL, Laura, 1996, *Reforming Mexico's Agrarian Reform*, Nueva York y Londres, M.E. Sharpe.
- REDCLIFT, M.R., 1981, "El Estado frente al campo", *Nexos*, año IV, vol. 4, núm. 47, noviembre.
- RELLO, Fernando, 1984, "El leviatán lagunero: Ensayo sobre una agricultura estatizada", manuscrito inédito.
- , 1986a, *Las clases sociales en el campo mexicano: El caso de La Laguna*, manuscrito inédito, publicado luego en inglés en 1987 como: *State and Peasantry in Mexico: A Case Study of Rural Credit in La Laguna*, Ginebra, United Nations Research Institute for Social Development.
- , 1986b, *El Campo en la Encrucijada Nacional*, Foro 2000, México, Secretaría de Educación Pública.
- RESTREPO, Iván y Salomón Eckstein, 1975, *La agricultura colectiva en México: La experiencia Lagunera*, México, Siglo XXI Editores.
- RODRÍGUEZ GÓMEZ, Guadalupe y Gabriel Torres, 1996, "Las estrategias de los agroproductores frente a las políticas neoliberales: El Barzón y COMAGRO", pp. ??, en *Nuevos procesos rurales en México: Teorías, estudios de*

- caso y perspectivas*, Hubert C. de Grammont y Héctor Tejera Gaona (coords.), México, UNAM, UAM, INAH.
- RONFELDT, David, 1973, *Atencingo: The Politics of Agrarian Struggles in a Mexican Ejido*, Stanford, Stanford University Press.
- RUBIN, Jeffrey W., 1997, *Decentering the Regime: Ethnicity, Radicalism, and Democracy in Juchitán, Mexico*, Durham y Londres, Duke University Press.
- RUBIO, Blanca, 1996, "Las organizaciones independientes en México: Semblanzas de las opciones campesinas ante el proyecto neoliberal", pp. 113-163, en De Grammont, 1996a.
- SALAZAR, Gilda y Luisa Paré, 1986, "Una experiencia organizativa de cortadores de caña, El Dorado, Sinaloa", pp. 185-202, en De Grammont, 1986.
- SALINAS DE GORTARI, Raúl y José Luis Solís González, 1994, *Rural Reform in Mexico: The View from the Comarca Lagunera in 1993*, Transformation of Rural Mexico Series, Number 4, trans. Aníbal Yáñez Chávez, La Jolla, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- SAM (Sistema Alimentario Mexicano), 1980, "Medidas operativas agropecuarias y pesqueras, estrategia de comercialización, transformación, distribución y consumo de los productos de la canasta básica recomendable", mimeo.
- SAMSON, C., 1999, "The Dispossession of the Innu and the Colonial Magic of Canadian Liberalism", *Citizenship Studies*, 3 (1), pp. 5-25.
- SÁNCHEZ, Marco Aurelio, 1999, *PRD, la élite en crisis: problemas organizativos, indeterminación ideológica y deficiencias programáticas*, México, Plaza y Valdés.
- SANDERSON, Steven E., 1981, *Agrarian Populism and the Mexican State*, Berkeley, University of California Press.
- , 1986, *The Transformation of Mexican Agriculture: International Structure and the Politics of Rural Change*, Princeton, Princeton University Press.
- SANDSTROM, Alan R., 2000, "Ethnic Identity and Its Attributes in a Contemporary Mexican Indian Village", pp. 269-281, en Kicza, 2000b.
- SARH (Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos), s/f [1994], *Procampo: Vamos al Grano para Progresar*, Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
- SARMIENTO SILVA, Sergio, 1996, "Movimiento indio, autonomía y agenda nacional", pp. 355-395, en De Grammont, 1996a.
- SCOTT, James C., 1976, *The Moral Economy of the Peasantry: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, New Haven y Londres, Yale University Press.
- , 1977, "Hegemony and the Peasantry", *Politics and Society*, 7 (3).
- , 1985, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, New Haven, Yale University Press.
- , 1990, *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*, New Haven y Londres, Yale University Press.

- SCHRYER, Frans J., 1980, *The Rancheros of Pisaflores: The History of a Peasant Bourgeoisie in Twentieth-Century Mexico*, Toronto, University of Toronto Press.
- , 1990, *Ethnicity and Class Conflict in Rural Mexico*, Princeton, N.J., Princeton University Press.
- SEMO, Ilán, 1996, "The Mexican Political Pretransition in Comparative Perspective", pp. 107-126, en Otero, 1996b.
- , 1999, "Mexico the Puzzle: A Conversation about Civil Society and the Nation with Ilán Semo", entrevistado por David Thelen en *Rethinking History and the Nation State: Mexico and the United States*, *Journal of American History*, 86.
- SENIOR, Clearence, 1958, *Land Reform and Democracy*, Gainesville, University of Florida Press.
- SERRANO, Mónica (coord.), 1997, *Mexico: Assessing Neo-Liberal Reform*, Londres, Institute of Latin American Studies, University of London.
- SILES-ALVARADO, José S., 1968, *The Yaqui Valley of Sonora, Mexico: Its Agricultural Development, Resource Utilization and Economic Potential*, Ph.D. Dissertation, Cornell University, Ann Arbor, Michigan, University Microfilms.
- SILVERMAN, Sydel, 1979, "The Peasant Concept in Anthropology", *The Journal of Peasant Studies*, 7 (1).
- SINGELMANN, Peter, 1993, "The Sugar Industry in Postrevolutionary Mexico: State Intervention and Private Capital", *Latin America Research Review*, 26 (1), pp. 61-88.
- (coord.), 1995, *Mexican Cane Growers: Economic Restructuring and Political Options*, Transformation of Rural Mexico Series, núm. 6, Ejido Reform Research Project, La Jolla, CA, Center for U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego.
- SKOCPOL, Theda, 1979, *States & Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, & China*, Nueva York, Cambridge University Press.
- (coord.), 1984, *Vision and Method in Historical Sociology*, Nueva York, Cambridge University Press.
- SMITH, Gavin, 1989, *Livelihood and Resistance: A Study of Peasants and the Politics of Land in Peru*, Berkeley, University of California Press.
- SPICER, Edward H., 1969a, "Northwest Mexico: Introduction", en Vogt, 1969.
- , 1969b, "The Yaqui and the Mayo", en Vogt, 1969.
- , 1980, *The Yaquis: A Cultural History*, Tucson, University of Arizona Press.
- STAVENHAGEN, Rodolfo, 2000, "Towards the Right to Autonomy in Mexico", pp. 10-21 en Burguete Cal y Mayor, 2000.
- et al., 1968, *Neolatifundismo y explotación: De Emiliano Zapata a Anderson Clayton & Co*, México, Editorial Nuestro Tiempo.

- STEPHEN, Lynn, 2002, *iZapata Lives! Histories and Cultural Politics in Southern Mexico*, Berkeley y Londres, University of California Press.
- STERN, Steve, 1987, *Resistance, rebellion, and consciousness in the Andean peasant world, 18th to 20th centuries*, Madison, University of Wisconsin Press.
- STEWART, Julián, 1967, *Contemporary Change in Traditional Societies*, Urbana, University of Illinois Press.
- STINCHCOMBE, Arthur L., 1961, "Agricultural Enterprise and Rural Class Relations", *American Journal of Sociology*, LXVII (1961), pp. 165-176.
- SWIDLER, Ann, 1986, "Culture in Action: Symbols and Strategies", *American Sociological Review*, 51 (2), pp. 273-286.
- SZÉLENYI, Iván, 1988, *Socialist Entrepreneurs: Transformations of Rural Social Structures under State Socialism*, Madison, University of Wisconsin Press.
- TARROW, Sidney, 1998, *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, 2a. ed., Nueva York, Cambridge University Press.
- TAYLOR, William B., 2000, "Patterns and Variety in Mexican Village Uprisings", pp. 157-189, en Kicza, 2000b.
- TERÁN, Silvia, 1976, "Formas de conciencia social de los trabajadores del campo", *Cuadernos Agrarios*, México, núm. 4, diciembre.
- THOMPSON, Giner y Tim Weiner, 2001, "Zapatista Leaders Make their Case to Mexico's Congress", *The New York Times*, 29 de marzo, p. A4.
- TORRES, Gabriel, 1997, *The Force of Irony: Power in the Everyday Life of Mexican Tomato Workers*, Oxford y Nueva York, Berg.
- TOURAINE, Alain, 1988, *Return of the Actor: Social Theory in Postindustrial Society*, trad. Myrna Gozich, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- , 1997, *What is Democracy?* traducción de David Macey, Boulder, Colorado y Oxford, Westview Press.
- VALDÉS UGALDE, Francisco, 1996, "The Private Sector and Political Regime Change in Mexico", pp. 127-148, en Otero, 1996b.
- VAN COTT, Donna Lee, 2000, *The Friendly Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in Latin America*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press.
- VAN DER HARR, Gemma, 2001, *Gaining Ground: Land Reform and the Constitution of Community in the Tojolabal Highlands of Chiapas, Mexico*, Amsterdam, Wageningen Universiteit y Rozenberg Publishers.
- VELTMAYER, Henry, 1997, "New Social Movements in Latin America: The Dynamics of Class and Identity", *The Journal of Peasant Studies*, 25 (1), pp. 139-169.
- VILLORO, Luis, 2001, "En busca de la comunidad perdida", *Proceso*, núm. 1269, 25 de febrero, pp. 28-29.
- VOGT, Evon Z. (coord.), 1966, *Los Zinacantecos: Un pueblo Tzotzil de los Altos de Chiapas*. México, Instituto Nacional Indigenista.
- (coord.), 1969, volumen 8 de Robert Wauchope (coordinador general), *Handbook of Middle American Indians*, Austin, University of Texas Press.

- , 1973, *Los Zinacantecos: Un grupo Maya en el siglo XX*, México, SEP-Setentas.
- WARMAN, Arturo, 1975, "El neolatifundismo mexicano: Expansión y crisis de una forma de dominio", *Comercio Exterior*, vol. 25, núm. 12, diciembre.
- , 1976, *Y venimos a contradecir: Los campesinos de Morelos y el Estado nacional*, México, Ediciones de la Casa Chata.
- , 1980, *Ensayos sobre el campesinado en México*, México, Nueva Imagen.
- , 1983, "Invitación al pleito", *Nexos*, México, año VI, vol. 6, núm. 71, noviembre.
- WEARNE, Phillip, 1996, *Return of the Indian: Conquest and Revival in the Americas*, prólogo de Rigoberta Menchú, Londres, Cassell y Latin America Bureau.
- WEBER, Max, 1978, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Guenther Roth y Claus Wittich, (coords), traductores, Ephraim Fischhoff et al., Berkeley, University of California Press.
- WHETTEN, Nathan L., 1948, *Rural Mexico*, Chicago, University of Chicago Press.
- WILKIE, Raymond, 1971, *San Miguel: A Mexican Collective Ejido*, Stanford, Stanford, University Press.
- WOLF, Eric, 1966, *Peasants*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
- , 1969, *Peasant Wars of the Twentieth Century*, Nueva York, Harper & Row.
- WOMACK Jr., John, 1969, *Zapata and the Mexican Revolution*, Nueva York, Vintage Books.
- (compilación, traducción e introducción), 1996, *Rebellion in Chiapas: An Historical Reader*, Nueva York, New Press.
- WOLDENBERG, José, 1997, "The future of the Mexican left", pp. 36-49, en Serrano, 1997.
- WRIGTH, Erick Ollin, 1978, *Class, Crisis and the State*, Londres, New Left Books.
- , 1979, *Class Structure and Income Determination*, Nueva York, Academic Press.
- ZAMOSC, León, 1979, "Notas teóricas sobre la subordinación de la producción mercantil campesina al capital", *Estudios Rurales Latinoamericanos*, vol. 2, núm. 3, septiembre-diciembre.
- ZÁRATE HERNÁNDEZ, José Eduardo, 2000, "The Reconstruction of the Purépecha Nation and the Process of Autonomy in Michoacán, Mexico", pp. 137-149, en Assies, et al., 2000.
- ZOLBERG, Aristide R., 1986, "How Many Exceptionalisms?", pp. 397-455, en Katznelson y Zolberg, 1986.

Acerca del autor

GERARDO OTERO, economista y sociólogo mexicano originario de Torreón, Coahuila, es profesor de sociología y estudios latinoamericanos en el Departamento de Sociología y Antropología de la Simon Fraser University en Vancouver, Canadá (otero@sfu.ca), y profesor visitante en el Programa Doctoral en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en 2003-2004. Obtuvo la licenciatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (1975), la maestría en la Universidad de Texas en Austin (1977), y el doctorado en sociología en la Universidad de Wisconsin-Madison (1986). Fue investigador posdoctoral visitante en el Centro de Estudios Estados Unidos-México de la Universidad de California, San Diego (1986-1987). Otero ha sido profesor en varias universidades de México, incluidas la Universidad Autónoma de Puebla (1980-1983) y la Universidad de Guadalajara (1987-1990). También ha sido profesor visitante en la Universidad de Wisconsin-Madison (1989-1990), y profesor asociado de sociología en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans (2001). Ha publicado cerca de 60 artículos y capítulos en antologías, y tiene tres libros como autor o coordinador. Es coordinador y colaborador de los libros *Neoliberalism Revisited: Economic Restructuring and Mexico's Political Future* (Westview, 1996), y *Mexico in Transition: Neoliberal Globalism, the State and Civil Society* (Zed Books, 2004 en prensa), y autor de *Farewell to the Peasantry? Political Class Formation in Rural Mexico* (Westview Press, 1999), sobre el cual se basa esta traducción. Socio fundador de la Asociación Canadiense de Estudios Mexicanos, Otero la presidió de 1996 a 1998. Desde 1995, es moderador del grupo de discusión electrónica "Académicos por el desarrollo rural en México" (MRD, por sus siglas en inglés). En el 2001 fue electo presidente (*chair*) de la Sección sobre Estudios Rurales de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés). Su investigación actual versa sobre dos temas del impacto del globalismo neoliberal en la semiperiferia: la revolución biotecnológica en la agricultura; y las luchas indígenas por la autonomía y el autogobierno en el control de los recursos naturales.

Índice

PRÓLOGO	7
Capítulo 1	
CUESTIÓN AGRARIA Y DEMOCRACIA: LA FORMACIÓN POLÍTICA DE LAS CLASES EN EL MÉXICO RURAL	11
Nota metodológica	20
Organización de este libro	22
Capítulo 2	
MÁS ALLÁ DEL DEBATE MEXICANO: HACIA UNA TEORÍA POLÍTICO-CULTURAL DE LA FORMACIÓN CLASISTA	27
Diferenciación estructural y formación política clasista en el agro mexicano: perfiles del debate	27
Problemas de investigación e hipótesis alternativas	38
Cultura, intervención estatal y liderazgo	48
Capítulo 3	
REFORMA AGRARIA: CAPITALISMO, ESTADO Y NEOLIBERALISMO	59
Orígenes sociales de la Revolución	59
Las reformas estructurales durante el cardenismo	66
El alemanismo: reestructuración del bloque en el poder bajo la hegemonía de los industriales	71
El globalismo neoliberal y las nuevas políticas agrarias	76
El fin de la reforma agraria	79
El papel cambiante del Estado	81
Conclusiones	85

Capítulo 4

TRANSFORMACIONES AGRARIAS: CRISIS Y DIFERENCIACIÓN SOCIAL	89
La doble crisis de la agricultura mexicana	90
Diferenciación estructural de los productores agrícolas directos ..	94
La diferenciación estructural: ¿hacia la desaparición de los campesinos medios?	103
Diferenciación social regional	106
Conclusión	111

Capítulo 5

LA LAGUNA: DE OBREROS AGRÍCOLAS A SEMIPROLETARIADO	113
La historia agraria y el medio cultural	113
Se dota de tierras al proletariado agrícola	116
De la autogestión poscapitalista a la desapropiación productiva ..	119
La organización de las clases en La Laguna	133
Control estatal y renacimiento de las luchas popular-democráticas y poscapitalistas	139
Conclusión	143

Capítulo 6

ATENCINGO: CAMPESINADO-EMPRESARIAL Y DIFERENCIACIÓN SOCIAL	147
La historia agraria y el medio cultural	149
La formación política clasista en Atencingo	150
Los nuevos campesinos-empresariales, los proletarios y el semiproletariado	158
Privatización y reestructuración de la industria azucarera	164
Recapitulación teórica	173
Conclusión	177

Capítulo 7

EL VALLE DE EL YAQUI: HACIA LA PRODUCCIÓN AUTOGESTIONARIA Y DEMOCRÁTICA	181
La historia agraria y el medio cultural	183
El cardenismo: ¿fin de la hegemonía de la burguesía agraria? ...	185
El fin de la reforma agraria y el ataque contra los ejidos colectivos	186
El nuevo movimiento agrario: hacia la producción autogestionaria y democrática	192

Evaluaciones de la Coalición de Ejidos Colectivos	200
Epílogo	208
El Yaqui: recapitulación teórica	210

Capítulo 8

EL EZLN Y LA EXPANSIÓN DE LAS FRONTERAS NACIONALES

HACIA DENTRO: DEMOCRACIA, CULTURA INDÍGENA Y CIUDADANÍA	213
Culturas regionales, construcción de la identidad	
colectiva y demandas indígenas	215
Intervención estatal tras el levantamiento zapatista	222
Liderazgo zapatista, autonomía y nueva cultura política	225
Insurrección zapatista, sociedad civil y democratización	229
Expandir las fronteras nacionales hacia dentro: derechos	
indígenas y ciudadanía	234
Conclusiones	242

Capítulo 9

CONCLUSIÓN: ¿ADIÓS AL CAMPESINADO?	245
Teoría e historia	245
Trascender el debate mexicano	251
Neoliberalismo, sociedad civil y democracia	255
Conclusión	265

BIBLIOGRAFÍA	267
--------------------	-----

ACERCA DEL AUTOR	289
------------------------	-----

AMÉRICA LATINA Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL

Director: Raúl Delgado Wise

Títulos publicados

CLANDESTINOS. MIGRACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI
Jorge Durand • Douglas S. Massey

CONTROVERSIAS SOBRE SUSTENTABILIDAD.
LA COEVOLUCIÓN SOCIEDAD-NATURALEZA
Guillermo Foladori

COLAPSO Y REFORMA. LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO
EN EL MÉXICO REVOLUCIONARIO, 1913-1932
Luis Anaya Merchant

DEL SIGLO AMERICANO AL SIGLO DE LA GENTE.
LATINOAMÉRICA EN EL VÓRTICE DE LA HISTORIA
Jesús Hernández Caribay

EL MÉXICO DE HOY. SUS GRANDES PROBLEMAS
Y QUÉ HACER FRENTE A ELLOS
Alonso Aguilar Monteverde • Fernando Carmona†
Guadalupe Barajas Zedillo • Rodolfo Barona Soriano
Agustín González • Jesús Hernández Caribay
Cecilia Madero Muñoz • Héctor Magaña Vargas
Ana I. Mariño • Gastón Martínez • Ana Francisca Palomera
Sofía Lorena Rodiles Hernández • Héctor Roldán Pérez

EN CONTRA DEL NEOLIBERALISMO:
EL DESARROLLO BASADO EN LA COMUNIDAD
Henry Veltmeyer • Anthony O'Malley

ENFRENTANDO LA GLOBALIZACIÓN.
RESPUESTAS SOCIALES A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE MÉXICO
Laura Carlsen • Tim Wise • Hilda Salazar
(Coordinadores)

HACIA UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
Daniel Cazés Menache • Raúl Delgado Wise
(Coordinadores)

LA GLOBALIZACIÓN DESENMASCARADA:
EL IMPERIALISMO EN EL SIGLO XXI
James Petras • Henry Veltmeyer

LA TRANSFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD MEXICANA.
DIEZ ESTUDIOS DE CASO EN LA TRANSICIÓN
Axel Didriksson T. • Alma Herrera M.
(Coordinadores)

MÉXICO EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE VICENTE FOX
Raúl Delgado Wise • Carmen Galindo • Luis González Souza
Arturo Guillén • José Merced González • Josefina Morales
Ana García-Fuentes • Isaac Palacios • Juan José Dávalos
Fernando Paz Sánchez • Héctor Díaz Polanco

¿Adiós al campesinado? Democracia y formación política de las clases en el México rural, se terminó de imprimir en la ciudad de México durante el mes de febrero del año 2004. La edición, en papel de 75 gramos, consta de 1,000 ejemplares más sobrantes para reposición y estuvo al cuidado de la oficina litotipográfica de la casa editora.



¿al campesinado? representa ... un modelo de análisis comparativo so, y el autor ofrece un análisis excepcionalmente rico y una narración argumentada que explica exitosamente por qué los actores sociales que se iniciaron en posiciones de clase similares siguieron rutas tan diferentes (en su formación política). Su sensibilidad para ver los múltiples determinantes de la lucha y la formación de los ejemplar. ... Otero ha escrito un libro convincente e innovador, con los ásperos ritmos, los desplazamientos radicales, y las múltiples trayectorias de la transformación capitalista en el campo mexicano."

MICHAEL WATTS

Director, Instituto de Estudios Internacionales
Universidad de California, Berkeley,
Estudios Sociológicos

co ha sido el principal referente para la investigación y la teorización de la legendaria cuestión agraria. ¿Adiós al campesinado? es muy posiblemente la evaluación y el recuento más comprensivos con respecto a lo, a la vez que hace una importante contribución a su estudio crítico por medio de sus tres estudios de caso. Además, el autor avanza la reconstrucción de la "cuestión campesina" de maneras tales que el libro será esencial para los estudiosos de los asuntos agrarios en otros lugares."

MICHAEL KEARNEY

Departamento de Antropología,
Universidad de California, Riverside

¿al campesinado? hace contribuciones importantes, está bien concebido y organizado, y es de fácil lectura también para el lector académico especializado en los niveles avanzados de la licenciatura o para los educados que utilizan materiales académicos para poner en perspectiva su desempeño profesional. ... Para los académicos este libro delinea un debate bien conocido, hace su propia y distintiva contribución a los debates que aborda y, en un grado significativo, trasciende este debate al ofrecer una nueva perspectiva para resolver un viejo enigma."

PETER SINGELMANN

Departamento de Sociología,
Universidad de Missouri en Kansas City

SIMON FRASER
UNIVERSITY

